

NUEVAS DIFERENCIAS: DESIGUALDADES PERSISTENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Presentación **Fabiana Espíndola**

Richard Mújica Angulo

Karla Encalada-Falconí

Giancarlo Roach Rivas

José Alberto Flores Jácome

Denisse Delgado Vázquez

Adrián Jaén España

Rosa Nohemí Gómez Osorio

**NUEVAS DIFERENCIAS:
DESIGUALDADES PERSISTENTES EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

Nuevas diferencias: desigualdades persistentes en América Latina y El Caribe / Richard Mujica Angulo ... [et al.] ; prefacio de Fabiana Espíndola Ferrer. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2017.

Libro digital, PDF - (Estudios sobre desigualdades / Gentili, Pablo)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-722-233-3

1. Ciencias Sociales. 2. Desigualdad. 3. América Latina. I. Mujica Angulo, Richard II. Espíndola Ferrer, Fabiana, pref.

CDD 301

Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO:
Ciencias Sociales / América Latina / El Caribe / Desigualdad /
Postneoliberalismo / Movimientos Sociales

COLECCIÓN ESTUDIOS SOBRE LAS DESIGUALDADES

NUEVAS DIFERENCIAS: DESIGUALDADES PERSISTENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PRESENTACIÓN

Fabiana Espíndola

Richard Mújica Angulo | Karla Encalada-Falconí
Giancarlo Roach Rivas | José Alberto Flores Jácome
Denisse Delgado Vázquez | Adrián Jaén España
Rosa Nohemí Gómez Osorio



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



CLACSO

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Secretario Ejecutivo de CLACSO Pablo Gentili

Directora Académica Fernanda Saforcada

Área de Acceso abierto al conocimiento y difusión

Coordinador Editorial Lucas Sablich

Coordinador de Arte Marcelo Giardino

Primera edición

Nuevas diferencias: desigualdades persistentes en América Latina y El Caribe (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2016)

ISBN 978-987-722-233-3

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Patrocinado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo



Norad

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO <www.biblioteca.clacso.edu.ar>

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Presentación

Fabiana Espíndola | 9

Patrimonialización de la música-danza de la Sikuriada:
tensiones entre Patrimonio Cultural Inmaterial,
propiedad y desigualdad en localidades del altiplano boliviano

Richard Mújica Angulo | 13

Teorías y Paradojas del Postneoliberalismo en América Latina:
Redistribución Estatal y Acumulación por Desposesión
de los Indígenas Kichwa en la Amazonía Ecuatoriana

Karla Encalada-Falconí | 61

Las desigualdades educativas en el contexto de la expansión
del sistema educativo de Panamá

Giancarlo Roach Rivas | 105

Educación y desigualdades sociales. Análisis de las misiones
religiosas protestantes (1960-1970) y del proyecto de las
“Unidades Educativas del Milenio” (2006-2014)
en la Amazonía ecuatoriana

José Alberto Flores Jácome | 143

Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Un estudio en la capital cubana Denisse Delgado Vázquez	187
Movimientos sociales y lucha por vivienda en Costa Rica: El caso de Rivera del Río Adrián Jaén España	235
Mercado Inmobiliario: Hacia un Proceso de Especulación y Explotación Urbana en el Municipio de Olintepeque 1980-2014 Rosa Nohemí Gómez Osorio	275

PRESENTACIÓN

Fabiana Espíndola

Los trabajos reunidos en esta publicación son resultado de experiencias de reflexión e investigación empírica acerca de nuevos o renovados ejes de diferenciación. Este proceso por el que se renuevan ciertas categorías de distinción que operan como clasificadores en distintos anclajes territoriales de nuestra región, re-producen y actualizan una de las características más tristemente salientes que nos caracteriza: la de ser una región con importantes y persistentes niveles de desigualdades sociales.

Hablamos de desigualdades sociales en plural por varios motivos, pero tal vez el primordial a destacar aquí sea el hecho que la desigualdad económica es sólo uno de sus tipos o manifestaciones, y que la medición en términos de ingresos tan sólo una de sus posibilidades. Ante una suerte de cooptación de la problemática por una mirada centrada en la desigualdad económica y en particular, por la observación de los ingresos en unidades de análisis individuales –y/o agregados de éstas-, abogamos por un abordaje que contemple diferentes ejes estructurantes de formas diversas de desigualdad .

En efecto, los trabajos aquí reunidos nos muestran cómo operan distintos ejes clasificatorios en la generación y reproducción de desigualdades sociales, de manera entrelazada. En este sentido, constituyen un aporte hacia la comprensión de las formas en que se articulan distintos ejes de desigualdad. Ciertamente es que la desigualdad entre clases sociales no ha perdido vigencia, pero también algunas categorías como

el género, la generación o la posición ocupada en el espacio territorial constituyen elementos demarcadores de ventajas y desventajas sociales que no resultan únicamente manifestaciones de las desigualdades de clase. De allí que, sin voluntad de polemizar acerca de la pertinencia del análisis de desigualdades “clásicas” o de desigualdades “nuevas », los trabajos aquí reunidos procuran, mediante una pluralidad de enfoques teóricos y herramientas metodológicas, ahondar en el análisis de problemáticas situadas. Presentamos sintéticamente el contenido de la publicación en las líneas que siguen.

El trabajo de Richard Mújica Angulo intitulado “Patrimonialización de la música-danza de la Sikuriada: tensiones entre Patrimonio Cultural Inmaterial, propiedad y desigualdad en localidades del altiplano boliviano” aborda de manera muy meticulosa el proceso por el que la actualización de ciertas categorías de distinción introduce diferenciaciones que se conforman como desigualdades en el proceso de patrimonialización de la música y danza de la sikuriada. El autor realiza un interesante análisis acerca de la dinámica de generación de desigualdades en las disputas inter-comunitarias y con el Estado por la apropiación de la Sikuriada.

El trabajo de Karla Encalada-Falconí, “Teorías y Paradojas del Postneoliberalismo en América Latina: Redistribución Estatal y Acumulación por Desposesión de los Indígenas Kichwa en la Amazonía Ecuatoriana” tiene por objeto la comprensión de los efectos de la implementación del primer proyecto de desarrollo que supuso un plan de vivienda integral en una comunidad indígena. Especial énfasis en la interpretación adquieren las categorías de género, etnicidad y generación, ofreciéndonos un rico análisis de corte etnográfico.

Por su parte, “Las desigualdades educativas en el contexto de la expansión del Sistema educativo en Panamá », que nos presenta Giancarlo Roach se focaliza en la problemática de las desigualdades en el acceso y en el logro educativo. Se trata de un abordaje cuidadosamente contextualizado, en tanto que el autor desarrolla un abordaje histórico de la conformación del Sistema de enseñanza panameño, que profundiza con el análisis de una base de datos conforme a muestras censales de los últimos cinco censos de población y vivienda. La perspectiva adoptada resulta fecunda para abordar la influencia de los arreglos institucionales en los resultados educativos y en las desigualdades consideradas.

También centrado en la temática educativa, José Flores nos presenta un texto intitulado “Educación y desigualdades sociales. Análisis de las misiones religiosas protestantes (1960-1970) y del proyecto de las ‘Unidades Educativas del Milenio’ (2006-2014) en la Amazonía ecuatoriana ». El autor se propone una contribución a lo que denomina “la

descodificación de los dispositivos de poder que legitiman las lógicas de extracción de recursos y de subjetividades ». En esta mirada, las estructuras coloniales operan en “la escuela” determinando procesos de penetración y de dominación estatal postcolonial.

Por su parte, Denisse Delgado aborda el estudio de una temática novedosa en el contexto de las ciencias sociales latinoamericanas, como lo es el análisis de las consecuencias sobre las desigualdades sociales que el uso diferenciado de remesas puede provocar. Tal es pues, su objeto de análisis, cuyo trabajo titula como “Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Un estudio en la capital cubana ». La autora realiza trabajo de campo en La Habana, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis. Las remesas son precisamente definidas en tanto transferencias monetarias pero también se atiende a las remesas socioculturales, ofreciendo al lector un interesante análisis de desigualdades que se instauran o activan conforme se utilizan para consumo o en tanto capital de trabajo.

Los dos últimos trabajos que presentamos colocan en el centro una mirada hacia actores colectivos y la pugna por el derecho a la vivienda. En el trabajo que nos presenta Adrián Jaén España - “Movimientos sociales y lucha por vivienda en Costa Rica: El caso de Rivera del Río »- quisiéramos destacar su metodología, pautada por la Investigación Acción Participativa en una comunidad signada por la precariedad habitacional . Allí, la pertinencia del objeto –de investigación y preocupación- reside en que, en las condiciones de segregación habitacional que viven quienes habitan dicha comunidad reside un germen de identificación e identidad con marcos de acción colectiva en aras del logro de una vivienda digna.

Finalmente, Rosa Gómez nos presenta su artículo : “Mercado Inmobiliario: Hacia un Proceso de Especulación y Expoliación Urbana en el Municipio de Olintepeque 1980-2014” en donde el lector dispone de un pormenorizado estudio que combina una rigurosa revisión documental con la realización de entrevistas a distintos actores implicados en el proceso : actores municipales, pero también desarrolladores inmobiliarios y, claro está, vecinos, con grados diversos de participación comunitaria. El análisis que nos ofrece la autora permite trazar el recorrido del proceso de expoliación y, a nuestro entender, nos permite vislumbrar relaciones desiguales entre distintos grupos sociales territorialmente situados.

En suma, los artículos aquí reunidos presentan análisis de desigualdades situadas en contextos diferentes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala y Panamá. Y si bien se trata de estudios específicos, pueden ayudarnos a pensar nuestra región e imaginarnos formas de investigación y de acción que favorezcan una mayor comprensión

de la producción y reproducción contemporánea de las desigualdades sociales. La generación de conocimiento situado nos permite conocer las formas en que se vienen re-produciendo y entrelazando desigualdades sociales en nuestra región, pero también las maneras en que dichas desigualdades son aceptadas o disputadas, justificadas o rebatidas por personas y por colectivos.

PATRIMONIALIZACIÓN
DE LA MÚSICA-DANZA DE LA SIKURIADA:
TENSIONES ENTRE PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL, PROPIEDAD
Y DESIGUALDAD EN LOCALIDADES DEL
ALTIPLANO BOLIVIANO

Richard Mújica Angulo*

INTRODUCCIÓN

El elemento central abordado en éste estudio es la *sikuriada*,¹ una práctica cultural conformada por la música y danza indígena aymara, donde participan mujeres y varones de diferentes edades; que a la vez está integrada a un complejo ciclo festivo, ritual, agrícola y climatológico.² El *sikuri* por mucho tiempo fue asociado como “tradicional” de la loca-

1 El *sikuri* o *sikuriada* fue estudiado desde diferentes ópticas tanto etnográficas, musicales como sonoras. No sólo en Oruro sino en todo Bolivia e incluso en la región andina del continente (Baumann, 1982; Bellenger, 2007; Cachau-Herreillat, 1979; Cavour Aramayo, 2010; D’Harcourt y D’Harcourt, 1990; Cf. Gérard A. y Clemente J., 1995 entre otros; Gérard A., 2002; Gutiérrez C. y Gutiérrez, 2009; Mamani Pocoaca, 1987; Zelada Bilbao, 2009).

2 Es decir, que la música y la danza no son entendidos únicamente como elementos aislados (“bienes culturales”); por el contrario, forman parte de la “cultura [que] hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto.” (Guerrero Arias, 2002:35)

* Músico e investigador, integrante del colectivo cultural PachaKamani y ALTA-PI. Licenciado en Antropología por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, Maestrante en Estudios Críticos del Desarrollo en CIDES-UMSA. Correo electrónico: richard.mujica@yahoo.es, <https://independent.academia.edu/RichardMujica>

lidad del Rosario³ (centro poblado, y ex hacienda hasta 1952), por lo cual también es conocida como *sikuriada*; sin embargo, sus representantes “originarios” fueron y aún son las comunidades indígenas de San Martín, San Ramón, San Ignacio, San Alberto, San Javier, las cuales forman parte de un antiguo territorio llamado: *Ayllu*⁴ *Wilasa*.

Desde la década del ochenta del siglo pasado, debido a la migración a las ciudades, varias personas de dichas comunidades se trasladaron a la ciudad de Oruro, llevando consigo su música y cultura. Así se conformaron agrupaciones rurales de *sikuriada* en las festividades urbanas; cobrando popularidad, grabando discos y amenizando eventos. Paulatinamente, otros grupos de la ciudad fueron reinterpretando esta música, e incluso le cambiaron de nombre (“*zampoñada*”), sin hacer referencia a su referente inicial comunitario, más al contrario adjudicándose su autoría. Posteriormente, en enero de 2014, surge un fenómeno contrario, la *sikuriada-zampoñada* es propuesta para ser declarada como patrimonio cultural del departamento de Oruro, donde se reconoce únicamente a la comunidad San Martín y Rosario. Ello genera una serie de conflictos entre las comunidades aledañas atribuyéndose cada cual el “origen” de la *sikuriada*, y acusando a San Martín de usurpación. Este problema reanuda anteriores conflictos intercomunitarios donde el territorio tiene un rol protagónico y determinante en la definición de los “practicantes” de la *sikuriada-zampoñada* de esta región.

Por tanto, si bien el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) además de plantear una forma de abordar la cultura de los Otros (como política cultural), es asumida de diversas maneras por las comunidades y grupos. Así, esta investigación analiza cómo las comunidades del *Ayllu Wilasa* (ubicado entre las provincias Carangas, Sajama y Totora, departamento de Oruro, Bolivia), intérpretes de la música-danza del

3 Se utilizaron seudónimos para designar a las personas y lugares que se mencionan en el texto. Se optó por esto, a partir de las recomendaciones en los estudios antropológicos (Meo, 2010; Rance y Salinas Mulder, 2001) sobre el anonimato para la protección de los informantes, y en atención al carácter teórico y político de algunas de las argumentaciones que se generaron en el proceso de la investigación.

4 *Ayllu* (Aymara) sustantivo. Casta. Linaje. Unión familiar que con el tiempo ha llegado a formar la actual comunidad indígena. Sinónimo: *jatha* (Layme Pairumani, 2004). A partir de los dictámenes de Toledo, en 1569, quien fue el “principal artífice de la reorganización del gobierno indígena, se estableció una estructura organizativa conformada por los municipios de indios o naturales [...] cabildo indígena, [...] cuyos miembros eran nombrados directamente en instancias del cabildo abierto y por periodos anuales” (Fernández Osco, 2000:16). Donde se habría diferenciado los poblados indígenas (“común”, “pueblo” o “reducciones”) que son las actuales “comunidades” o fracciones de los *ayllu*; del “pueblo” como capital de estos. Estos últimos habrían contado con un “sistema urbanístico” idéntico al de la república de españoles donde se podría encontrar la casa capitular, la cárcel, el templo parroquial, el comercio y las casas de principales” (Fernández Osco, 2000:16).

Sikuriada, disputan el “origen” de esta práctica cultural. Y cómo se emplea el entendido de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) como un eje de múltiples demandas y significados.⁵

La pregunta guía de investigación fue ¿Cuáles son los elementos implicados en la generación de desigualdades en el proceso de *patrimonialización* de la música y danza de la *Sikuriada* en las comunidades orureñas? Para responderla se propuso los siguientes objetivos específicos: Describir las principales condiciones implicadas en los procesos de *patrimonialización* de la música y danza de la *Sikuriada*; caracterizar los diferentes discursos y enfoques empleados en este proceso de *patrimonialización*; e identificar las formas de relacionamiento existentes entre el ámbito local y el nacional en el proceso de *patrimonialización* cultural.

Dadas las características de este estudio, se consideró apropiado el uso de la *metodología cualitativa*. En el entendido de que la metodología es una “manera de pensar la realidad social y de estudiarla” (Strauss y Corbin, 2002:3), ya que se reconoce que las manifestaciones musicales también son una forma de “pensar la realidad”. La investigación cualitativa responde a características definidas, Barragán (2007) enumera algunas: el énfasis en el estudio de procesos, el interés por el significado, el investigador como instrumento directo a través del cual se obtiene la información, la importancia del trabajo de campo acompañada de la descripción, énfasis en el trabajo inductivo, uso de múltiples métodos y técnicas, y la flexibilidad en todo el proceso investigativo (2007:97–98). Acorde a este paradigma, se empleó el método etnográfico, y se utilizaron otras técnicas que ayudaron en el proceso de investigación y análisis de los datos como ser la “teoría fundamentada” (Strauss y Corbin, 2002).

En tal sentido, seguidamente se presentan las consideraciones teóricas vinculadas a los datos generados en la investigación.

El presente estudio parte del entendido de que el Patrimonio Cultural es una invención de la modernidad (Ariño s/f, citado en Castrillón Nieto, 2003:11) mediante el cual se buscó valorar diferentes ámbitos de

5 Asimismo, el presente caso de estudio no está aislado ni es el único. En Bolivia se presentaron otros procesos de Patrimonialización que generaron tensiones en diferentes niveles, desde declaratorias departamentales, nacionales como ante UNESCO: En 2007 se declara a nivel nacional a la localidad de Totora como Capital de la Tarkeada (Oruro); el 2012 a la danza del Ch’uta de Corocoro y Caquiaviri (La Paz); el 2014 las danzas del Pujllay y Ayarichi de la Cultura Yampara (Chuquisaca) ante UNESCO; el 2015 a nivel nacional la danza y música del Wititi (La Paz / Oruro); el 2015 la danza del Sikuri de Taypi Ayka-Italaque (La Paz); y en el 2016 la música y danza de la Pinkillada (Norte de Potosí). En cada uno de estos se reconoce a una localidad como capital/origen/cuna de patrimonio cultural y generó la reacción de las comunidades contiguas reclamando el mismo reconocimiento.

“lo cultural”. En el transcurrir del tiempo, desde su formulación a fines de la década de 1940⁶ —y su consolidación a principios de 1970— se dio énfasis a los elementos culturales “tangibles/materiales” producto del arte y la visión europea de “occidente”; y en la actualidad se privilegia su lado “intangible/inmaterial” referido a manifestaciones culturales de los pueblos indígenas (Arizpe, 2013). Dicho derrotero muestra la transformación de sentido atribuido a éste concepto y sus formas de sub-clasificación.⁷ En el ámbito internacional, la perspectiva “oficial” del patrimonio cultural la proporciona UNESCO.⁸ Como lo menciona Arizpe (2013:33–34), uno de sus primeros instrumentos normativos es la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972.⁹ Posteriormente, desde la década del 2000, el panorama del patrimonio se amplía a partir de la redacción de la Convención para la Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de 2003.¹⁰ En

6 Por ejemplo, se tiene la Convención de 1952 sobre Conflicto Armado de UNESCO.

7 Al respecto es necesario debatir sobre la pertinencia de la división que se hace sobre el patrimonio cultural en los ámbitos material/inmaterial, lo cual muestra una contradicción a la noción misma de *cultura*. Desde la perspectiva antropológica, como ya se aclaró, la música y la danza son entendidos en referencia a la “totalidad de prácticas culturales” que no puede separar la “cultura material” de sus atributos simbólicos, ya que forman parte de un complejo sistema de significaciones y praxis social (Guerrero Arias, 2002).

8 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se funda el 16 de noviembre de 1945, es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de cuestiones relacionadas con la educación, las ciencias sociales o naturales, la cultura y la comunicación, con el fin de promover la cooperación internacional. La UNESCO está conformada por “Estados parte” quienes ratifican mediante leyes las Convenciones internacionales que son el marco jurídico que emana esta instancia; por ello, no hay forma en que un grupo local o indígena pueda remitirse directamente a UNESCO, ésta relación sólo puede hacerse mediante el Estado.

9 En esta Convención, como uno de los principales criterios de selección para ser reconocidos como “patrimonio mundial” plantea que los postulantes deben contar con un “valor universal excepcional” (VUE), que los distingue del resto de elementos culturales del planeta.

10 “Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.” (UNESCO, 2012:5) Bolivia tiene inscritos en esta categoría a los siguientes patrimonios: El carnaval de Oruro (2001), La cosmovisión andina de los kallawayas (2008), La Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos (2012), el Pujllay y Ayarichi, música y danza de la cultural Yampara, y la declaratoria como Buenas Prácticas a la Cultura Aymara.

esta Convención se resalta el papel del sujeto local, especialmente indígena, “las comunidades, los grupos y los individuos que crean, detentan y transmiten su patrimonio cultural inmaterial” (UNESCO, 2012:49). Sin embargo, en los hechos y acciones, estos principios no siempre fueron atendidos al pie de la letra, ya que el PCI fue vinculándose cada vez más a otros conceptos, como es el de “desarrollo” (Montenegro, 2010).¹¹ En efecto, la UNESCO reconoce el papel del paradigma del desarrollo humano en la “puesta en valor” del elemento cultural. Señala el aporte de Sen al análisis de “la cultura como base del desarrollo contemporáneo” (2003); así como, el trabajo iniciado por el PNUD, en los años 90, los cuales fueron asumidos por la UNESCO en la cumbre de Johannesburgo de 2002 (Kutukdjian y Corbett, 2010:207).

Para aproximarse a este estudio se utilizó el concepto de *construcción metacultural*. Ya que al momento de “sancionar patrimonialmente un elemento cultural cualquiera, se lo produce como patrimonio” (Montenegro, 2010:128); con ello Montenegro afirma que no existe el patrimonio, sino los “patrimonializadores”, y

la patrimonialización: [es] el proceso de producción del patrimonio. El patrimonio es entonces un tipo de producción cultural. Más aún, puesto que se trata de un tipo de producción cultural que consiste en la sanción de otras, podríamos calificarla como una producción metacultural. Esta es la idea de B. Kirshenblatt-Gimblett cuando insiste en que lo patrimonializado es un fenómeno cultural que adquiere una segunda vida al exhibirse a sí mismo. Esta característica, la metaculturalidad, supone cierta autonomía en la producción de valor (en especial simbólico), tomando en cuenta que la misma esfera, el mismo objeto sanciona y es sancionado culturalmente. (Montenegro, 2010:128)

El fenómeno de la *patrimonialización* es entendido como un proceso.¹² El cual “tiene que ver con su marco jurídico y la manera como parti-

11 Con ello se reconoce la importancia transversal del elemento cultural y la diversidad como motor principal en los proyectos de desarrollo con la finalidad de hacerlo sostenible. Además, plantean que el “enfoque cultural del desarrollo facilita la definición de este como un proceso de adaptación” en un contexto específico, dinámico e integral donde los grupos deben adaptar sus “respuestas y estrategias para alcanzar el bienestar general” (Kutukdjian y Corbett, 2010:207).

12 Aclarar que el denominativo usual tanto desde Unesco como de las actuales leyes nacionales hacen referencia a la categoría de “patrimonio cultural”, pero para efectos investigativos tomé este fenómeno como proceso: “patrimonialización”; ya que uno de los aspectos más cuestionados del “patrimonio” es justamente la ambigüedad de su definición (Chaves et al., 2010:12).

cipan quienes lo promueven: las instituciones que rigen las políticas culturales, los intermediarios y las comunidades que se plantean como sus beneficiarias” (Chaves y Montenegro y Zambrano, 2010:8–9). Vale decir que este proceso se conforma de una serie de protocolos jurídicos estipulados que articulan una serie de sectores sociales perfilando sus roles y competencias; para lograr la declaratoria o reconocimiento como patrimonio cultural a una manifestación, saber o elemento de un grupo social. Sin embargo, es importante reconocer que la patrimonialización no implica un relacionamiento horizontal ni libre de valores.¹³ Para la aceptación de una demanda de declaratoria, esta dependerá si la propuesta responde “a los criterios esencialistas de una diferencia cultural domesticada, dictadas por las mismas normas de la Unesco y el Ministerio de Cultura” (Chaves et al., 2010:8–9).

Por otro lado, se retoma algunos criterios referidos a la desigualdad en Bolivia del Informe del PNUD (2010). Allí se aclara que la discusión sobre los distintos conceptos de igualdad y desigualdad adquiere matices distintos en cada sociedad, y dependen del criterio de bienestar que lo sustenta (PNUD, 2010:44). Por lo cual, procuran dialogar con dos visiones normativas de bienestar: “La primera se inspira en el enfoque de desarrollo humano formulado en los años noventa por Amartya Sen y Mahbub ul Haq [...], la necesidad de otorgar mayor atención a la dimensión subjetiva del bienestar [...]. La segunda visión nace en Bolivia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se formaliza en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en los postulados del paradigma de bienestar denominado ‘Vivir bien’.¹⁴ Esta visión asume que el bienestar de una sociedad debe asentarse en principios y valores de igualdad, solidaridad, reciprocidad y respeto de la diferencia.” (PNUD, 2010:49) Complementariamente, en especial desde un sentido analítico, se retoma el trabajo de Charles Tilly (2000), pues plantea que “todas las relaciones sociales implican desigualdades pasajeras y fluctuantes, [de las cuales] nos concentraremos en las desigualdades *persistentes*, las que perduran de una interacción social a la siguiente, con especial atención a las que persisten a lo largo de toda una carrera, una vida y una historia organizacional.” (Tilly, 2000:20) Como uno de sus principales argumentos plantea que “las

13 Por ejemplo, UNESCO empleaba la denominación de “obras maestras” como una forma inicial de reconocimiento mundial. Lo cual, inició formas de jerarquización entre los denominado como “obra maestra”, de los que no lo son. Por ejemplo, se tiene la denominación del Carnaval de Oruro como “Obra Maestra del patrimonio cultural oral e intangible de la Humanidad”, lo cual se asume como una forma de prestigio y diferenciación social.

14 Para un análisis crítico sobre el concepto de Vivir Bien consultar a Farah y Vasapolo (2011).

grandes y significativas desigualdades en las ventajas de que gozan los seres humanos corresponden principalmente a diferencias categoriales como negro/blanco, varón/mujer, ciudadano/extranjero más que a diferencias individuales en atributos, inclinaciones o desempeños” (Tilly, 2000:21), para lo cual resalta la diferenciación de categorías internas (utilizadas al interior de un grupo) de las categorías externas (generadas afuera pero aplicadas al interior) (Tilly, 2000:88).

Por otro lado, para abordar el fenómeno musical y de danza se emplearon los criterios del concepto de sistema sonoro-musical. Siguiendo los aportes de Roza (2011) y Qureshi (1987),¹⁵ la práctica de *lo musical* no es un elemento aislado, sino implica una serie de interacciones que vincula los aspectos sonoros, musicales y de danza con otros de la vida de un grupo social: lo productivo y económico, lo social, lo simbólico, lo religioso y ritual, lo medioambiental y lo político; todos parte de procesos de organización que siguen los integrantes de una comunidad. Por todo ello, se entiende “por sistema musical al conjunto de roles, prácticas, instrumentos, repertorios, valores y recursos sonoros —todos ellos relacionados entre sí—, constituidos como un universo de expresiones y representaciones materiales y subjetivas, vigentes en una cultura dada. Este concepto contempla las constantes transformaciones ocurridas en el tiempo y el espacio, como resultados de la apertura al contacto permanente con otras culturas, descartando así la estática del centralismo y/o localismo.” (Rozal López, 2004:130) Siguiendo esta propuesta, la investigación musical necesita entender tres niveles, interrelacionados e interdependientes entre sí: a) conceptos y valores, b) comportamientos y actitudes, y c) productos sonoros.¹⁶ Por tanto, la conexión que se logra a partir de la música entre varios de los componentes culturales se relaciona con el

15 Ponderando los criterios vertidos por Simha Arom se indica que “con el concepto de sistema nos enfrentamos a un concepto de tres caras: -sistema (que expresa la unidad compleja y el carácter fenoménico del todo, así como la complejidad de las relaciones entre el todo y las partes), -interacción (que expresa el conjunto de relaciones, acciones y retroacciones que se efectúan o se tejen en un sistema), -organización (que expresa el carácter constitutivo de estas interacciones—lo que forma, mantiene, protege, regula, rige, regenera— y que ofrece a la idea de sistema su columna vertebral). [...] De entrada, el concepto de organización, biológico y a *fortiori* sociológico, es un macro-concepto que a su vez forma parte del macroconcepto sistema-interacciones-organización.” (Morín 1999:245-246 citado por Arom, 2001:204-205)

16 Estos criterios originalmente son planteados por Merriam en su texto *The Anthropology of Music*, donde plantea un “modelo” que “[...] conlleva el estudio en tres niveles de análisis: la concepción teórica sobre la música, el comportamiento en relación con la música, y el sonido musical en sí mismo. [...] Existe una constante influencia mutua entre el producto musical y la conceptualización de la música, y esto explica tanto el cambio como la estabilidad de un sistema musical” (Merriam 1964:32-33, citado en Rice, 2001:155-156).

entendido de la *música como articulador*. Este aspecto es planteado a detalle por Stobart (2006) quien a partir de los conceptos de poética y producción musical, demuestra cómo la música articula las diferentes formas de producción, poética, así como entre el cambio y la continuidad, el espacio y lo sociocultural. En suma, la música es el articulador de los componentes del sistema sonoro con el contexto y este con la identidad, aspecto que se aborda a continuación.

Finalmente, en lo que refiere al territorio se asumen los trabajos de Masurek (2012) y Hener (2009). El primero afirma que inicialmente, este concepto sólo se aplicaba en el contexto jurídico, luego por los etólogos, para paulatinamente ingresar en las ciencias sociales, llegando a la conclusión: “no puede existir comportamiento social sin territorio, y por consiguiente, no puede existir un grupo social sin territorio” (Masurek, 2012:45). Seguidamente, el autor se apoya en la definición propuesta por Maryvonne Le Berre: “El territorio se define como la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales”. (Bailly, Ferras et al., 1995: 606, citado en Masurek, 2012:45). Estos aspectos son complementados por Hener, que habla de “[u]na construcción del territorio conduce a un movimiento que gobierna los agenciamientos y sus dos componentes: los agenciamientos colectivos de enunciación y el agenciamiento maquínico de los cuerpos (o de deseo)” (Hener, 2009:166). Lo cual coincide con Masurek en el sentido del rol determinante de los sujetos en la creación del territorio. Sin embargo, ello no queda ahí, es fundamental el criterio procesual que también involucra al espacio:

“Es a partir de ellos que nos acercamos al trío “territorio-desterritorialización-reterritorialización”, que tienen los movimientos mismos de los agenciamientos. Un agenciamiento es un territorio, que puede desterritorializarse y al mismo tiempo, reterritorializarse. Pero también puede dar lugar a la generación de otro agenciamiento reterritorialización, desterritorialización...Esto es lo que define el movimiento de cualquier” (Hener, 2009:170).

El estudio se desarrolla entre algunas comunidades ubicadas entre las provincias Carangas, Sajama y Totora, departamento de Oruro, Bolivia. Se extiende en un territorio que al menos abarca a tres secciones municipales: Totorani, Huancapata, integra los cantones Rosario, Tocota, Pacali y Villa Rosario de Wila Khala; y Pumacala. Las comunidades denominadas *Ayllu Wilasa* se encuentran a orillas de un río que cruza por esta región. Actualmente, estas comunidades se encuentran repar-

tidas en dos Municipios: Huancapata y Totorani. La principal forma de acceso al sector es mediante transporte público que se dirige a la población de Rosario, a San Ramón o Totorani (LDC-DP, 2016).¹⁷

Las viviendas de cada poblador son propias, es decir unifamiliares. Y en el ámbito educativo, las comunidades se agrupan en Núcleos Escolares a los cuales acuden para su formación en los niveles primaria y secundaria. El relacionamiento de estas comunidades con instituciones no gubernamentales es muy reducido; incluso la coordinación con sus Gobiernos Municipales. La actividad económica aun mayoritaria es la agricultura, donde predomina la producción de la papa, la oca, cebada, haba, arveja, avena (forraje). Donde el artículo de mayor importancia es la papa, presente en una amplia variedad.¹⁸ También se dedican al cuidado de ganado (vacuno) pero de forma reducida y complementaria, y utilizada para realizar la siembra. Además, en la región las actividades de trabajo están divididas de acuerdo al género e influenciadas por factores de autosuficiencia económica. El hombre se ocupa de las actividades agropecuarias en épocas productivas divididas por temporadas. La mantención de la familia por la actividad agrícola es contribuida por el trabajo asalariado masculino de migración estacional, momento en el cual la mujer queda al cuidado de los hijos y el ganado. El trabajo comunitario, *ayni*,¹⁹ es una actividad en paulatino debilitamiento ya que, se prefiere la ayuda a la persona con lazos de amistad y parentesco. Otra práctica, que no siempre se vincula al mercado es la artesanía; este tipo de actividad se refiere a la producción textilera originaria.²⁰

Otro factor de importancia es la migración. Inicialmente era específicamente masculina y estacional (por temporadas), pero ahora los

17 Las citas etnográficas se añadirán a partir del código LDC-DP, que indica las anotaciones realizadas en la “Libreta de Campo – Desigualdades Patrimonio”.

18 La actividad productiva está dividida de acuerdo a etapas productivas: se siembra cebada, oca y avena en septiembre. En noviembre se siembra papa hasta el 10 de noviembre que es la última siembra. En diciembre hasta enero se hace el desyerbe y aporque, es cuando el hombre sale a buscar trabajo. En marzo y abril es la cosecha de papa. Para mayo se selecciona papa para elaborar *chuño*, y otra vez comienza el ciclo. Por otro lado, aunque en reducción paulatina, se extrae pescado del río de acuerdo a la necesidad, para el autoconsumo (LDC-DP, 2016).

19 *Ayni* (Aymara) sustantivo. Reciprocidad. Correspondencia mutua. Servicio en la necesidad del otro con retribución en la misma condición y situación. (Layme Païrumani, 2004)

20 Se elabora textiles como el *phullu*, realizado en telar horizontal (o *sawu*). Se hace el *poncho*, *tarillas*, *inkhuñas*, según la necesidad de cada uno, así como la vestimenta para la danza del *sikuri*, los *chuspa* y los sombreros se elaboran en la misma comunidad (LDC-DP, 2016).

jóvenes son quienes más mudan a las ciudades (Oruro, La Paz, Brasil y Argentina) al terminar el colegio (Hinojosa, 2008; Spedding P. y Llanos, 1999). Los oficios a los que acceden están de acuerdo a su capacidad de trabajo como ser albañil, algunos ingresan a yungas o tras a ayudar a la calle (trabajos de aseo municipal). La población *residente*²¹ urbana con lazos en la comunidad son causa de división interna por considerarse de mayor estatus social; se pueden discriminar a los comunarios “porque han venido de Oruro y tienen su platita y a la gente aquí creo que ya no respetan” (Coronado, 2015).²² Los habitantes de este sector acceden a las ferias de comunidades vecinas, los miércoles se dirigen a la Feria Grande de Pacali, el sábado a San Ramón, el domingo a Rosario, en otras. En estas ferias se proveen de pan y otros productos, en cambio existen otros que van a vender sus propios productos según el criterio de cada familia, guardando para el autoconsumo. Además del intercambio monetario, aún se practica el trueque se lleva a cabo con papa a cambio de maíz, acción realizada principalmente con pobladores del valle.

El sistema de autoridades es de tipo sindical: Secretario General, Secretario, de Relación, secretario de Justicia, Actas, Vocal, Secretario Comunicación, Deportes. El Secretario General es la máxima autoridad entre las funciones que debe cumplir esta el de velar por la comunidad, ver que hace falta, organizar ampliados (Cf. Fernández Osco, 2000). Si bien, existe un rol cada vez más importante y equitativo de la mujer en la comunidad (*chacha-warmi*²³), su participación está restringida a sus funciones como esposa del que ocupa un cargo en el sistema de autoridades (Cf. Canessa, 2006). La medicina tradicional, tiene gran importancia entre los pobladores de esta comunidad. Los especialistas que realizan curaciones en la comunidad son denominados *Yatiri*²⁴ o “curanderos”, a quienes se consulta para conocer el mal y curarlo “bara-

21 Los *Residentes* con una nueva forma de identidad. Es un término empleado por los comunarios para referirse a las personas que habitan en la/s ciudad/es, sean estos vecinos o *comunarios*. Son quienes naciendo en el lugar de origen (pueblo o comunidad) salieron a espacios distantes, especialmente urbanos (Mújica Angulo, 2014:73). Además, esta categoría coincide con lo sugerido por Spedding y Llanos al referirse a ellos como *exitosos*, *dependientes* o *conflictivos*, pero además cuentan con *doble residencia* (Spedding P. y Llanos, 1999:33–34)

22 En adelante, las referencias de las entrevistas se harán señalando el apellido de la persona y el año de la entrevista, mayores detalles se complementan en una sección específica de la bibliografía.

23 *Chacha* (Aymara) sustantivo. Varón. Hombre, persona de sexo masculino. *Warmi* (Aymara) sustantivo. Mujer. (Layme Pairumani, 2004)

24 *Yatiri* (Aymara) adjetivo. El que sabe o suele saber. / sustantivo. Persona con poderes, gracias a la energía del rayo u otro, que sabe del espacio-tiempo por intermedio de la coca y suele dar ofrendas y ritos a los dioses (Layme Pairumani, 2004).

jar, de ahí sale y de acuerdo a eso utilizan medicinas tradicionales”. Los *Yatiri*, son quienes interceden por la comunidad ante el cerro protector de la comunidad, lugar donde se realizan la mayoría de los rituales y ofrendas de la comunidad a los seres protectores. La familia tiene el conocimiento de la curación de algunas enfermedades. Los principales remedios son yerbas. Luego de esta breve descripción del contexto de la región y sus comunidades, se pasa a señalar los aspectos centrales de la investigación.

“ANTES UNO NOMÁS ERA PUES, TODO ESTO”²⁵: TERRITORIALIZACIÓN, ENTORNO, FRAGMENTACIÓN Y COMUNIDAD.

Los procesos de territorialización acaecidos en esta región son condición fundamental para entender las disputas intercomunitarias y con el Estado, ya que se encuentran en una constante búsqueda de autodeterminación. Sobre lo que hoy es la localidad de Rosario y sus antiguas comunidades y *ayllus* se tiene una serie de procesos de configuración del territorio, los cuales fueron estudiados desde la perspectiva histórica (Arnold, 2008a). Todo este proceso histórico, aún forma parte de la memoria de algunos de los pobladores de las comunidades; tal el caso de don Felipe, quién rememora estas etapas de configuración territorial que han vivido: “Visita había dice pues, años pasados. Había saneamiento como en ’35, ’45, había dice pues, ahora esa revisita dentro de 40 años va a ver ahora. Ya hemos pasado varios: revisita, reforma agraria, con este saneamiento son cuatro. Después habrá otro en cuarenta o cincuenta años” (Quenta, 2015a).

La importancia del contexto territorial e histórico para el estudio de las desigualdades es fundamental, ya que muestra el rol del Estado en estos procesos: “La desigualdad es una preocupación y deuda histórica, una de las tensiones irresueltas de la construcción de la estatalidad boliviana era la persistencia de las desigualdades entre individuos y entre grupos. Esta situación se refleja, entre otras manifestaciones, en las relaciones discontinuas entre el Estado y la sociedad que reproducen prácticas que desigualan y que excluyen” (PNUD, 2010:52–53). En la información generada en este estudio son recurrentes algunos momentos históricos que traen consigo representaciones sobre la relación con el Estado: La fundación de la República y el pasado Colonial, relacionada con el nacimiento del Estado liberal; la Revolución Nacional de 1952 con la ideología del Estado nación; y el período neoliberal que se inicia en 1985 (PNUD, 2010:54). Y por otro lado, en lo que se refiere a la relación entre la desigualdad y el territorio, éste es entendido desde una

25 Código “en vivo” generado en la entrevista a Don Felipe, 2015. “[Entrevista al Apoderado de la Comunidad San Javier] 14/05/2015.”

“doble dimensión simbólica y material, es decir, como elemento que ancla las identidades sociales y como soporte crucial de la actividad económica rural” (PNUD, 2010:131).

LOS AYLLUS DEL PASADO: LOS CUATRO CUADRANTES, APELLIDOS Y ENTORNO RITUAL

Las formas pre coloniales de organización territorial, aún están presentes en la memoria de los pobladores de este sector. Más aún, manifiestan sobre la resistencia que habrían mantenido los grupos indígenas de la región; Santiago, explica: “desde antes, hemos tenido una confederación donde ha nacido estos cuatro *Ayllus*. Los Carangas éramos, por eso ahora somos *Carangas*. Y después de la llegada de los españoles, más nos hemos juntado, porque en 1492 llega Colón ¿no ve?, después de una década se funda nomás esto. Yo creo que para defensa ha debido ser” (Mamani, 2016). Autores como Ticona (2000), Arnold (2008b) Albo (2009) y Choque (1992), abordan el proceso de lucha indígena por el territorio y cómo este va acompañado de aspectos culturales.

Es así que la presencia de formas anteriores de organización territorial aún está presente: el *Ayllu*, y otras subclasificaciones: *parcialidad*, *machaca* y *villa*. Si bien el *ayllu* (Yampara Huarachi, 1992) reúne a varias comunidades, las *parcialidades* las organizan regionalmente en grupos de *Ayllus*.²⁶ Al interior de los *ayllus* las comunidades se pueden clasificar en aquellas “centrales”, “villa” y “machaca”. Las primeras hacen referencia a las comunidades más antiguas con las cuales iniciaron los *ayllus*, y las que se ubican al centro de dicho espacio. En cambio, las comunidades *villa*, son aquellas que literalmente “apoyan” a las comunidades centrales, dicho apoyo se manifiesta en diferentes contextos (festivos, de trabajo, gestiones administrativas actuales): “los *villa* son nuestro ayuda, nos apoyan en la fiesta, cuando pasamos o en algún trabajo, siempre están con nosotros” (Condorena, 2015). Finalmente, los *machaca* se entienden como nuevas comunidades que con el tiempo se desprendieron de las centrales, dicho proceso habría aumentado desde el 1952: “los *machaca* son nuevas comunidades que han aparecido desde los sindicatos” (Mamani, 2016). Santiago de Pumaqala explica: “Cuando he investigado, hay ancianos todavía ¿no ve?, recién hablan: ‘si ese es’, han cantado. Ahora, los de arriba somos Qamasa grande, pues, tres *ayllus*, después nuestros Villas” (Mamani, 2015). De esta manera, las

²⁶ Así, un *ayllu* corresponde a una parcialidad: “[...] como *Ayllu* Qamasa había sido arto, ha pertenecido una mitad a la parcialidad Pacali; o sea, ésta parcialidad son como hoy en día es [una] *sección*, ¿no ve? Antes habrá sido equivalente a eso, parcialidad Pirqas, parcialidad Pacali” (Mamani, 2016).

comunidades se tejen en complejas formas de organización territorial que en se mantuvieron en el tiempo.

El territorio que hoy se denomina Rosario, anteriormente habría correspondido a tres parcialidades del territorio aymara: Pirqa, Kanchi y Pacali. Así explica uno de los textos elaborados por un comunario de la Comunidad Casani: “cada ayllu conserva el uso siguen la tradición que tenemos de nuestro origen, pero en aquellos tiempos ancestrales el pueblo de Rosario tenía varias comunidades y además Rosario se divide en tres ayllus Pirqa, Kanchi y Pacali en ese tres tiene” (Rodas, 2010). Estos cuatro Ayllus, a su vez conformarían “cuatro cuadrantes” (Mamani, 2015), que ordenan la forma de administración de cada ayllu: “con ayllu Qamasa, Tinkuta, Ayllu Wilasa y Tuku, esto; somos *colindantes* nomás, así cerquita, cerquita es, mismo lugar somos. Por eso somos nacidos de nuestra piedra de fundación en... estos cuatro ayllus se habían fundado [...]. Eso a principios del siglo XV se había fundado [...].” (Mamani, 2016).

Pese a esta situación de hermandad y proximidad, plantean que cada uno de estos ayllus fueron surgiendo paulatinamente y de forma jerárquica, “porque esto es según gradación” (Mamani, 2016): “Porque Qamasa es antes de todos [...]. Incluso un solo territorio ese tiempo nuestros abuelos habían manejado. Después, ahora somos colindante, hay mismo es pues” (Mamani, 2016). Elías ratifica la existencia de los cuatro ayllus de la región, trazando un mapa. Cala uno de estos ayllus, implica una forma de configuración del espacio (Mazurek, 2012:46), la cual es interpretada por los comunarios de la siguiente manera:

En lo que al ayllu Qamasa se refiere, éste estaría conformado por “[...] Primer Qamasa, segundo Qamasa es Pumaqala, nosotros; tercer Qamasa, cuarta Qamasa. Aquí, había sido grande Qamasa, ese está en Pacali actualmente, son grandes Qamasas. [...] Los Qamasas, tanto parcialidad Pirqa como Pacali hemos manejado nosotros. Somos harto Qamasa, tanto del altiplano como del valle [...]. Ese es pues, primer, segundo, tercero, escalonado es” (Mamani, 2015). Sin embargo, esta versión no es del todo aceptada por el Apoderado de San Ramón; cuando le consulté si era cierto que estos ayllus han aparecido poco a poco. Me respondió: “Que huevadas son, deben ser segundas o terceras personas. Yo he visto un plano, desde antes habíamos sido Ayllu Wilasa nosotros. Porque originarios siempre habíamos sido no somos asentados” (Quenta, 2015b). Con lo cual, Felipe no responde la interrogante, y le enfoca en defender la existencia del Ayllu Wilasa.

El ayllu Tinkuta, sería el segundo ayllu en conformarse luego de Qamasa. Este estaría compuesto por varias comunidades; y hay más todavía porque han nacido más ayllus” (Mamani, 2016). Además, las comunidades también se organizan jerárquicamente dentro de cada ayllu, es así que hay el “primer Tinkuta, segundo Tinkuta, tercer Tinku-

ta T'ikata, aquí falta todavía sus *machacas* y villas, que después se han debido aumentar” (Mamani, 2016).

Por otro lado, sobre el Ayllu Wilasa, indican que “el primer Ayllu Wilasa que ha nacido es San Alberto, después viene San Martín, después San Ramón, después Antonio [...], hoy ya no es, pero había sido grande San Antonio; después último Ayllu Wilasa es San Javier [...] Aquí no está San Ignacio nada porque esos recién han nacido” (Mamani, 2016). Las comunidades que conformaron el Ayllu Wilasa, al parecer tuvieron una elación muy estrecha. Don Ernesto, explica: “antes de los sindicatos como hermanos éramos con San Martín y San Alberto porque un solo autoridad nos manejaba, como turnos era entre los dos” (Condorena, 2015). Por otro lado, la ubicación de San Martín también parece sobre ponerse a antiguos terrenos de San Javier, donde San Ignacio aún no existe: “Podemos ir al Instituto Geográfico Militar, San Martín y San Alberto nomás está. San Ignacio no existe [...]. De San Javier había sido pues. San Martín está pues en su parcela. Y ese, San Ignacio y San Alberto había sido una comunidad” (Quenta, 2015a). Finalmente, el Ayllu Tuku sería el último en conformarse, sobre sus comunidades, Santiago explica que el “primer Tuku es Isidro, está en Pumaqala eso; Ayllu Tuku, Lomani, Killa, y otros más” (Mamani, 2016).

Otro aspecto que muestra la relación de las comunidades como ayllus son los apellidos (Cf. Medinaceli, 2003) de las familias que habitan en este sector, y su relación con tres antiguos hermanos: “Como somos tres hermanos: San Javier, San Ramón, San Martín-San Alberto. Antes, tres como patronos habíamos tenido: de San Javier había sido Quenta [apellido], como originario Quenta, como jefe, como patrón. Ese [ahora] está pues en San Martín, pero de San Javier era [...]. Después de San Ramón había sido un patrón también, el tal Huanca. Ahora San Martín-San Alberto había tenido un patrón también, ese es Condorena, ahora está en San Alberto” (Quenta, 2015a). En suma, los antiguos apellidos que conformaron las comunidades del Ayllu Wilasa eran: Quenta de San Javier, Huanca de San Ramón, y Condorena de San Martín-San Alberto. Sin embargo, entre estas comunidades se dieron procesos de relacionamiento familiar, inclusión de otras personas que no son parte del ayllu: “[...] Yo tengo siete cuñados, yo soy yerno de San Martín, pero no es San Martín pues, San Javier nomás es. De ahí se han llamado, Saavedra, Llanque, Espinosa, Huanca, Mendoza, ¿qué más hay? de otro lado son pues *yernos*, como antes había terrenos, *llamados* son. Con eso se han marginado. Ahora puedo decir, donde están pues, no hay pues San Martín, ni eso deben saber ellos” (Quenta, 2015a). Con ello se muestra cómo mediante el establecimiento de nuevos matrimonios (yerno) o la necesidad de contar con personas que trabajen la tierra (llamado o asentado) se logró el

ingreso de nuevas personas a la comunidad y con ello la inclusión de nuevos apellidos.

Finalmente, un último aspecto de relevancia para estas comunidades, respecto al territorio y el entorno, es el significado ritual que tiene el espacio para ellos (Bellenger, 2007). Cada cerro, río, quebrada, planicie, tiene un nombre y una característica espiritual con la cual las personas conviven, con respeto y diálogo permanente. Ello, también implica una forma de vinculación entre el espacio y el tiempo (Giddens, 1994). En el trabajo de campo, se recogieron varios relatos que explican el relacionamiento que tienen las personas de estas comunidades con el entorno. Don José de la comunidad de Casani y Felipe de San Javier, se refirieron al relacionamiento que tienen las personas, desde su nacimiento, con el *uywiri* o cerro protector de su comunidad (Berg, 1989). Por ejemplo, cómo en el mes de enero, el inicio y fin de las actividades de las autoridades locales indígenas (*secretario general* entrante o saliente) se realiza en estos cerros, donde ellos piden permiso (licencia) o se da agradecimiento por la responsabilidad que asumen. También se realizan rituales para “llamar” la lluvia, para evitar la granizada (Fernández Osco, 2000; Gérard A., 2010): “su mandato llega desde enero, del primero, y más o menos el diez o quince de enero ya tienen que ir a preparar ese *waxt’a*, con un *yatiri*. Tienen que ir siempre al *Qarara*, para pedir la disculpa o el favor para que no haya la granizada, mayor parte para eso van. Eso es sagrado tienen que ir siempre las autoridades entrantes. Después, en carnaval hacen *waxt’a* para que dé bien la producción. Después de la siembra tienen que hacer otro ritual, en mes de noviembre [...]. Aparte de eso cada uno tiene sus usos y costumbre y creencia en la familia. Como en agosto pueden subir al *Qarara*, otros en San Juan, de acuerdo a que uno tiene la necesidad de subir van” (Coronado, 2015). Otro ejemplo, lo da Felipe:

como mi papá me ha contado, hay hemos wajtado pues. No había llovido hasta carnavales, por eso hemos ido, para pagar, de la coca han sorteado. Y me dice pues, don Felipe para usted ha salido pues. Y he entrado [a la cueva] y he sacado el agua para la lluvia, porque hay otro para granizo y otro para juyphi (helada). Después, ha venido nomás la lluvia, con nosotros ha venido. Ese año hemos recibido harto papita. En este lado todo cerro todo hay ese lado. En ese Cerrito hay chullpas encima, hay harto. En una reunión que hemos tenido han dicho que hay vamos a hacer calvario, porque eso era siempre más antes porque era el centro” (Quenta, 2015a).

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL: REVOLUCIÓN AGRARIA, MUNICIPIOS Y CANTONES

Los años que rodean a la denominada “Revolución del 52” en Bolivia, implican una serie de procesos de transformación para las comunidades, en este caso aymaras. Si bien, ya existían cambios internos luego de la revolución de 1952 las poblaciones indígenas “retoman” el control de su territorio, antes usurpado de los patrones hacendados²⁷ mediante la reforma agraria del 1953.²⁸

Entre las comunidades existe una clara distinción entre las comunidades que eran “originarias” de aquellas que formaron parte de las haciendas. Ese es el caso de Kutili y Casani: “Kutili eran, como se dice, tenían hacienda. Y por los hacendados no participaban en la fiesta; los de Casani también es hacendado. Esos hacendados esclavos eran, desde el 52 para adelante recién saben, recién deben tener unos 15 años su Sikuriada” (Huanca, 2012). Se podría decir que ésta es otra clara forma de distinción que se hace entre las comunidades que eran de la hacienda, entendidas como “esclavos”,²⁹ de aquellas comunidades “originarias” y libres, lo cual ya abre camino para discutir sobre la identidad y su relación con la desigualdad; al respecto Tilly se refiere a la creación de “categorías internas” que son utilizadas como forma de distinción al interior de un mismo grupo (Tilly, 2000:88).

En la primera mitad del siglo XX, a partir del mandato local de los patrones y la iglesia, se logra una suerte de articulación obligatoria de las comunidades.³⁰ Las fiestas es un ejemplo de este proceso: “Todavía, en la década del cincuenta, de Rosario juntos hemos salido [los ayllus] de las cuatro esquinas: Qamasa, Tinkuta, Wilasa, Tuku. Cuatro cuadrantes hemos bajado desde Pumaqala. Pero actualmente en Pu-

27 La etapa de la revolución de 1952, que aparentemente fue un estado de amplio reconocimiento pero que en la obra de “René Zavaleta describe las tensiones de una sociedad que se construye desde la sobre posición de diferentes sociedades que coexisten de manera desarticulada. Así, el ‘abigarramiento boliviano’ se habría construido sobre la base de una sociedad cuya condición colonial no había desaparecido en el campo de las relaciones políticas y sociales” (PNUD, 2010:56).

28 Uno de los cambios estructurales, procurados en la reforma agraria se concreta en el año de 1953, que es el hito donde se plantea que la “tierra es de quien la trabaja” (Albó, 2009).

29 Aclarar, que esta categoría surgió en la investigación, y que para dicho momento histórico, más bien se hacía referencia al concepto de “pongueaje” como un trabajo forzoso sin remuneración (Albó, 2009).

30 La organización del territorio es un producto colonial, donde se estructuran repartos y encomiendas; esta situación no cambia de gran manera con la instauración de la república, por lo que a finales del siglo XIX e inicios del XX las comunidades buscan restituir sus antiguos territorio, es en este proceso que las comunidades nombran apoderados y un ejemplo de ello es el Santos Marka T’ula (Choque y Mamani Condori, 2003)

maqala seguimos nosotros, Qamasa y Tinkuta, seguimos manteniendo. Ayllu Wilasay y Tuku, se han desplazado a otro lado” (Mamani, 2016). Este desplazamiento al que Santiago hace referencia se debe a un proceso posterior de creación Cantones, nueva forma de organización territorial: “[D]espués con Reforma Agraria otro ha cambiado, Pumaqala ha sido cantón, después San Ramón ha sido Cantón; Lupiña y Pacali ha sido cantón; Tocota ha sido cantón. Ya está, así se ha quedado” (Quenta, 2015b). Este proceso de “cantonización”³¹ plantea una reestructuración administrativa del territorio que anteriormente era entendido, aún en la hacienda, como ayllu (Albó, 2009; Choque Canqui, 1992).

Poco a poco, estos cambios también se van dando en las comunidades, y con el tiempo muestra un desplazamiento mucho mayor:

[E]sta comunidad [Casani] es ancestralmente, pero he visto que antes otro antiguo y Casani manejaban un solo secretario general. Nuestros tatarabuelos así manejaban antes. Del ochenta debe ser que somos comunidad de Casani muy aparte [...]. Ahora Casani estamos más en contacto con cantón Pacali. Antes pertenecíamos al cantón Rosario, creo que desde el ochenta y cinco [1985] nos hemos unido al cantón Pacali. Después nos hemos unido a otro distrito nuevo, desde el 2005 (Coronado, 2015).

En esta cita, Alfonso muestra cómo esta comunidad pasa de ser parte de la *parcialidad* Pacali, del ayllu Qamasa, al *cantón* Rosario en la década de 1950; y posteriormente en 1985 al cantón Pacali. Este último proceso, hace referencia a otro punto de importancia: la participación popular y la creación de las secciones municipales actuales. Al respecto Blanes muestra la pugna al interior de las comunidades y con el estado en la conformación de estos territorios en un ámbito Municipal (Blanes Jiménez, 2000).

31 En el trabajo titulado “Elites Locales y Estructuras Señoriales”, David Llanos (2003) explica: “Hasta la década de los ‘50 del siglo XX, los vecinos de la población de Charazani mantenían el control absoluto del poder político-administrativo de la región, en base a las prácticas de la ‘cultura señorial’. Entre tanto, las poblaciones indígenas/campesinas de una u otra manera estaban supeditadas a las estructuras de poder señorial de la capital Charazani. Es decir, tanto las poblaciones de las pequeñas haciendas como de las comunidades originarias estaban vinculadas con el poder vecinal en los diferentes campos de la vida local. Consideramos que, en el siglo XIX, el dominio vecinal debió tener las mismas características del Siglo XX. Frente a esta realidad, muchas poblaciones rurales de la región junto con la fundación de la república (que fue el 6 de agosto de 1825) iniciaron un proceso de cantonización, con la finalidad de liberarse del dominio vecinal de la capital Charazani. [...] Al mismo tiempo, cada creación de cantón en las poblaciones rurales creó su fecha festiva como Santo Patrono. La cultura señorial ha empujado a las diferentes comunidades a crear su propio cantón y por ende su ‘propio’ pueblo, sus ‘propias’ autoridades políticas, su ‘propio’ calendario festivo, etc.”

Con todo ello, se ve que, pese a estos procesos históricos, aún perdura la memoria de las antiguas formas de organización territorial y la conciencia de su impacto: “las secciones actuales nos han dividido, más antes junto hemos vivido. Ahora, cada uno está por su parte, siguen partiéndose las comunidades, ‘ahora queremos nuestro sindicato’ diciendo, hasta los cantones se han dividido” (Condorena, 2015). La última cita muestra cómo se fueron superponiendo el entramado de la territorialización en lo que antes fueron concepciones indígenas del espacio. Estos procesos de territorialización *aún están presentes en el actual siglo. Pero a diferencia de una visión administrativa exógena, ahora se busca una suerte de “re-territorialización”,* es decir, la rearticulación del territorio indígena pero bajo criterios de la actual política estatal; ello muestra la importancia de partir del trío “territorio-desterritorialización-reterritorialización” y su relación con los agenciamientos de estas comunidades (Herner, 2009:170). De esta forma, se promueve la conformación de Municipios Indígenas, cuyo proceso parte del requerimiento de las comunidades y/o municipios.

Un claro ejemplo de este proceso se vive entre las comunidades de lo que fue el antiguo Ayllu Wilasa. Como se vio hasta aquí, el proceso de cantonización y municipalización hizo que las comunidades que conformaban el Ayllu Wilasa, ahora estén ubicados entre dos Municipios: Huancapata y Totorani. Geográficamente, estas comunidades se encontraban alejadas de las capitales municipales, por lo que se veían relegadas del interés de sus autoridades. Todo ello impulsó a que, desde noviembre del año 2010, se inicie un proceso de “saneamiento de tierra” que en el 2013 logra homologar un “acuerdo conciliatorio” que permite la rearticulación de las comunidades “San Ignacio, San Alberto, San Ramón, San Javier, y Comunidad San Pablo” en una sola superficie denominada *Ayllu Wilasa Originario*, correspondiente al municipio de Totorani. En mayo del año 2015, el Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, departamental Oruro, entregó los Títulos Ejecutoriales a las Comunidades: San Ramón, San Javier, San Pablo, San Ignacio, y San Alberto; al mismo tiempo, el Viceministerio de Tierras realizó la recopilación de información de campo para el Registro de Identidad de Pueblo Indígena u Originario (RIPIO), en las 6 comunidades que se encuentran tramitando su conversión a Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC).³²

32 Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). Es el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; tienen la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales

Este hecho podría entenderse como un proceso de re-territorialización, que siguiendo el agenciamiento de sus actores intenta la re-conformación del Ayllu Wilasa. Desde la perspectiva de sus pobladores este proceso reconstituye su territorio ya que el “Ayllu Wilasa ya tiene su resolución respectiva como cantón, después tiene su feria,³³ tiene su título ejecutorial, vamos a acompañar para hacer conversión a Autonomía Municipal Originaria Campesina del distrito, vamos a distritar al lugar de San Ramón. El anterior ya hemos hablado con [Ministerio de] Autonomías, que están esperando” (Quenta, 2015b). Sin embargo, se consultó sobre la inclusión de la Comunidad San Martín, que es la única que faltaría para hablar de una re-conformación del Ayllu Wilasa, a lo cual respondieron:

“Por seis meses hemos rogado [a San Martín] para sanearse con nosotros, pero no ha querido siempre. El saneamiento es Ayllu Wilasa estamos pues ahora. Con este saneamiento hemos sacado para todos, para ellos más hemos solicitado. Pero, ahora San Martín está fuera, no se puede incluir al Ayllu Wilasa, porque ellos sean negado. Nos han fregado los San Martín, hemos seguido un proceso, hemos tenido muchos problemas con San Martín. Pero nosotros hemos seguido, tres resoluciones supremas tenemos; se ha financiado para sanear, ahora lo demás está listo para conversión es para ser autonomía municipal [...]. Pero los San Martín, ya no están en nuestro polígono, ellos que se declaren, ¡que se busquen otro nombre, porque ya no son Ayllu Wilasa [...]” (Quenta, 2015a).

En Bolivia la desigualdad territorial, que es una consecuencia de un conjunto de elementos espacialmente interdependientes: recursos naturales y su distribución, condiciones de producción, relación entre espacios de producción y comercialización, entre otros, coincide con la condición étnica (PNUD, 2010:132).

No cabe duda de que los ayllus existieron y que fueron adoptando diversas configuraciones mucho antes de la invasión espa-

y principios de convivencia armónica con la naturaleza. El Territorio Indígena Originario Campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. (CPE. art. 403). La Disposición Transitoria Séptima de la CPE establece que la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se sujetará a un trámite administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario Campesino. El Decreto Supremo N° 727 establece que las TCO existentes pasan a denominarse TIOC y las futuras TCO adquirirán la misma denominación.

³³ Sobre investigaciones vinculadas al rol de las ferias en el área Rural se tiene a Bernabé Uno (2003).

ñoia del siglo XVI. Sin embargo, en cierto sentido, fueron las estructuras estatales ideadas por los colonizadores y que luego por sus sucesores de la república boliviana los que ‘congelaron’ la forma de los ayllus durante los pasados siglos que transcurrieron desde la primera incursión de los hermanos Pizarro al Qullasuyu, hasta el siglo XX. El Estado colonial y luego el Estado criollo detuvieron los procesos de cambio estructural en los ayllus para facilitarse las tareas administrativas y las de recaudación de tributos y tasas. Hasta cierto punto se puede afirmar que los ayllus de hoy en Yura son el resultado de imposiciones del Estado. (Rasnake, 1989:64)

Hasta aquí se ha visto que las comunidades que habitan el Cantón Rosario, antiguamente formaron parte de un solo territorio, la “confederación”, el cual estaba organizado por los cuatro cuadrantes (Ayllus), que compartían varios aspectos culturales. Uno de los centrales es el *Sikuriada*, una forma de cultural que reúne música, danza y canto. Seguidamente se desarrolla el contexto y la práctica del *Sikuriada*.

SIKURIADA Y ZAMPOÑADA: PRODUCCIÓN Y CREACIÓN MUSICAL EN DOS CONTEXTOS

Las comunidades aymaras forman parte y resisten los procesos de modernidad, lo cual se evidencia en la producción musical-danza. Estas expresiones se han transformado con el tiempo, de un contexto rural, donde se enfoca la música como articuladora ritual con el entorno natural, animal y humano; se pasa, mueve e interrelaciona, con el contexto urbano, surgiendo criterios de descontextualización, comercialización (industria cultural), apropiación y patrimonialización.

En tal sentido, se destaca la importancia de los “estilos de vida” en diferentes contextos y cómo estos van relacionándose con el consumo. Esto da pie para “explicar los aspectos fundamentales de la estratificación social, tanto en el mercado como en el ordenamiento de la diferenciación social [...]. En el proceso de construcción de las identidades, y por lo tanto de las desigualdades” (PNUD, 2010:227). Y por otro lado, a partir del entendido de sistema musical, ya señalado, es importante añadir la importancia de la música como “frontera”. Al respecto Nettl, dice: “se ha mostrado cómo la música marca fronteras políticas, límites temporales, y fronteras étnicas. Ha quedado claro que frecuentemente la música marca las divisiones del mundo, sean sociales, políticas, nacionales o sobrenaturales” (Nettl, 2002:146), aspectos que se desarrollan a continuación.

MÚSICA, TIEMPO Y ESPACIO EN LA COMUNIDAD

La interpretación del *sikuri*, al igual que otros géneros de la “música autóctona” responde a ciertos principios que involucran un equilibrio tiempo-música-ritualidad. Es así que la ejecución de los instrumentos y la música se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a la época de interpretación: *Jallupacha* (época de lluvias, desde el mes de noviembre a marzo) y *Awtipacha* (época seca, desde abril a octubre).³⁴ En la concepción musical las comunidades de los Ayllus Wilasa, Qamasa, Jupi y Tuku, la primera época corresponde al uso de los instrumentos musicales: *pinkillu*, *moseño* y *tarka*.³⁵ Y en la época seca interpreta el *siku*, y variedad de *qina*. “La danza y la música son ‘utilizadas’, por las comunidades andinas, por poseer ciertas propiedades las que ayudan a mantener cierto “control” sobre los fenómenos climatológicos y así garantizar la producción agrícola y pecuaria” (Villaruel Salgueiro y Mújica Angulo, 2012). Al respecto, se tiene el siguiente relato:

[N]uestro *sikuri* es de 3 de mayo hasta septiembre hasta Virgen del Rosario de ese época también es *qina qina*, ¡está genial! De ahí hasta noviembre es Todos Santos, desde 25 de diciembre hasta marzo empiezo de abril, se toca *moseñada*, *tarkeada*, los *pinkillu* tocan y sale bien, perfectamente. Respetan su tiempo. Ahora, hoy en día, cualquiera alza y *sikuri* en cualquier lugar y época toca nomás. Ese no es bueno. A ver una *moseñada* toca en mes de agosto... no te va salir [ríe]. Pero otros tocan nomás. (Huanca, 2012).

Los criterios musicales y festivos también están relacionados con la observación de los astros. Este conocimiento está orientado a la predicción de los fenómenos climatológicos a fin de conocer mejor el momento para la siembra y el tipo de helada, entre otros. Don José explica: “Las estrellas, ven el *qhutu*,³⁶ cruz, esos estrellas existen [...]. El *qhutu* ven en mes de mayo sale y después puede entrar en septiembre, y en agosto se pierde; es pues para que haya la helada fuerte; porque para hacer *ch'uño* ese sirve eso [...]. La *cruz*, eso es para saber a qué hora tiene que salir, cruz esta por allí entonces ya tienen que viajar a pie, a qué hora entra; eso es para la hora, como el reloj. Muchas

34 Una serie de trabajos muestra dicha relación, al respecto ver (Gutiérrez C. y Gutiérrez, 2009; Gutiérrez C., 1990; Mújica Angulo et al., 2012; Stobart, 1996)

35 El *pinkillu*, *moseño* y *tarka* son instrumentos musicales aerófonos tipo flauta recta con canal de insuflación (boquilla) el cual se interpreta en conjunto en todo el altiplano boliviano.

36 Constelación de las Pléyades.

personas caminan con las estrellas para saber dónde tienen que estar en tal lugar. Para el día usan el sol, las doce ya saben dónde tiene que estar” (Saavedra, 2015). Además, estos momentos de observación de los astros también coincide con las festividades y en varios casos es acompañado por la música que corresponde.³⁷

Para estas personas, la música cobra un sentido más profundo y ritual. Don Irineo afirma que los “*Sicuris* es un baile religioso de suma importancia entre los ayllus dedicado al ritmo de baño [wayño] de plumas (avestruz americano) y al cóndor [actualmente no utilizada], aves que entre ellas simbolizan la tormenta y la fuerza” (Rodas, 2010). Además, “porque la música autóctona siempre tiene su sentimiento, su finalidad; nosotros tenemos nuestro *sikuri* es bailable, ceremonial, terapéutica, o sea, todo autóctono tiene de esa forma. Porque nuestro antepasados eran guerreros. En eso se han basado nuestros abuelos” (Huanca, 2012). Ello trae a discusión sobre la producción o creación musical (Sánchez C., 2001; Stobart, 2010). En la mayoría de los casos la creación musical del *sikuri* es una actividad colectiva, pero surge de la iniciativa de una persona. Cuando algún intérprete tiene una propuesta musical (verso), lo pone en conocimiento del grupo. Este puede ser entendido como un proceso colectivo de validación, prueba y ajuste de la pieza musical (Villarreal Salgueiro y Mújica Angulo, 2012). Además, la creación parte de la inspiración musical que está vinculada no sólo a individuos sino también a los seres de la naturaleza o seres espirituales. Así, los “versos” musicales no poseen un autor identificado sino se utiliza a la comunidad de procedencia como referente musical de origen. Estas formas de relación las explica Sánchez, que plantea: “la creación musical no es un acto de intelecto sino del sub-consciente [...] la propiedad y la autoría no son humanas [...] esta pertenecería al ámbito de lo ‘no humano’” (Sánchez C., 2001:17).

SIKURIADA: CARACTERÍSTICAS Y SIGNIFICADO

Para abordar el significado de esta danza partiremos del análisis de las palabras que lo conforman. Ante todo, el nombre *Sikuri*, viene del aymara *siku* con el cual se conoce a la zampoña (flauta de pan); que hace referencia directa al principal instrumento musical³⁸ del conjun-

37 Tal el caso de la música del *Qina Qina* y el *Choquela* que acompaña varios rituales y observación de los astros en los meses de mayo y junio (Mújica Angulo, 2014).

38 La presencia de este instrumento en la *tropa* (agrupación) se distribuye en una compleja relación de tamaños. Primero que nada, el *siku* se interpreta en dos partes: arka-ira; además, se tienen tres tamaños: *sanka*, *mala* y tiple. Ya que este instrumento no posee canal de insuflación (pico) también es denominado como “q’asa” y es asociado con la propiedad de traer el viento y frío, propicios para la elaboración del *ch’uño* (Zelada Bilbao, 2009). Hay que aclarar que el término *sikuri* es utilizado para denominar a grupos de intérpretes de zampoña en toda la parte andina de habla aymara, no sólo de Bolivia.

to. Y cuando se refieren a “siku-ri” se traduce como “el que interpreta siku”.³⁹ Por tanto, el denominativo de *sikuri* es un término genérico para todos los que interpretan este tipo de instrumento en el contexto aymara. Asimismo, el *sikuri* como danza también hace referencia a la organización de la comunidad. Ya que para su práctica se aglutina prácticamente toda la población, desde mujeres y varones hasta niños y ancianos. Si bien, el varón es quién muestra un rol público protagónico al ejecutar el *siku* y el bombo; la mujer (esposas e hijas), complementa éste al cantar (*wayñuris*) y bailar. El relacionamiento intergeneracional se evidencia en la participación de hasta tres generaciones de la población.

Por otro lado, está el *pasanti*, es la versión aymara de la palabra castellana “pasante”.⁴⁰ En sí, es el nombre de la autoridad festiva local (pareja hombre-mujer) encargadas de organizar la fiesta. Este cargo festivo es rotativo y aquellas personas que lo asumen gozan de gran respeto en la comunidad, ya que habrían cumplido con otros cargos o jefaturas locales. Es por eso que se los denomina “pasado”. Así lo explica, don Alfonso: “Pasanti pasa como una obligación, como un autoridad es pues de antes [...], era antes obligado hacer pasar esa *Pasanti*. Hoy en día se ha perdido porque muchos ya no quieren pasar. Rotativo era obligadamente. Y se pasaba con *sikuri* siempre” (Coronado, 2015). El cargo festivo de *Pasanti* estaba presente en tres principales fiestas: Cruz (3 de mayo), Santiago (25 de julio) y Rosario (3 de octubre), donde el elemento común, además de la interpretación del *Sikuri*, es la indumentaria: “El *Sikuriada* y su vestimenta se manejan principalmente en la fiesta de 3 de mayo; sólo allí toca todo completo con pluma de avestruz, *chaquetilla* y wayeta. En otros acontecimientos del año el “*sikuri* se toca con poncho nomás o camisa” (Quenta, 2015b). Entonces, la *Sikuriada* hace referencia al “*sikuri* completo”, a los músicos que llevan una indumentaria especial, orientada a las tres

39 De hecho, entre los intérpretes de este instrumento en las comunidades se denominan “*siku phusiri*”, que se traduce como “él que sopla la zampoña”, ya que la acción de interpretar este instrumento es mediante el soplido del ejecutante.

40 Al respecto Rasnake añade: «Las palabras usadas para especificar el concepto de «auspiciar» una fiesta y «ocupar» un cargo de *kuraqkuna* son ‘pasar’ en castellano y el préstamo lingüístico *pasay* en quechua. Metafóricamente, el concepto connota la idea de ‘pasar a través de’ los status, ya que los que comienzan un servicio se denominan ‘entrantes’ y, los que terminan, ‘salientes’. (de ahí que, en general, se usa el término de ‘pasantes’ para todos aquellos encargados de preparar y realizar una fiesta a este nivel).” (Rasnake, 1989:159). Asimismo, el “pasar cargo” es un concepto ya empleado en otros contextos: “Pasar un cargo permite afianzar un status social o, incluso, un ascenso. El gasto que implica significa más bien una inversión que una pérdida. El que ha pasado el cargo de prioste consolida su situación de ‘decente’. Este término que tiene connotaciones sociales, económicas y étnicas otorga credibilidad, status y poder.” (Cánepa Koch, 1998:152).

principales fiestas del sector, donde el personaje central es el cargo festivo “*Pasanti*”, el que goza de mayor prestigio. Por tanto el *sikuriada* es la expresión de música y danza de mayor importancia entre las comunidades de esta provincia y en especial de las que componen los cuatro *Ayllus* (Qamasa, Tinkuta, Ayllu Wilasa y Tuku). Como se verá luego, estas fiestas se celebraban en varias comunidades de la región, habiéndose constituido en una de las principales “sedes” en el pueblo de Rosario como “capital” del cantón, ya que allí se reunían los *sikuris* de los cuatro *Ayllus* antiguos.

Desde el punto de vista musical y coreográfico, la organización del *Sikuriada* es un reflejo de la comunidad, aspecto que seguidamente se explica. De forma general esta danza se compone de dos filas de músicos-danzantes: primero, el lado Derecho, fila que simbólicamente representa al varón; segundo, los de la izquierda”, la fila que simbólicamente representa a la mujer.

La coreografía se divide en dos principales partes: una de traslado y la otra estacional. Esta formación de los *sikuris*, muestra que cada fila es no independiente y se intercala *ira* y *arka* sucesivamente.⁴¹ Cada fila tiene su *guía*. Esta formación permite la inclusión de más músicos los cuales se van añadiendo poco a poco. Los músicos-danzantes se clasifican de acuerdo de acuerdo al tamaño de *siku* que interpretan. De forma general tenemos lo siguiente: El *kia* o guía, es el primero de la fila ejecutando el instrumento *sanja*,⁴² luego, el *mala* (instrumento de tamaño mediano), *tiple* (instrumento de menor tamaño), los *thuquri* o bailarines, los *pasanti* y las *autoridades de la comunidad*.

Finalmente, el *sikuri* conlleva una serie definida de piezas musicales que se ejecutan en diferentes momentos del desarrollo de la festividad: 1) *Wayñu*, se empleada en todas las fiestas, pero se interpreta cuando la agrupación está detenida, en la formación circular. 2) *Pasacalle*, utilizado para el traslado del grupo de un lugar a otro. 3) *Q’uchu*, ritmo ritual empleado en situaciones sagradas o de alto grado espiritual (es empleado para rendir saludos a santos o vírgenes en la puerta de la iglesia). 4) *Diana*, corta melodía musical empleada para recibir a alguien importante o para “agradecer” simbólicamente el “cariño” (LDC-DP, 2016).

41 Los roles simbólicos de género también se muestran en los instrumentos musicales. El *siku* se compone de un par: *ira* y *arka* simboliza al hombre y la mujer, respectivamente. (LDC-DP, 2016).

42 “El *Kia* tienen que saber cómo manejar el grupo. Tienen que ser pasivo siempre es el que maneja, tiene que ordenar y también tiene que acatar” (Coronado, 2015).

ZAMPOÑADA, TENSIÓN Y DESCONTEXTUALIZACIÓN

Hasta aquí ya se conoce qué es el *Sikuriada*, su contexto y significados. También se mostró quiénes lo practican y el rol de los cuatro ayllus antiguos. Ahora se pretende conocer ¿cuál el papel de Rosario? ¿Por qué el *sikuri* se ha dado a conocer más con ese nombre? De entrada, hay que recordar que desde la época colonial las comunidades de los ayllus de esta región pertenecían al Cantón Rosario. El centro poblado que aglutinaba administrativamente a todas las comunidades era Rosario, y no sólo eso, también reunía a las comunidades en torno a las fiestas. Al respecto Felipe explica:

Al cantón Rosario antes había pertenecido ocho ayllus, habían tenido. Hay pasábamos antes todos nosotros con *Sikuriada*, todo hay nos hacían llamar desde los Corregidores ¡nos ordenaba pues! hay íbamos a pasar con *Sikuri*. Después con Reforma Agraria [1953] otro ha cambiado. Pumaqala ha sido cantón, después San Ramón ha sido Cantón, Lupiña y Pacali ha sido cantón, Tocota ha sido cantón, ya está. Así es. (Quenta, 2015b).

Como se vio en el primer acápite, antes de la Reforma Agraria, los Ayllus y sus comunidades obedecían lo establecido por los hacendados y la iglesia. Ello explica porque Rosario se conforma como el centro de las actividades locales. Además, se puede ver que existe una relación explícita entre la celebración de las principales festividades (Cruz, Santiago y Rosario) con la localidad de Rosario. Usualmente, se piensa que las fiestas andinas forman parte de procesos de distribución y redistribución (Yampara Huarachi, 1992). Sin embargo, se identificó que la obligación de “pasar fiesta” trae consigo una serie de acciones que bien podría ser una estrategia de sometimiento de los patrones hacia las comunidades indígenas. Ese es el principal argumento de Néstor, para entender la importancia de estas fiestas:

Entonces, como comunario sus cosas ya están creciendo, ya le quieres sobre pasar al patrón. Pero [el patrón] ya no quieres hacerte sobrepasar. Mira... éste se está pasando, ya no me quieren respetar ¿qué vamos a hacer? Dicen todos los estos [los hacendados] que se han reunido; y dicen: ‘a estos campesinos, les hacemos pasar fiesta’. Con esto, ¿cuánto va pasar? Una semana. Ya listo, ¿qué cosa va hacer en ahí? Vamos a hacer tomar. Con eso va gastar su plata, sus comidas, sus ganados, su cosecha, todo, Entonces a la gente va hacer comer todo, eso es una semana. De esa forma se ha empezado todo [...]. A los

campesinos han dicho: ‘ahora vas a ser *respetado*⁴³ ¿ya? ya no te vamos a reñir, porque vos has pasado tanto, has cumplido esa misión’. O sea es como ir al cuartel, si has ido ya eres ciudadano [...]. Igualito era. Por eso pasaban, ahora para tener más respeto, todo el mundo pasaba. Por eso en sus tres forma, para pobre, para rico, para más, así era las fiestas (Huanca, 2012).

Con todo ello, podríamos decir que las festividades eran una estrategia de sometimiento festivo, que, bajo el pretexto del acceso al prestigio, limitaba posibles procesos de enriquecimiento indígena. Por otro lado, en torno a Rosario se generó otro proceso simultáneo: por una parte, crea una centralidad festiva al aglutinar tres fiestas en un solo espacio; y por otro, un primer momento de descontextualización musical, al desvincularlas de su espacio comunitario y reubicarlas en el centro poblado. Sobre las tres festividades y sus actores, se señala: “En Virgen del Rosario⁴⁴ era para *Qamiris*, una semana enterito siempre era. En una semana cuanto vas a hacer chicha: sesenta o setenta tinajas hacíamos, de maíz, para Rosario. Ese es un diner. [...] Los que están manteniendo la fiesta es San Javier, San Ramón, San Pablo [...]” (Huanca, 2012). El segundo caso es la fiesta de “Fiesta de la Cruz, ¿quiénes pasaban? Pasaban gente ricachona, que tienen, *qamiris* ¿no ve? Esos pasaban, pero con este uniforme Chaquetilla; en ese la melodía también es diferente. Ya con el tiempo este fiesta ya era llamado zamponada” (Huanca, 2012). Y el tercero la fiesta del “Santiago, ¿quiénes pasaban? Los pobres, bajos de recursos económicos, pero con la misma vestimenta.” (Huanca, 2012).

Sin embargo, este proceso habría sido de alguna forma beneficioso para la comunidad de San Martín, ya que los “obligó” a especializarse en la interpretación del *siku*: “desde antes tocábamos mejor porque estaban al mando de los *mistis*, de los patrones. Entonces para el patrón hay que ser lo máximo. Por eso nuestra comunidad era originario siempre y por eso le ganaba en cualquier fiesta. Para cada fiesta con

43 “Por lo tanto, concibo a la fiesta como el tiempo y el espacio rituales en los cuales este poder es distribuido y a las danzas como los medios por los cuales los individuos y grupos acceden a él. La dinámica competitiva establece distintos grados de cercanía a la virgen y, por lo tanto, el acceso al poder ritual sucede de manera diferenciada. El control del poder ritual por parte de las comparsas, que da lugar a una jerarquía ritual, se traduce en prestigio social que es transferido a los danzantes de cada comparsa. La danza significa también movilidad social y, en ese sentido, aluden al motivo de la transformación. Por lo tanto, distingo dos niveles que interactúan; uno estático, que es la naturaleza colectiva de las danzas; y otro dinámico, que es su capacidad de transformación y de jerarquización.” (Cánepa Koch, 1998:100)

44 También se tiene el dato de que quiénes pasaban eran “los más ricachones originarios, pero con la diferencia de que tienen pluma de suri” (Huanca, 2012).

una música entraba, así. Pero para eso día y noche tenían que practicar. Ahora, ya no hay patronos, nos hemos independizado; los ex patronos, eso estaban encargados de mi *sikuri*. Ellos han llevado a toda parte. No es que mis *sikuris* querían ir a la ciudad, al aniversario, festivales, a España. No era porque nuestro *sikuri* quería, sino porque ellos querían, ellos llevaban. Nuestro *sikuri* no cobraba plata, comida nomás y punto. Traslado y listo.” (Huanca, 2012).

Estas citas muestran cómo el *Sikuriada* fue saliendo de las fiestas de cada comunidad para centralizarse en la localidad de Rosario, y luego a la ciudad. Primero, ya que en Rosario se presentaron las tres fiestas de mayor importancia para las comunidades, exigiendo la mejor calidad interpretativa, moviendo una gran cantidad de gente, recursos económicos y productivos. Este proceso pudo haber influido para que el *Sikuriada* fuera conocido como “Zampoñada”, al ser este espacio la “capital” del cantón, especialmente en el tema religioso, y la sede festiva y obligatoria para todos los ayllus. Segundo, se tiene el rol de los ex patronos (*vecinos*⁴⁵) que habitan en el pueblo de Rosario, como promotores de la difusión de la sikuriada fuera del cantón y la provincia. Ellos propiciaron la participación de los *sikuris* de San Martín en diferentes eventos y festivales en la ciudad de Oruro,⁴⁶ e incluso en el exterior del país.

Por otro lado, este largo proceso de imposiciones, tampoco no fue recibido de manera pasiva. Las comunidades presentaron resistencia a dichos procesos. Así lo recuerda don Simón: “Más bien con los patronos habíamos tenido pelea antes. La fiesta de Candelaria que tenemos ahora en el 6 de agosto, con batalla hemos ganado, dice [...]. Han peleado y justamente a malas han sacado dice, han quemado sus iglesias” (Quenta, 2015b). El evento de la quema de la iglesia se conforma en una huella de importancia para estas personas, ya que desde dicha festividad se produce una ruptura entre los ayllus: “Corregidores, nos

45 En el periodo colonial, la categoría de vecino estaba vinculado con los residentes españoles. Esta era una categoría social que asignaba derechos y deberes frente al Estado Colonial (Rasnake, 1989; cf. Stobart, 2006). Conforman el grupo social que habita el “centro poblado”, es decir, el Pueblo; “se identifican con las clases urbanas bolivianas y las élites nacionales, y se perciben diferentes a la gran población de agricultores y campesinos entre los que viven inmersos. [...] reconocen que las relaciones con los vecinos están llenas de tensión y ambigüedades [...]. Se basan tales vínculos en la residencia en común, en el compadrazgo y en la coerción implícita [...]. Por lo tanto, los vecinos representan la penetración, tanto simbólica como real, de la sociedad nacional mayor en el campo, en el corazón de los ayllus.” (Rasnake, 1989:44)

46 En el departamento de Oruro un espacio que permitió la participación de estas agrupaciones es el Anata Andino y algunos casos el Carnaval de Oruro. Por otro lado, para el caso del departamento de La Paz, Zelada y Paredes describen uno de los primeros eventos en la ciudad de La Paz donde asistieron varios grupos de música autóctona (Paredes, 1970; Zelada Bilbao, 2009).

ordenaba pues, hay íbamos a pasar fiesta con *Sikuriada*, pero después con Reforma Agraria otro ha cambiado” (Quenta, 2015b). Efectivamente, dicho evento parece ocurrir inmediatamente después de la reforma agraria y puede ser parte de los procesos de fragmentación a los cuales ya nos referimos, y que implica un debilitamiento de la centralidad festiva del Rosario. Que posteriormente se reparte en cada ayllu a partir del proceso de cantonización; con lo cual cada nuevo cantón también organiza su propia fiesta con *Sikuriada*.

El segundo momento para la descontextualización del *Sikuriada* inicia con la migración rural a las ciudades.⁴⁷ Dicho movimiento poblacional hizo que las comunidades reduzcan su número y con ello se debiliten varias actividades locales. Entre ellas, las fiestas fueron las primeras en recibir el impacto, puesto que “ya se ha desaparecido, ya no tocan tanto, San Ramón, San Javier, ya no participan; ahorita San Martín es el más conocido, que sigue manteniendo” (Huanca, 2012). Sin embargo, varias músicas y danzas aún se practicaban en fiestas pequeñas, pero de forma reducida y local.

Otro efecto producto de la migración es la proliferación de festivales o concursos de música y danza autóctona organizados por los municipios. Un caso emblemático para La Paz es el festival de Compi Tauca, que desde la década de 1970 a convocado a varias comunidades de la región (Sigl y Mendoza Salazar, 2012). Hoy en día, prácticamente cada municipio organiza eventos de esta índole. Si bien estas acciones aparentan el fomento y valoración de la música-danza autóctona —ya

47 Rafael Archondo (1991) presenta un panorama sobre el desplazamiento campo-ciudad de personas aymarás que denomina “flujos migratorios”. Identifica cuatro de ellos. El primer flujo habría acaecido luego de “la guerra del Chaco y durante la recesión minera” a mediados de los años '30, debido al retorno de los excombatientes y la crisis de la Economía Mundial. El segundo momento habría sido en los años '40 por las “transformaciones urbanísticas” y el requerimiento de mano de obra en construcción, especialmente en La Paz. En la tercera ola, luego de la consolidación de la Reforma Agraria a fines de los años '50, fueron la población de *vecinos* y ex hacendados quienes migraron. La cuarta ola, en la década del '70 se suma a “la minifundización del suelo y la depauperación económica del agro” y el “auge de las construcciones urbanas, el desarrollo de algunas industrias, y el incremento de unidades de transporte colectivo” (Archondo, 1991:44–45). A estos cuatro momentos se añadiría un quinto flujo, planteado por Albó (1987). Este identifica un movimiento poblacional mixto: de los residentes al campo y de los *comunarios* a las ciudades. Dos fueron las razones: la primera, por la crisis económica de las décadas del '70 al '80 que empuja a los residentes a retornar a su comunidad; y la segunda, por las catástrofes climáticas que contemplaron sequías desde 1982-1983 y tres años después constantes lluvias que provocaron inundaciones que empujó la salida hacia la ciudad (Albó y Greaves y Sandoval, 1987:3–4). Archondo afirma que producto de todo este movimiento la población se concentró en el “eje troncal La Paz-Cochabamba-Santa Cruz”; y que los migrantes habrían provenido principalmente de las provincias Ingavi, Omasuyos, Los Andes, Camacho y Pacajes; concentrándose la mayoría en la ciudad de El Alto (Archondo, 1991:43–45).

que se involucra a las personas de las comunidades— también promueven una transformación de su sentido: generalmente no siguen los ciclos rituales-productivos-climatológicos, promueven la rivalidad intercomunitaria y con ello una jerarquización musical, se enfocan únicamente en la promoción turística y el mercado. En suma, estas acciones son parte de los procesos de descontextualización musical.

La migración también ha generado el surgimiento de nuevas formas de identidad, tal es el caso del *residente*. Se denomina así a las personas nacidas en una comunidad rural pero que radica en la ciudad y que aún no ha roto vínculo con su comunidad. Los residentes tienen un papel fundamental en los procesos de transformación tanto en la comunidad como en la ciudad; ya que se convierte en un vínculo entre ambos espacios. Se puede identificar al menos dos características de estos personajes: por un lado, el residente en la comunidad se convierte en un agente de transformación local, ya que por su contacto con elementos culturales exógenos (urbanos) tiende a insertar criterios festivos o musicales urbanos en su comunidad. Por otro lado, el residente en la ciudad, asume un rol de “embajador”, ya que se reagrupa y replica sus festividades y costumbres, pero en la ciudad. Varios residentes con los que se habló reflexionan que inicialmente no tenían interés en su propia cultural, pero que al salir de su comunidad fueron valorando lo propio.⁴⁸ Este proceso migratorio de la música del *sikuri* a las ciudades, ha hecho que la identidad de la agrupación urbana tome como referencia geográfica al Rosario, por la centralidad festiva que tenía años anteriores. Varios de ellos se fueron auto identificando como “zampoñada” y en algunos casos añadiéndole el nombre de su propia comunidad (por ejemplo “Zampoñana del Rosario”).

Si bien lo descrito hace referencia a la participación de las personas de la propia comunidad (o también residentes o vecinos), pero en diferentes contextos, también se tienen los procesos de re-interpretación musical. Esto hace referencia a que el *sikuri* ya no es interpretado por los propios comunarios sino por personas de otras regiones. Este fenómeno generalmente se da en contextos urbanos, donde simpatizantes, aficionados o músicos “profesionales” re-interpretan al *sikuri*, en cuyo proceso consolidaron el nombre de “Zampoñada”. El caso de los estudiantes universitarios es un elemento de importancia, también las festividades de los barrios de la ciudad, y ocasionalmente eventos sociales (matrimonios, bautizos, eventos culturales).

48 Un estudio que aborda la participación de estos grupos de música donde participan los jóvenes es Archondo (2000), quien muestra el movimiento de que hacen los jóvenes, hijos de residentes, entre diferentes tipos prácticas musicales, en este caso entre la *sikuriada* y el rock.

De este tránsito se subraya la importancia de dos fenómenos: la producción discográfica de los *sikuris*, y la contratación de estas agrupaciones para eventos urbanos. Sobre el primer punto, se consultó a David Ali quien en su colección de música tiene registrado al menos 16 discos vinil con grabaciones de sikuris del sector con varias comunidades (San Martín, San Alberto, San Javier). Las grabaciones más antiguas corresponden a las décadas de 1950 y 1960 en los sellos “Lira” y “Lauro” (LDC-DP, 2016). Sin embargo, existen grabaciones independientes (aficionados⁴⁹) que circulan en el mercado de la década de 1990 en adelante. Al respecto, Néstor señala: “estamos grabando, con [sello] Andino estoy. Esto hemos grabado en 1997 y no lo ha sacado, ahora estamos sacando” (Huanca, 2012). El segundo punto, referido a los contratos, hace referencia a otra forma de relación de los músicos con los organizadores de la fiesta; ya que interviene una relación contractual y de servicio, en lugar de una relación de reciprocidad, y de parentesco. Los contratos también son entendidos como una motivación para la interpretación del *sikuri* en la ciudad: “ahí se practica, si no tienen contrato ahí está, hay se ha quedado [...]. Pero nosotros salimos seguido y vamos a presentarnos, a la casa de la cultura, grabamos” (Huanca, 2012).

Sin embargo, tanto la realización de grabaciones como de los contratos también son entendidos como una forma de enriquecimiento en base a la cultura y descontextualización: “Pero ahora, los demás, estos Kutilis, van por dinero nomas [...]. Entran en Carnaval con su siku, que no viene al caso [...]” (Huanca, 2012). Y en este proceso, lamentablemente, algunas personas se apropiaron de la autoría⁵⁰ de estas piezas musicales, afirmando ser creadores intelectuales de estas músicas y registrándolas a nombre propio sin respetar el origen rural y colectivo de esta forma musical.

49 “Otro aspecto de difusión que acompaña, en importancia, a estos movimientos migratorios es la denominada ‘piratería musical’. Actividad que en los últimos años ha incrementado ya que se convirtió en una forma económica alternativa de subsistencia. Debido al acceso mayoritario de tecnología, se abrió la posibilidad de que una persona no sólo pueda realizar copias, a gran escala, de música en CDs (en diferentes formatos) e incluso de realizar un estudio de música casero. Este elemento ayudó en gran manera a la difusión de músicas tradicionales que no eran precisamente comerciales o que eran preferidos por grupos sociales específicos y diferentes a los urbanos (como es el caso de los wayños en charango de Norte Potosí Chuquisaca y Cochabamba).” (Villarreal Salgueiro y Mújica Angulo, 2012).

50 “Pasando por alto el denominado derecho de autor que, por supuesto, no se consideraba aplicable a las poblaciones rurales. Si bien es cierto que la ley de derechos de autor (Ley 1322), mediante la creación de las denominadas Sociedades de gestión Colectiva, de alguna forma han hecho prevalecer los derechos de los músicos y autores; en su proceder enfocaron sus acciones y preocupación en los músicos urbanos y no así de los rurales” (Villarreal Salgueiro y Mújica Angulo, 2012).

PCI Y PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN DE LA MÚSICA-DANZA

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) además de plantear una forma de abordar la cultura de los Otros (como política pública de salvaguardia), es asumida de diversas maneras por las comunidades “portadoras”, lo que confirma/contradice los planteamientos “oficiales”. Todo ello genera tensiones de sentido y acción tanto en las comunidades como en el Estado y sus relaciones.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, RECONOCIMIENTO Y DESIGUALDAD

Un elemento fundamental para la UNESCO es la concepción de pobreza vinculada con la diversidad cultural: “la pobreza no consiste solamente en la denegación al acceso a servicios sociales básicos [...] sino que posee dimensiones culturales” que se pasan por alto (Kutukdjian y Corbett, 2010:210). Es así que se habla de “necesidades humanas insatisfechas”, es decir que la pobreza es la denegación de derechos humanos básicos (ver Sen, 1999).⁵¹ Por tanto, el Patrimonio Cultural, en especial, Inmaterial, son una clara forma de generación de políticas de la diferencia o derechos especiales, en el sentido “positivo” que plantea Young (1989): “la inclusión y la participación de cada persona en las instituciones sociales y políticas requiere a veces la articulación de *derechos especiales* orientados a atender las diferencias de grupo con el objeto de socavar la opresión y la desventaja” (Young, 1989:1). Esta visión se complementa con Taylor y el concepto de *reconocimiento* que se refiere a una necesidad o demanda, la cual es formulada “en nombre de los grupos minoritarios o ‘subalternos’, en algunas formas de feminismo y en lo que hoy se denomina la política del ‘multiculturalismo.’” (Taylor, 1993:43) Así, recordando a Young, nuevamente se muestra la importancia de la diferencia, sectores sociales compuestos por grupos indígenas, minoritarios o subalternos, la ciudadanía diferenciada, la cual además debe ser reconocida y articulada a las políticas.

Todo lo mencionado se vincula claramente con el debate de la desigualdad. Ya que también se habla de la necesidad de distinguir y conceptualizar el bienestar (PNUD, 2010:51; Tilly, 2000:20). En el primer caso le PNUD habla de la conceptualización del bienestar, los cuales, en la “mayoría de los casos convergen en un ideal de desarrollo que trasciende el ámbito material, pero sobre todo coinciden en

51 Esta idea de diversidad de perspectivas sobre la pobreza es complementada por Amartya Sen (1999) que afirma que “sería erróneo, y tendría consecuencias desastrosas, pensar que la pobreza no es más que la falta de recursos materiales. En último término, lo que se niega a los pobres es su realización humana. Se les niega la libertad de realizarse, como seres humanos y como ciudadanos; se les bloquea su acceso a opciones y su libertad de elección. [...] Para que puedan elegir sus propios métodos de salir de la pobreza y emprender el camino hacia el desarrollo.” (Sen 1999, citado en Kutukdjian y Corbett, 2010:213)

los principios de igualdad, respeto y reconocimiento social. Por ello, el horizonte en ambos casos requiere, entre otros aspectos, romper el ciclo de reproducción de las desigualdades garantizando el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a lo largo del ciclo de vida, pues los derechos que no son ejercidos por toda la población se convierten en privilegios. El horizonte normativo que vislumbra el Informe es una sociedad intercultural con igualdad” (PNUD, 2010:51). De esta forma en un intento de integrar las diferentes visiones se abordan las desigualdades materiales y simbólicas como el centro de nuestro análisis (PNUD, 2010:59).

“PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO”. LA DECLARATORIA DE LA SIKURIADA COMO PATRIMONIO CULTURAL

Según la documentación existente en el Ministerio de Culturas, se identificó que la “*Sikuriada*” de las comunidades de San Martín y Kutili (pertenecientes a Rosario), propuso ser declarada como patrimonio cultural de Bolivia ya en el 2009. Dicha solicitud fue rechazada,⁵² ya que se pretendía reconocer sólo a dos comunidades como las únicas intérpretes de este género musical. Por lo cual, dichas autoridades habrían recomendado en primera instancia el involucramiento de todas las comunidades practicantes de esta forma musical, y lograr su declaratoria previa como patrimonio de nivel departamental. Luego, a inicios de 2013, la comunidad de San Martín inicia, por su cuenta, la solicitud para su declaratoria como patrimonio cultural en la Gobernación del departamento de Oruro. Dicho proceso también es observado, pero luego se le suma el poblado del Rosario (correspondiente también al municipio de Huancapata). Ambas instancias, luego de mucha presión en el Consejo departamental logran ingresar el trámite para su análisis, Sin embargo, producto de un largo debate, en enero de 2014 se rechaza la solicitud ya que las restantes comunidades muestran su desacuerdo al proyecto. El principal artículo del proyecto de ley indica: “ARTÍCULO 1.- Declarar patrimonio cultural intangible, origen y capital de la música y danza autóctona de la sikuriada y zamponada a las localidades de El Rosario y San Martín.”

Las acciones de rechazo de las otras comunidades implicaron la remisión de Votos Resolutivos y Acta de reuniones, a diferentes instituciones, principalmente del Estado. Incluso amenazaron con “bloquear el camino y esperar con dinamita, a los concejales” (Quenta, 2015b). Por lo cual, se tuvieron que realizar reuniones preliminares con auto-

⁵² Conversación realizada con personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural (LDC-DP, 2016).

ridades culturales a fin de apaciguar las amenazas.⁵³ De las notas de denuncia recopiladas,⁵⁴ se cita la siguiente, ya que reúne varios de los criterios centrales:

“[H]emos tenido conocimiento por intermedio de terceras personas sobre el proyecto de Ley departamental, que fue sancionada de manera unilateral y clandestina, afectando el fondo y el principio de la cultura de los vientos como es los Sikuriadas de Wilasa, de los cinco Ayllus Originarios, es así que en la actualidad fuimos marginados, excluidos, discriminados, por intereses mezquinos de una pequeña comunidad denominada San Martín, que pertenece a la jurisdicción de Huancapata [...]. Extrañamente ese proyecto de Ley no ha tomado en cuenta la jurisdicción de esta cultura, llanamente declarando patrimonio cultural inmaterial del Departamento de Oruro a una pequeña Comunidad como es San Martín, donde las costumbres internas ya habían desaparecido hace más de una década, como es de los pasantes de sikuris [...]. Solicitamos frenar dicha la Ley departamental [...]. Con peticiones que complementamos: 1. Actualmente la Comunidad San Martín ya no es parte de los Wilasa, por lo que pedimos deben anular [...]. 2. De consensuarse la declaratoria de esta Ley, pedimos se haga [evento] público firmándose en el catón San Ramón, de los cinco Ayllus. 3. Pedir la Anulación del Registro de propiedad Intelectual, ya que la comunidad San Martín no es propietario de las sikuriadas, si bien interpretan no son dueños.”⁵⁵

Estos aspectos coinciden con lo recopilado en las entrevistas, donde se identificaron varios puntos: Primero, “que no están mencionando a todas las comunidades que interpretan *Sikuriada*”; segundo, “que no se incluya al poblado del Rosario en la declaratoria” (Quenta, 2015a). Además, observan que en el proceso de declaratoria no se ha consultado

53 Don Felipe explica lo sucedido en una de esas reuniones: “Hemos hecho un documento todos los dirigentes. Y hemos entrado, de cada comunidad cuatro personas nomás, no nos dejaban entrar a todos. San Javier, San Ramón, San Ignacio, San Pablo, y San Alberto [...]. Los de San Martín habían estado unas quince personas, así nomás también. Hemos tenido una audiencia, estaban un doctor y un técnico” (Quenta, 2015b).

54 Dichas notas fueron remitidas principalmente por comunidades del municipio de Totorani, y algunas otras de Pumaqala e incluso del Municipio de Huancapata.

55 Documento: Nota con la referencia: “Denuncia actos de usurpación, marginación y otros, efectuados por la Asamblea Departamental de La Paz, a través del Proyecto de Ley”, firmada por las autoridades originarias de las comunidades San Ramón, San Ignacio, San Alberto, San Javier, y San Pablo, como parte del Ayllu Originario Wilasa.

con las comunidades involucradas, que la gobernación no ha realizado una verificación técnica, ni un estudio histórico⁵⁶ que respalde el proyecto de Ley. Por lo cual, planteaban la modificación del artículo del proyecto de Ley, y al no obtener respuesta solicitaron audiencia con el Gobernador departamental, sin éxito alguno. De tal forma que, incluso realizaron una marcha de protesta por el centro de la ciudad.⁵⁷

Luego, de forma tentativa, se propusieron algunas posibles soluciones: la modificación del proyecto de Ley, o su aprobación para luego realizar ajustes en la reglamentación a la Ley. Sin embargo, a la fecha aún no se realizado ninguna acción al respecto y las comunidades están a la espera de una convocatoria a reuniones por parte de la Gobernación.

LA POLIFONÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL: DIFERENCIAS CATEGORIALES DEL PATRIMONIO CULTURAL

A diferencia de los criterios conservadores sobre el patrimonio cultural, lo acontecido con el proceso de Declaratoria de la *Sikuriada* provocó reacciones adversas en los actores, “portadores” o comunidades. Lo cual muestra, que las declaratorias de patrimonio cultural, llegan a cobrar diferentes significados a nivel local, lo que en términos de Tilly (2000:21) viene a referirse las *diferencias categoriales*. En este acápite se señalarán algunas.

Ante todo, el patrimonio cultural se entiende como una forma de reconocimiento y valoración de lo diferente. Desde este foco se pretende mostrar la valía que posee en elemento cultural por sobre otros. Por ello, es necesario analizar los criterios bajo los cuales se realiza esta acción. Hay que reconocer que la valoración implica un proceso de selección de ciertos atributos que son asumidos como relevantes para el grupo en un tiempo y espacio específico. Esta valoración, al ser subjetiva puede cambiar en el tiempo. Por ejemplo, un integrante de San Martín explica por qué este reconocimiento tiene que enfocarse únicamente en su comunidad: “[N]o estoy de acuerdo que se puede declarar a toda la provincia, porque todos no son. Ahorita estos se están beneficiando: [la comunidad de] Kutili también, y los de Rosario, tienen 25 años de vida nomás. Pero no se puede a todos... A mi parecer, los

56 Don Santiago del municipio de Pumaqala señala: “yo he empezado con la verdad histórica y lo que actualmente se maneja. Solo que estos, los de San Martín han ocultado pues, todo. Ni siquiera del cuadrante respeta, como si ellos los únicos pueden ser. Y versiones manejan cosas que no son. Caen en la falsedad histórica, grave” (Mamani, 2015).

57 “Desde la plaza hemos venido, con sus ponchos, con sus sikus y como una marcha hemos entrado. Ya no nos han dejado también entrar al Gobernador, hay querían ir ‘él ha firmado, va promulgar la ley, diciendo’. Ha venido un asambleísta y con él hemos hecho un documento para que se concilie, con su puño ha hecho” (Quenta, 2015a).

que se han sacrificado son los que han venido a los festivales, entradas. Ellos tienen su mérito, el Estado puede darle un mérito, eso es lo que queremos. Pero en conjunto no creo que sea bien” (Huanca, 2012).

Sin embargo, no todos los reconocimientos son “buenos” o “positivos”. Taylor ya toma en cuenta que el reconocimiento puede darse, pero también de forma falseada: el *falso reconocimiento*. Ello no sólo implica la presencia discursiva y retórica del reconocimiento de la ciudadanía diferenciada sino “una forma de opresión que aprisiona a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido” (Taylor, 1993:44); al mismo tiempo, ello puede causar “un mutilador odio” a su propia identidad. Por lo cual, el reconocimiento debido no sólo es una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital.” (Taylor, 1993:45). Como ya se mostró que tanto la ciudadanía como el reconocimiento hacen referencia a criterios de identidad y cultura, por ello, antes de pasar a señalar estos conceptos, se cita a Taylor que expresa esta relación: “[...] que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a menudo, también, por el *falso* reconocimiento de otros [...] cuando la gente o la sociedad que lo rodea le muestra una imagen limitada, degradada o despreciable de sí mismo.” (Taylor, 1993:43–44)

Lo mencionado muestra varias cualidades del concepto de patrimonio como reconocimiento para el entrevistado: la antigüedad, su dedicación-sacrificio, su especialidad, su trayectoria, todo ello conformaría el “mérito”. Es decir, que para ser declarados como patrimonio cultural el grupo o comunidad debe demostrar que es digno de recibir dicho mérito. Ya que otras agrupaciones o comunidades pretenden beneficiarse de ese reconocimiento. Luego, don Néstor aclara: “No es por envidia, ellos tienen derecho a tocar también, pero lo que nos llama la atención, cuando no dicen ‘nosotros hemos aprendido de ellos...’, por eso ahora lo tenemos y nos colocamos’. Así franco, eso es lo que nosotros, la comunidad, quieren [...]” (Huanca, 2012). Con esta cita se amplía el sentido de reconocimiento, pues no sólo se refiere al “mérito” sino también a *reconocer* al Otro.

El siguiente criterio referido al patrimonio se relaciona con una forma de diferenciación, es decir una forma de distinguir a un grupo/comunidad de otro. Algunos ejemplos: “Hablando históricamente, los de Kutili eran hacendados, no participaban; los de Casani, también es hacendado, esos hacendados *esclavos* eran. Desde el 52 para adelante recién saben [tocar], recién deben tener unos 15 años el sikuriada” (Huanca, 2012). En el mismo sentido don Felipe dice: “Tocan también [en Pumaqala] pero su historia no te han debido contar. Todo casi tocan. Pero no siempre como Wilasa” (Quenta, 2015b). “Los tíos de Tocota no sabían, ellos siempre se han sentido aprendices” (Mamani, 2015).

“[L]os Casani, no tocan. Claro son nuestros paisanos también, pero tampoco le decimos esto estás fallando” (Huanca, 2012). En todos estos casos hay formas de internas de diferenciación (Tilly, 2000): primero, a nivel social (esclavo-no esclavo, hacendado-comunario); y segundo a nivel de formación (aprendiz-maestro). Sin embargo, estas diferenciaciones pueden convertirse como una forma de discriminación: “Antes entre las comunidades como uno nomás andábamos, no había este discriminación. Nos juntábamos a tocar. Incluso un solo sindicato éramos: San Martín-San Alberto. Pero el sindicalismo también nos ha dividido, sindicato todos querían tener. Ahora mismo siguen partiéndose las comunidades, hasta los cantones se han dividido. Hasta los hermanos se pelean” (Condorena, 2015)

Uno de los criterios centrales que fundamentan el reconocimiento y la diferenciación entre *sikuriadas*, es el *origen*. Es decir, que patrimonio cultural también denota la definición del origen de una expresión, de su procedencia. Siguiendo lo señalado en el primer acápite, estas citas hacen referencia al origen del *sikuri* en el antiguo Ayllu Wilasa y su relación con el Ayllu Qamasa: “Ayllu Wilasa es la verdad. Los tres ayllus son San Martín, San Ramón, San Javier, a ese comprende [...]; ahorita San Martín es el más conocido, en todo el mundo. Ahora los tres han venido, esos son uno sólo, ahora ya son comunidades. Cinco comunidades eran, hay es el origen del sikuriada” (Huanca, 2012). Además de ello, se tiene otro concepto relacionado al de origen: *cuna*. Este término, además de origen hace referencia a “principio de algo”, con lo cual se remarca la procedencia. Por ejemplo: “Si hubiera dicho que *sikuris* de *cuna* Ayllu Wilasa Originario, si habría dicho entonces: San Javier, San Ramón, San Martín, San Alberto, San Ignacio... conforme hubiéramos quedado, no habría problema nada, tranquilo hubiéramos quedado” (Quenta, 2015b). De tal forma que “[e]s cuna pues, los cuatro es cuna, pero hay no ve... Qamasa es primer sikuri, digas lo que sea, después los Tinkuta nace todavía, después los Wilasa, y los Tuku” (Mamani, 2015). Ambas citas muestran el uso del concepto de *cuna* pero aplicado a interés particular, en el primer caso para fundamentar el origen de la sikuriada en el Ayllu Wilasa; y el segundo, se amplía el ámbito territorial a todo el Ayllu Qamasa y plantea una sucesión jerárquica de la aparición de las comunidades. Lo cual toma como eje la discusión del territorio y sus procesos de transformación presentes en la memoria de los que habitan estas comunidades en la actualidad. Otro argumento plantado para determinar este origen/cuna/principio se basa en el ámbito histórico: “Claro ellos como Ayllu Wilasa tienen su propio origen del sikuri, de cómo se ha iniciado. Pero ellos, con eso quieren decir que es la historia oficial; sin embargo, Qamasa también tiene otra historia que es más primigenio que ellos [...]. Porque yo he empezado con la

verdad histórica y lo que actualmente se maneja. Solo que esto los Wila-lasa han ocultado pues, todo. Y versiones manejan cosas que no son. Caen en la falsedad histórica grave” (Mamani, 2015). De esta forma, la disciplina histórica se consolida como otra base argumentativa de estos discursos, ya que representa la autoridad científica (“verdad histórica”), que al mismo tiempo es cuestionada, ya reflexionan sobre la existencia de “otras historias” oculta o ignorada.

Con todo, ello llegamos a la siguiente cita: “Todo esto del sikuriada son de nosotros, entonces, nadie más puede usar” (Huanca, 2012). De donde se desprenden varios criterios referidos a la propiedad y la apropiación. Felipe afirma sobre la declaratoria: “Muy mal hecho pues, como van a hacer así. Ahora se han olvidado estos hermanos y nos quieren quitar las vestimentas, sus culturas, no es dable. Por eso se han calentado [las comunidades]. Cómo ellos nomás, de esta partecita se van a beneficiarse pues” (Quenta, 2015a). O también, en el supuesto caso de llegar a una declaratoria nacional: “Si podrían promulgar del Senado ya está, nos podrían notificar nomás, que eso era de ellos, esos ropas nos podría quitar, porque pueden tener su documento. A nosotros nomas nos podría hacer llevar con la policía... así son ellos, yo conozco.” (Quenta, 2015b). Estas formas de reacción, se relacionan también con el proceso en el cual lamentablemente, algunas personas, en las ciudades, se apropiaron de estas piezas musicales, afirmando ser autores intelectuales (individuales) de estas músicas.⁵⁸

Una manera de entender estos discursos es a partir del entendido de la *sikuriada* como “rasgo diacrítico”. Es decir, la *sikuriada* como un hito referencial de la construcción de la identidad de estas comunidades. Así lo afirma Guerrero Arias:

La construcción de la identidad individual o colectiva es un acto de selección de elementos referenciales (hitos) o de rasgos diacríticos a los que se les asigna un sentido de propiedad, al que grupos o individuos se adscriben y a partir de los que pueden decir ‘yo soy, o nosotros somos esto’. Cada grupo selecciona aquello que considera propio o ajeno, de acuerdo al momento, a las condiciones políticas y económicas particulares de su proceso histórico, acorde a las condiciones de ocupación del territorio socio cultural de los grupos con los cuales entra en interrelación o conflicto. (2002:104)

58 Si bien es cierto que la Ley de Derechos de Autor (Ley 1322), mediante la creación de las denominadas Sociedades de Gestión Colectiva, de alguna forma han hecho prevalecer los derechos de los músicos y autores; en su proceder enfocaron sus acciones y preocupación en los músicos urbanos y no así de los rurales (Bigenho et al., 2015).

Así, la *sikuriada* se conforma en un factor de importancia “para dirimir la confrontación de nuestras diferencias con los otros” (Guerrero Arias, 2002:104) ya que es un elemento diferenciador que muestran la pertenencia y diferencia respecto de un grupo u otro. Desde otra perspectiva, también se tiene el rol del Estado en estos procesos de “apropiación”, así lo expresa Sánchez, la “música indígena”, a partir de la conformación del Estado-nación en 1952 y hasta la fecha, es percibida como un “elemento importante de la ‘identidad cultural’ de Bolivia” (2001:19); afirmando así, que fue el Estado quien, en cierta forma, “se apropió” de la autoría de esas músicas al concebidas como “anónimas”, en una primera instancia, y luego como “tesoro cultural de la nación”.

SIKURIADA, PATRIMONIALIZACIÓN Y DESIGUALDAD. A MANERA DE CONCLUSIÓN.

El objetivo de esta investigación fue establecer los elementos y criterios implicados en el proceso de *patrimonialización* de la música y danza de la *sikuriada* y la generación de desigualdad, tanto de las comunidades de estas provincias orureñas como de la política cultural boliviana. En ese marco se ha identificado tres aspectos centrales para incluir en el debate de los procesos de *patrimonialización*:

Primero, el rol de los procesos de *territorialización* de esta región, las cuales son condición fundamental para entender las disputas intercomunitarias y con el Estado. Este aspecto cobró mayor importancia en el proceso de investigación, ya que las comunidades indígenas se encuentran en una constante búsqueda de autodeterminación y lucha por su territorio ante diversas situaciones. Estas comunidades fueron objeto de un largo proceso histórico de fragmentación territorial o *des-territorialización*. Desde la época de la colonia, pasando por las visitas, la “cantonización”, la reforma agraria de 1953, la municipalización, hasta el actual proceso autonómico. Al parecer, para las comunidades del Ayllu Wilasa, este proceso ha marcado también su identidad local, ya que las nuevas generaciones de las comunidades se auto reconocen como parte de los actuales municipios; y por otro lado, otras buscan recobrar su identidad territorial “ancestral” (Ayllu Wilasa). Todo ello, muestra la importancia del agenciamiento de estas comunidades como generadoras de los procesos de “reterritorialización” (Herner, 2009) planteando formas de fragmentación de lo impuesto (históricamente dado) y la búsqueda de rearticulación del territorio “propio”, en base a criterios culturales locales, como es la *sikuriada*.

Segundo, se identificó que las comunidades aymaras forman parte y resisten los procesos de modernidad, lo cual se evidencia en la producción musical y de danza. Estas expresiones se han transformado con el tiempo: moviéndose de un contexto rural —donde se entiende

la música como “articulador ritual” con el entorno natural, animal y humano—, también se trasladó al contexto urbano, manteniendo constante interrelación, y surgiendo en torno a la música, de nuevos criterios de comercialización (industria cultural), apropiación y *patrimonialización* (Montenegro, 2010). Efectivamente, para los habitantes de estas comunidades la práctica de música-danza estaba relacionada como una forma ritual de procurar la buena producción mediante el control de los fenómenos climatológicos. Lo cual, a partir del “descubrimiento” de su potencial artístico (como músicos) por parte de los *vecinos*, inicia un proceso de inserción en la industria cultural, pero por parte de algunas comunidades (San Martín y los residentes migrantes). Ello permite la reinterpretación de esta música en contextos urbanos, recibiendo gran acogida, y consolidándose con la producción de discos. Esto último permite también la despersonalización de la música de la *sikuriada*, abriendo la posibilidad de su difusión masiva y con ello la ampliación de su práctica por parte de otros grupos, especialmente urbanos. Todo ello lleva a la descontextualización musical, una suerte de *desanclaje* (Giddens, 1994) de la práctica musical del *sikuri*.

Finalmente, como tercer punto, se tiene a las políticas de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), que además de plantear una forma de abordar la cultura de los Otros (política pública de salvaguardia), es asumida de diversas maneras por las comunidades y grupos, lo que confirma/contradice los planteamientos “oficiales”. Todo ello genera tensiones de sentido y acción tanto en las comunidades “portadoras” como en el Estado en sus diferentes niveles. De esta forma, las comunidades del *Ayllu Wilasa*, intérpretes de la música-danza de la *sikuriada*, emplean el PCI como un eje de múltiples demandas. Es decir, como: forma de reconocimiento y reivindicación étnica, búsqueda control cultural (Bonfil Batalla, 1991), y disputa por la propiedad. Así, la búsqueda de su *reconocimiento* como patrimonio cultural, que desde ya posee diferentes finalidades, crea formas de diferenciación entre las comunidades de este sector, en torno a la *sikuriada* como rasgo diacrítico de identidad.

Pero, ¿cuál la relación entre lo local y lo nacional? El caso de estudio, además de mostrar que las actividades y representaciones culturales de las comunidades están en constante transformación —diluyendo cada vez más la brecha imaginada entre lo rural y lo urbano—; expresan la desvinculación que existe entre las necesidades y visiones de vida que tienen las comunidades, con aquellas que proyecta y plasma el Estado, en sus políticas culturales y de reconocimiento. Entonces, podríamos estar hablando de la existencia de “una brecha de incomunicación cultural determinada históricamente por la relación colonial entre pueblos y ayllus, relación que es producida por las ideologías progresistas [...] y

que ha formado una suerte de sentido común incuestionable.” (Rivera Cusicanqui, 1992:180) Además, este aspecto se complejiza, ya que las relaciones y *agencias* de estos grupos difieren de los criterios establecidos por el Estado complejizando la gestión cultural y territorial, entre otros ámbitos.

Estas aristas del discurso Estatal (culturalista-desarrollista) sobre las “manifestaciones” culturales de las comunidades, y el entendido que ellas mismas tienen de sus prácticas culturales generan otro cuestionamiento: ¿Cuáles son las representaciones que tienen estos sectores sobre lo cultural? Salazar de la Torre, plantea que el canto, música, danza, textiles y otras formas culturales indígenas —entendidas como “herencia clásica”— poseen una “potencialidad emancipadora [...] para que nuestra sociedad [...] pueda ser más humana y menos depredadora”; sin embargo, también muestra que el Estado las entiende sólo de “modo utilizable”, ya que se encuentra atrapado en formas de “populismo estético” y nacionalista (2015:125–126). Al respecto, Rivera Cusicanqui, explica que la “cultura es entonces ‘usada’ como un mecanismo instrumental para lograr la confianza de los comunarios, pero no como un medio de comprender la lógica interna y la racionalidad propia de la sociedad india” (Rivera Cusicanqui, 1992:183). Por tanto, en el marco reflexivo que ha generado este estudio, es necesario profundizar en las formas de acción y los mecanismos participativos de los actores, sus agencias y finalidades. Ya que las tensiones identificadas entorno al patrimonio cultural son muestra de un debate implícito sobre el entendido que tiene “lo patrimonial” sobre el concepto de *cultura*, y la separación imaginada que hace entre “lo material-inmaterial”, lo cual también implica una *desterritorialización* simbólica de la práctica cultural que instrumentaliza a las comunidades.

En suma, la perspectiva con la cual Bolivia viene trabajando el tema del Patrimonio Cultural Inmaterial tiende a generar nuevas formas de desigualdad. Pese a que el patrimonio cultural, como política pública, busca la salvaguardia de “lo cultural” y el reconocimiento de la diversidad étnica, los resultados —y los procesos de implementación— crean/fortalecen jerarquías⁵⁹ y estratificaciones, que vienen de la mano de criterios esencialistas sobre lo indígena y su cultura. Pese a que las expresiones culturales, como la música y danza, forman parte de un conjunto interdependiente de elementos sociales, económicos y territoriales; desde el foco del PCI, estas terminan siendo reducidas,

59 Con todo, se genera una “jerarquización” de lo cultural, ya que “las comunidades pueden postular prácticas, bienes y saberes susceptibles de *patrimonialización*. Sin embargo, sus demandas sólo se materializan cuando atienden a los criterios esencialistas de una diferencia cultural domesticada, dictadas por las mismas normas de la UNESCO” (Chávez et al., 2010:8-9).

“folklorizadas”, desterritorializadas y usurpadas,⁶⁰ revelando conflictos intracomunitarios y vacíos legales en la gestión pública y cultural. Esta mirada condice con el planteamiento de Taylor al referirse al *falso reconocimiento*. Pues ello no sólo implica la presencia discursiva y retórica del reconocimiento de la ciudadanía diferenciada (a través del patrimonio cultural) sino como “una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido” (Taylor, 1993:44). También lo señaló el estudio del PNUD, al referirse que las “desigualdades resultan de sistemas de estratificación social que representan un conjunto de instituciones y relaciones sociales que las provocan” (PNUD, 2010:59). De tal manera, que las diferencias categoriales internas presentes en el ámbito del patrimonio cultural hacen de éste último una forma de *desigualdad persistente* (Tilly, 2000). Por todo ello, es valioso retomar el enfoque “multidimensional de las desigualdades” el cual, aborda las desigualdades por su carácter histórico o emergente, tanto desde su dimensión materiales como la simbólica (PNUD, 2010:61), ya que ello permitiría mantenernos alerta ante el surgimiento de nuevas formas de desigualdad en territorios no imaginados como el del patrimonio cultural.

BIBLIOGRAFÍA

- Albó, Xavier 2009 “Capítulo 2. Bolivia.” Pp. 19–113 En: *Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú, Cuadernos de Investigación N° 71* (La Paz: CIPCA).
- Albó, Xavier; y Tomás Greaves; y Godofredo Sandoval 1987 *Chukiyawu, la cara aymara de La Paz. IV. Nuevos lazos con el campo* (La Paz: CIPCA).
- Archondo, Rafael 1991 *Compadres al micrófono. La resurrección metropolitana del ayllu* (La Paz: PIEB-CEBEM).
- Archondo, Rafael 2000 “Existencias fronterizas. Ser ‘chango’ en el Alto: entre el rock y los sikuris” en *T’inkazos Revista de ciencias sociales N° 6*, (Ed.) Rafael Archondo (La Paz: PIEB).

60 Los recursos de usurpación de símbolos ajenos con la finalidad de construir el ordenamiento de una sociedad y al mismo tiempo preservar el orden dominante. Guerrero Arias denomina este fenómeno como *usurpación simbólica*: “un proceso concreto de robo, de despojo de bienes simbólicos que son producidos por una cultura; y si el símbolo es un constructor de sentido, el proceso de usurpación simbólica es un proceso de usurpación de sentido de la acción social [...] dada la fuerza constructora de sentido que tienen los símbolos éstos resultan necesarios para la legitimación y ejercicio del poder.” (Guerrero Arias, 2004:42–43).

- Arizpe, Lourdes 2013 “Patrimonio cultural intangible: los orígenes del concepto” En: *Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*, (Eds.) Hilario Topete Lara & Cristina Amescua Chávez. Mexico D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Arnold, Denise Y. 2008a *¿Indígenas u obreros? La construcción políticas de identidades en el Altiplano boliviano* (La Paz: Fundación UNIR-Bolivia).
- Arnold, Denise Y. 2008b. “Capítulo 4. La cartografía como instrumento en la construcción de identidades regionales” en *¿Indígenas u obreros? La construcción políticas de identidades en el Altiplano boliviano*2, (Ed.) Denise Y. Arnold (La Paz: Fundación UNIR-Bolivia).
- Arom, Simha 2001 “Capítulo 9. Modelización y modelos en las músicas de tradición oral [1998] en *Las Culturas Musicales: Lecturas de Etnomusicología 2* Francisco Cruces (Ed.) (Madrid: Trotta).
- Barragán, Rossana 2007 *Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación* (La Paz: Fundación PIEB).
- Baumann, Max Peter 1982 *Bolivien: Musik im andenhochland/Bolivia: Music in the Andean highlands* Artur Simon (ed.) (Berlin: Museum collection Berlin).
- Bellenger, Xavier 2007 *El espacio musical andino. Modo ritualizado de producción musical en la isla de Taquile y en la región del lago Titicaca* (Lima: IFEA).
- Berg, Hans van den 1989 *La tierra no da así nomás: los ritos agrícolas en la religión de los Aymara-cristianos de los Andes* (Amsterdam: CEDLA).
- Bernabé Uno, Adalid 2003 *Las ferias campesinas una estrategia socioeconómica* (La Paz: Fundación PIEB).
- Bigenho, Michelle; y Juan Carlos Cordero; y Richard Mújica Angulo; y Bernardo Roza López; y Henry Stobart 2015 “La propiedad intelectual y las ambigüedades del dominio público: Casos de la producción musical y la patrimonialización” en *Lo público en la pluralidad: Ensayos desde Bolivia y América Latina* Gonzalo Rojas Ortuste (ed.) (La Paz: CIDES-UMSA/Plural).
- Blanes Jiménez, José 2000 *Mallkus y alcaldes. La ley de Participación Popular en comunidades rurales del altiplano paceño* (La Paz: PIEB-CEBEM).
- Bonfil Batalla, Guillermo 1991 “Lo propio y lo ajeno. Una aproximación al problema del control cultural” en *Pensar nuestra cultura, ensayos* (Mexico D.F.: Alianza Editorial).

- Cachau-Herreillat, Anne 1979 “VI 3. Italaque, La fete du 16 juillet 1979” en *Recherches sur la musique populaire Bolivienne. Tomo 2 (en 1978 et 1979)*.
- Cánepa Koch, Gisela 1998 *Máscara, Transformación e Identidad en los Andes. La fiesta de la Virgen del carmen Paucartambo-Cuzco* (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú).
- Canessa, Andrew 2006 *Minas, mote y muñecas. Identidades e indigeneidades en Larecaja* (La Paz: Editorial Mama Huaco).
- Castrillón Nieto, Cecilia 2003 “El Patrimonio en un Escenario Intercultural” Universidad Andina Simón Bolívar. Revisado: ([http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2688/1/T0230-MELA-Castrillón-El patrimonio.pdf](http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2688/1/T0230-MELA-Castrillón-El%20patrimonio.pdf)).
- Cavour Aramayo, Ernesto 2010 *Instrumentos Musicales de Bolivia* (La Paz: Producciones CIMA).
- Chaves, Margarita ; Mauricio Montenegro y Marta Zambrano 2010 “Mercado, consumo y patrimonialización cultural en Colombia” en *Revista Colombiana de Antropología. Mercado, consumo y patrimonialización cultural en Colombia* v. 46 (I):7–26.
- Choque Canqui, Roberto 1992 “II. Historia” en *La Cosmovisión Aymara*, (Eds.) Hans van den Berg & Norbert Schiffers (La Paz: UCB-Hisbol).
- Choque, María Eugenia; y Carlos Mamani Condori 2003 “Reconstitución del Ayllu y derechos de los Pueblos Indígenas: el movimiento Indio en los Andes de Bolivia” en *Los Andes desde los Andes* (Ed.) Esteban Ticona A. (La Paz: FUNDACIÓN PIEB).
- Condorena, Ernesto 2015 “[Entrevista al Músico sikuri de la comunidad de San Alberto] 15/09/2015.”
- Coronado, Alfonso 2015 “[Entrevista al Ex Director Agrupacion de Sikuriada de la Comunidad de Casani] 10/10/2015.”
- D’Harcourt, Marguerite; y Raoul D’Harcourt 1990 *La música de los Incas y sus supervivencias [1925]* (Lima: OXY-Occidental Petroleum Corporation of Peru).
- Farah H., Ivonne; y Luciano Vasapollo 2011 *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?* (La Paz: CIDES-UMSA/OXFAM).
- Fernández Osco, Marcelo 2000 *La Ley del Ayllu: Práctica de jach’a justicia y jisk’a justicia (justicia mayor y justicia menor) en comunidades aymaras* (La Paz: Fundación PIEB).

- Gérard A., Arnaud 2002 “Acústica del Suri-Siku. Una genial acomodación de alturas de sonido que permite una multi-pentafonía” en *La Musica en Bolivia: De la Prehistoria a la Actualidad* Walter Sánchez C. (ed.) (Cochabamba: Fundación Simón I. Patiño).
- Gérard A., Arnaud 2010 *Diablos tentadores y pinkillus embriagadores... en la fiesta de Anata/Phujllay: Estudios de antropología musical del carnaval en los Andes de Bolivia. Tomo II* (Potosí: Universidad Autónoma Tomás Frías / FAUTAPO / Plural Editores).
- Gérard A., Arnaud; y Marcos Clemente J. 1995 “Ayraquis del sur de Bolivia” en *Reunión Anual de Etnología 1995 - Tomo II* (La Paz: MUSEF).
- Giddens, Anthony 1994 *Consecuencias de la modernidad* (Madrid: Alianza).
- Guerrero Arias, Patricio 2002 *La Cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia* (Quito: Abya-Yala).
- Guerrero Arias, Patricio 2004 *Usurpación simbólica, identidad y poder. La fiesta como escenario de lucha de sentidos* (Quito: Abya-Yala/ Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador/ Corporación Editorial Nacional).
- Gutiérrez C., Ramiro 1990 “La importancia de la música en el mundo andino” en: *Serie: Anales de la Reunión Anual de Etnología* MUSEF (ed.) (La Paz: MUSEF).
- Gutiérrez C., Ramiro; y E. Iván Gutiérrez 2009 *Música, Danza y Ritual en Bolivia: Una aproximación a la cultura musical de los Andes, Tarija y el Chaco Boliviano* (La Paz: FAUTAPO).
- Herner, María Teresa 2009 “Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje teórico desde la perspectiva de Deleuze y Guattari” *Huellas* (13):158–71. Revisado: January 22, 2016 (<http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/n13a06herner.pdf>).
- Hinojosa, Alfonso 2008 “Transnacionalismo y multipolaridad en los flujos migratorios de Bolivia. Familia, comunidad y nación en dinámicas globales” en *Migración transnacional de los Andes a Europa y Estados Unidos* Sandoval Godard (ed.) (Lima: IFEA-PIEB-IRD).
- Huanca, Néstor 2012 “[Entrevista al Músico sikuri de la Comunidad San Martín] 12/08/2012.”

- Kutukdjian, Georges y John Corbett 2010 *Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Informe Mundial de la UNESCO* (París: UNESCO).
- Layme Pairumani, Félix 2004 *Diccionario Bilingüe. Aymara castellano - Castellado Aymara* (La Paz: Consejo Educativo Aymara CEA).
- LDC-DP. 2016 “[Libreta de Campo-Desigualdades Patrimonio 2015-2016].”
- Mamani Pocoaca, Mauricio 1987 “Los Instrumentos Musicales en los Andes Bolivianos” en *Serie: Reunión Anual de Etnología N° 1, Tomo III* (La Paz: MUSEF).
- Mamani, Santiago 2015 “[Entrevista al Músico sikuri de la Comunidad Pumaqala] 06/10/2015.”
- Mamani, Santiago 2016 “[Entrevista al Músico sikuri de la Comunidad Pumaqala] 20/01/2016.”
- Mazurek, Hubert 2012 *Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social* (La Paz: Fundación PIEB).
- Medinaceli, Ximena 2003 *¿Nombres o apellidos? El sistema nominativo aymara. Sacaca, siglo XVII* (La Paz: Institut français d'études andines, Instituto de Estudios Bolivianos).
- Meo, Analía Inés 2010 “Consentimiento informado, anonimato y confidencialidad en investigación social. la experiencia internacional y el caso de la sociología en Argentina” en *Aposta, Revista de Ciencias Sociales* (44). Revisado: (<http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aines.pdf>).
- Montenegro, Mauricio 2010 “La patrimonialización como protección contra la mercantilización: paradojas de las sanciones culturales de lo igual y lo diferente” en *Revista Colombiana de Antropología. Mercado, consumo y patrimonialización cultural en Colombia* v. 46 (I):87–114.
- Mújica Angulo, Richard 2014 “Qina Qina y bandas en la fiesta de San Pedro y San Pablo: Dinámicas musicales y culturales en la localidad de Tiwanaku (La Paz, Bolivia).” Tesis de licenciatura. Carrera de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
- Mújica Angulo, Richard: David Crispin Espinoza; Dolores Charaly Mayorga y Johnny Guerreros Burgoa; y Gery López Silva 2012 “Música Aymara: Bolivia” en *Música Aymara: Bolivia, Chile y Perú*

- (Cusco: Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina - CRESPIAL).
- Nettl, Bruno 2002 “Capítulo 5. Últimas tendencias en Etnomusicología” en *Las Culturas Musicales: Lecturas de Etnomusicología*, (Ed.) Francisco Cruces (Madrid: Trotta).
- Paredes, Manuel Rigoberto 1970 *El arte Folklórico de Bolivia* (La Paz: Camar Linghi).
- PNUD, Bolivia 2010 *Los cambios detrás del cambio. Desigualdades y movilidad social en Bolivia* (La Paz: PNUD).
- Quenta, Felipe 2015a “[Entrevista al Apoderado de la Comunidad San Javier] 14/05/2015.”
- Quenta, Felipe 2015b “[Entrevista al Apoderado de la Comunidad San Javier] 18/10/2015.”
- Qureshi, Regula Burckhardt 1987 “El sonido musical y la aportación contextual: Un modelo de performance para el análisis musical” en *Ethnomusicology* Vol. 31(Nº 1):56–86. Revisado: (<http://es.scribd.com/doc/64877087/Regula-Burckhardt-Qureshi>).
- Rance, Susanna; y Silvia Salinas Mulder 2001 *Investigando con ética: aportes para la reflexión-acción* (La Paz: CIEPP/Population Council).
- Rasnake, Roger 1989 *Autoridad y Poder en los Andes. Los Kuraqkuna de Yura* (La Paz: HISBOL).
- Rice, Timothy 2001 “Capítulo 6. Hacia la remodelación de la Etnomusicología [1987].” en *Las Culturas Musicales: Lecturas de Etnomusicología* Francisco Cruces (ed.) (Madrid: Trotta).
- Rivera Cusicanqui, Silvia 1992 *Ayllus y Proyectos de desarrollo en el norte de Potosí* (La Paz: Ediciones Aruwiwiri).
- Rodas, Irineo 2010 “[Transcripción del documento manuscrito titulado ‘La historia de Sikuris de Casani’ de fecha 07 de mayo de 2010].”
- Rozo López, Bernardo 2004 “Producción musical: entre la invención de la autenticidad, la construcción de identidades urbanas y la participación política” en *T'inkazos Revista de ciencias sociales* Nº 16 (16):129–42.
- Rozo López, Bernardo 2011 *Curaciones de Luna Nueva: Saberes, prácticas y productos musicales en Lomerio* (La Paz: FAUTAPO-ProAa).
- Saavedra, José 2015 “[Entrevista al Director agrupación de Sikuris Centro Jutilaya de la Comunidad Casani] 17/10/2015.”

- Salazar de la Torre, Cecilia 2015 *El problema del indio. Nación e inmovilismo social en Bolivia* (La Paz: CIDES-UMSA).
- Sánchez C., Walter 2001 "Patrimonio, propiedad intelectual, autoría y 'música indígena'" en *Memoria. II Congreso Internacional sobre Patrimonio Histórico e identidad Cultural*. Cochabamba: UMSS-Convenio Andrés Bello-Instituto Internacional de Integración. Revisado: (<http://www.saberesbolivianos.com/Sanchez/Sanchez2001.pdf>).
- Sen, Amartya Kumar 1999 "Capítulo 5. Mercados, Estados y oportunidad social" en *Desarrollo y Libertad* (Barcelona: Editorial GeoPlaneta).
- Sen, Amartya Kumar 2003 "La cultura como base del desarrollo contemporáneo" en *Revista Cultura y Desarrollo - UNESCO [1997]* (Nº 2). Revisado: (<http://es.scribd.com/doc/109388726/Sen-Amartya-La-cultura-como-basedel-desarrollo-contemporaneo>).
- Sigl, Eveline; y David Mendoza Salazar 2012 *No se baila así nomás... Tomo II. Danzas autóctonas y folklóricas de Bolivia* (La Paz: Mocusabol).
- Spedding P., Alison L.; y David Llanos 1999 "No hay ley para la cosecha": un estudio comparativo del sistema productivo y las relaciones sociales en Chari (provincia Bautista Saavedra) y Chulumani (provincia Sud Yungas), La Paz (La Paz: PIEB/SINERGIA).
- Stobart, Henry 1996 "Los wayños que salen de la huertas: Música y papas en una comunidad campesina del Norte Potosí" en *Madre Melliza y sus crías: Ispall Mama wawampi. Antología de la Papa* Denise Y. Arnold & Juan de Dios Yapita (La Paz: HISBOL-ILCA).
- Stobart, Henry 2006 *Music and the Poetics of Production in the Bolivian Andes*. Ashgate Publishing, Ltd. Revisado: ([http://books.google.es/books?id=-yZafFnjvJ4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:"Henry+Stobart"&hl=es&sa=X&ei=xqopUdKeIYnf0gHtn4D4Dw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false](http://books.google.es/books?id=-yZafFnjvJ4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:)).
- Stobart, Henry 2010 "Demonios, ensueños y deseos: Tradiciones de las sirenas y creación musical en los Andes sur centrales" en *Diablos tentadores y Pinkillus embriagadores ...en la fiesta de Anata/Phujllay. Estudios de antropología musical del carnaval en Los Andes de Bolivia. Tomo 1*, (Ed.) Arnaud Gérard A. (Potosí: Universidad Autónoma Tomás Frías / FAUTAPO / Plural Editores).
- Strauss, Anselm; y Juliet Corbin 2002 *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada* (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia).

- Taylor, Charles 1993 *El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”* (Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica).
- Ticona Alejo, Esteban 2000 *Organización y liderazgo aymara. La experiencia indígena en la política boliviana 1979 - 1996* (La Paz: AGRUCO / Universidad de la Cordillera).
- Tilly, Charles 2000 *La desigualdad persistente* (Buenos Aires: Ediciones Manantial).
- UNESCO, Sección del Patrimonio Cultural Inmaterial 2012 *Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003*. 2012th ed. Paris 07: UNESCO.
- Villarroel Salgueiro, Gloria; y Richard Mújica Angulo 2012 “Tejiendo sonidos de saberes: Reflexiones sobre la protección, uso y representaciones de los conocimientos y saberes tradicionales indígenas” en *Anales de la Reunión Anual de Etnología N° 25* (La Paz: Museo Nacional de Etnografía y Folklore).
- Yampara Huarachi, Simón 1992 “V. ‘Economía’ comunitaria aymara” en *La Cosmovisión Aymara 1* Hans van den Berg & Norbert Schiffer (La Paz: UCB-Hisbol).
- Young, Iris 1989 “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal [Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citinzenship].” *Ethics* (99).
- Zelada Bilbao, Fernando 2009 “El poder del Siku llama al Juyphi (Helada)” en *Revista de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia* Año XIII(N° 57):10–20.

TEORÍAS Y PARADOJAS DEL POSTNEOLIBERALISMO EN AMÉRICA LATINA: REDISTRIBUCIÓN ESTATAL Y ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN DE LOS INDÍGENAS KICHWA EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

Karla Encalada-Falconí*

I INTRODUCCIÓN

Para llegar hasta el río Aguarico, que se encuentra ubicado al Norte de la Amazonía Ecuatoriana, y en cuyas riveras se asienta la comunidad Kichwa Playas del Cuyabeno, es necesario viajar vía terrestre hasta Lago Agrio, capital de Sucumbíos (provincia a la cual esta comunidad se adscribe). Desde allí, hay que seguir en bus hasta la parroquia de Tarapoa. En este lugar, se toma una chiva, que consiste en un camión de carga transformado artesanalmente en un bus de transporte público, utilizado especialmente en áreas rurales. Este tipo de transporte se utiliza para viajar desde Tarapoa hasta el puerto que llega al río Aguarico. Una vez en el Puerto, se recorren por varias horas el río Aguarico antes llegar a la comunidad de Playas del Cuyabeno.

Durante mi primer viaje por las riberas del río Aguarico, observé varias fincas familiares, distantes unas de otras, que acompañaban y se distinguían del color verde que pintaba el horizonte de las riveras de este río Amazónico. Luego de varias horas de recorrer este paisaje,

* Karla Encalada Falconi Ph.D (c). por la Universidad de Kentucky, U.S.A. Msc. Antropología Social por FLACSO-Ecuador. Socióloga y Comunicadora Social por la Universidad Central del Ecuador. Investigadora Visitante, Departamento de Ciencias Políticas, FLACSO-Ecuador.

a lo lejos divisé un espacio vacío de árboles, caracterizado por figuras triangulares y un color blanco, situado a un lado de lo que los indígenas Kichwa llaman “el monte”. Había llegado a la comunidad Playas del Cuyabeno, cuyo paisaje, al menos en apariencia, se manifiesta como una especie de monumento a los cambios que el Estado postneoliberal ha generado en las comunidades indígenas.

El Estado postneoliberal se concibe como una formación de Estado contradictorio que, por un lado cuestiona al neoliberalismo mediante el aumento de la redistribución del gasto social y la reorientación de las políticas públicas, pero por otro, incrementa la explotación de recursos y el control social (Goodale y Postero, 2013). En el caso del Estado Ecuatoriano, el surgimiento del postneoliberalismo tuvo como efecto la recuperación y consecuente incremento de las rentas petroleras.

Esto se tradujo en la implementación de proyectos de desarrollo tendientes a erradicar la pobreza. Sólo en la región Amazónica, el promedio de inversión social del Estado ecuatoriano entre 2011 y 2014 fue de 130'000.000 dólares por año (Ecuador Estratégico, 2015). Esta cifra fue ampliamente mayor a la invertida por el Estado durante la época neoliberal. Entre 1991 y 2001, la inversión del Estado en la Amazonía fue, en promedio, de apenas 2'555.490 dólares anuales (Andrade 2004). Sin embargo, a pesar de este incremento en el gasto social, que tiene como objetivo compensar los territorios afectados por la extracción de recursos y disminuir la pobreza, los proyectos que se han implementado han traído como consecuencia la desposesión de las rentas petroleras de las comunidades indígenas de la Amazonía.

Este artículo busca explicar los efectos de la implementación de proyectos de desarrollo tendientes a erradicar la pobreza dentro del postneoliberalismo. Para ello, analizo los efectos de la implementación del programa Ciudades del Milenio en la comunidad Kichwa, Playas del Cuyabeno. Si bien el Estado ecuatoriano ha implementado varios proyectos en diversas comunidades indígenas (bono de desarrollo humano, Programas de Vivienda Urbana, Escuela del Milenio, etc.), la importancia de estudiar Playas del Cuyabeno se debe a que es la primera comunidad indígena donde el Estado desarrolló un Plan de Vivienda integral que, de alguna manera, consiste en la suma de varios proyectos en un solo lugar.

A saber, por un lado, este proyecto consiste en la reconstrucción total de las casas de los indígenas Kichwa y de los espacios de la comunidad, la dotación de agua, energía eléctrica, telefonía fija, internet, una nueva escuela y un centro médico. Sin embargo, este programa ha imposibilitado a la comunidad participar en la planificación e implementación del proyecto y ha reestructurado los espacios del centro poblado de indígenas Kichwa. Por tanto, se argumenta que, no solamente

la pobreza como escasez de recursos o capacidades, sino la implementación de programas para erradicarla, pueden impactar negativamente dentro de una población y, por tanto, constituyen parte del problema de la pobreza.

Para James Scott, los proyectos utópicos de desarrollo del Estado que intentan mejorar las condiciones humanas, paradójicamente pueden producir una serie de cambios no previstos que incluyen “la reubicación, control y eliminación de formas de vida diversas” (1998:88). En este sentido, David Harvey (2004) argumenta que los efectos de los proyectos de desarrollo forman parte de procesos de acumulación por desposesión. Si bien estos procesos permiten resolver las constantes crisis del capitalismo en un lugar, mantienen e incluso incrementan la desigualdad en otros.

Siguiendo a Harvey (2004), se argumenta que los procesos de acumulación por desposesión paradójicamente resultan de la implementación de proyectos que tienen como objetivo disminuir la pobreza. A diferencia de Ong (2006), esta investigación no concibe al concepto de acumulación por desposesión de Harvey como demasiado general. Al contrario, se trata de complejizar las diversas experiencias de acumulación por desposesión de los indígenas Kichwa, a partir de los aportes de la teoría de la interseccionalidad (Crenshaw, 1991). Esta teoría plantea que los mecanismos de poder no afectan de la misma manera a todos los individuos, sino que dependen de diversas variables como la etnicidad, el género, la edad, etcétera.

Para comprender este problema es fundamental iniciar con un debate acerca del concepto de postneoliberalismo y del concepto de pobreza a partir de las teorías críticas del desarrollo. El análisis de estos dos debates me permite situar en un contexto teórico los programas de desarrollo postneoliberales para erradicar la pobreza. Finalmente, a partir de un análisis etnográfico de las diversas experiencias de la implementación del proyecto Ciudades del Milenio en la comunidad Kichwa de Playas del Cuyabeno intento complejizar los procesos de acumulación por desposesión resultantes del desarrollo postneoliberal.

2.- ESTADO, INDÍGENAS Y POSTNEOLIBERALISMO EN AMÉRICA LATINA

En la década de los noventa diversos movimientos indígenas emergieron en América Latina. De acuerdo con Yashar (2005) y Brysk (2000), el surgimiento de estos movimientos estuvo relacionado con la vuelta a la democracia en la región y el establecimiento de redes internacionales de apoyo. Estos hechos permitieron la ratificación de la Resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo en trece países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) y el reconocimiento de las diversas culturas, formas propias de uso de la tierra y de derecho consuetudinario (García 2005).

Los movimientos indígenas no solamente pugnarón por el reconocimiento de derechos, autodeterminación y autonomía (Postero and Zamosc 2007; Van Cott 1994) sino también en contra de la implementación de proyectos neoliberales de ajuste estructural en la región (privatización de bienes públicos, apertura comercial, flexibilización laboral, etc). Entre los ejemplos más destacados se puede citar a los Zapatistas en **México** (Collier et.al. 1994), el movimiento Guaraní y Aymara en Bolivia (Canessa 2006; Postero 2007), la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador CONAIE (Martínez 2009; Zamosc 2007), etc.

La década de los noventa estuvo caracterizada por profundas luchas antineoliberales, no solamente por parte de los movimientos indígenas, sino también de otros movimientos urbanos como los piqueteros en Argentina (Auyero, 2004), las organizaciones barriales en Venezuela (Fernandes, 2010), etcétera. Una de las consecuencias de las luchas de estos grupos fue el apareamiento de gobiernos autodenominados de izquierda en la región; a saber, la elección Hugo Chávez en Venezuela en 1998, Lula Ignacio da Silva en Brasil en 2003, Néstor Kirchner en Argentina en 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay en 2004, Evo Morales en Bolivia en 2005, Daniel Ortega en Nicaragua en 2006, y Rafael Correa en Ecuador en 2006. Este giro hacia la izquierda en la región ha sido descrito como el surgimiento de la era postneoliberal (Fabricant y Gustafson 2011; Fernandes 2010).

Para Fernandes (2010) el postneoliberalismo constituye una ruptura con el neoliberalismo. Una de las características de la agenda antineoliberal dentro del postneoliberalismo tiene que ver con el fortalecimiento del Estado a través de la recuperación de los ingresos de los recursos naturales. Por ejemplo, la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela (Fabricant y Gustafson, 2011) y la recuperación de las rentas petroleras en Ecuador y Bolivia (Davidov 2013; Fabricant y Gustafson 2011). En su análisis acerca del caso de Venezuela, Sujata Fernandes argumenta que las luchas llevadas a cabo por los movimientos sociales en ese país han generado una “disyuntiva entre un discurso anti-neoliberal y una retórica basada en una lógica de mercado” (2010:24). Para esta autora, esta disyuntiva tiene como consecuencia el surgimiento de una expectativa que intenta producir un orden antineoliberal a partir de la producción social de “imaginarios postneoliberales” (Fernandes 2010:24). Los imaginarios postneoliberales son las “nuevas narrativas contestatarias y formas de acción colectiva que desplazan de alguna manera al neoliberalismo de su posición quasi hegemónica” (Grimson y Kessler en Fernandes, 2010:64).

Para Fernandes, el postneoliberalismo representa una alternativa al neoliberalismo en tanto permite a la sociedad pensar creativamente acerca de diferentes alternativas.

Sin embargo, de acuerdo con Goodale y Postero (2013) la idea de “post” en este contexto no necesariamente implica el fin del neoliberalismo. Aunque estos académicos aceptan la continuación de prácticas neoliberales dentro del postneoliberalismo, por ejemplo, en relación con las agendas pro-extractivistas de estos regímenes, también argumentan que “el surgimiento del postneoliberalismo ha cambiado las dinámicas políticas y sociales en estos países” (2013:22)¹. Por tanto, para Goodale y Postero (2013), el postneoliberalismo es un tipo de formación de Estado que, si bien surge como un desafío al neoliberalismo (a partir de la creación de nuevas constituciones vía asambleas constitucionales y la reorientación de las políticas redistributivas del Estado), al mismo tiempo incrementa la explotación y violencia.

Por su parte, Bebbington y Bebbington (2011) argumentan que el postneoliberalismo no supone cambio alguno en relación con el neoliberalismo. De acuerdo con Bebbington y Bebbington (2011) los Estados postneoliberales, si bien aumentan la inversión del gasto social, también incrementan las fronteras extractivas en territorios indígenas. En su investigación, Bebbington y Bebbington (2011) comparan el contexto postneoliberal de Ecuador y Bolivia con el contexto neoliberal del Perú y concluyen que en los tres países, no solamente se ha expandido la extracción de recursos no renovables, sino que también se ha incrementado la intolerancia hacia quienes se oponen a esta expansión. El Estado ecuatoriano ha aprisionado a los líderes indígenas y campesinos que se resisten al incremento de la explotación de recursos dentro de sus territorios (Davidov, 2013; Moore y Velazquez, 2011). En el mismo sentido, varios científicos políticos argumentan que los estados postneoliberales se caracterizan por altos niveles de intolerancia (Levitsky y Loxton, 2013). A partir del análisis de los discursos, prácticas y decisiones de los presidentes de Bolivia y Venezuela, estos académicos muestran las tendencias polarizantes y autoritarias de estos regímenes (Canovan 1999; De la Torre 2013; Hawkins 2009).

En este contexto, para Goodale y Postero, pesar de que el surgimiento del postneoliberalismo “mínimamente implica la interrupción del neoliberalismo en América Latina” (2013:21), el debate debe centrarse en entender mejor los efectos resultantes de “las contradicciones irresueltas” de los cambios producidos en las últimas décadas en la región (Goodale y Postero 2013:21). Aunque Goodale y Postero recono-

¹ En este documento, todas las traducciones de las citas textuales del inglés son autoría de la investigadora.

cen que “el neoliberalismo aún constituye una fuerza poderosa” dentro del postneoliberalismo, al mismo tiempo reconocen el hecho de que en este tipo de régimen se han producido “desafíos importantes al orden neoliberal que, paradójicamente, coexisten e incluso podrían reforzar agendas neoliberales” (2013:23).

Si bien, no se trata de negar la continuación del neoliberalismo en el contexto postneoliberal, el concepto de postneoliberalismo es útil en tanto evita la asimilación de estos cambios al neoliberalismo. Para Fernandes (2010), estos cambios pueden ser concebidos potencialmente como alternativas al neoliberalismo en tanto articulan nuevas formas de imaginar el orden social. Sin embargo, aunque para Goodale y Postero el postneoliberalismo no constituye una alternativa radical al neoliberalismo, reconocen “los cambios sociales, económicos y políticos” que los gobiernos de izquierda “han producido en la región” (2013:22). Siguiendo a estos autores, afirmo que el postneoliberalismo es un concepto que permite entender parte de la dinámica actual en Latinoamérica, precisamente porque subraya los cambios y efectos de las luchas anti-neoliberales en la región. En particular, este concepto permite analizar de qué manera las dinámicas de los proyectos auto-denominados como revolucionarios producen “contradicciones que, a la vez, generan dinámicas sociales, políticas y éticas no previstas” (Goodale y Postero 2013:35). Por tanto, aunque cuestiono el argumento de Fernández de que el postneoliberalismo constituye una alternativa radical al neoliberalismo, planteo con Goodale y Postero (2013) que el concepto de postneoliberalismo es útil para entender mejor estos cambios. Argumento que al describir estas dinámicas como mera continuación del neoliberalismo, como ocurre con Bebbington y Bebbington (2011), se corre el riesgo de perder las especificidades históricas.

El estudio del postneoliberalismo y su relación con los grupos indígenas se ha enfocado en el análisis de las confrontaciones entre el Estado y los movimientos indígenas. Se han analizado, tanto los impactos ambientales que el postneoliberalismo ha causado en territorios indígenas (Bebbington y Bebbington, 2011; Vallejo, 2014), como los mecanismos a partir de los cuales, las agendas autoritarias de estos Estados, han afectado la organización política de las comunidades indígenas (Martínez 2014; Moore y Velásquez, 2011; Davidov, 2013). Sin embargo, a decir de Goodalé y Postero, aunque se ha empezado a analizar la implementación de proyectos de desarrollo en el postneoliberalismo (Ansell, 2014; Cielo, et.al., 2016; Lind 2012; Wilson et.al, 2015), “es necesario profundizar más en el estudio de los efectos de la redistribución” y los intentos de erradicar la pobreza como estrategia (Goodale y Postero, 2013:59). De esta manera es posible entender mejor las complejidades de las políticas de los Estados postneoliberales. A partir del análisis

de espacios en los que comunidades indígenas se han “beneficiado” (al menos en teoría) de programas de redistribución postneoliberal, el particular, en el proyecto Ciudades del Milenio, este artículo se propone contribuir con este debate.

3.- TEORÍAS CRÍTICAS DEL DESARROLLO: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA COMO PARTE DEL PROBLEMA DE LA POBREZA

El concepto de pobreza ha sido estudiado desde diversos enfoques en Latinoamérica. A partir de los años sesenta y setenta del siglo pasado, estudios inspirados, tanto en la teoría de la modernización como en el marxismo estructuralista y la teoría de la dependencia concibieron el concepto de pobreza como marginalidad y déficit. Por un lado, la teoría de la modernización entendió la pobreza como producto de la falta de integración de grupos o individuos al sistema económico capitalista y la sociedad moderna (Rostow, 1961). Por otro, el marxismo-estructuralista y la teoría de la dependencia plantearon que la pobreza en Latinoamérica era el resultado de la una condición de dependencia estructural, creado y reproducido a partir de la integración desigual de la región al sistema capitalista mundial (Cardoso y Faletto, 1996). Sin embargo, la pobreza concebida únicamente en términos de escasez y déficit, ha sido ampliamente criticada desde corrientes postestructuralistas.

A partir del desarrollo de la teoría del actor y las redes sociales (Long et.al., 2007) se ha utilizado el concepto de capital social como estrategia para extender la reflexión acerca de la pobreza, más allá de su dimensión económica. Este enfoque trata de superar la idea de que los pobres y marginados son víctimas pasivas y carentes de recursos. Al contrario, concibe a estos sujetos como agentes activos y con capacidad de utilizar sus propios recursos como estrategias de apoyo mutuo para la resolución de crisis (e.j., la creación de redes).

De acuerdo con el paradigma de las teorías críticas del desarrollo, Arturo Escobar (1996; 2011) plantea que estos diversos enfoques para entender la pobreza han sido creados históricamente. Para este autor, el surgimiento del capitalismo y la modernidad han influenciado para la creación de políticas de pobreza específicas. De acuerdo con Escobar, el discurso de la necesidad de eliminar la pobreza ha sido precisamente el que ha permitido y justificado innumerables intervenciones en los países del sur global o postcoloniales, el aumento de la deuda externa y la consecuente obligación que tienen estos países de implementar medidas de ajuste estructural que, a su vez, incrementan la pobreza. Para Escobar la implementación de programas de desarrollo no estuvo únicamente dirigido a la erradicación de la pobreza, sino sobre todo a la creación de consumidores y a “la transformación de la sociedad mediante la conversión de los pobres en objetos de conoci-

miento y conducción” (1996:23). Por tanto, para entender el problema de la pobreza, no solamente se trata de investigar sus causas o identificar espacios de escasez, sino también de analizar a profundidad los efectos de los intentos realizados para erradicarla.

Siguiendo a Foucault (2000), Escobar (1996) argumenta que la idea de intervenir en la implementación de programas para mejorar la calidad de vida de los individuos se volvió prominente en Europa durante el siglo diecinueve. Sin embargo, para Edelman y Haugerud (2005), una teoría de desarrollo más amplia, interesada en eliminar la pobreza no solamente en Europa sino también en países no-Europeos, surgió en 1950, en el contexto de la descolonización de los países Africanos. Durante esta época, no sólo en Europa sino también en Estados Unidos, varios académicos empezaron a preocuparse por la pobreza de otros países. La teoría de la modernización surgió como consecuencia de este proceso. Esta teoría enfatizaba que el crecimiento económico era el único camino para obtener desarrollo, erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los países pobres.

Uno de los principales representantes de la teoría de la modernización fue W.W. Rostow. Este autor dividió a las sociedades entre tradicionales y modernas. Para él, las sociedades tradicionales estaban caracterizadas por una “producción limitada, basada en un tipo de ciencia y tecnología inferior” (1990:294). Este tipo de sociedad obtenía recursos de la agricultura, “debido a la limitada productividad existente” (1990:295). Contrariamente, las sociedades modernas habían pasado por varias etapas históricas para convertirse en tales. Lo importante de la teoría de la modernización era que, para académicos como Rostow, si las sociedades tradicionales querían volverse modernas, forzosamente tenían que pasar por todas etapas por las que antes ya transitaban las sociedades modernas. La primera etapa se denominaba etapa del despegue. Para Rostow, esta etapa tenía que ver con la implementación acelerada del crecimiento e industrialización de un grupo limitado de sectores ej., el de transporte, etc. Según Rostow, la industrialización de ciertos sectores haría posible la difusión del desarrollo tecnológico hacia otros sectores. La segunda etapa tenía que ver con la eliminación de las instituciones tradicionales —ya que éstas funcionaban como enclaves e impiden el desarrollo. Para Rostow, una vez que estas fuerzas fueran superadas, las sociedades tradicionales podrían crecer y volverse desarrolladas. Además, las sociedades modernas se volvían tales, únicamente cuando desarrollaban un modo de producción de consumo masivo.

Para Escobar, la teoría de la modernización no solamente implicó la construcción de representaciones específicas (de inferiorización) acerca del sur global sino también el inicio de la preocupación y

búsqueda de soluciones por parte de los países del norte acerca de la situación de pobreza de regiones como África y América Latina. Estas preocupaciones, no solamente se tradujeron en la implementación de proyectos de desarrollo sino que, al mismo tiempo, implicaron la creación de una sola alternativa acerca del significado de desarrollo y la superación de la pobreza. Para Escobar (1996), la erradicación de la pobreza y la obtención de desarrollo en Rostow, estaba relacionada con un modelo económico específico, a saber, el capitalismo. Durante el auge de la teoría de la modernización la idea de crecimiento económico se transforma en el paradigma más importante para lograr el desarrollo.

Escobar argumenta que durante la segunda mitad del siglo pasado, después del fin de la segunda guerra mundial, el discurso del desarrollo, que transformó a los países del sur global en pobres, se vuelve un discurso global que influenció el modelo de desarrollo de estos países. Escobar denomina a este proceso como “el desarrollismo del Tercer Mundo” (2011:24). Para Escobar, la transformación de estos países en pobres tiene que ver con la construcción específica de una idea de pobreza en el norte global. Para Escobar “los países pobres empezaron a ser concebidos como tales a partir de ser comparados con los estándares de lo que significaba riqueza en las naciones con economías avanzadas” (2011:23). Como consecuencia, el indicador de pobreza se construyó a partir de la medición anual del Producto Interno Bruto (PIB). La medición de este indicador hizo posible la división del mundo entre regiones avanzadas y regiones pobres.

A partir de la construcción de regiones pobres, el concepto de pobreza se transforma en una comparación estadística del ingreso per cápita. De acuerdo con Escobar, el resultado de estas comparaciones legitimó que el Banco Mundial definiera como países pobres a los países cuyo ingreso per cápita era menor de cien dólares. En este contexto, no es difícil deducir que, si el problema de la pobreza estaba relacionado con la falta de ingresos, la solución tenía como requisito el crecimiento económico. Escobar argumenta que este proceso supuso la implementación en la región de un “régimen de pensamiento y prácticas” que desplegaron innumerables “intervenciones para la erradicación de la pobreza y la obtención de desarrollo” (2011:24).

Sin embargo, la teoría de la modernización fue fuertemente cuestionada en América Latina. Durante la década de los setenta existieron debates en la región acerca de qué tipo de desarrollo era necesario para resolver el problema de la pobreza. Estos debates permitieron el surgimiento de la teoría de la dependencia —en parte desarrollada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Raul Prebisch (1985), uno de los principales representantes de este enfoque planteaba que la condición de subdesarrollo de América Latina

no se debía a la existencia de un tipo de economía tradicional-inferior, como suponían los teóricos de la modernización, sino a la posición que América Latina ha ocupado dentro del mercado mundial históricamente. Para desarrollar su teoría, Prebisch distinguió entre la posición centro y periferia. A diferencia de Rostow, Prebisch argumentaba que el desarrollo de las periferias no debía entenderse como anterior a la modernidad capitalista, sino que “constituía una parte integral en el avance del sistema mundial capitalista” (1985:165). Para Prebisch, “las condiciones en las que el desarrollo ocurre en la periferia son diferentes de las existentes en los centros” (1985:165). Para Prebisch, la situación de las periferias debe entenderse como una consecuencia directa de lo que pasa en el centro. No es de extrañarse que para Prebisch, las periferias “experimentan su mayor desarrollo económico y desarrollo capitalista cuando sus lazos con las metrópolis son más débiles; por ejemplo, durante las crisis de guerra en Europa durante la primera mitad del siglo veinte” (1985:154).

El surgimiento de la teoría de la dependencia en la región se trajo en la implementación del modelo de sustitución de importaciones e industrialización, como soluciones para disminuir la dependencia con los países del centro. Sin embargo, a decir de Escobar (1996), después de que estos intentos por mejorar la situación de la región, no permitieron eliminar completamente la dependencia, los países latinoamericanos encararon una crisis profunda durante los ochenta. Esta crisis provocó que los países de la región sean nuevamente concebidos como países pobres. Durante el neoliberalismo y la crisis de los ochenta, Latinoamérica se volvió nuevamente un target para la inversión en desarrollo. Este contexto hizo posible que el paradigma neoliberal surgiera como el nuevo modelo para obtener desarrollo y disminuir la pobreza. En el caso de Ecuador, a decir de Sawyer (2004), durante los ochenta el gobierno ecuatoriano empezó a plantear la modernización y privatización del estado como alternativas para el desarrollo y la erradicación de la pobreza.

Si bien Escobar reconoce la importancia de las críticas de la teoría de la dependencia surgida en Latinoamérica acerca del tipo de desarrollo necesario para resolver el problema de la pobreza, “la idea misma de desarrollo y la necesidad de obtenerlo no fue cuestionada” (Escobar, 2011:6). Aunque este enfoque cuestionó la existencia de un intercambio desigual entre el Norte y el Sur, como se dijo anteriormente; a decir de Escobar (2011), la obtención de desarrollo siguió siendo el paradigma para resolver los problemas de la región.

Durante los ochenta y noventa la descripción/construcción de los países del sur global como pobres estuvo acompañada del surgimiento del neoliberalismo y la consecuente implementación de medidas de

ajuste estructural que suponían la reducción del rol del Estado en la economía, cortes en el gasto social, etc., como solución al problema de la pobreza. En este contexto, las intervenciones y ayudas para la erradicación de la pobreza por parte de organismos internacionales se volvieron más focalizadas y privatizadas (ej., con el surgimiento de organizaciones no gubernamentales, etc.). En el caso del Ecuador, Sawyer (2004) afirma que durante este período las medidas de ajuste estructural se legitimaron a través de la conceptualización de la pobreza a partir de la medición del PIB y la consecuente justificación de la necesidad de crecimiento vía la privatización del Estado.

Sin embargo, varias investigaciones acerca del neoliberalismo han concluido que a pesar de que durante este período el Estado se redujo de manera diversa en los países de la región, no se puede afirmar que los sectores pobres fueron completamente abandonados; lo que ocurrió más bien fue una reestructuración de las formas de intervención para erradicar la pobreza (Fox, 1993; Molyneux, 2006; Ferguson, 2010). La idea de pobreza, entendida como capacidad, desarrollada por Amartya Sen (1992; 2001), ha sido uno de los principales enfoques teóricos utilizados en los programas de erradicación de pobreza neoliberal. Este enfoque, promovido por organismos internacionales como el Banco Mundial, aparece como una crítica a los proyectos de desarrollo estatal. El argumento utilizado ha sido que estos programas promovían el paternalismo y no eran eficientes en lograr que los individuos resuelvan por sí mismos su condición de pobreza. El Banco Mundial utilizó la teoría de Amartya Sen (1992) como estrategia para potenciar las capacidades individuales en la disminución de la pobreza (Molyneux 2006). Este paradigma promueve la creación de una subjetividad que deifica la auto-responsabilidad individual, funcional al neoliberalismo (Commaroff y Commaroff 2000; Fox, 1993; Mollineux, 2006; Ong, 2006; Rose, 2006).

Amartya Sen en el texto *Inequality Reexamined* (1992), critica los enfoques tradicionales para entender la pobreza. Sen crítica el modelo instrumentalistas que concibe la pobreza a partir del crecimiento económico y los ingresos per cápita y plantea que para medir la pobreza es necesario tener información acerca de otros espacios que van más allá del ingreso. De acuerdo con Sen el bienestar y la libertad también constituyen elementos a tomarse en cuenta en el análisis de la pobreza. Contrario al instrumentalismo, Sen propone el concepto de capacidades, que contiene medidores del bienestar de los individuos, como estrategia para medir la pobreza. Para Sen, el bienestar consiste “la calidad de vida de una persona en relación a un conjunto de funciones interrelacionadas que consisten en ser y hacer” (1992:39). Las capacidades tienen que ver con los diferentes conjuntos de funciones que indican

el porcentaje de libertad que una persona tiene para elegir. Por tanto, el bienestar en Sen está profundamente relacionado con la capacidad individual para elegir.

Por otro lado, en el texto *Development as Freedom* (2001), Sen argumenta que el enfoque de desarrollo basado en el crecimiento económico es problemático ya que no toma en cuenta cómo los recursos obtenidos en un país son medidos y distribuidos, o en qué medida éstos incrementan las oportunidades de los individuos (Sen, 2001:46). Contrario a este enfoque, Sen entiende al desarrollo como libertad. Su enfoque está más centrado en los objetivos del desarrollo, antes que en los instrumentos para medirlo. Para Sen, el desarrollo como instrumento para mermar la pobreza depende de la capacidad y agencia de las personas. Lo que un individuo puede lograr para salir de la pobreza está profundamente relacionado con las oportunidades económicas, libertades políticas, la posibilidad de una buena salud, educación, etc., que tiene una persona, así como de las instituciones creadas para lograrlo.

De acuerdo con Molyneux (2006), durante la década de los noventa el Banco Mundial estableció una nueva agenda para la erradicación de la pobreza ligada a los Objetivos del Milenio². Uno de estos objetivos fue el de reducir entre 1990 y 2015 el porcentaje de individuos que sufren de hambre y que viven con menos de un dólar al día (Sachs y McArthur, 2005). Para Molyneux (2006), estos objetivos marcaron de manera importante el inicio de la aplicación de medidas de ajuste estructural neoliberales que formaron parte de la primera etapa de las reformas en torno a la pobreza. La implementación de estos programas estuvo basado en al menos tres principios (ligados a la teoría de capacidades) a saber, la idea de participación, empoderamiento y co-responsabilidad (Molyneux 2006).

A partir del estudio del programa para la erradicación de pobreza en México denominado Oportunidades, Molyneux plantea que este programa neoliberal alienta posibilidad de superar la pobreza mediante la “adquisición de capacidades y cambios en la subjetividad que hicieran posible que los individuos se conviertan en agentes” (2006:429). Este enfoque ligado al enfoque de Sen tiene como objetivo empoderar a los pobres. Se trata de hacer posible que éstos se conviertan en individuos auto-responsables para puedan salir de la pobreza por sí mismos. A decir de Molyneux, en el neoliberalismo los pobres ya no son concebidos como beneficiarios sino como individuos activos y co-responsables de su situación presente y futura. Lo paradójico es que, a medida que

2 Para mayor información acerca de los Objetivos del Milenio ver: Sachs, Jeffrey D y McArthur, John (2005) “The millennium project: a plan for meeting the millennium development goals” *The Lancet*, 365(9456), 347-353.

este enfoque ganó mayor aceptación, los encargados de aplicar estos programas, al mismo tiempo que promovían la autonomía, trataban de educar y controlar a los pobres para que se transformen en sujetos auto-responsables.

A partir de una crítica a los proyectos paternalistas del Estado, este enfoque neoliberal busca que los beneficiarios no sean receptores pasivos sino que se transformen en sujetos activos. Este enfoque que defiende la autonomía, al mismo tiempo genera una co-responsabilidad en el éxito o fracaso de la implementación de programas para disminuir la pobreza. No sólo los organismos internacionales o NGOs, sino también los Estados en Latinoamérica estuvieron influenciados por el discurso de capacidades y auto-responsabilidad. Como consecuencia se promovieron un sinnúmero de programas focalizados de micro-crédito y desembolsos de dinero directo a familias identificadas como pobres, junto con la creación de programas de educación y salud. Ej., El Programa Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, etcétera.

En este contexto, siguiendo a Rose (2006) se puede afirmar que el neoliberalismo no es solamente un conjunto reformas económicas sino también de discursos que influyen en la acción de los Estados y transforman a los individuos. Para Molyneux, en el contexto del neoliberalismo, si bien los programas para erradicar la pobreza defienden la posibilidad de que los pobres manejen sus destinos, libres de la dependencia del Estado, al mismo tiempo “los subordinan a la disciplina del mercado” y eliminan la responsabilidad del Estado (2006: 430). El neoliberalismo defiende la auto-regulación del mercado, sin la intervención del Estado; además, promueve la responsabilidad individual, fomenta la creación de emprendedores y de ciudadanos auto-responsables (Comaroff y Comaroff, 2000). El tipo de ciudadanos que la retórica neoliberal busca establecer “operan como una pequeña firma comercial, responden a incentivos y toman en cuenta los riesgos racionalmente, de manera autónoma” (Ferguson 2010:172).

Sin embargo, la paradoja radica en que, a través la idea de potenciar las capacidades individuales si bien el neoliberalismo fomenta la autonomía como estrategia para erradicar la pobreza, al mismo tiempo promueve la creación de individuos no tan autónomos, sino funcionales al desarrollo del mercado neoliberal. La idea de auto-regulación individual no es sólo afín a la no intervención del Estado, sino también a su privatización. La pregunta ahora tiene que ver con las continuidades y desafíos que plantea el desarrollo postneoliberal.

4.- SITUANDO AL DESARROLLO POSTNEOLIBERAL EN EL ECUADOR

En el discurso oficial, los programas postneoliberales para erradicar la pobreza se conciben como una ruptura con el neoliberalismo. El Plan

Nacional de Desarrollo o Buen Vivir promulgado por el Estado postneoliberal ecuatoriano se autodefine como una alternativa radical al desarrollo neoliberal. De acuerdo con este plan, “el significado profundo del plan tiene que ver con la posibilidad de generar una ruptura con los ideales del Consenso de Washington” (SENPLADES, 2009:5), a saber, con la privatización del Estado, desregulación del trabajo, liberalización de la economía, firma de tratados de libre comercio (Harvey, 2005).

Además, el plan de desarrollo oficial del Estado postneoliberal en el Ecuador cuestiona el concepto de desarrollo clásico. De acuerdo con este discurso oficial “los conceptos clásicos del desarrollo enfrentan una crisis profunda porque reproducen concepciones colonialistas que han tenido resultados negativos en América Latina” (SENPLADES, 2013: 17). Los modelos clásicos del desarrollo “han generado una mono-cultura que ha invisibilizado las experiencias históricas de diversas poblaciones que constituyen nuestra sociedad (SENPLADES, 2013: 16).

Además el Plan Nacional de Desarrollo se autodefine como una ruptura con “formas economicistas de medición del desarrollo” (SENPLADES, 2013:6). Cuestiona la forma de medir el desarrollo a partir del crecimiento económico y la idea de que el problema de la pobreza se resuelve a partir impulsar el crecimiento. Al contrario, plantea que para lograr el desarrollo y la eliminación de la pobreza “se deben priorizar a los seres humanos y no a los mercados o la producción” (SENPLADES, 2013: 17). De acuerdo con el plan, en vez de medir el crecimiento económico es necesario dar cuenta del bienestar de la población a partir de “variables relativas a la satisfacción de las necesidades humanas o al desarrollo humano” (SENPLADES, 2013: 17). La eliminación de la pobreza se logra mediante el “incremento de las capacidades y oportunidades humanas orientado a la satisfacción de necesidades diversas como la participación, la libertad, la identidad, etc.” (SENPLADES, 2013: 17). La idea oficial del Buen Vivir significa:

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, de amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El florecimiento de las libertadas, oportunidades y capacidades de todos los individuos” (SENPLADES, 2013: 6).

Se puede decir que los principios éticos del discurso oficial del plan dan prioridad al acceso equitativo a medios sociales y culturales de subsistencia. El plan cita a Nussbaum (2002), seguidora de Sen, para acentuar la importancia de disminuir la pobreza a partir de la redistribución justa y el incremento de la participación y autonomía de los

sectores menos favorecidos. Sin embargo, a pesar de que el plan critica, tanto al desarrollo clásico como al neoliberalismo, existen continuidades con estos paradigmas. Para Catherine Walsh (2010) aunque el discurso oficial del Buen Vivir cuestiona al desarrollo europocéntrico, al mismo tiempo aparece influenciado por filosofías liberales europeas. El paradigma de desarrollo postneoliberal utiliza un “enfoque humanista y sustentable de desarrollo occidental” (Walsh 2010:20). Al tomar como referente filosofías occidentales, el desarrollo postneoliberal reproduce una visión clásica del desarrollo.

Más aún, el concepto de desarrollo postneoliberal es doblemente contradictorio. Su naturaleza inconsistente no tiene que ver únicamente con el hecho de que este paradigma critica y a la vez reproduce un tipo de desarrollo europocéntrico, sino también con su relación ambigua con el tipo de desarrollo promulgado por el neoliberalismo. En particular, debido a que el Buen Vivir tiene afinidad con el paradigma de capacidades de Sen, se puede decir que de cierta forma el Buen Vivir también constituye una continuación al neoliberalismo que dice criticar. Como se mostró, el neoliberalismo utiliza el enfoque de Sen como estrategia para implementar programas de desarrollo que promueven la auto-responsabilidad. Por tanto, la conexión entre el desarrollo postneoliberal y filosofías liberal-occidentales, que defienden un tipo de capitalismo humanista, no solamente pone en tela de juicio la idea del Buen Vivir como una crítica radical al desarrollo, sino como alternativa al neoliberalismo. Contradictoriamente, a pesar de que se critica al neoliberalismo, el concepto del Buen Vivir forma parte, al mismo tiempo, del proceso de “humanización del neoliberalismo y la globalización” (Walsh, 2010:20).

Mientras para autores como Bebbington y Bebbington (2011) estas contradicciones vuelven legítima la asimilación del postneoliberalismo al neoliberalismo, otros autores prefieren describir al desarrollo postneoliberal como el resurgimiento de un enfoque estructuralista en Latinoamérica. El resurgimiento de este enfoque, promulgado por la CEPAL durante la década de los setenta (Wilson et.al., 2015), se denomina neo-estructuralismo. De acuerdo con Murray y Overton, el neoestructuralismo se diferencia del paradigma estructuralista en que “la noción de centro-periferia que sostuvo al pensamiento estructuralista no es explícitamente evidente en la mayoría de escritos acerca del neoestructuralismo” (2011: 311). Además, el neoestructuralismo constituye una alternativa al neoliberalismo. De acuerdo con Murray, el neoestructuralismo construye un tipo de Estado fuerte para que las periferias puedan eliminar “su condición de dependencia de recursos primarios” (2011: 311). Para el neoestructuralismo, una economía constituida a partir de la lógica de competencia del mercado es problemática en tanto

genera el establecimiento de un tipo de “competencia oligopolística” y “el estancamiento de las ventajas comparativas” (2011: 311). Ambos concebidos como obstáculos para el desarrollo de las periferias.

A partir de los debates acerca de cómo concebir al desarrollo postneoliberal se puede argumentar que este tipo de desarrollo no solamente está compuesto por los principios del neoestructuralismo sino que, al mismo tiempo, tiene elementos de continuidad con el neoliberalismo. Si bien concuerdo con el hecho de que el postneoliberalismo es neoestructural, en tanto retoma el papel del Estado en la regulación de la economía e incrementa el gasto social a partir de la implementación de programas redistributivos, cabe decir que al mismo tiempo retoma elementos del neoliberalismo.

Los programas neoliberales para combatir la pobreza reestructuraron la idea de que el Estado era responsable del bienestar de la ciudadanía en general. En su lugar, se planteó la necesidad de implementar programas de salud y educación focalizados o en favor de grupos previamente diagnosticados como pobres. Además de la focalización de estos servicios, los programas para erradicar la pobreza en el neoliberalismo han buscado transferir directamente depósitos de dinero en efectivo a familias específicas, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida (Ferguson 2010). La continuidad de este depósito está condicionado o depende de la capacidad que muestren los pobres “para resolver sus propios problemas” (Ferguson 2010:174). De ahí que estos programas establecen formas de control como condición para la continuidad en la transferencia de dinero. Por ejemplo, son obligatorias las visitas al médico o asistir a la escuela como forma de asegurar que el dinero transferido está siendo gastado de manera eficiente (Molyneux 2006). Los mecanismos de control miden el grado de auto-responsabilidad que tiene un individuo, como condición para el desembolso.

Por tanto, estos programas neoliberales están ligados a discursos liberales europeos (como el de Amartya Sen) que incentivan el fortalecimiento de la elección individual o a la creación de individuos no dependientes y auto-responsables, con capacidad para administrar su propio dinero de tal forma que puedan salir de su situación de pobreza. Por ejemplo, el programa neoliberal para la erradicación de la pobreza denominado Oportunidades, promulgado por el Estado mexicano, no solamente ha incrementado el gasto social entre las familias pobres del sector rural y urbano, a través del desembolso de dinero, sino que también ha fomentado la auto-responsabilidad (Molyneux 2006). En el neoliberalismo, la responsabilidad que antes tenía el Estado en la erradicación de la pobreza es en parte transferida al individuo.

En el Ecuador, los programas neoliberales para eliminar la pobreza tenían como lógica la competencia entre proyectos. Los pro-

gramas de desarrollo para eliminar la pobreza en la Amazonía se realizaban a través de ECORAE (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico), la institución a cargo de la distribución de proyectos de desarrollo en la región durante el neoliberalismo. ECORAE utilizó el mecanismo de la competencia entre diversos proyectos como criterio para su selección. ECORAE esperaba estándares de alta calidad en la presentación de los proyectos, que eran responsabilidad de las mismas comunidades; sólo los mejores proyectos obtenían recursos para su financiamiento (Andrade, 2004). Durante el neoliberalismo, ECORAE era la institución responsable por la redistribución del 10% de las rentas petroleras. La redistribución de estas rentas se realizaba a partir de una estrategia que beneficiaba a familias específicas mediante dos opciones, desembolsos directos para aliviar sus necesidades básicas y proyectos de agricultura para mejorar los ingresos familiares.

Con el surgimiento del postneoliberalismo en el Ecuador, los proyectos no se establecen mediante mecanismos de competencia directa, sino que surgen de la planificación directa del Estado. En la implementación de proyectos estatales en la Amazonía durante el postneoliberalismo, el criterio de selección no se construye a partir de la competencia entre proyectos, como ocurría en el neoliberalismo; más bien, es el criterio del Estado el que determina su implementación. De acuerdo con el discurso oficial, el Estado busca disminuir la pobreza en la Amazonía a partir de la implementación de proyectos de compensación en localidades afectadas por la explotación del petróleo. Por tanto, no se trata de la transferencia de dinero a familias específicas, sino de la implementación directa de proyectos estatales en comunidades indígenas específicas. Por tanto, si bien en el postneoliberalismo existe focalización como en el neoliberalismo, la focalización de los proyectos de redistribución en el postneoliberalismo benefician a comunidades enteras y no sólo a familias o individuos específicos.

En este contexto, se puede decir que el postneoliberalismo a diferencia del neoliberalismo y consistente con el neo-estructuralismo recobra el papel del Estado en la implementación de programas de desarrollo e incrementa el gasto social. Sin embargo, también existe una continuidad con el neoliberalismo en tanto los programas de compensación de la Amazonía que implementa el Estado postneoliberal, tratan de superar una lógica paternalista o de dependencia del Estado. Sin embargo, a diferencia del neoliberalismo no existen mecanismos de control que garanticen la formación de un sujeto no dependiente y auto-responsable. Tampoco se generan fuentes de trabajo asalariado, que permitan la inserción de estas comunidades al mercado (Wilson et.al., 2015). Por tanto, aunque el surgimiento del postneoliberalismo ha sido descrito como una “alternativa a la modernización desarrollista

neoliberal” (Escobar, 2010:3), planteo con Alejandro Grimson, que “el postneoliberalismo más bien constituye una combinación de ideologías” ligadas tanto al desarrollismo como al neoliberalismo (2011:446).

5.- ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN E INTERSECCIONALIDAD EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA: ANÁLISIS DEL PROYECTO CIUDADES DEL MILENIO

Luego de situar al desarrollo postneoliberal como continuidad y ruptura con el neoliberalismo, se trata de entender los efectos de la implementación de este proyecto en Playas del Cuyabeno, a partir del concepto de acumulación por desposesión de David Harvey (2004). El concepto de acumulación por desposesión es útil para estudiar la pobreza más allá de la idea de escasez de recursos o capacidades. Se trata de entender los efectos de la implementación de programas para erradicar la pobreza como parte del problema.

De acuerdo con el discurso oficial, las reformas del desarrollo postneoliberal en la Amazonía ecuatoriana se enmarcan, tanto en la necesidad de disminuir la pobreza en la región como en la compensación de las comunidades afectadas por la extracción de petróleo. En el 2013, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó la necesidad aumentar la explotación petrolera para mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Amazonía es la región como mayor índice de pobreza en el Ecuador. De acuerdo con el presidente, con el aumento de las rentas petroleras se “construiría infraestructura y vencería a la pobreza y la enfermedad en la Amazonía” como forma de “devolver en obras, la riqueza extraída a sus verdaderos dueños, los pueblos amazónicos” (Coba, 2015:2). En el 2010, el gobierno Ecuatoriano, en el marco de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, aprobó una ley que obliga a invertir el doce por ciento de las rentas petroleras dentro de las comunidades indígenas que han sido afectadas por proyectos de extracción del crudo. En la comunidad de Playas del Cuyabeno, el cumplimiento de esta ley se tradujo en la implementación del proyecto Ciudades del Milenio. Playas del Cuyabeno fue la primera de doscientas comunidades indígenas que aparentemente se beneficiarán con este proyecto de compensación y erradicación de la pobreza.

Este proyecto, que fue inaugurado en 2013, consistió en la construcción de alrededor de setenta casas para las familias de la comunidad, una escuela moderna con dos laboratorios, un centro de salud, un coliseo y un edificio para el área administrativa. El dinero que el Estado desembolsó para la implementación de este proyecto fue de entre 18 a 20 millones de dólares. Cada una de las casas fue evaluada en sesenta mil dólares (Wilson et.al., 2015) y fue equipada con refrigeradores, cocinas de inducción, ollas, camas, colchones teléfono, una computadora

con internet y un mueble para la sala. Además, estas casas fueron dotadas con servicios de electricidad, agua potable, y saneamiento.

Como se dijo, los efectos que ha tenido el postneoliberalismo en las comunidades indígenas han sido estudiados a partir del análisis de la expansión de las fronteras extractivas (Bebbington y Bebbington, 2011; Davidov, 2013; Vallejo, 2014); la división de la organización política de los indígenas (Martínez, 2014) y la criminalización de sus líderes (Davidov, 2013; Moore y Velazquez, 2011). La implementación de programas para erradicar la pobreza se ha estudiado a partir del análisis de porcentajes en relación al aumento del gasto social (Grugel y Riggirozzi, 2012). Sin embargo, menos se ha dicho acerca de las consecuencias que la implementación de programas de desarrollo postneoliberal generan en la vida cotidiana de las comunidades indígenas.

A decir de los críticos de la teoría del desarrollo, la pobreza no solamente se produce por falta de redistribución de recursos, sino como consecuencia de la implementación de proyectos de desarrollo (Escobar, 1996). Si el problema de la pobreza se estudia únicamente a partir de la carencia de recursos económicos o capacidades, las consecuencias de las medidas para erradicarla no necesariamente forman parte del problema. Sin embargo, a partir de la utilización de la teoría de acumulación por desposesión es posible dar cuenta de los mecanismos mediante los cuales la implementación de programas de desarrollo constituyen parte del problema. A decir de Harvey (2004), el capitalismo genera pobreza no sólo mediante la generación de escasez, sino a partir de la inclusión de diversas poblaciones al mercado y la producción de deuda externa vía la implementación de programas de desarrollo. Para Harvey, esta implementación, no solamente tiene que ver con la voluntad de disminuir el porcentaje de individuos pobres sino que constituye una solución para resolver las crisis de sobreacumulación.

De acuerdo con el análisis de Marx (1968), el proceso de acumulación originaria del capital trajo como consecuencia la mercantilización y privatización de la tierra, la expulsión forzosa de los campesinos, la transformación de la propiedad colectiva y estatal en propiedad privada, la eliminación de formas alternativas de producción y consumo, etcétera. Para Marx, esta acumulación fue la que permitió la formación del sistema capitalista. Sin embargo, a decir de Harvey (2004), si bien es acertada la descripción de Marx acerca de las consecuencias de la acumulación, el error consiste en concebir esta acumulación únicamente como fase inicial del capitalismo. Para Harvey, existe un constante proceso de acumulación que resulta en la desposesión de recursos materiales y formas de vida diversas (2004:116). Las formas de vida constituyen un conjunto de bienes o activos que permiten la subsistencia y generan identidades (Bebbington, 2008).

Para Harvey, la crisis de sobreacumulación ocurre debido a la propia naturaleza contradictoria del capitalismo. La lógica del capital supone el constante crecimiento y acumulación de capital. Sin embargo, este constante crecimiento genera a la vez crisis de sobreacumulación. Para Harvey (2009) la sobreacumulación son los “excedentes de capital y fuerza de trabajo que se producen en el capitalismo y que no encuentran ningún medio para generar rentabilidad a partir de su transformación en valores de uso social” (2009:63). Estos excedentes de capital no pueden ser invertidos sin generar una pérdida. Por tanto, para evitar devaluaciones que puedan absorber los excedentes de capital en un espacio, las crisis de sobreacumulación son desplazadas a otros espacios.

En palabras de Harvey “la expansión geográfica del capital y la reorganización del espacio son los mecanismos que permiten resolver las crisis de sobreacumulación” (Harvey, 2009:63). Estos excedentes de capital son absorbidos mediante la utilización de, al menos, dos estrategias, a saber, “un desplazamiento temporal que supone la inversión en proyectos a largo plazo o de gasto social” o “un desplazamiento espacial (de la crisis) que se realiza mediante la apertura de nuevos mercados en otros espacios, nuevas capacidades de producción, de obtener recursos y condiciones de trabajo” (Harvey, 2009:63). Se presta dinero a países que no tienen la suficiente liquidez para la implementación de proyectos de desarrollo. Esta inversión, que permite aliviar la crisis en un lugar, tiene como efecto el aumento de la dependencia y deuda en otros. De acuerdo con Harvey la implementación de proyectos de desarrollo no solamente alivia las crisis del capitalismo sino que también promulga la inclusión al mercado de espacios y poblaciones específicas. Esto a su vez implica el surgimiento de procesos de despojo o acumulación por desposesión.

Al igual que los críticos del desarrollo y los teóricos de la dependencia, a decir de Harvey, la implementación de proyectos de desarrollo y erradicación de pobreza están ligados a intercambios desiguales entre distintos espacios. Sin embargo, mientras que para los teóricos críticos del desarrollo estos intercambios se enmarcan en las relaciones históricas entre el norte y sur global, para Harvey, la forma en la que los excedentes de capital se desplazan son más ambiguas, no sólo se dan entre norte y sur, sino también entre norte y norte, etc. En palabras de Harvey este proceso ocurre de la siguiente manera:

“Aunque es deseable que estos espacios posean medios de pago (moneda o mercancías), si un territorio no tiene formas de pago, se le dará crédito o ayuda para que pueda pagar en el futuro. De esta forma, si bien el problema de la sobreacumu-

lación es aliviado, esta solución sólo funciona en el corto plazo debido a que esta transacción solamente implica una transformación temporal de excedente de mercancías en dinero o materias primas. Esta estrategia está profundamente ligada a la existencia al desarrollo desigual existente donde los excedentes disponibles en un territorio, son exportados a otros que no los tienen (...) Sin embargo, debido a que esta exportación de excedentes constituye una estrategia para evitar la devaluación y la crisis en las regiones desarrolladas, éstas también implican la exportación de devaluación y destrucción en el futuro, quizá como resultado del incremento fiscal de la deuda y las medidas de austeridad que le siguen” (Harvey, 2009:67-69).

La implementación de programas de desarrollo no está desligada de la necesidad de desplazar las crisis de sobreacumulación capitalista a otros espacios. Las crisis del capitalismo no se resuelven sólo a partir de la exclusión y explotación, sino también a partir del préstamo de ayuda (dinero) a otros países. Solo así el capital que no ha podido ser invertido encuentra la posibilidad de generar más riqueza. Sin embargo, esta forma de acumulación genera al mismo tiempo procesos constantes de desposesión, que constituyen una de las fuentes de reproducción de pobreza en la actualidad. La desposesión se establece, no únicamente a partir de la privatización de tierras y recursos naturales, sino que conlleva también “la supresión de formas culturales y sociales” que no son consistentes con las lógicas de reproducción del capital (Harvey, 2004:148).

A decir de Harvey (2004), el Estado juega un papel crucial en la generación de procesos desposesión. El Estado no sólo legitima estos procesos mediante la creación de leyes que promueven la inversión privada en nuevos territorios, sino que también implementa proyectos de desarrollo. Éstos proyectos, no solamente pueden resultar en el aumento de deuda externa, sino que también generan expropiaciones, relocalizaciones y nuevas formas de control en diversas poblaciones (Harvey, 2004:153).

Cabe decir que si bien la pobreza se concibe como consecuencia de procesos de desposesión, se argumenta que estos procesos no afectan uniformemente a todos los individuos, sino que varían de acuerdo con el lugar que los individuos ocupan en la sociedad; a saber, de acuerdo con diferencias de género o etnicidad (Davis, 2004). Si bien se trata de utilizar el concepto marxista de la acumulación por desposesión para explicar los efectos de la erradicación de pobreza como parte del problema de la pobreza, también se plantea que los procesos de desposesión deben ser entendidos a partir de la diferenciación de

las experiencias de diversos individuos. De acuerdo con Ong (2006), el concepto de acumulación por desposesión de Harvey es un concepto muy general. Sin embargo, planteo que se puede complejizar este concepto a partir de analizar etnográficamente las maneras en que los procesos de acumulación por desposesión han afectado a sujetos con experiencias diversas. Los efectos de la desposesión, no son procesos uniformes, sino que se diferencian en relación a diversas categorías como el género o la etnicidad.

En este contexto, son importantes los aportes de Charles Tilly (1999). Este autor, desarrolla un enfoque novedoso en torno a la persistencia de la desigualdad social. Tilly está interesado en entender tanto los mecanismos que hacen posible el surgimiento de la desigualdad, como las formas a partir de las cuales ésta se mantiene en el tiempo. Tilly utiliza la teoría del valor de Marx y argumenta que la desigualdad social se produce a partir de la explotación del trabajo y la monopolización en el acceso a recursos.

De acuerdo con este autor, la organización de la sociedad se hace posible a partir de la producción de pares categóricos dentro de las diversas organizaciones que la componen (desde la familia hasta el gobierno). Estos pares categóricos, si bien surgen como una especie de solución a la necesidad de organización, el problema es que al mismo permiten el mantenimiento de la desigualdad. Para Tilly, estos pares categóricos no sólo hacen posible la organización social sino que traen como consecuencia la redistribución desigual de los recursos. Esto se debe a que, para resolver los problemas de organización en su distribución, los individuos encargados del control del acceso a recursos se valen de distinciones categóricas construidas en términos de inferiorización. Por tanto, de la misma manera que la diferencia de ingreso, riqueza, etc., generan desigualdad, las distinciones de raza, etnicidad, género, clase, edad, ciudadanía, etc., hacen lo propio.

Pérez Sáinz (2014), utiliza las ideas de Tilly para crear una teoría acerca de la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina. A pesar de que el estudio de este autor es amplio y profundo, en esta investigación me limito a entender la utilización que este autor hace del concepto de pares categóricos y su influencia en la reproducción de la desigualdad. De acuerdo con Pérez Sáinz, la reproducción de diferencias en América Latina se ha generado en torno a la “inferiorización” de los individuos (2014:101). Esto ha hecho posible que “las dinámicas de poder referidas a pares categóricos” no solamente sean funcionales a las diferencias de clase, sino que las vuelven más profundas (Pérez Sáinz, 2014:101).

Para Pérez Sáinz, la inferiorización étnica, racial o de género que históricamente caracterizan a Latinoamérica, hicieron posible que, por

ejemplo, los patronos paguen menos dinero a los trabajadores debido al establecimiento y utilización de una diferenciación étnica. En este sentido, tanto para Tilly como para Pérez Sáinz, la desigualdad se reproduce debido a la existencia de pares categóricos, funcionales a la inferiorización. Estas categorías justifican el hecho de que la repartición de recursos en los mercados de trabajo se realicen de manera desigual, no sólo a partir de la diferenciación del clase, sino también a partir de divisiones en relación al género, etnia, edad y ciudadanía.

Para la feminista Kimberlé Crenshaw (1991), entender los efectos del poder a partir de una sola categoría tiene como efecto la generalización de la diversidad. En el mismo sentido que Tilly y Pérez Sáinz, Crenshaw plantea que es necesario tomar en cuenta las divisiones existentes en la sociedad, no como categorías naturales, sino como construcciones sociales que dividen a los individuos en términos de inferiorización. Crenshaw está interesada en entender cómo las posiciones específicas en las que estas categorías sitúan a los individuos afectan de distinta manera sus experiencias en torno al poder. Entender un tipo de poder en términos abstractos impide entender cómo, por ejemplo, una mujer indígena experimenta mecanismos de desigualdad a diferencia de una mujer blanco-mestiza. En el caso de mujeres indígenas, la intersección de mecanismos discriminatorios, no solo de género, sino también de diferenciación étnica, influyen en la manera en que experimentan la desigualdad.

A partir del estudio de la violencia contra la mujer, Crenshaw argumenta que este problema no se puede estudiar mediante unificación de las experiencias de mujeres. Esta autora plantea que es necesario hacer un cruce (intersección) entre el problema y las categorías que diferencian el lugar de una persona en la sociedad, como estrategia para entender los diversos efectos que producen mecanismos de poder específicos. En su estudio, Crenshaw plantea que a diferencia de los estudios feministas, que tienen a generalizar las experiencias de las mujeres, se trata más bien de tomar en cuenta que las mujeres son afectadas de maneras diferentes, de acuerdo con su posición.

Autores como Bebbington y Bebbington (2011) han descrito la relación entre el Estado postneoliberal y los indígenas en términos generales. Sin embargo, a partir del análisis etnográfico de los efectos de la implementación de proyectos postneoliberales, planteo que ésta no se percibe de la misma manera. Existen diferencias entre la experiencia de una mujer indígena y un hombre indígena en torno a las experiencias de desposesión, como efecto del desarrollo postneoliberal. Para Crenshaw, es necesario tomar en cuenta “la historia y el contexto en el cual los individuos existen, como estrategia para entender “qué diferencias hacen la diferencia” en las maneras en que opera el poder (1991:1299).

En este contexto, a partir de un trabajo etnográfico de dos meses en la comunidad Playas del Cuyabeno, se pudo determinar que la etnicidad, género y edad establecen diferencias en torno a los efectos de la implementación del desarrollo postneoliberal.

6.- EXPERIENCIAS DIVERSAS DE DESPOSESIÓN DE LOS INDÍGENAS KICHWA EN PLAYAS DEL CUYABENO

Los indígenas Kichwa de Playas del Cuyabeno están localizados en la provincia de Sucumbíos, cantón Cuyabeno, en el Norte de la Amazonía. En este cantón hay 7 mil habitantes, de los cuales mil son indígenas (Chisaguano, 2006). Cabe decir que en este estudio no se concibe a los indígenas como un grupo aislado y funcional. Al contrario, se afirma que, históricamente, los indígenas Kichwa han sido afectados por diversos sistemas de explotación económica.

Desde la colonización española se estableció un sistema de encomiendas que consistió en el acceso de los españoles al tributo y fuerza de trabajo indígena. La encomienda se concebía como una recompensa que otorgaba la corona a los españoles por los servicios prestados en Latinoamérica (Muratorio, 1991). Durante el siglo diecisiete, los Jesuitas establecieron misiones cerca de los territorios Kichwa en la Amazonía Ecuatoriana, en Maynas y Archidona (Muratorio, 1991; Whitten, 1976). El establecimiento de estas y otras misiones tuvieron como efecto la conversión religiosa y consecuente congregación y asentamiento de los Kichwa. Durante el siglo diecinueve, debido a la extensa cantidad de árboles de caucho en la Amazonía y, como consecuencia de la gran demanda del caucho por parte de los países Europeos y de EE.UU, los indígenas Kichwa fueron forzados a trabajar dentro de un sistema económico extremadamente violento a través del cual ellos “fueron engañados, y eventualmente esclavizados en la recolección del caucho” (Whitten, 1976:211). El incremento de demanda del caucho no solamente generó el establecimiento de prácticas violentas de trabajo forzoso, sino también la creación de las rutas “de los caucheros” (Whitten 1976:210). Estas rutas, no sólo facilitaron el incremento de la circulación de caucho, sino que hicieron posible un mayor acceso a la región Amazónica (Whitten, 1976:210).

Aunque la independencia del Ecuador se cristalizó en 1830, el Estado inició un proceso de colonización y consolidación de la Amazonía Ecuatoriana durante las últimas décadas del siglo diecinueve. A partir de la expansión de carreteras, el Estado empezó a consolidar su presencia en la Amazonía ecuatoriana (Whitten, 1976:230). A inicios del siglo veinte, con la exploración de campos petroleros en la Amazonía, el proceso de control/explotación de esta región se incrementó. En 1928, el Estado firmó un contrato con la compañía Royal Dutch Shell

para la construcción de una carretera que unió la región Andina con la Amazonía (Whitten 1976).

En 1964 el Estado aprobó la ley de reforma agraria y colonización. En esta ley se promulgó la migración de indígenas y mestizos de los Andes a territorios amazónicos, que eran considerados por el Estado como baldíos. Esto significó la intensificación de la colonización de territorios indígenas. Sin embargo, el proceso de colonización de la Amazonía se incrementó más aún durante los setenta debido a la alza de la demanda de petróleo a nivel mundial. El Estado ecuatoriano aprobó varias concesiones para la exploración y explotación de pozos petroleros en diversos territorios indígenas de la Amazonía.

En este contexto, aunque los indígenas Kichwa son concebidos como un grupo pacífico, ellos no han aceptado pasivamente la explotación laboral, extracción petrolera e incursión/contaminación en sus territorios. De acuerdo con Muratorio, desde la conquista española, los Kichwa no solamente organizaron rebeliones y confrontaron directamente a sus enemigos, sino que también utilizaron la estrategia del escape, la movilidad, el sabotaje y la negociación, como mecanismos de resistencia (Muratorio, 1991). En este sentido, si aceptamos con Muratorio (1991) que dentro de la Amazonía la migración ha sido una de las estrategias más importantes de los Kichwa (y otros indígenas) para evitar la opresión, es posible afirmar que la comunidad de Playas del Cuyabeno es el resultado de esta resistencia. Los indígenas Kichwa de Playas del Cuyabeno se encuentran en la frontera con Colombia y Perú. Esta comunidad tiene alrededor de ochenta familias (Chisaguano, 2006) localizadas en el área del bloque petrolero número quince, que es operado actualmente por la compañía estatal PetroAmazonas.

La ejecución del proyecto ciudades del milenio en esta comunidad se enmarca en el contexto de la recuperación de las rentas petroleras por parte del Estado postneoliberal (Cueva y Ortiz 2013) y la aprobación de una ley que obliga al Estado a invertir el doce por ciento de las rentas del petróleo en las comunidades afectadas por la explotación de crudo. Como se ha argumentado, este proyecto de desarrollo, si bien ha dotado a los indígenas de Playas del Cuyabeno de nuevas viviendas, servicios básicos, educación y salud, también ha generado procesos de acumulación por desposesión.

La desposesión en la Amazonía ecuatoriana está relacionada con la necesidad por parte del Estado ecuatoriano de controlar los recursos naturales de los territorios indígenas. De acuerdo con Wilson et.al. (2015) las Ciudades del Milenio en la Amazonía ecuatoriana pueden ser concebidas “como una estrategia de acumulación por desposesión diseñada para obtener el consentimiento de la población indígena para la explotación de petróleo y minerales contenidos en su territo-

rio” (2015:18). Si bien concuerdo con esta afirmación, planteo que la desposesión en este caso no se da únicamente por la expansión de las fronteras extractivas sino que también se reaparece como resultado de la redistribución. Planteo que existen tres formas de desposesión en relación a la implementación del proyecto Ciudades del Milenio en Playas del Cuyabeno. La primera está relacionada con la expansión de las fronteras extractivas y la segunda y tercera tienen que ver con la imposibilidad de los indígenas de administrar las rentas petroleras otorgadas por el Estado y la distribución de los espacios en el diseño de este proyecto.

Dado que se ha discutido ampliamente acerca de las formas en las que la expansión de las fronteras extractivas han afectado a las comunidades indígenas en el postneoliberalismo (Bebbington y Bebbington, 2011; Cielo et.al., 2016; Davidov, 2013; Vallejo, 2014), mi objetivo es entender los procesos de acumulación por desposesión que resultan precisamente de la implementación de programas de redistribución y disminución de la pobreza. Estos procesos se estudian a partir del análisis de las experiencias cotidianas de los indígenas Kichwa de Playas del Cuyabeno. El estudio etnográfico de estos efectos es fundamental. De la misma manera que el problema de la discriminación que estudia Crenshaw a partir del paradigma de la interseccionalidad, las experiencias de desposesión no son iguales, dependen del entrecruzamiento de diversas categorías que intervienen de manera diversa “en la distribución del poder en los contextos locales” (Zambrini, 2015:50).

De acuerdo con Zambrini “hablar de interseccionalidad supone hacer una elección teórica respecto de cuáles categorías se consideran relevantes para explicar la confluencia de determinadas relaciones de poder” (2015:50). En el caso de este estudio, las categorías de etnia, género y edad son las más relevantes para dar cuenta de las diversas experiencias de acumulación por desposesión en Playas del Cuyabeno. Don Gerónimo³, indígena Kichwa de treinta y siete años, habitante de esta comunidad, describe su experiencia así:

“El contratista del proyecto nos decía que iba a ser una casa de lujo. Una casa que iba a durar muchos años. Veinte años de vida. Nosotros le decíamos que queríamos hacer de una casa manera, pero ellos decían que no. Nosotros queríamos casas que duren muchos años. El dinero era de nosotros, pertenecía a la comunidad. Teníamos como veinte millones de dólares, ellos tomaron ese dinero para construir. Nosotros les dijimos que la plata era de nosotros, que el Estado nos dio el doce por

3 Para proteger la identidad de los entrevistados, los nombres son ficticios.

ciento de las regalías del petróleo. Por eso nosotros reclamamos, porque no están bien hechas las casas, ni el colegio, ni el internado. Ya están partiéndose las paredes, todo está yéndose al piso”.

Los hombres Kichwa de entre treinta y cinco a cincuenta años, tienen claro que los recursos de la explotación del petróleo no son necesariamente del Estado sino de la comunidad. De acuerdo con Wilson et.al., (2016) la comunidad de Playas del Cuyabeno fue beneficiada con este proyecto debido a que, luego de que se expulsó a Occidental Petroleum Corporation (OXI) en 2007, varios dirigentes de esta y otras comunidades (como la de Pañacocha, también beneficiada con este proyecto) empezaron a pensar en la posibilidad de formar su propia compañía petrolera indígena denominada Sacha Petrol. Esta compañía tenía como objeto lograr que, no solamente 12%, sino la totalidad de las rentas petroleras, se quedara dentro de las comunidades.

A decir de los testimonios de los indígenas con quienes conversé acerca del tema, los dirigentes dejaron una carta en la Vicepresidencia pidiendo apoyo para que este proyecto sea viable. Sin embargo, luego de que esta demanda no resultó, convocaron a un paro que duró más de dos semanas para impedir el paso de la compañía petrolera del Estado a su territorio. Luego de que el paro fue controlado, el presidente y vicepresidente del Ecuador llegaron a Pañacocha para ofrecer el proyecto de la construcción de la Ciudad del Milenio como resultado de negociaciones previas entre los dirigentes y autoridades del Estado. Aunque el proyecto Sacha Petrol no fue viable, para los indígenas, las rentas del petróleo, al estar en su territorio, pertenecen a la comunidad. Esto es importante ya que a partir de identificarse como los dueños de los recursos naturales existentes, los hombres de Playas del Cuyabeno tienen la capacidad de manifestar su inconformidad y tomar acciones frente a los problemas que ha traído el deterioro, en menos de tres años, de las casas construidas por el Estado. De acuerdo con Gerónimo, los materiales con los que se construyeron las casas son de baja calidad:

“Las casas no son de cemento o bloque sino de espumaflex, ya están empezando a despegarse. Por ejemplo, la parte de abajo de las antenas de las casas han hecho mal. Cuando llueve el agua chorrea en las gradas. Todita el agua cae ahí y ya se están oxidando todos los pasamanos. Además, las columnas de las casas se hicieron con hierro soldado, sin protección del agua. Esos hierros se oxidan y se van a despegar las sueldas (...). Las puertas también ya se están cayendo en diferentes casas. Esas puertas de aluminio se están cayendo porque, como sólo han

puesto una capa pequeñita de cemento, entonces se afloja y las puertas se están virando. Si fuera de bloque o madera, esto no ocurriría, pero como es de espuma flex los pernos se aflojan y entonces ya se están cayendo. Ellos (la constructores) nos enseñó una maqueta pero no cumplieron el modelo (...). La construcción era como para veinte años pero no va allegar ni a tres años y ya se está dañando”.

En este sentido, algunos de los hombres Kichwa de esta comunidad no consideran que los dieciocho millones de dólares que recibieron las empresas privadas se gastaron en la construcción del proyecto. Los materiales de las casas son de muy baja calidad⁴, en menos de tres años las paredes están cuarteadas y los pisos están levantados. Las conexiones de luz en varias de las casas tampoco funcionan correctamente, las capas de cemento en el piso se están desmoronando, las calles se están hundiendo, etc. Por tanto, los relatos de estos indígenas Kichwa dan cuenta de que existió un proceso de desposesión, no sólo mediante la expansión de las fronteras extractivas, sino durante la inversión de las rentas petroleras, en la construcción de las casas.

Si bien la construcción de cada casa estuvo calculada en alrededor de cuarenta mil dólares, los habitantes de esta comunidad consideran que sus viviendas no tienen este costo. Para ellos, si el Estado hubiera dado el dinero a la comunidad, seguramente hubieran construido casas de mucha mejor calidad y con menos dinero. A decir de Andrés, un indígena Kichwa de cuarenta y cinco años:

“En algunas casas ya se está deteriorando la construcción. En el coliseo, por ejemplo, las columnas ya se están oxidando. De pronto en unos diez años se puede podrir el material de las columnas y (éstas) pueden caerse. Nosotros peleamos y le dijimos a la constructora. Si Ud. va al campo Pañacocha de Petroamazonas las casas ahí hicieron con una capita galvanizada que no se oxida. Sino que eso cuesta más. Yo creo que si habían recursos para hacer eso porque no creo que veintidós millones de dólares se acaben en dos ciudades del milenio. Ahora, quién se habrá llevado, no sabemos. Esta ciudad costó de dieciocho a veinte millones. Cada casa nos dijeron que costaba cuarenta mil dólares. Nosotros no queríamos que nos hagan con este

4 Cabe decir que si bien algunos materiales no fueron elegidos por la comunidad, otros materiales de las casas del Milenio son el resultado del pedido específico de, al menos algunos líderes de la comunidad. Es necesario realizar una investigación más exhaustiva para determinar hasta qué punto los materiales fueron impuestos por las constructoras o fueron el resultado de negociaciones con los líderes indígenas.

material, pero el ingeniero se enojó. Nos dijo que nosotros no sabemos y que los recursos no eran ilimitados. Nos dijeron que iban a hacer con buen material pero no lo hicieron. Esas columnas nadie está tocando y vea, ya se están dañando. De aquí a unos años se pueden caer las columnas del coliseo”.

Los proyectos de redistribución que implementa Estado postneoliberal están mediados por procesos de desposesión. La comunidad de Playas del Cuyabeno no tuvo la posibilidad de administrar el porcentaje de rentas petroleras asignado por el Estado durante la implementación del proyecto. Esta desposesión se traduce en el rápido deterioro de los espacios construidos. La desposesión en torno al proyecto Ciudades del Milenio no solamente ocurrió antes de la obtención del proyecto (que permitió el control de los recursos naturales por parte del Estado y la expansión de fronteras extractivas), sino también a partir de la imposibilidad de controlar o administrar la implementación del proyecto de redistribución de las rentas petroleras. No solamente las casas están estropeadas, los servicios básicos como la luz y el teléfono tampoco se instalaron de manera adecuada. Los hombres Kichwa más jóvenes, de entre veinte a treinta y cinco años están especialmente preocupados por el tema de los servicios. A decir de Eduardo, un indígena de veinticinco años de edad manifiesta:

“Las conexiones de luz, la electricidad, también se está dañando en las casas. Dicen que no han puesto una varilla original de cobre, sino que instalaron una varilla que está pintada no más de (color) cobre. En las cajas de conexión subterráneas, la corriente se queda ahí y no pasa. Por eso en las paredes coge la corriente. En mi casa, por ejemplo, se quemó el medidor. Ahora tengo solamente puesto directo para tener luz porque todo ya se había oxidado. No ve que cuando llueve el agua no fluye. Se empoza y eso hace corto circuito. Todas las casas están con el mismo problema. Ellos tenían que haber hecho con alguna caída para que el agua fluya. Los tubos subterráneos los han hecho muy cerca de la superficie entonces por eso están oxidándose y hacen corto circuito”.

Además de los problemas con el servicio de electricidad, los servicios de telefonía fija e internet, tampoco funcionan adecuadamente. En particular, debido a que la mayoría de familias de esta comunidad sobreviven a partir de una economía de subsistencia, la oferta laboral es ocasional, el concepto de pagar por estos servicios no fue viable. A decir de Luis, un indígena Kichwa de veintitrés años:

“Las líneas de los teléfonos y el internet quitaron. Eso pasó porque no se pudo pagar los costos; pero también porque las líneas estaban cambiadas. Llamabas y contestaban toditas las casas. No se podía hablar porque todos se enteraban. No servían y el costo les salía alto. Al principio nos dijeron que nos iban a subsidiar. Nosotros no tenemos empleo, entonces de dónde vamos a pagar!. Ahí retiraron los teléfonos y el internet. Ya retiraron todo. A los tres meses ya teníamos que pagar más de cien dólares. Por eso algunos no están viviendo en esas casas, porque con fibra óptica ya dice que nos van a cobrar nuevamente. Pero si eso pasa, fácil, todos regresamos a la finca”.

En el caso de las mujeres, también existe una preocupación por la mala calidad de las casas. En particular, el caso de Lorena, una mujer indígena de cuarenta y cinco años a quien le derrumbaron su casa:

“Un día me dijeron, ‘doña, le vamos a botar su casa porque ahí va a ser el área del parque’. Yo les dije, ‘pero no, como me van a botar mi casa que es de cemento. Y Uds. ¿Qué tipo de casa me van a dar a cambio de mi casa?’ Yo me paré duro ahí. Yo les dije que yo no quería esa casa fea del Milenio que ellos estaban haciendo, esa casa pequeña. Yo ya les vi a esas casas que ellos estaban haciendo y eran pequeñitas y feas. La mía era más grande. Yo tenía cuatro dormitorios más una sala amplia. Por eso yo no quería. Yo les dije ‘yo no salgo y si vienen con la máquina me tumban a mi también’. Yo me senté en mi casa. Pero después ellos vinieron a sacar las cosas y me sacaron a mi. Ahí ya me destaparon las paredes, ya me destaparon ya. A mi me dio mucha pena. Mi casa era más grande. Me fui llorando. Ahí fue un poco de gente a desarmar mi casa. Así me botaron pues mi casa. Ellos no me reconocieron nada. Yo les decía que por lo menos me reconozcan de los bloques o el cemento que yo invertí, pero ellos no quisieron nada. Así me hicieron. En cambio, en esta casa del Milenio no me gusta, el piso se mancha, la pared se rompe, los tubos se oxidan. El día que demolieron mi casa me dio un dolor, casi me da un infarto de mi casita linda. Yo lloraba. Cuando me voy a encontrar una casa así!”.

La implementación de este proyecto significó, no solamente la desposesión del doce por ciento de las rentas petroleras, sino que también existió al menos una relocalización forzada como es el caso de Lorena. Si como ella describe, su casa tenía mucho más valor que la casa construida por el Estado y debido a que no recibió ningún tipo de compensa-

ción por la demolición de la casa, por el espacio de terreno que se perdió o por la relocalización forzada, se trata de una acción de desposesión.

Además del proceso de desposesión ligado a la administración de la redistribución de las rentas petroleras en la construcción del Milenio, la experiencia de las mujeres de entre treinta y cinco a cincuenta años dan cuenta de otro tipo de desposesión resultante de la implementación de este proyecto y no presente en los relatos anteriores. A decir de Teresa, una indígena de cincuenta años:

“Yo prefiero vivir en la finca. Ahí estoy tranquila. Nadie me molesta. Nadie me interrumpe. Libertad mía! En la finca yo corto el monte un rato y luego me pongo a descansar. Me gusta porque nadie me mira. Si me duermo en el día nadie me juzga. Nadie me golpea la puerta como en el Milenio. En la finca no tengo que estarme levantando todo el tiempo a ver quien es. En la finca es más libre. Hago el desayuno. Descanso. Después trabajo un rato. Así se pasa. Por eso yo no paso, casi aquí, mas paso en la finca. Aquí hay muchas visitas. Pura familia en todos los barrios. Si vienen tengo que brindarles chicha. Si estoy comiendo tengo que darles comida. En la finca en cambio no. Si quieren irme a visitar, van de vez en cuando no más”.

De acuerdo con Harvey los procesos de desposesión no solamente implican la “apropiación de bienes, incluidos los recursos naturales,” como ocurrió con la apropiación de las rentas del petróleo y “la expulsión por la fuerza,” sino también la “supresión de formas alternativas” indígenas (Harvey, 2004:116). Si para Harvey (2004) la desposesión se relaciona con la transformación de formas de vida específicas, el hecho de que esta comunidad no fue participe en el diseño de este proyecto, no solamente trajo como consecuencia el rápido deterioro de los espacios construidos, sino también que la distribución de los espacios no se hayan realizado en concordancia con las formas de vida de esta comunidad. En el caso de algunas mujeres indígenas, el espacio del Milenio es concebido como una pérdida de libertad. Como ilustra Mariana, una mujer indígena de cuarenta años de edad:

“Ahora hay muchos más conflictos, peleas y chismes. Los hombres se van a trabajar y a las mujeres que se quedan, les están viendo todo. Que tu mujer estaba así les dicen y ahí se pelan. Todo el mundo le está viendo. En la finca más bien estoy bien, en cambio en el Milenio, vecino por ahí, vecino por allá. Yo no me enseño aquí. Hay mucha bulla. Música por aquí y por allá. Brincan y pelean por aquí y por allá. No se puede ni dormir la siesta porque las casas están seguiditas. En el Milenio, tíos, pri-

mos, por ahí están llegando y tenemos que tener la chicha. Si no tenemos, ellos murmuran que estamos mezquinando la chicha y que no les queremos dar (...). Si me quedo aquí ya me toca dar chicha a los familiares que vienen, y como vienen a cada rato porque están cerca, siempre hay tener chicha. Eso es ir a sembrar, cosechar y cocinar, todo el tiempo. Porque si no les doy van a pensar que no les quiero brindar. Es mas trabajo para vivir aquí porque cuando ya se acaba el verde, la yuca es difícil traer, toca ir y todo. En cambio en la finca vivo solita y paso tranquila. Me baño, trabajo, descanso y nadie está ahí alado viéndome”.

Si bien el Estado asignó el presupuesto para la construcción de la Ciudad del Milenio, esta comunidad Kichwa fue excluida del diseño y distribución de los espacios del proyecto. Como se dijo, la distribución de los espacios no concuerda con parte de las formas de interacción de la comunidad. Antes de la construcción de la Ciudad del Milenio existían grandes espacios entre viviendas. Esta distribución permitía mayor libertad para las mujeres. Con el Milenio, que es cómo los indígenas Kichwa denominan a este proyecto, las casas fueron construidas una junto a la otra. Esta distribución de espacios ha traído como consecuencia que las mujeres de la comunidad se sientan más controladas. Por otro lado, la nueva distribución del espacio implica, de cierta manera, la desposesión de una parte del tiempo libre de las mujeres debido a las visitas constantes de los familiares cercanos. Algunas mujeres que viven en el milenio deben tener chicha preparada debido a la costumbre que esta comunidad tiene de brindarla a los invitados. Esto no solamente implica que se tenga que sembrar y cosechar más yuca o plátano, sino también transportarla desde la finca, cocinarla y fermentarla.⁵

No se pudieron obtener entrevistas con los jóvenes estudiantes del colegio. Sin embargo, los cambios generados en el rol de los jóvenes que estudian en el colegio del Milenio, que crecieron en las fincas y en el pequeño centro poblado que existía en Playas del Cuyabeno y que ahora viven en el Milenio es fundamental ya que permiten visibilizar las contradicciones de la implementación de este proyecto. A decir de uno de los padres:

“De aquí a unos diez años esperamos ya tener profesionales de aquí mismo, de la comunidad, para que no andemos buscando

5 Sin embargo, cabe decir que de acuerdo con entrevistas realizadas luego de esta primera fase de investigación, la relación Milenio-disminución del tiempo libre es mucho más ambigua. Para algunas mujeres el Milenio ha significado la disminución del tiempo de trabajo. Por tanto, es necesario profundizar en este tema para determinar las dimensiones complejas que caracterizan esta relación.

en otro lado. Ojalá que mi hijo sea profesional en lo que sea. Mi idea es que mis hijos estudien algo, pero que estudien bien. Si no estudian, yo les veo una sociedad sin futuro. Quiero que estudien. Uno, por la situación profesional, para que sean profesionales y otro por la situación económica. Imagínese uno de obrero, gana lo mínimo y con bastante esfuerzo. Yo les digo a mis hijos, les pongo mi ejemplo. Yo no he tenido formación académica y tengo que estar en la finca. Cuidar los animales. Tengo que irme a trabajar con el machete, la motosierra y eso es cansado. En cambio, siendo un profesional, se trabaja frente a una computadora, el desgaste no es físico sino mental. Está Ud. bien sentado con aire acondicionado en la oficina y no se está quemando en el sol todo el tiempo. Eso les hago ver para que se den cuenta como es la vida. Nosotros tenemos que trabajar en lo que se puede, porque si no hay dinero nada se puede hacer. Pero en la finca yo trabajo a mi gusto. Cuando tengo que trabajar más, lo hago, cuando tengo que trabajar poco, trabajo poco”.

Por un lado, los padres quieren que sus hijos estudien. El trabajo que se obtiene sin educación es un trabajo de “sufrimiento” por la dificultad de trabajar en la selva y la mala remuneración que se obtiene al trabajar fuera. Sin embargo, por otro, los padres ven con preocupación los cambios de sus hijos, como consecuencia de la construcción de este espacio urbano. En una reunión de todo el colegio, donde estaban los alumnos, profesores y padres de familia; éstos últimos manifestaron la necesidad de incrementar el control de los jóvenes. Discutieron acerca del corte de cabello que debían utilizar, las uñas, la manera de utilizar el uniforme, hasta la prohibición de salir en las noches, de asistir a las fiestas de la comunidad, etc. A decir de un joven que habló en la reunión:

“Si, es verdad que hay jóvenes que andamos así, con un corte de pelo, con un arete; pero a veces no lo hacemos porque realmente queremos andar así, sino que hay padres que no nos ponen atención. Sólo le toman en cuenta al hijo para regañarle, para darle juete (látigo), más no para decirle ‘hijo como te fue en el colegio’. ‘Hijo cómo estás’. ‘Hijo aprendiste bien hoy’. Eso es todo lo que quiero decir”.

Si bien para los padres el Milenio constituye al mismo tiempo la posibilidad de que sus hijos estudien y tengan un mejor nivel de vida, por otro, este espacio trae como consecuencia la pérdida de autoridad. Dado que la vida de estos jóvenes ya no gira tanto alrededor de la vida en el monte, sino en el colegio, la autoridad asentada en gran medida en

la transmisión de conocimiento acerca de la Amazonía ya no es la única que influencia las dinámicas de la estructura familiar. En la mañana, los jóvenes asisten a clases, en la tarde, tienen que cumplir con las tareas del colegio. Por tanto, la estructura familiar ya no solo depende del aprendizaje en el monte, sino de los requisitos del Milenio.

Como consecuencia, la vida de los jóvenes se encuentra entre las obligaciones de estos dos mundos. Los padres muestran una actitud ambigua frente a estos cambios. Por un lado, debido a la pérdida de autoridad generada por la implementación del Milenio, los padres exigen mayor autoridad por parte de los profesores. Por ejemplo, hubo una maestra extremadamente exigente a quien algunos de los padres recuerdan con nostalgia ya que “puso orden en el colegio”. Sin embargo, a la par que pugnan por un mayor control de los jóvenes, manifiestan su descontento cuando los profesores incrementan las tareas de sus hijos. Esta ambigüedad es coherente. La fórmula, más disciplina menos tareas en la que se mueven los padres tiene como objetivo que sus hijos tengan tiempo para lidiar con las responsabilidades y aprendizajes de ambos espacios. Si bien intentan que sus hijos estén controlados dentro del espacio del milenio y tengan una mejor educación, a la vez manifiestan la necesidad de que ellos tengan tiempo para lidiar con las responsabilidades y aprendizajes de la finca y el monte.

6.-CONCLUSIÓN

De acuerdo con esta investigación, el problema de la pobreza no está únicamente ligado a la carencia o falta de capacidades sino a los programas que se implementan para erradicarla. De acuerdo con los teóricos del desarrollo, la implementación de programas para la disminución de la pobreza puede tener efectos negativos en las poblaciones en donde se lleva a cabo. Para David Harvey (2004), el desarrollo está ligado a las crisis de sobrecumulación del capitalismo. Si bien los programas de desarrollo para resolver el problema de la pobreza ayudan a superar la crisis del capitalismo en un lugar, en los lugares donde estos proyectos son implementados pueden generar procesos de desposesión. Sin embargo, la desposesión no se experimenta de la misma manera. A partir de la teoría de la interseccionalidad, planteo que la acumulación por desposesión tiene diferentes aristas en relación a la posición de género, edad y diferenciación étnica de sujetos específicos.

A partir del análisis del proyecto Ciudades del Milenio distingo al menos tres aristas de la desposesión. En primer lugar, la desposesión del control de recursos naturales (Bayón y Wilson 2015). Los relatos de los hombres de la comunidad Kichwa de Playas del Cuyabeno (de entre treinta y cinco a cincuenta años), hacen visible un tipo de despojo que tiene que ver con la imposibilidad, tanto del control de sus recursos naturales, en

este caso el petróleo, como de la administración del doce por ciento de las rentas petroleras que el Estado invirtió en la implementación del proyecto del Milenio. En cambio, los hombres jóvenes de entre veinte a treinta y cinco años muestran mayor preocupación por el deterioro de los servicios básicos. En el caso de las mujeres de esta comunidad (de entre treinta y cinco a cincuenta años de edad), además de que la implementación de este proyecto es concebido como desposesión de la posibilidad de decidir acerca de los materiales de construcción y distribución de espacios, también es pensado como la desposesión del espacio de libertad y tiempo libre.

Sin embargo, cabe hacer algunas aclaraciones acerca estas distinciones dentro de la investigación. El concepto de diferenciación étnica no tiene que ver con una diferenciación indígenas-blanco mestizos dentro de la comunidad. Los miembros de la comunidad entrevistados se autoidentificaron como indígenas Kichwa. Por tanto, no se puede establecer una diferencia entre indígenas y blanco-mestizos dentro de la comunidad. Sin embargo, como se muestra más adelante, a partir de los testimonios de los indígenas de esta comunidad, en la interacción entre indígenas Kichwa (beneficiarios del proyecto) y blanco mestizos (técnicos y constructores del Milenio), se establece una distinción entre quienes saben (blanco-mestizos) y quienes no saben (indígenas Kichwa). Este par categórico, que inferioriza a los que no saben, justifica el hecho de que los indígenas no hayan sido parte en las decisiones acerca de la utilización de algunos materiales o la distribución de los espacios en este proyecto. Por tanto, esta categoría es importante en tanto hizo posible la generación de procesos de desposesión durante la implementación del proyecto del Milenio.

Por otro lado, aunque en esta investigación no se concibe al género como enmarcado dentro de una diferenciación binaria-biológica, la razón por la que no se analizan los roles de género, más allá del binarismo hombre-mujer, se debe a que en los meses de investigación realizada no se pudo observar (lo cual de ninguna manera sugiere que no exista) una distinción de género más allá de este binarismo. Por otro lado, esta distinción binaria se entiende, no como una diferenciación natural-biológica, sino precisamente como consecuencia de los pares categóricos que se producen socialmente para establecer mecanismos de organización e inferiorización. Es el poder, como supone la feminista Crenshaw, el que construye estos conceptos binarios. Por tanto, aunque de ninguna manera estos binarismos son naturales, su construcción ficticia tiene consecuencias reales en la vida de las personas afectadas. De ahí que en el caso de las mujeres de esta comunidad, la desposesión no sólo tiene que ver con los recursos, o los materiales de las casas, sino con la libertad y el tiempo libre.

Sin embargo, cabe añadir que para la comunidad, el Milenio no sólo implica desposesión. La comunidad se esfuerza por mantener el

Milenio debido a que este espacio también es imaginado como positivo. De acuerdo con los relatos de los indígenas de Playas del Cuyabeno, este proyecto contiene tanto experiencias de desposesión como la posibilidad para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, sobre todo de las futuras generaciones. Estos dos elementos contradictorios no están desconectados. Una de las razones principales por la cual los indígenas de esta comunidad consideran que no fue posible hacer realidad la obtención de la totalidad de recursos petroleros mediante la creación de la empresa indígena Sacha Petrol se debe al hecho de que no existían profesionales con la capacidad llevar a cabo y mantener el proyecto en la comunidad. A decir de Manuel:

“Esto de Sacha Petrol (la compañía indígena) no era viable porque no tuvimos gente preparada, ingenieros para que pudieran administrar la compañía. Por eso esperamos que de aquí a algunos años ya podamos tener profesionales de la comunidad, para no depender de gente de otros lados”.

La desposesión del control de los recursos naturales está directamente relacionada con la falta de educación. De ahí que el concepto de jóvenes en esta investigación ⁶está relacionado con mostrar las contradicciones que genera este proyecto. A saber, el Milenio, al ser percibido como el espacio de la educación, se convierte también en el espacio que podría, no solamente hacer posible el control de los recursos naturales, sino también de la administración de proyectos. En particular, porque la justificación de los técnicos e ingenieros que construyeron el Milenio para no tomar en cuenta las inquietudes de la gente de la comunidad en torno a los materiales o la distribución del espacio del proyecto fue que los indígenas no eran técnicos. A decir de Manuel: “los ingenieros se imaginaban que nosotros nunca habíamos visto cosas modernas. Hablamos con ellos, pero ellos decían que todo estaba quedando bien. Nos preguntaban: ‘a ver, ¿quién es el ingeniero, Ud.?’ y ahí nos decían, ‘Ahhh entonces el ingeniero es el que sabe’. Por eso ellos no nos escuchaban.”

Por tanto, si bien los indígenas de esta comunidad manifiestan su descontento en relación a la desposesión de las rentas petroleras, también conciben este nuevo espacio como la posibilidad para no reproducir procesos de desposesión en el futuro. Para ellos, esto se lograría mediante la educación y profesionalización de sus hijos. La educación

⁶ Debido a que en esta investigación se concibe como sensible la realización de entrevistas con jóvenes, el tiempo de investigación de campo no fue suficiente como para establecer una relación más estrecha con este grupo. Sin embargo, el rol que ocupan los jóvenes en la comunidad permite entender las contradicciones de desposesión y esperanza que ha significado la construcción del proyecto Ciudades del Milenio y se considera como importante en esta investigación.

marca las dinámicas de la Comunidad del Milenio. A mi llegada a la comunidad, en enero de 2016, debido a la caída del precio del petróleo, el Estado había despedido a todo el personal administrativo de la escuela y colegio, al personal de limpieza, etc. Sin embargo, los profesores se dividieron estas tareas. Además, el presupuesto para la alimentación de los alumnos tampoco había sido desembolsado. No había combustible para la canoa que recoge a los niños de otras comunidades para asistir a la escuela. El gasto de la gasolina tuvo que ser recolectado por los padres. La limpieza de cada barrio de la comunidad se realiza mediante mingas. La inasistencia se controla a partir de la imposición de multas.

Si la comunidad ha generado sus propias dinámicas para el mantenimiento del Milenio se debe a que a pesar de que no están conformes con los resultados de la implementación del proyecto, también conciben a este espacio como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida en el futuro. Uno de los ejes de la comunidad es la escuela y colegio del Milenio. Allí se visibilizan, tanto los procesos de desposesión como el deseo de mejorar. De ahí que, la posibilidad de que el Milenio se mantenga, no se debe en su totalidad al Estado. Debido a la crisis del petróleo, éste ha disminuido su presencia (incluso el teniente político fue eliminado de la comunidad). El mantenimiento del Milenio tiene que ver más bien con la existencia de un afuera, del espacio de libertad de la finca, que no es el Milenio. Cabe decir que no concibo a la finca como espacio aislado, funcional o, como el reducto de una cultura antigua a-histórica, divorciado de lo que ocurre en el Milenio. Más bien se trata de un espacio que está profundamente ligado al Milenio

Paradójicamente el espacio de desarrollo del Milenio se mantiene a partir del espacio en el cual no se implementó el proyecto, a saber el espacio de las fincas de las familias Kichwa. Debido a que en éste espacio los indígenas tienen la posibilidad de mantener una economía de subsistencia, el control tiempo de trabajo y del tiempo libre, el Milenio puede subsistir. Con ello, no se pretende justificar el abandono del Estado o promulgar la generación de individuos auto-responsables como plantea el neoliberalismo. El estado se concibe como responsable de la redistribución y la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Sin embargo, se puede afirmar que esto no se puede lograr cuando los programas de redistribución y disminución de pobreza están acompañados de procesos de desposesión, como es el caso de esta comunidad. Por tanto, la posibilidad de implementar proyectos de desarrollo que no estén mediados por procesos de desposesión debe empezar con la construcción de proyectos en los cuales los indígenas puedan decidir. No me refiero a la decisión de individuos auto-responsables ligados a las lógicas de competencia del mercado. Se trata más bien, de que individuos autónomos a las lógicas del mercado

puedan decidir el tipo de proyectos requieren, en concordancia con su economía de subsistencia, tiempo libre y de trabajo, distribución de espacios, etc., como de cierta forma ocurre en el espacio de las fincas.

BIBLIOGRAFÍA

- Andrade, Karen 2004 “El Papel de la ECORAE en la Region Amazonica” en Fontaine, Guillaume (comp.) *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: Las apuestas* (Quito: FLACSO) Vol., N° 2.
- Ansell, Aaron 2014 *Zero Hunger: Political Culture and Antipoverty Policy in Northeast Brazil* (North Carolina: UNC Press Books).
- Auyero, Javier 2004 *Vidas beligerantes: dos mujeres argentinas, dos protestas, y la búsqueda de reconocimiento* (Universidad Nacional de Quilmes).
- Bebbington, Anthony, Bebbington, Denise Humphreys 2008 “Mining and social movements: struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes” *World Development*, 36(12), 2888-2905.
- Bebbington, Anthony y Humphreys Bebbington, Denise 2011 “An Andean avatar: Post-neoliberal and neoliberal strategies for securing the unobtainable” en *New Political Economy*, 16(1), 131-145.
- Brysk, Alison 2000 *From tribal village to global village: Indian rights and international relations in Latin America* (Stanford: Stanford University Press).
- Canessa, Andrew 2006 “Todos somos indígenas: Towards a new language of national political identity” en *Bulletin of Latin American Research*, 25(2), 241-263.
- Canovan, Margaret 1999 “Trust the people! Populism and the two faces of democracy. *Political studies*” 47(1), 2-16.
- Cardoso, Fernando y Faletto, Enzo 1996 *Dependencia y desarrollo en América Latina: ensayo de interpretación sociológica* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Chisaguano, Silverio 2006 *La población indígena del Ecuador: Análisis de estadísticas socio- demográficas* (Quito: INEC).
- Cielo, Cristina, Coba, Lisset y Vallejo, Ivette 2016 “Women, nature, and development in sites of Ecuador’s petroleum circuit” en *Economic Anthropology*, 3(1), 119-132.

- Collier, George, Quaratiello, Elizabeth y Rosset, Peter (1994) *Basta!: Land and the Zapatista rebellion in Chiapas* (Oakland: Institute for Food and Development Policy).
- Comaroff, Jean y Comaroff, John 2000 "Millennial capitalism: First thoughts on a second coming" en *Public culture*, 12(2), 291-343.
- Crenshaw, Kimberle 1991 "Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color" en *Stanford Law Review*, 1241-1299.
- Cueva, Simon y Maria Ortiz 2013 *Ingresos fiscales por explotación de hidrocarburos en el Ecuador* (Quito: BID).
- Davidov, Veronica 2013 "Mining versus Oil Extraction: Divergent and Differentiated Environmental Subjectivities in Post-Neoliberal Ecuador" en *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 18(3), 485-504.
- Davis, Angela 2004 *Mujeres, raza y clase* (Madrid: Akal).
- De la Torre, Carlos 2013 "El populismo latinoamericano, entre la democratización y el autoritarismo" en *Nueva Sociedad* (247), 9-10.
- Edelman, Marc y Haugerud, Angelique 2005 *The anthropology of development and globalization: From classical political economy to contemporary neoliberalism* (Oxford: Blackwell Publishing).
- Escobar, Arturo 1996 *La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo* (Madrid: Norma).
- Escobar, Arturo 2010 "Latin America at a crossroads: alternative modernizations, post-liberalism, or post-development?" en *Cultural studies*, 24(1), 1-65.
- Escobar, Arturo 2011 *Encountering development: The making and unmaking of the Third World* (Princeton: Princeton University Press).
- Fabricant, Nicole y Gustafson, Bret 2011 *Remapping Bolivia: Resources, Territory, and Indigeneity in a Plurinational State* (New Mexico: School for Advanced Research Press).
- Ferguson, James 2010 "The uses of neoliberalism" en *Antipode*, 41(s1), 166-184.
- Fernandes, Sujatha 2010 *Who can stop the drums?: Urban social movements in Chávez's Venezuela* (Duke: Duke University Press).
- Foucault, Michel (2000) *Essential Works of Foucault 1954-1984* (New York: New Press) Vol., N° 3.

- Fox, Jonathan 1993 *The politics of food in Mexico: State power and social mobilization* (Cornell: Cornell University Press).
- García, Fernando 2005 “El Estado Del Arte Del Derecho Indígena En Ecuador” en IIDH (Quito) N° 41, enero-junio.
- Geertz, Clifford 1973 *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books).
- Goodale, Mark y Postero, Nancy 2013 *Neoliberalism, interrupted: social change and contested governance in contemporary Latin America* (Stanford: Stanford University Press).
- Grimson, Alejandro 2011 “Response To Arturo Escobar’s Latin America At A Crossroads: Alternative Modernizations, Post-Liberalism, Or Post-Development?” en *Cultural Studies* 25(3), 446-449.
- Grugel, Jean y Riggirozzi, Pía 2012 “Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis” en *Development and Change*, 43(1), 1-21.
- Harvey, David 200) *El nuevo imperialismo* (Madrid: Akal) Vol.1, N° 26.
- Harvey, David 2005 *A Brief History of Neoliberalism* (Oxford: Oxford University Press).
- Harvey, David 2009 “The New Imperialism: Accumulation by Dispossession” en *Socialist Register*, 40(40), 63-87.
- Hawkins, Kirk 2009 “Is Chávez populist? Measuring populist discourse in comparative perspective” en *Comparative Political Studies*.
- Levitsky, Steven y Loxton, James 2013 “Populism and Competitive Authoritarianism in the Andes” en *Democratization*, 20(1), 107-136.
- Lind, Amy 2012 “Revolution with a Woman’s Face? Family Norms, Constitutional Reform, and the Politics of Redistribution in Post-Neoliberal Ecuador” en *Rethinking Marxism*, 24(4), 536-555.
- Long, Norman, Rodríguez, Pastora, De la Peña, Guillermo y Villarreal, Maagdalenia 2007 *Sociología del desarrollo* (México DF: CIESAS).
- Martínez Novo, Carmen 2009 *Repensando los movimientos indígenas* (Quito: FLACSO).
- Martínez Novo, Carmen 2014 “Managing diversity in postneoliberal Ecuador” en *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 19(1), 103-125.
- Marx, Carlos 1968 *El capital. Crítica de la economía política* (México DF: FCE). Tomo N°1.

- Molyneux, Maxine 2006 "Mothers at the service of the new poverty agenda: progreso/oportunidades, Mexico's conditional transfer programme" en *Social Policy and Administration*, 40(4), 425-449.
- Moore, Jennifer, and Teresa Velásquez 2011 "Sovereignty Negotiated: Anti-Mining Movements, the State, and Multinational Mining Companies under Correa's 21st Century Socialism" en Bebbington, Anthony (ed.) *Social Conflict, Economic Development and Extractive Industries: Evidence from South America* (London: Routledge).
- Muratorio, Blanca 1991 *The life and times of Grandfather Alonso, culture and history in the upper Amazon* (New Brunswick: Rutgers University Press).
- Murray, Warwick and Overton, John 2011 "Neoliberalism is dead, long live neoliberalism? Neoliberalism and the international aid regime of the 2000s" en *Progress in Development Studies*, 11(4), 307-319.
- Nussbaum, Martha 2002 "Capabilities and social justice" en *International Studies Review*, 123-135.
- Ong, Aihwa 2006 *Neoliberalism as exception: Mutations in citizenship and sovereignty* (Duke: Duke University Press).
- Pérez Sáinz, Juan Pablo (2014) *Mercados y bárbaros La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina* (Costa Rica: FLACSO)
- Postero, Nancy Grey 2007 *Now we are citizens: Indigenous politics in postmulticultural Bolivia* (Stanford: Stanford University Press).
- Postero, Nancy and Zamosc, Leon 2004 *The struggle for indigenous rights in Latin America* (Brighton: Sussex Academic Press).
- Prebisch, Raúl 1985 *The Latin American periphery in the global crisis of capitalism* (CEPAL Review).
- Rose, Nikolas 2006 "Governing 'advanced' liberal democracies" en Sharma, Aradhana and Gupta, A. *The anthropology of the state: a reader* (Malden: Blackwell readers in anthropology).
- Rostow, Walt Whitman 1961 *Las etapas del crecimiento económico* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Rostow, Walt Whitman 1990 *The stages of economic growth: A non-communist manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Sachs, Jeffrey and McArthur, John 2005 "The millennium project: a plan for meeting the millennium development goals" en *The Lancet*, 365(9456), 347-353.

- Sawyer, Suzana 2004 *Crude chronicles: indigenous politics, multinational oil, and neoliberalism in Ecuador* (Duke: Duke University Press).
- Sen, Amartya 1992 *Inequality reexamined* (Oxford: Oxford University Press).
- Sen, Amartya 2001 *Development as freedom* (Oxford: Oxford University Press).
- SENPLADES 2009 *Plan Nacional para el Buen Vivir o Sumak Kawsay 2019-2013. Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural* (Quito: SENPLADES)
- SENPLADES 2013 *Plan Nacional para el Buen Vivir o Sumak Kawsay 2013-2017. Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural* (Quito: SENPLADES)
- Scott, James 1998 *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed* (New Haven: Yale University Press).
- Tilly, Charles (1999) *Durable inequality* (California: University of California Press).
- Van Cott, Donna Lee Van 1994 *Indigenous Peoples and Democracy in Latin America* (New York: Martin's Press).
- Vallejo, Ivette 2014 "Petróleo, desarrollo y naturaleza: aproximaciones a un escenario de ampliación de las fronteras extractivas hacia la Amazonía suroriente en el Ecuador" en *Anthropologica*, 32(32), 115-137.
- Walsh, Catherine 2010 "Development as Buen Vivir: Institutional arrangements and (de) colonial entanglements" en *Development*, 53(1), 15-21.
- Whitten, Norman, 1976 *Sacha Runa: ethnicity and adaptation of Ecuadorian jungle Quichua*: (Chicago: University of Illinois).
- Yashar, Deborah 2005 *Contesting citizenship in Latin America: the rise of indigenous movements and the postliberal challenge* (New York: Cambridge University Press).
- Zambrini, Laura 2015 "Diálogos entre el feminismo postestructuralista y la teoría de la interseccionalidad de los géneros" en *Revista Punto Género* N° 4, enero-junio.
- Zamosc, Leon 2007 "The Indian Movement and Political Democracy in Ecuador Latin American" en *Politics & Society*, 49 (3), 1-34.

PÁGINAS WEB

Coba, Lisset 2015 Las “Desposiciones del Agua y la Enajenación de los Cuerpos en la Amazonía Ecuatoriana” en <<https://cenedet.files.wordpress.com/2015/11/cenedet-wp3.pdf>> acceso 18 de diciembre de 2015.

Ecuador Estratégico 2016 “Misión y Visión de la Institución Ecuador Estratégico” en <<http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec>> acceso 15 de noviembre de 2015

Wilson, Japhy, Manuel Bayón y Henar Diez 2015 “Postneoliberalismo y Urbanización Planetaria en la Amazonía Ecuatoriana” en <<https://cenedet.files.wordpress.com/2015/11/cenedet-wp1-espac3b1ol.pdf>> acceso 10 de diciembre de 2015.

LAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DE PANAMÁ

Giancarlo Roach Rivas

INTRODUCCIÓN

La historia de la instrucción en Panamá es rica y se remonta hasta hace aproximadamente quinientos años cuando se establecieron en el territorio del istmo, durante la época colonial, los primeros seminarios y conventos católicos que facilitaban la instrucción, principalmente de los catecúmenos, y en menor medida del público en general, como parte de su labor de evangelización (Méndez Pereira, 1916).

La instrucción pública hizo su primera aparición en el istmo recién unos 200 años después, en 1826, a través de un acto legislativo emanado desde el gobierno de la Gran Colombia. Sin embargo, la “primera etapa de la educación nacional” como la conocemos hoy en día iniciaría en 1904 luego de la separación de Panamá de Colombia (Cantón, 1955).

El sistema fue fundado sobre principios liberales. Los constituyentes de 1904 propusieron que la instrucción fuese “obligatoria y gratuita”. Desde entonces, se han construido más de 3 mil centros escolares adicionales, y la matrícula bruta en primaria ha pasado de 4 mil a más de 60 mil estudiantes. (Cantón, 1955)

Si bien el sistema se ha expandido rápidamente en las últimas décadas; todavía queda mucho por hacer. Una rápida inspección de

* Giancarlo Roach Rivas. Panamá (1989). Egresado de la Universidad de Panamá (2011) y de la Universidad Carnegie Mellon (2014). Ha sido becario SENACYT (2012) y CLACSO (2015).

los principales retos enfrentados por el sistema durante el último siglo revelaría que todavía persisten varias debilidades. Es preciso resaltar, como escribiera el Dr. Méndez Pereira en 1915, que:

“En historia, así como en la naturaleza, no hay saltos ni inconsecuencias. Los acontecimientos se desarrollan unos detrás de otros en evolución lógica, lenta por lo general, rápida y violenta a veces. [...] Aplicando esos principios al estado actual de la instrucción pública en Panamá, no es difícil demostrar que éste es una verificación directa y patente de la teoría según la cual no hay en historia innovaciones absolutas [...]” (Méndez Pereira, 1916).

En este contexto histórico se enmarca nuestro trabajo de investigación. Ciertamente ha habido avances en el sistema de enseñanza, pero los retos persisten como “cuellos de botella” que han sido abordados desde distintas concepciones técnicas y políticas (Bracho, 2002). De modo que, la situación actual del sistema no es más que la manifestación fenotípica de dinámicas históricas de factores endógenos o exógenos que influyen en el sistema. Este trabajo en particular hace énfasis sobre el problema de las desigualdades en el acceso y logro educativo en el sistema de educación panameño.

En efecto, en Panamá, los años de escolaridad promedio de la población han aumentado sostenidamente en las últimas cinco décadas. Sin embargo, “si miramos los quintiles de ingreso, los no pobres (Q5) tienen 7 años más de educación que los más pobres (Q1)”; en pre-media y media, la matrícula “está concentrada en las zonas urbanas, con una enorme desigualdad en las zonas rurales e indígenas”, y “sólo el 3% de los pobres en comparación con el 31% de los no pobres asisten a la educación superior” (Cospae, 2002).

Las cifras anteriores dan muestra de la profunda desigualdad de acceso y de logro educativo en el sistema de enseñanza de Panamá. Esta situación, a su vez, daría cuenta de que en Panamá existen fricciones estructurales para el desarrollo inclusivo y la movilidad social, puesto que tanto la participación en las actividades económicas como el ejercicio de los derechos en una sociedad están mediados por la educación.

Este trabajo se ubica en el contexto del acelerado crecimiento de la economía de Panamá en los últimos años y en la preocupación por fortalecer su gobernanza. Con el propósito de examinar el impacto de los arreglos institucionales sobre el logro educativo, se desarrollará un abordaje histórico de la formación del sistema de enseñanza de Panamá; que será acompañado por el análisis de una base de datos fundada principalmente en las muestras censales de los últimos cinco censos de población y vivienda que se han realizado en Panamá.

En la primera parte del documento se hará un breve repaso por las consideraciones teóricas-metodológica para el análisis de las desigualdades en el ámbito educativo. Seguido se describirá la expansión del sistema de enseñanza en Panamá, con especial énfasis en la caracterización de los arreglos institucionales del sistema de enseñanza nacional para el periodo de estudio. Luego, se analizará la desigualdad en el ámbito educativo con base en la tendencia de la distribución del logro educativo y las tasas de matrícula, según sexo, status socioeconómico y otras categorías relevantes, en el periodo comprendido entre los años 1960 y 2010. Finalmente, se presentarán las conclusiones y algunas consideraciones finales.

MARCO TEÓRICO

TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO

Desde el paradigma de las ciencias económicas, la Teoría del Capital Humano es la principal referencia teórica para estudiar las desigualdades educativas. Esta teoría formulada por Becker y Stultz (1983) propone que el capital humano es la capacidad de las personas de realizar trabajo productivo bajo condiciones de mercado. Este capital es inmaterial, le es inherente al individuo, y tiene como principales fuentes: i) las habilidades o talentos innatos, ii) la escolaridad, iii) la calidad de la escolaridad, iv) el entrenamiento o perfeccionamiento profesional, y v) la salud física y mental.

En este marco teórico, el mercado funciona como organizador de la “inversión” en capital humano, en condiciones de competencia perfecta (Cattani, 2008). Según las “señales” del mercado, los individuos deciden invertir en su capital humano después de un análisis de costos y beneficios. Los costos suelen centrarse en el presente, son medidos en términos de costos directos (costo de matrícula, materiales, etc) y costos de oportunidad (ingreso dejado de percibir, tiempo dedicado al estudio); mientras que los beneficios se proyectan (retorno esperado a la educación).

Dentro del análisis de costos y beneficios, se enmarcan ciertas interacciones clave dentro del análisis de las desigualdades educativas; sin embargo, éstas suelen ser analizadas en el ámbito de transacciones económicas. Por ejemplo, la relación entre individuo y escuela está mediada principalmente por el precio (costo) y, en menor medida, por las preferencias (las cuales, en este caso, se refieren a la calidad esperada). Del mismo modo, la Teoría del Capital Humano hace énfasis en procesos de toma de decisión a nivel individual, dejando de lado el rol de las instituciones (particularmente, la escuela). De modo que, dentro

de este cuerpo teórico escasean las herramientas teóricas-explicativas para el análisis de las relaciones sociales e institucionales que nos planteamos abordar para caracterizar las desigualdades en el acceso y el logro educativo.

ENFOQUE DE LA REPRODUCCIÓN

El estudio de las desigualdades educativas como resultado de la interacción entre varios factores, tales como el origen social, el sexo, la etnia, entre otros--que son producto de construcciones sociales a partir de criterios diferenciadores como el color de la piel, el idioma, la profesión familiar, entre otros--se enmarca dentro del enfoque planteado por Pierre Bourdieu y Jean Passeron (1996).

Según estos autores el capital cultural--definido como las actitudes, conocimientos, prestigio y otros elementos culturales poseídos por parte de las familias y que son valorados por encima del capital cultural de otras familias y comunidades--es un elemento diferenciador que genera desigualdades, especialmente en las escuelas, por su valor simbólico y por la influencia que genera en la formulación de lo normativo (Carrasco, 2008). De este modo, en el sistema de enseñanza predominante el contenido pedagógico guardaría correspondencia con el capital cultural de la clase socioeconómica representada en las estructuras del poder político. En este sentido, la escuela no sería más que un instrumento para reproducir los valores y las aspiraciones de la clase dominante. Bajo este enfoque la escuela funciona como un aparato de reproducción ideológica, donde el logro educativo no depende del mérito ni de los deseos de superación de los individuos, sino que, en gran parte, condiciona el avance escolar y social a un proceso de asimilación de los valores de la clase social que domina el poder económico y político. Es decir que la escuela es considerada como un vehículo del sistema socioeconómico para replicar la estructura existente y asignar potencialidades según el capital cultural de cada individuo.

Desde un punto de vista de política pública, la propuesta teórica de Bourdieu implica pensar en alternativas desde fuera del "sistema", pues se desprende que cualquiera acción implementada por las escuelas (ya sea a través de docentes, directivos e incluso padres de familia) es producto de la estructura de poder liderada por la clase social dominante; así que la política social debería ser, más bien, un movimiento político. La postura pesimista de este enfoque deja poco espacio para proponer cambios desde la escuela, lo cual, en nuestra opinión, se contrapone con el ánimo mismo de mejorar el estatus quo.

En efecto, dado que este trabajo pretende hacer un abordaje histórico de los arreglos institucionales del sistema de enseñanza de Panamá, es preciso un abordaje teórico que parta desde la escuela.

CIRCUITOS ESCOLARES Y EFICACIA ESCOLAR

Una forma de interpretar la Teoría del Capital Humano y el Enfoque de la Reproducción apuntaría a que las escuelas “atraerían” a distintos grupos de estudiantes según su capital cultural como es definido por Bourdieu y Passeron (1996). Mediante un proceso de auto-selección (*self-selection*), la escuela reproduciría la estructura social existente a través de la reproducción del capital simbólico y la reafirmación de roles sociales. De esta manera, las preferencias de los estudiantes son mediadas por un proceso de subjetivación. Este enfoque es desarrollado bajo el concepto de “Circuitos Escolares”, el cual según Molina (2012) implica caracterizar al sistema educativo “como un conjunto de instituciones y dispositivos no homogéneos ni integrados, sino profundamente fragmentados en función del origen social de quienes estudian, ofreciendo formación académica de diferente calidad y duración”.

Precisamente, en este contexto, se enmarca el Enfoque de la Eficacia Escolar donde la escuela tendría el papel de romper el ciclo de reproducción de las desigualdades. Es decir que, partiendo de un grupo de alumnos con niveles socioeconómicos relativamente homogéneos, según criterios de segregación territorial y otros factores, la escuela jugaría un rol especial para romper las expectativas impuestas a los alumnos con menor capital cultural asignado. Parafraseando a Blanco Bosco, la escuela “rompería la transformación de inequidad social en desigualdad educativa” (Blanco Bosco, 2009).

En efecto, los aportes del Enfoque de la Eficacia Escolar son un intento de incorporar la posibilidad de que la escuela juegue un papel en la reducción de las desigualdades en el ámbito educativo (Blanco Bosco, 2009). Los estudios que se enmarcan bajo este enfoque suelen dirigir su atención hacia las características de las escuelas que están asociados con resultados escolares favorables. Sin embargo, es difícil hallar regularidades empíricas que puedan ser extrapoladas hacia el campo teórico-conceptual, especialmente si consideramos que el sistema educativo está interconectado. La introducción de cambios que buscan intencionalmente corregir las desigualdades producidas por el sistema, pueden a su vez generar efectos inintencionados y, de este modo, las acciones orientadas a la disminución de las desigualdades podrían ahondar los criterios diferenciadores que son vehículo para la producción y reproducción de desigualdades (Bracho, 2002).

A pesar de lo anterior, el principal mérito del Enfoque de la Eficacia Escolar ha sido llevar a la esfera de las políticas públicas el reconocimiento de que las desigualdades sociales no son precisamente consecuencia de diferencias en el “capital humano”; sino más bien que, la formación de capital humano está condicionada a factores de la estructura social y su interacción con la escuela. De esta forma, el estudio

de las desigualdades en el ámbito educativo es clave para caracterizar la reproducción de las desigualdades socioeconómicas.

SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Los enfoques descritos párrafos arriba implican distintos abordajes metodológicos para la medición de las desigualdades. Dentro del ámbito de la educación, las desigualdades se pueden manifestar en distintas etapas del proceso. Desde la matrícula o participación escolar, la progresión hacia distintos niveles, el aprendizaje y el resultado o logro educativo alcanzado.

Los registros administrativos, las encuestas científicas especiales, y los censos de población y vivienda realizados por los institutos estadísticos nacionales; suelen ser las principales fuentes de información para *medir* las desigualdades. Para entender estas mediciones es necesario hacer abstracción de una realidad compleja, como la descrita en los enfoques planteados anteriormente, lo cual es una de las principales debilidades de los enfoques cuantitativos. Por otro lado, estos instrumentos de medición tienen las propiedades metodológicas que le aportan consistencia, además que la aplicación de estos instrumentos de medición a través de largos periodos de tiempo permiten realizar estudios históricos o de alcance temporal.

En ese sentido, la elección de un indicador o método sobre otro sucede no suele ocurrir en un contexto de neutralidad. Por ejemplo, la hipótesis de la *curva de kuznets*, adaptada al ámbito educativo, propone que a medida que aumenta la escolaridad promedio se espera que la desigualdad del logro educativo aumente debido a la incorporación de nuevas cohortes de estudiantes, que antes no tenían acceso, al sistema educativo. Luego, cuando el sistema desarrolla condiciones para el aumento de la cobertura escolar de forma equitativa para toda la población, se espera que disminuya la dispersión del logro educativo.

La prueba empírica de esta hipótesis ha arrojado resultados mixtos que suelen depender de la forma como se mida la desigualdad. En particular, algunas investigaciones han medido la desigualdad educativa a través de la desviación estándar del número de años de estudios reportado a través de una encuesta o censo a las personas adultas (mayores de 25 años de edad). (Lorel, 2008).

Sin embargo, la desviación estándar no sería el indicador más robusto para medir desigualdades educativas. En primar instancia, desde el punto de vista de los datos, puesto que la educación formal es media a través del cumplimiento de niveles escolares a los cuales se les asigna un valor numérico según el tiempo teórico para completar cada nivel. En ese sentido, el logro educativo es una variable categórica la cual requiere del uso de un procedimiento estadístico distinto a la

desviación estándar para analizar la dispersión de su distribución. En segunda instancia, la desviación estándar pasa por alto la naturaleza de los cambios en la distribución del logro educativo. Es decir que este indicador obvia si los cambios en la dispersión se deben a cambios en la concentración del logro educativo en una parte de la población, ya sea una cohorte joven que obtiene los frutos de la expansión del sistema o de subpoblaciones que tienen una participación más que proporcional en el acceso y progreso educativo.

Precisamente, la construcción teórica sobre la producción y reproducción de las desigualdades requiere que utilicemos un indicador que revele las implicancias distributivas de los cambios en la dispersión o concentración ya sea del ingreso, la educación, la salud, o la variable que sea de nuestro interés. Para este fin, la propia teoría económica ha propuesto el uso de *funciones de bienestar*, las cuales son construcciones matemáticas que *traducen* el cambio en una variable o característica individual (por ejemplo ingreso mensual) hacia su significado para el nivel agregado o social. (Deaton, 1997). Las funciones de bienestar siguen el principio de Pareto según el cual cualquier cambio que mejore la condición de los individuos sin desmejorar las condiciones iniciales de la población aumenta el bienestar agregado de la sociedad. Del mismo modo, el “bienestar” de la sociedad aumenta de manera más que proporcional cuando suceden cambios a favor de los individuos con menor participación en la distribución.

La función de bienestar cumpliría con nuestro propósito de relacionar los cambios en los años promedio de estudio con cambios en la dispersión del logro educativo y su significado para las desigualdades educativas. Ahora bien, es preciso definir una medida de dispersión distinta a la desviación estándar. El coeficiente de Gini es una medida de dispersión que cumple con las propiedades de una función de bienestar; se diferencia de la desviación estándar en que indica el grado de concentración de la variable de estudio y, además, capta los cambios a favor de la participación de los individuos menos favorecidos. Este indicador, y su representación gráfica, las curvas de Lorenz, ha sido utilizado ampliamente en la literatura que analiza las desigualdades de ingreso y de consumo.

Otra de las ventajas del coeficiente de Gini es que utilizando procedimientos algebraicos es posible analizar en qué grado las desigualdades intra e intergrupales contribuyen a las desigualdades en general. Las desigualdades intragrupalas se refiere a las diferencias entre miembros que conforman el mismo grupo o categoría (por ejemplo, todos los individuos en zonas rurales); mientras que las desigualdades intergrupales analizan las diferencias entre las personas en zonas rurales con respecto a las personas en zonas urbanas. Este procedimiento, co-

nocido análisis de descomposición, permite desagregar el coeficiente de Gini en componentes según la categoría o grupo que sujeto al análisis. (Bhattacharya y Mahalanobis, 1967)

LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA PÚBLICA DE PANAMÁ

En esta sección, siguiendo fines expositivos, consideramos el sistema de enseñanza pública en sus elementos más básicos y fundamentales. Con el propósito de examinar la evolución cuantitativa y cualitativa del sistema se analiza cada elemento de forma independiente aunque reconociendo sus interacciones. Estos elementos se refieren a la escuela, los docentes, los estudiantes, y la administración pública; en el contexto de los cambios constitucionales y legales que han ocurrido en el país desde 1904.

La instrucción pública hizo su primera aparición en el istmo en 1826, a través de un acto legislativo emanado desde el gobierno de la Gran Colombia, a la cual el istmo de Panamá se unió al lograr la independencia del Reino de España en 1821.

Posteriormente, durante el contexto del Estado Federal del istmo de Panamá, se consagró formalmente el principio de la educación en la legislación istmeña. Mediante los actos legislativos de 1854, 1867 y 1873 se organizó la instrucción nacional, definiendo a la enseñanza primaria como obligatoria y decretando a la instrucción pública como gratuita. Desde ese entonces, la instrucción era considerada fundamental para el progreso del istmo:

“[...] primordial en un pueblo republicano, y único camino para conducir a los ciudadanos, por el ejercicio de todos sus derechos y la satisfacción de todos sus deberes, al establecimiento de una verdadera democracia, la sola forma de gobierno en que los hombres son a la par ‘amantes de la libertad y sumisos a las leyes’ ” (Méndez Pereira, 1916).

En ese sentido, se ideaba al proceso educativo como el conducto oficial para la formación de valores democráticos y de identidad nacional.

Este esfuerzo en particular sólo duraría hasta 1885, cuando finalizó el Estado Federal y, en consecuencia, el istmo de Panamá perdió competencias sobre la organización pública, pues las decisiones volvían a centralizarse en Bogotá.

Los efectos se percibirían de inmediato:

“Las pocas y pobres escuelas primarias que a fuerza de sacrificios existían, decayeron; las rentas del ramo perdieron su benéfico aislamiento y la enseñanza oficial retrocedió de un modo alarmante. “Es preciso no olvidar -informaba en 1888

el Ministro de Instrucción Pública de Colombia- que las dificultades que contrarían la marcha regular de la instrucción pública son muchas, a saber: 1) escasez manifiesta de buenos pedagogos; 2) malísima dotación de sueldos; 3) grandísima escasez de útiles de enseñanza” (Méndez Pereira, 1916).

Más adelante, la situación empeoraría con el inicio de la Guerra de los Mil Días, que duraría entre 1899 y 1902. En ese periodo el servicio de instrucción pública fue irregular (Cantón, 1955: 9). Este recuento ilustra la inestabilidad política y económica del sistema de educativo de Panamá durante la etapa pre republicana.

PRESUPUESTO

Al inicio la etapa republicana, el gasto público por estudiante se ubicaba al mismo nivel que el de Uruguay y Argentina, dos naciones que por 1914 eran consideradas ejemplos a seguir en materia de educación y cultura (Cantón, 1955: 68). Sin embargo, poco después se recortó el presupuesto debido al impacto sobre la actividad económica de la culminación de la construcción del Canal de Panamá y del inicio de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, algunas escuelas permanecieron cerradas entre 3 y 4 años (Cantón, 1955: 71). Como medida ante el recorte presupuestario, además de la suspensión de labores en algunas escuelas, se implementó la “doble matrícula” o doble jornada, con el objetivo de lograr ahorros en los gastos de personal; así, un único docente atendía a un grupo de estudiantes en la mañana y otro en la tarde (Cantón, 1955: 77).

En efecto, la estabilidad financiera del sistema de enseñanza pública es un criterio definitorio de su calidad. Poco después de la crisis financiera en la educación, en 1918, se recomendó crear una fuente de financiamiento estable para costear la instrucción pública. Sería en 1971, cuando se crearía una renta especial para la enseñanza pública, el “Fondo de Seguro Educativo” el cual financiaría la operación (gastos de las escuelas de educación pre media y media, formación profesional, educación sindical, entre otros) y el crecimiento del sistema (becas para educación media y préstamos para estudios a nivel universitario). El seguro educativo consiste en un impuesto sobre sueldos y salarios de cerca del 3% de la renta gravable anual, el cual es recaudado por el Gobierno Central y asignado al Ministerio de Educación.

De igual forma, la Ley Orgánica de la Educación (Ley 47 de 1946 y sus modificaciones), prevé que el presupuesto anual asignado al Ministerio de Educación no debe ser menor al del año anterior, y que los Municipios deben destinar al menos 20% de sus rentas anuales para la educación primaria pública. La misma Ley, también dicta que “el gasto

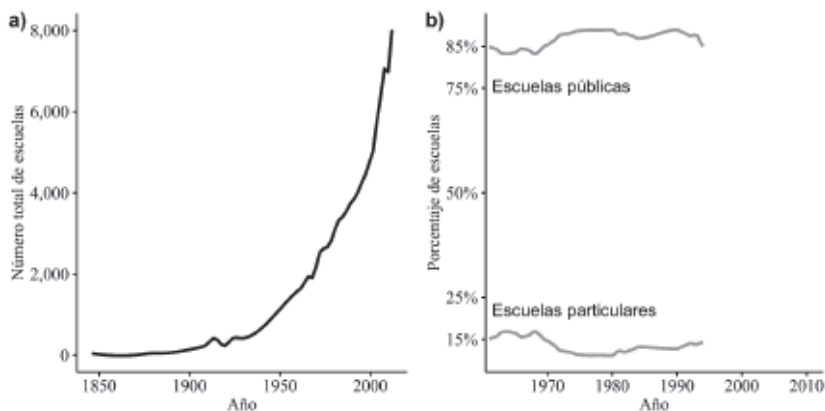
público en el sector educativo no será inferior al seis por ciento (6%) del producto interno bruto del año anterior” (Ley 34 de 1995, artículo 2015).

A pesar de la acción legislativa para establecer un mínimo de gasto público en educación como porcentaje del PIB, la tendencia histórica marca que esta meta no ha sido alcanzada. De hecho, a pesar de que el PIB y el gasto en educación crecen conjuntamente, la actividad económica ha crecido más velozmente; por lo que el gasto en educación como porcentaje del PIB ha seguido una tendencia decreciente entre 1970 y 2010 según los datos recogidos por la UNESCO. (Ver gráfico 1 en los anexos).

ESCUELAS

Los administradores de la primera etapa del sistema de educación de Panamá, también tuvieron la tarea de crear la infraestructura necesaria para la implementación de los principios de obligatoriedad y gratuidad de la instrucción pública. El número de escuelas aumentó rápidamente: hacia 1899 había alrededor de 126 establecimientos escolares disponibles; en 1906 el número de establecimientos aumentó a 187. Entre 1960 y 2012, el número de total de escuelas creció exponencialmente hasta llegar a más de 7 mil establecimientos de educación.

Gráfico 1
Crecimiento y distribución del total de escuelas según tipo en Panamá. 1850 - 2012



Fuente: Elaboración propia con base a datos de INEC.

Durante el inicio de la etapa republicana, la Ley 11 de 1904 sobre educación creó una clasificación administrativa según la ubicación de los po-

blados escolares. Mientras que la legislación ordenó el establecimiento de un centro escolar en la capital de cada distrito; en las zonas rurales habría centros escolares donde la población escolar fuera de al menos 30 niños y 30 niñas. En casos excepcionales, en zonas rurales habría escuelas “alternadas” donde la asistencia de niños y niñas se alternaría en los turnos diurno y vespertino. Del mismo modo, en las zonas rurales las escuelas solían tener pocas aulas, entre 30 y 50 estudiantes por docente, y la mayor parte estaban en propiedad privada alquilada por el Gobierno.

A pesar de que la división entre escuelas rurales y urbanas se realizó siguiendo fines administrativos, este criterio tuvo un impacto significativo sobre la disponibilidad y el diseño curricular de las escuelas en zonas urbanas y rurales. Por falta de recursos, sólo las escuelas “superiores”, ubicadas en la capital de la República y en zonas urbanas, ofrecían los seis grados de instrucción primaria. Las escuelas en las áreas rurales, en el mejor de los casos, llegaban hasta los primeros tres grados. En efecto, la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en la zona rural y urbana era muy diferente:

[...] de la escuela rural se dijo que su única preocupación había sido enseñar a leer, escribir y contar al campesino, y que nada había hecho para mejorar las condiciones sociales y económicas de las zonas rurales en general” (Cantón, 1955: 93).

En 1924, se reconoció que la división administrativa de las escuelas según su localización introdujo desigualdades en la educación. En ese contexto, se introdujo el concepto de la “nueva escuela” que prepararía a los estudiantes, sin distinguir su localización, para la inserción en el mercado laboral “sin descuidar la elevación de la cultura y del espíritu”. En la “nueva escuela”, en las zonas rurales, se enseñaría trabajo de agricultura y cría de animales domésticos; mientras que en las escuelas urbanas se enseñaría carpintería, albañilería, zapatería, entre otros trabajos manuales (Cantón, 1955: 90).

Sin embargo, este enfoque tiene dos desventajas. La primera es el “vaciamiento de contenido”, en el que de forma “oculta” se pierden contenidos fundamentales. En principio, el currículo básico se mantiene igual, pero de forma discrecional los responsables de la pedagogía “actualizan hacia abajo” el contenido básico según sus expectativas sobre los estudiantes. La segunda estriba en que la introducción de currículos diferenciados sucede dentro de un sistema educativo que está interconectado. Diferencias curriculares en un subsistema pueden generar efectos intencionados o inintencionados en otra parte del sistema. De este modo, la focalización del contenido curricular según

la zona escolar, podría ahondar los criterios diferenciadores productores de desigualdades. En el peor de los casos esta situación deviene en credenciales diferenciadas, ya sea de forma explícita o implícita, las cuales colocan en una posición de desventaja a quienes obtienen una formación originada del subsistema socialmente considerado como de menor valor (Bracho, 2002).

Por otro lado, considerando que “el 73% de las escuelas públicas son multigrado y atienden al 29% de la población escolar mayormente en las zonas rurales. En la mayor parte de los casos sus infraestructuras presentan condiciones de vulnerabilidad que afectan el ambiente escolar”, las diferencias no sólo se extenderían hacia el currículo sino también en la calidad de la infraestructura escolar (Castillo, 2013).

PERSONAL DOCENTE

Desde la época de la Colonia hasta durante la unión con Colombia, los hijos de familias con status socioeconómico alto estudiaban en los colegios particulares o en el extranjero (en Bogotá, Perú, y más adelante en Europa) (Cantón, 1955: 4; Méndez Pereira, 1916). Precisamente, luego, debido a la escasez de especialistas en pedagogía, serían aquéllas las personas protagonistas del inicio del sistema de enseñanza junto con algunos especialistas extranjeros quienes llegaron a ocupar cargos importantes dentro de la estructura del sistema. Paralelamente, el gobierno inició un programa de becas internacionales; así como la construcción de escuelas de formación pedagógica para capacitar al personal docente que el sistema necesitaba con urgencia.

En este contexto, una de las prioridades era diseñar un conjunto de incentivos salariales y no salariales para que el personal docente adquiriera credenciales y se perfeccionara, y para que nuevos estudiantes se formaran en pedagogía. En la primera etapa del sistema de educación, la compensación económica era considerada competitiva y se actualizaba con frecuencia bajo recomendación de los inspectores escolares. Desafortunadamente, la mayor parte del personal docente no contaba con estabilidad laboral, pues tenía contratos anuales prorrogables según su desempeño. Sin embargo, esta coyuntura también fue aprovechada por los políticos para usar los nombramientos como una forma de clientelismo (Méndez Pereira, 1916).

En la actualidad la formación inicial y el perfeccionamiento docente siguen siendo una tarea prioritaria. La oferta académica de formación inicial está distribuida entre el Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA), la Universidad de Panamá, y algunas universidades particulares. Empero, sólo existe una escuela de formación pedagógica a nivel de bachillerato: la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena.

El número de docentes ha aumentado considerablemente desde los inicios del sistema de educación panameño. Según la memoria institucional del MEDUCA, en el año 2010, cerca de 18 mil docentes participaron en el concurso de vacantes de los cuales menos de 4 mil fueron seleccionados. Según el informe sobre políticas docentes preparado por Noemí Castillo: “Esta cifra parece indicar que existe una sobreoferta de docentes para las vacantes presentadas. Las universidades gradúan más de mil licenciados en educación cada año, y el IPS-JDA [Instituto Pedagógico Superior-Juan Demóstenes Arosemena], más de 500 por año, lo que trae como consecuencia dificultades para conseguir un puesto de trabajo docente” (Castillo, 2013).

En este contexto, llama la atención que a pesar del aumento de la cantidad de docentes con formación y de la cantidad de nuevos docentes que ingresan cada año al sistema, la proporción de aquéllos calificados (que cuentan con escolaridad igual o superior a la requerida para el nivel que dictan) es menor que la esperada. En el mismo año 2010, a nivel de primaria, al menos el 88% de los docentes estaban calificados. En los niveles de pre-media y media, la distribución geográfica es más desigual. La media nacional se ubica en el 88% de los docentes de pre-media y media; sin embargo, en las comarcas indígenas a lo sumo el 70% de los docentes están calificados (Fudespa, 2012).

La situación es más preocupante si desagregamos los datos por nivel de pobreza de los centros escolares. El informe de progreso educativo 2002 del Cospae reporta que:

“[...]si comparamos los docentes por el quintil económico de la escuela en la que enseñan, en las escuelas más pobres el 64 por ciento de los docentes quiere ser transferido, en comparación con el 16 por ciento en las escuelas más ricas. Los docentes de las escuelas más pobres (probablemente rurales) no tienen un segundo trabajo, mientras que el 15 por ciento de los docentes en las escuelas más ricas lo tienen”.

Esta situación ilustra que en los colegios ubicados en zonas con menos recursos económicos (que suelen estar en zonas rurales o en comunidades indígenas), los docentes suelen estar menos preparados y con menos motivación para enseñar.

En este apartado, también queremos resaltar la tendencia de la distribución de los docentes según tipo de colegio y nivel de enseñanza en Panamá. Mientras que en el sector público, los docentes están concentrados en el nivel primario, con una tendencia decreciente, en el sector particular la mayor parte de los docentes se encuentran en la pre media y en la media, con una tendencia estable. En efecto, como

podríamos esperar, la mayor parte de los establecimientos educativos públicos son de nivel primario; y los particulares de pre media y media. Al mismo tiempo, la cantidad de docentes por estudiantes ha seguido una tendencia decreciente (alrededor de 20 estudiantes por docente); sin embargo la razón es menor para escuelas particulares (14) que para escuelas oficiales (20). (Ver gráfico 2 en los Anexos).

GOBERNANZA

Si bien el sistema de educación de Panamá inició con ideas pedagógicas adaptadas de otros países, los primeros administradores fueron hábiles en hallar retroalimentación de docentes y directores para la mejora del sistema.

En ese sentido, resalta la labor de inspectores e inspectoras, quienes visitaban los centros escolares con el propósito de rendir informes detallados sobre el desempeño de docentes y directores para la Secretaría de Instrucción Pública y Justicia. La Asamblea Pedagógica de 1913 es otro ejemplo de mecanismos de retroalimentación del sistema, pues proporcionó un espacio para acercar las ideas y propuestas de los docentes, directores y supervisores a los tomadores de decisiones.

A pesar de esto, en sus inicios, el sistema era cerrado y con poca frecuencia integraba a la comunidad, a empresarios, o a otros profesionales que no formarían parte del ámbito pedagógico. Aunque es entendible, dada la circunstancia de novedad de la instrucción pública, esta es una de las debilidades de la primera etapa del sistema que se manifestó en las reacciones de la población hacia la instrucción pública y en las dificultades de implementar un currículo adaptado a las necesidades de las zonas rurales. Sin duda lo anterior era una manifestación de la centralización que caracteriza históricamente al sistema de educación de Panamá.

El periodo entre 1920 y 1946 significó un cambio cualitativo en la gestión del sistema. El espíritu de la labor de inspección cambiaría alrededor del año 1924 con la llegada de un nuevo secretario de Instrucción Pública. La idea de la nueva administración era “inspirar” a los maestros en lugar de “encontrar fallas o debilidades”; por lo que se reemplazó el concepto de inspección por el de supervisión (Cantón, 1955). La Asamblea Pedagógica de 1913 no se repetiría, pero mediante la Ley Orgánica de Educación de 1947, se crearía el Consejo Nacional de Educación, formado por representantes del Ministerio de Educación, docentes y tres ciudadanos elegidos por el propio Ministerio. En esta misma Ley también se formalizarían las Juntas Municipales de Educación—compuestas por el Club de Padres de Familia y maestros del Distrito—las cuales velaban por que el aporte municipal se asignara según lo requerido en la Ley. Cada periodo educativo, los inspectores

se reunirían con la Junta Municipal, además de los directores, y les propondría un plan de mejoras que luego sería elevado al Ministerio de Educación.

Este cambio legislativo significó un inicio tibio a la descentralización del sistema, pues la misma Ley disponía que

“El Ministerio de Educación tendrá a su cargo todo lo relacionado con la educación y la cultura nacionales” (Ley Orgánica de Educación de 1947)

En 1975, hubo un intento de reforma educativa, la cual terminó siendo derogada en 1979. En los siguientes años trascurriría un “largo y profundo proceso de evaluación de la realidad educativa nacional; la cual terminó con la modificación de la Ley Orgánica de educación mediante el la Ley 34 de 1995 (OEI, 2002)

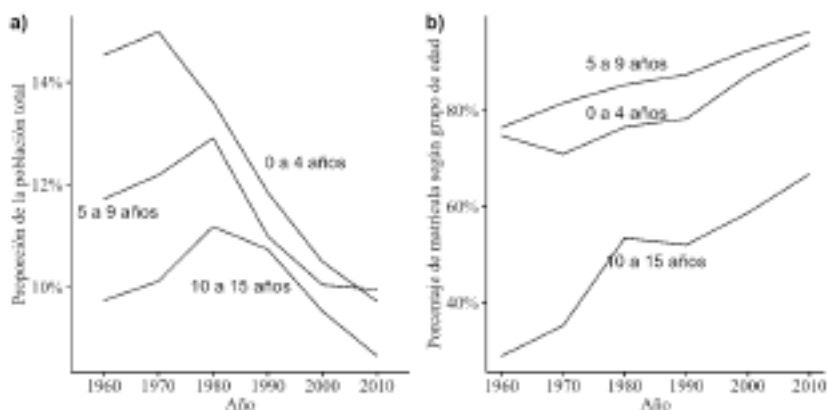
Esta Ley introduce el concepto de descentralización en la administración del sistema de enseñanza. Se dispone el traspaso de las competencias de supervisión, coordinación, e implementación a las instancias educativas del nivel regional; mientras que el Ministerio de Educación, en el nivel central, se encargaría de dirigir las políticas y estrategias educativas.

En efecto, la realidad de nuestros tiempos impone una dinámica diferente al proceso de toma de decisiones y de administración del sistema. En el año 2004, se estableció el Consejo Nacional de Educación (CONACED), un “organismo consultivo [...] cuyo propósito fundamental es analizar, orientar, proponer y conocer sobre los avances de las políticas de Estado, dirigidas a mejorar la calidad en todos los niveles del sistema educativo”. Este consejo responde a la Presidencia de la República y está integrado por once representantes del “mundo académico, docente, científico, tecnológico y empresarial”.

¿EL SISTEMA CRECIÓ DEMASIADO RÁPIDO?

El sistema de enseñanza pública de Panamá se expandió rápidamente. Durante la primera etapa del sistema, el rápido crecimiento del sistema fue objeto de cuestionamientos dada la paupérrima preparación de gran parte de los docentes. En ese sentido, según el Dr. Alfredo Cantón, el Secretario de Instrucción Pública de la época mencionó que “es preferible tener muchas escuelas con no muy buenos maestros que tener pocas escuelas solamente, con muy buenos maestros” (Cantón, 1955).

Grafico 2
Tendencia poblacional y de la participación escolar
según grupo de edad en Panamá. 1960 - 2010



Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

Sin embargo, esta expansión ocurrió en un contexto de envejecimiento de la población. Mientras que en 1960, 6 de cada 10 personas estaba en edad escolar, en el año 2010 el 3 de cada 10 estaba en ese grupo de la población.

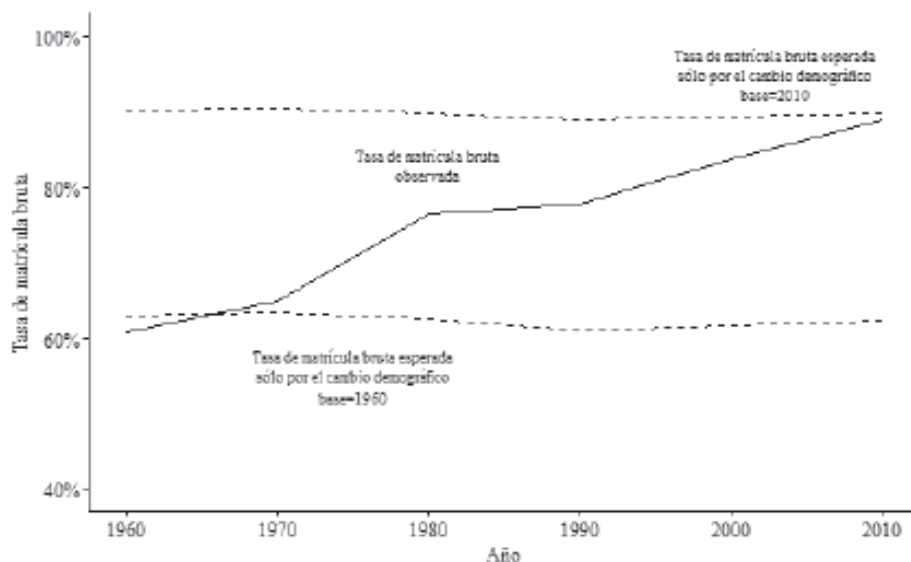
En el mismo periodo, la participación en el sistema de la población en edad de primaria aumentó de 60% a 97%. Entonces, nos preguntamos si el aumento de la tasa de cobertura se explica principalmente por cambios en la composición por edades de la población o por otros factores asociados a la implementación de las políticas públicas.

Para responder la pregunta anterior, hemos calculado la tasa de participación escolar para la población en edad escolar (entre 6 y 18 años) para cada uno de los censos de población y vivienda realizados en Panamá. Seguido calculamos la tasa de matrícula bruta esperada para cada año manteniendo constante la tasa de matrícula bruta observada en 1960. Con este ejercicio, podemos acercarnos a la respuesta de la pregunta ¿en el contexto del cambio demográfico, qué hubiese pasado si se hubiesen mantenido constantes las condiciones de matrícula observadas en 1960?

En el gráfico observamos que, si se hubiese mantenido la tasa observada en 1960, el cambio demográfico apenas hubiese aportado cerca de un punto porcentual al aumento de la tasa de matrícula bruta- por esta razón las curvas punteadas que muestran la tasa de matrícula esperada tienen una pendiente cercana a cero. En el caso contrario, si

en 1960 hubiesen estado presentes las condiciones existentes en el año 2010 la participación escolar para la población entre 6 y 18 años hubiese sido cerca de 50% mayor a lo observado. De este modo el aumento de la tasa de matrícula es atribuible a las acciones de políticas públicas.

Gráfico 3
Tasa de matrícula bruta esperada y estimada
(población en edad escolar) en Panamá. 1960 – 2010



Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

En ese sentido, vale destacar que el sector público lideró la expansión del sistema de educativo. En la actualidad, alrededor del 85% de las escuelas son administradas por el sector público, al igual que la proporción de docentes y alumnos matriculado.

En la siguiente sección analizaremos con mayor detalle la tasa de participación en el sistema de enseñanza de Panamá, a través de varias categorías importantes

ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES EN LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR

Esta sección está basada principalmente en el análisis de una base de datos conformada por los microdatos censales preparados por el Instituto de Estadísticas y Censos de Panamá y armonizados y difundidos por el proyecto IPUMS de la Universidad de Minnesota. Los microdatos

permiten hacer análisis a nivel de individuos, con cobertura nacional y con un nivel representatividad que le aportan un poder estadístico a los cálculos que realizamos en esta sección. El siguiente cuadro presenta un resumen de algunas de las principales variables contenidas en la base de datos.

Cuadro 1
Principales variables de la base de datos de análisis

Año	Observaciones	Población, urbana (% del total)	Población, mujeres (% del total)	Edad promedio
1960	53.553	42%	49%	22,7
1970	150.473	47%	49%	22,6
1980	195.577	51%	49%	24,2
1990	232.737	-	49%	25,9
2000	284.081	62%	50%	27,7
2010	341.118	65%	50%	29,9

Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

La educación en Panamá se definió como un derecho en la constitución de 1873, promulgada durante el Estado Federal, y luego este principio fue reafirmado en la constitución de 1904 de la era republicana. Sin embargo, aunque la ley declaraba que la educación debía ofrecerse sin “restricción de color, sexo, o religión”, la implementación del derecho a la educación fue desigual.

Por ejemplo, en la primera etapa del sistema existía el principio de “separación de sexos”, el cual impactaba tanto al contenido pedagógico como a los establecimientos educativos disponibles para la población en edad escolar según su género. En ese sentido, el currículo de niñas incluía materias como economía doméstica y costura; en lugar de instrucción cívica y agricultura, las cuales eran reservadas para los niños (Cantón, 1955:). Más aún, la educación para niñas estaba enfocada a la “misión social de la mujer como madre y esposa [...] capaz de los más grandes sacrificios”, lo cual evidencia un importante sesgo de género en la implementación de las políticas. La coeducación se oficializaría en 1919, sin embargo, las diferencias curriculares entre niños y niñas persistirían incrustadas en el sistema. (Cantón, 1955: 77)

Como se discutió anteriormente, la implementación de la clasificación administrativa de zonas rurales y urbanas también se llevó a cabo siguiendo criterios que crearon condiciones para la producción

de desigualdades, tanto en la asignación de recursos como a través del contenido curricular. También había diferenciación para la población afro panameña (de origen antillano y africano). De igual forma, hasta el año 1995 no se había abordado el derecho de las comunidades indígenas de preservar y desarrollar su identidad y patrimonio cultural, y apenas en 2010, se introdujo una reglamentación para la educación intercultural y bilingüe.

Más allá, había una fuerte sugerencia de hacer cambios pedagógicos en función de clases sociales:

“La cultura que se dé al niño ha de ser adecuada a la futura posición social que ocupe o pueda ocupar; por esta razón la enseñanza debe ser distinta, siempre que sean diferentes las clases sociales en que más tarde ha de vivir el alumno”. (Cantón, 1955:)

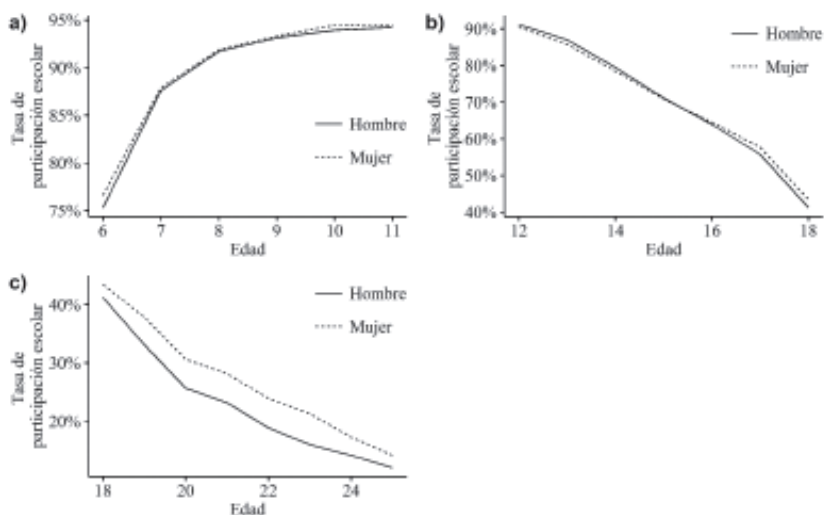
Este planteamiento se puede interpretar desde los enfoques de la reproducción que discutimos en el marco teórico. Desde este enfoque, el propósito de focalizar el contenido curricular según la apreciación de la “futura posición social” de la persona obedece al uso de la educación como un instrumento para la reproducción de la estructura económica y política del país. Apenas en 1995, la política nacional educativa definió explícitamente el reconocimiento de la educación como un derecho sin distinción de la posición económica de los y las estudiantes (Ley 34 de 1995).

Los párrafos anteriores nos proporcionan los antecedentes históricos para entender la tendencia de la tasa de participación escolar a lo largo de distintas categorías de análisis las cuáles desarrollaremos a continuación.

Primero, debemos señalar que la expansión de la tasa de participación escolar que discutimos en la sección anterior impactó de forma similar a todos los grupos de edad a través del tiempo. (Ver gráfico 3 en los Anexos).

A pesar de esto, un rápido examen al siguiente gráfico revela que; mientras que la tasa de participación es mayor y creciente entre la población en edad de iniciar estudios primarios, la participación escolar disminuye, tanto para hombres y mujeres, en el nivel medio de instrucción. Esta tendencia decreciente continúa hacia el nivel superior, donde es notable la mayor participación de las mujeres en comparación con los hombres.

Gráfico 4
Tasa de participación escolar según género y edad teórica de matrícula por nivel educativo en la Rep. de Panamá



Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

La tendencia de la tasa de participación escolar se puede seguir desmenuzando. Si consideramos la ubicación de las personas, para la población en edad escolar (entre 6 y 18 años), la participación escolar es mayor en las zonas urbanas que en las rurales, aunque la brecha se ha ido disminuyendo. Esta diferencia probablemente se debe a la interacción de varios efectos que describimos anteriormente, como las diferencias en la implementación del sistema en estas zonas, las diferencias en la disponibilidad de centros escolares en cantidad y calidad, y diferentes dinámicas socioeconómicas.

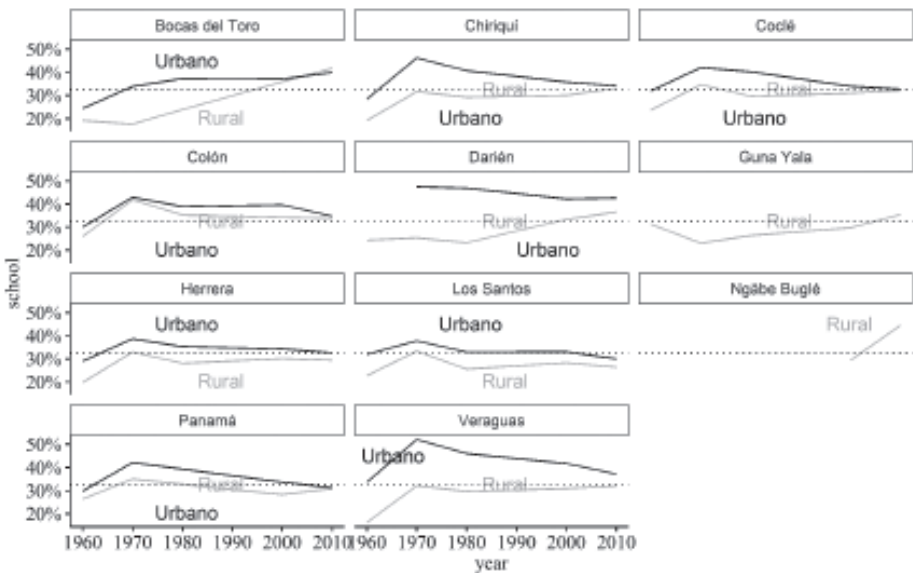
El desarrollo de la actividad económica en Panamá ha seguido históricamente una distribución marcada geográficamente. Las provincias de Panamá y Colón, que conforman la principal área metropolitana del país, concentran cerca del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En estas provincias las principales actividades económicas son las actividades inmobiliarias, el transporte y almacenamiento, y el comercio al por mayor y al por menor. Estas actividades realizan el mayor aporte al tamaño y al crecimiento del PIB. Por otro lado, en la provincia de Darién, que tiene el aporte más modesto al PIB (0.5%), las principales actividades son la agricultura y ganadería, la pesca y el transporte que suman casi la mitad de la producción anual de dicha

provincia. Precisamente las actividades agropecuarias y de pesca han disminuido drásticamente su participación en el PIB nacional, ahora representan apenas del 10% de la producción nacional.

Adicionalmente, las provincias con menor participación en la economía nacional, también suelen tener una mayor proporción de poblados rurales.

El gráfico más abajo nos permite ver la interacción de las categorías que presentamos anteriormente. Se observan mayores tasas de matrícula bruta para la población en edad escolar (6 a 18 años) en las zonas urbanas de todas las provincias. La comparación con respecto al promedio nacional permite observar que en algunas provincias la matrícula bruta es sistemáticamente mayor que en otras, pues tanto la tasa urbana como rural superan, aunque sea ligeramente, el promedio nacional. Este es el caso para las provincias de Panamá y Veraguas.

Gráfico 5
Tasa de matrícula escolar bruta por provincia según zona urbana y rural en la República de Panamá



Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

Ahora movemos la discusión sobre las tasas de participación desde las categorías a nivel agregado, para considerar las condiciones que operan a nivel de los hogares. Nos interesa inspeccionar las condiciones

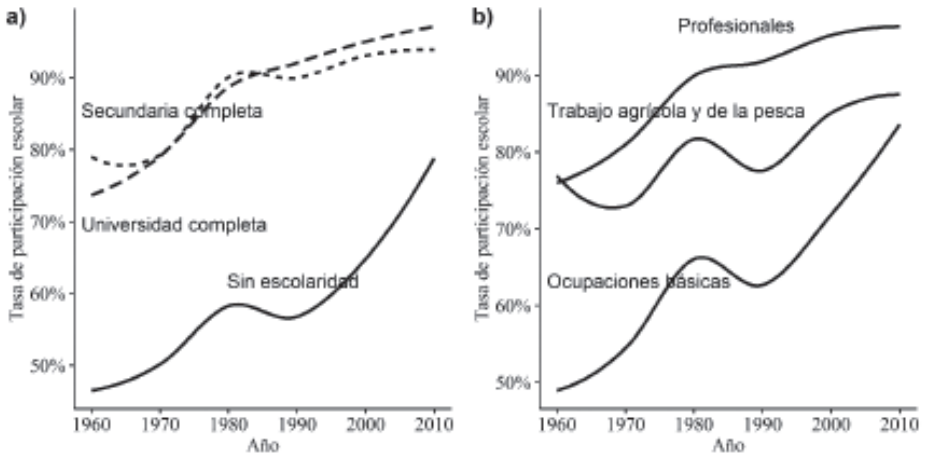
socio económicas que influyen en la tasa de participación a nivel intergeneracional. Mediante el procesamiento de los microdatos censales, pudimos generar indicadores para personas en edad escolar según las características del jefe o la jefa del hogar.

En primera instancia, es notable que el nivel educativo obtenido por jefes y jefas del hogar es un fuerte predictor de la participación escolar de los jóvenes en edad escolar dentro del hogar. El nivel de instrucción, el tipo de ocupación y su posición en la distribución de los ingresos; dan una aproximación tanto al capital cultural como al capital económico que poseen los jefes y jefas de hogar. De esta forma, le podemos dar lectura a los resultados del gráfico desde el enfoque de la reproducción y del enfoque del capital humano. Desde el primer enfoque, los procesos de subjetivación median para que los jefes y jefas del hogar valoren si los jóvenes deberían ingresar al sistema educativo o no. Desde el enfoque del capital humano, la interpretación sería que, bajo las mismas condiciones, el mediador principal es la decisión racional que tomarían los hogares con base en la evaluación de los costos y los retornos esperados a la educación.

Por supuesto, desde el análisis de fuentes secundarias es imposible observar el proceso de toma de decisión. Sin embargo, el análisis cuantitativo nos permitiría resumir la información contenida en las variables que hemos analizado hasta ahora. Adicionalmente, el uso de estas herramientas nos permitiría analizar las interacciones de las variables que analizamos de forma individual, con el propósito de aproximar la contribución de cada uno de los factores determinantes de la participación escolar en Panamá. En ese sentido, la ubicación política-administrativa de los estudiantes resultaría de interés debido a la expansión de la cobertura del sistema nacional de educación; en el contexto de la concentración, en la capital del país y en la sede principal del Ministerio de Educación, de las tareas de planeación, diseño, y toma de decisiones de las acciones educativas con repercusiones específicas en los ámbitos heterogéneos de las provincias. Esta unidad de análisis también es relevante desde el punto de vista de que los hogares que están agrupados a nivel de provincia comparten una situación común, desde lo económico, disponibilidad y calidad de escuelas, aspectos culturales, entre otros. Este análisis se encuentra fuera del alcance del presente estudio, pero sus resultados resultarían clave para confirmación de los resultados obtenidos en esta investigación.

Gráfico 6

Tasa de matrícula para población en edad escolar según características del jefe o jefa del hogar en la Rep. de Panamá. 1960 - 2010



Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

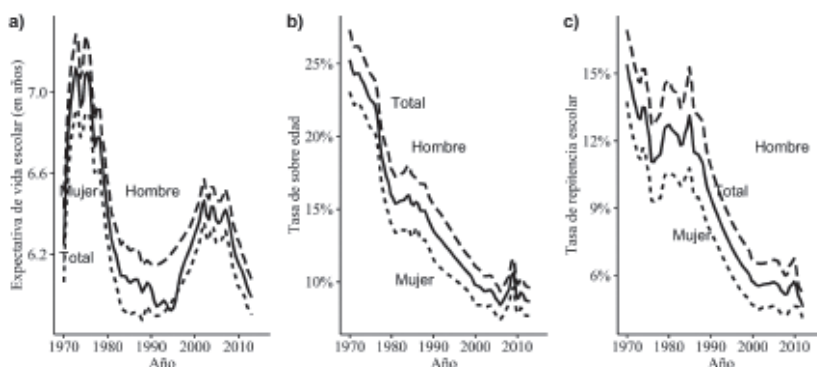
ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES DE RESULTADOS EDUCATIVOS

Debido al aumento década a década de la tasa de participación escolar, es predecible una tendencia creciente de la escolaridad promedio alcanzada por la población panameña. El indicador de “expectativa de vida escolar”, precisamente, estima el promedio de años de estudios que se esperarían si se mantuviera la tasa de participación escolar observada en un año en particular.

Para el caso de la educación primaria, entre 1970 y 2010, este indicador está por encima de los 6 años de duración teórica de este nivel escolar. Esto se debería al efecto de la repitencia escolar y de la matrícula de estudiantes con sobre edad, como sugiere el gráfico más abajo.

El gráfico confirma que, efectivamente, la cobertura del nivel primaria es alta y agrupa a casi el total de la población en edad teórica de asistir a dicho nivel; sin embargo, tanto la tasa de estudiantes con sobre edad como la tasa de repitencia escolar son relativamente altas. Ambos indicadores han tenido una tasa decreciente desde los años setenta, lo que explicaría el “encogimiento”, alrededor del año 2010, de la expectativa de vida escolar hacia la duración teórica del nivel educativo primario.

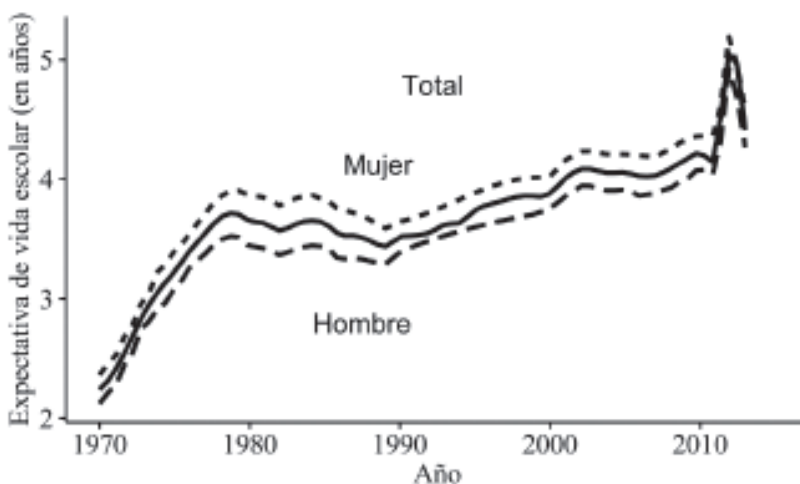
Gráfico 7
Contextualización de la expectativa de vida escolar en educación primaria en Panamá. 1970 – 2010



Fuente: Elaboración propia con base a datos de UNESCO (2015).

Caso contrario ocurre con el indicador de expectativa de vida escolar de los estudiantes matriculados en secundaria; pues, en este caso, el indicador ha ido en ascenso luego de un gran impulso en la década de los setenta, lo que refleja que ha habido una tasa de matrícula creciente en la educación secundaria.

Gráfico 8
Expectativa de vida escolar en educación secundaria en Panamá. 1970 – 2010



Fuente: Elaboración propia con base a datos de UNESCO (2015).

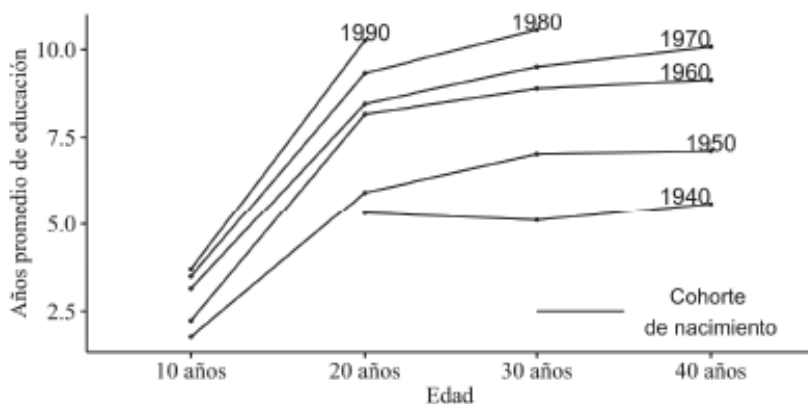
A pesar de esto, la expectativa de vida escolar en el nivel secundario continúa por debajo de la duración teórica de este nivel. Esto es debido a que la tasa de participación en educación secundaria, como hemos visto en la sección anterior, es menor que en la educación primaria. En efecto, en el año 2010, la expectativa de vida escolar en secundaria rondaba alrededor de los 4 y 5 años de escolaridad promedio.

Ahora bien, con estos indicadores a la mano es posible tener una estimación del promedio de años de instrucción de la población en Panamá. Empero, necesitamos introducir dos conceptos adicionales. Por un lado, es preciso observar la tasa de transición desde la educación primaria hacia la educación secundaria. La tasa de transición nos permite aproximar la proporción de estudiantes que aprueban los niveles de educación primaria y que continúan dentro del sistema hacia la educación secundaria. De manera que, aunque la expectativa de vida escolar sea alta para los estudiantes en educación secundaria, sólo aquéllos que efectivamente realizan la transición hacia dicho nivel educativo alcanzarían la “expectativa de vida escolar” estimada. (Ver gráfico 5 en los Anexos.

Una segunda precisión es que la expectativa de vida escolar se calcula con base en la información de la cohorte de estudiantes que actualmente está dentro del sistema de educación nacional. Por su parte, el logro educativo promedio se calcula con los individuos en edad adulta (mayores de 25 años). Esta aclaración sólo es importante porque nos conduce a revelar que el *stock* o saldo acumulado de resultados educativos presentes en un punto determinado del tiempo es producto del proceso de acceso y progreso educativo que ha atravesado distintas cohortes. Lo anterior indica que el estudio de las desigualdades en los resultados educativos tiene un componente sociodemográfico que es importante tenerlo en cuenta.

Precisamente, el siguiente gráfico muestra la tendencia del logro educativo en Panamá según cohorte de nacimiento y edad. Se observa que, de generación en generación, para todas las edades observadas ha habido un aumento de la escolaridad promedio en Panamá.

Gráfico 9
Años promedio de escolaridad según cohorte de nacimiento y edad. 1940 - 1990



Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

Sin embargo, hemos demostrado que existen brechas en las tasas de matrícula bruta a lo largo de varias categorías de análisis, tanto a nivel macro social como a nivel de los individuos. En efecto, en el análisis de la participación escolar hemos demostrado que el sexo, el tipo de área geográfica (urbano o rural), la provincia y las características de jefas y jefes de hogar influyen en la matrícula bruta de las personas en edad escolar. En este contexto, aunque en este trabajo de investigación nos enfocamos en las desigualdades de resultados educativos, no debemos obviar que estas “brechas” o desigualdades en la participación escolar también se manifestarían en el progreso hacia niveles superiores y, probablemente, en los aprendizajes. Por tal razón, el siguiente análisis además de explorar la tendencia y la relación entre la desigualdad en la matrícula y los resultados escolares, también servirá de referencia para futuros análisis sobre las desigualdades en la progresión y en los aprendizajes educativos.

El cuadro a continuación muestra el promedio de años de educación (columna 1), la desviación estándar (columna 2), el coeficiente de variación (columna 3), la proporción de adultos sin años de estudio (columna 4) y el coeficiente de Gini (columna 5) del logro educativo entre adultos en Panamá.

Cuadro 2
Años promedio de educación e indicadores de desigualdades de resultados educativos en
la Rep. de Panamá. 1960 - 2010

Año	Años promedio de educación	Desviación estándar	Coefficiente de variación	Población, adultos sin estudios (% del total)	Coefficiente de Gini
1960	3,85	3,54	0,92	27,8%	0,50
1970	4,25	3,80	0,89	24,6%	0,48
1980	5,28	4,30	0,82	17,3%	0,43
1990	6,53	4,51	0,69	11,5%	0,37
2000	7,13	4,88	0,68	9,1%	0,33
2010	8,02	5,16	0,64	7,5%	0,31

Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

Se observa, nuevamente, el aumento del promedio (columna 2) pero en un contexto de creciente aumento de la dispersión del logro educativo medido a través de la desviación estándar (columna 3). El aumento de la dispersión ocurriría debido a la participación de más individuos en el sistema (medido a través del porcentaje de adultos sin educación, columna 4). Esto se corroboraría con el coeficiente de variación (columna 4) el cual indica que aunque la dispersión de los resultados educativos ha aumentado en términos absolutos, ha disminuido en términos relativos. Finalmente, la columna 5, muestra que, en efecto, los cambios en la distribución del logro educativo han tendido a incorporar a grupos de la población que contaban con menor participación en la distribución inicial de los resultados educativos.

En efecto, la desigualdad en los resultados educativos ha disminuido considerablemente entre 1960 hasta 2010. Empero, estos resultados a nivel nacional deben ser escrutados con el fin de caracterizar las desigualdades de resultado educativo e identificar las categorías en las que persisten las condiciones que reproducen las desigualdades en el sistema educativo de Panamá.

DESCOMPOSICIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE RESULTADOS EDUCATIVOS

La distribución del logro educativo es muy similar para hombres y mujeres, salvo que la mayor proporción de hombres que completan la educación primaria y que las mujeres suelen acumular más años de educación superior. Como resultado el logro educativo promedio

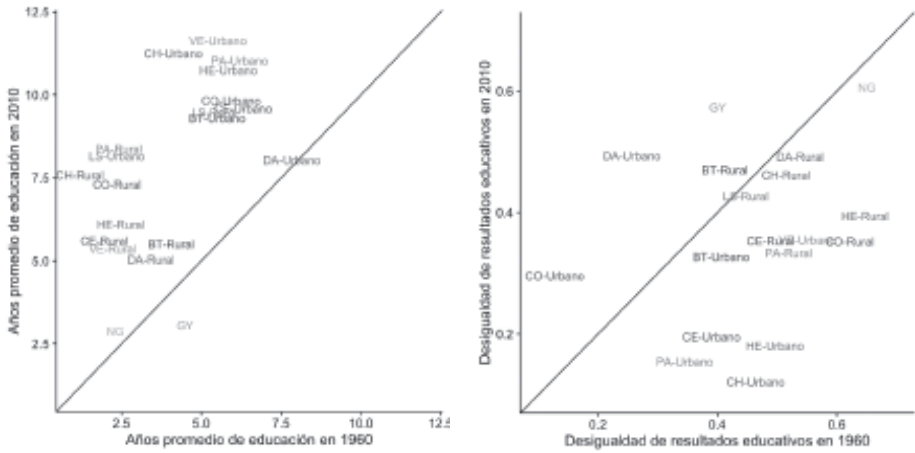
es mayor para mujeres (9.68 años) que para hombres (9.18 años). A pesar de estas diferencias, el coeficiente Gini ha disminuido proporcionalmente para ambos sexos a lo largo del tiempo. De hecho, el análisis de las desigualdades educativas entre hombres y mujeres muestra que, en el ámbito de los resultados y la participación escolar, ha habido una reducción importante pues el coeficiente de Gini para la distribución del logro educativo para mujeres (0.31) y hombres (0.30) es muy cercano al coeficiente general (0.31). Del mismo modo, el análisis de descomposición apunta a que la persistencia de la desigualdad se encuentra en las diferencias intra grupales, las cuales a su vez se manifiestan de manera pareja entre hombres y mujeres.

La tendencia del logro y la desigualdad educativa en zonas urbanas y rurales revela una situación similar: aumento de la escolaridad promedio y disminución de la desigualdad educativa tanto en zonas urbanas como en rurales. Sin embargo, la diferencia del logro educativo promedio alcanzado por adultos en zonas urbanas con respecto a adultos en zonas rurales sigue siendo marcadamente amplia y se ha agrandado en los últimos 50 años.

A pesar de esta diferencia tan marcada entre los grupos, el análisis de descomposición indica que las desigualdades intra e intergrupales influyen de forma pareja en la formación de las desigualdades por tipo de zona geográfica. Sin embargo, debemos notar que la tendencia marca que las desigualdades dentro del grupo de adultos en zonas urbanas explica más del 80% de las desigualdades intergrupales.

Una primera explicación de esta situación podría hallarse en el análisis de la tendencia y los determinantes de la migración interna. Un posible escenario es que aunque la tasa de participación escolar aumente en las zonas rurales, por determinantes del mercado laboral, la emigración rural-urbana sería el mecanismo a través del cual se reproducirían las desigualdades de resultados educativos en el ámbito rural-urbano.

Gráfico 10
Tendencia de la escolaridad promedio y la desigualdad de resultados educativos según
provincia y tipo de área geográfica. 1960 y 2010



Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

Ahora bien, el análisis también nos permite observar que la desigualdad de resultados educativos también se produce a lo largo de las provincias de Panamá. El gráfico 10 compara el cambio en el coeficiente de Gini y en los años de escolaridad promedio según provincia y tipo de zona geográfica. La tendencia marca claramente que en todas las provincias aumentó el promedio de años de estudio, por lo que se encuentran por encima de la línea de 45 grados. También es observable que el mayor crecimiento, dentro de las provincias, ocurrió en las zonas urbanas. Con respecto a 1960, sólo en la Comarca Ngabe Bugle disminuyó el indicador de resultados educativos. La comarca Guna Yala y la zona urbana de la provincia de Darién se encuentran sobre la línea puesto que en 1960 sus datos no estaban disponibles para el censo de 1960.

El segundo panel del mismo gráfico muestra la tendencia del coeficiente Gini. En este caso, los valores por encima de la línea de 45 grados indican que un aumento de la desigualdad. La mayor reducción de las desigualdades educativas se observa en las zonas rurales de las provincias 6, 7 y 4. La menor reducción se observó en las zonas urbanas de las provincias de Colón y Panamá. El análisis de descomposición confirma que la provincia de Panamá es la que más contribuye al componente intraprovincial de las desigualdades educativas en Panamá. (cerca del 90%), seguido por las provincias de Chiriquí (5%), Veraguas, Coclé y Colón (cerca del 1.5%).

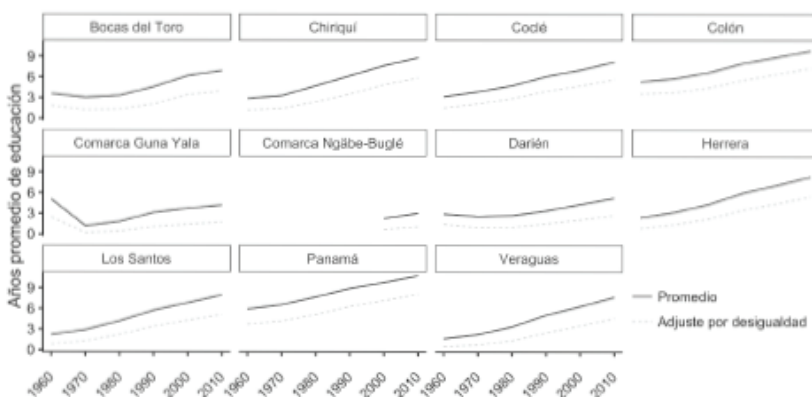
RESULTADO EDUCATIVO AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD

Hasta ahora hemos analizado las condiciones en las que las desigualdades de participación y de resultado educativo se han manifestado en Panamá en el contexto de la expansión del sistema educativo. Hemos visto que las desigualdades educativas se producen y reproducen por factores del diseño e implementación de acciones que le son propias a los elementos del sistema; pero, también, por su interacción con elementos del sistema socioeconómico. Esta situación caracteriza la complejidad del análisis de los sistemas educativos, pues existen efectos de *retroalimentación*, de los cuales es complejo conocer su efecto causal. Es decir, ¿existen desigualdades educativas porque vivimos en una sociedad desigual? O bien, ¿la sociedad es desigual porque existen desigualdades educativas?

En el caso de Panamá hemos visto que las desigualdades de participación y de resultado educativo son decrecientes, pero persistentes. Esta desigualdad, que podemos caracterizar como estructural, presenta el reto de dilucidar si la tendencia observada es producto de cambios incrementales hacia un nuevo *status quo* o si lo observado es producto de fricciones más profundas. Esta discusión resulta fundamental, desde el reconocimiento de la educación como un derecho imprescindible e innegable para la participación en la vida en sociedad.

Gráfico 11

Años promedio de estudio ajustados por la desigualdad de resultados educativos según provincia y año en la Rep. de Panamá. 1960 - 2010



Fuente: Elaboración propia con base a IPUMS (2015) e INEC (1960 – 2010)

Con el propósito de contextualizar los resultados que hemos obtenido hasta ahora, usaremos el concepto de *funciones de bienestar* para describir las pérdidas en el *bienestar* ocurridas por la persistencia de las desigualdades educativas. (Deaton, 1997). El bienestar perdido por la desigualdad, nos aproxima cuantitativamente al efecto que tiene sobre el bienestar la producción de desigualdades a través de los procesos de subjetivación que influyen en la participación, progresión, aprendizaje y finalmente en los resultados educativos. En el caso panameño, la desigualdad educativa reduce los beneficios de la expansión del sistema educativo por el equivalente a 2 años de escolaridad. De este modo, aunque la escolaridad promedio es creciente el potencial de sus beneficios es mermado por la desigualdad en su distribución.

COMENTARIOS FINALES

Este documento coloca en perspectiva la expansión del sistema de educativo de Panamá con respecto a las desigualdades de acceso y de resultados educativos.

Los arreglos institucionales de la etapa formativa del sistema condicionaron la producción de desigualdades mediante la implementación de criterios diferenciadores según el sexo y la ubicación geográfica de la población en edad escolar. De igual forma, la gestión centralizada del sistema educativo también ha producido desigualdades que se expresan a lo largo de las provincias del país. La centralización no sólo ocurre en términos de la gestión administrativa; sino también de la actividad económica. En ese sentido, la migración rural-urbana, probablemente motivada por problemas de empleo rural, es un elemento del sistema socioeconómico que contribuye a la reproducción de desigualdades de participación y de resultado educativo en el país.

A pesar de esta situación los logros del sistema en cuanto a la ampliación de la cobertura educativa son notables. La expansión del sistema ocurrió en un contexto de envejecimiento población; pero el aumento de la tasa de matrícula es principalmente atribuible a la política pública. Junto con la cobertura educativa, los años promedio de escolaridad también aumentaron de forma significativa para todos los grupos de edad y las categorías sociodemográficas que analizamos. Sin embargo, todavía persisten cuellos de botella en cuanto a la concentración del logro educativo. De este modo, aunque la tendencia de la desigualdad educativa ha sido decreciente, las brechas presentes desde la etapa formativa del sistema todavía persisten. Es notable que el capital cultural y económico de los hogares es un condicionante de la participación escolar. Dada esta situación, resalta que aunque este trabajo se limitó al análisis de las desigualdades en la participación y los resulta-

dos educativos, se vislumbra la relación entre estos componentes y las desigualdades en los aprendizajes.

De aquí en adelante, con una mirada sistémica, es necesario seguir estudiando las dinámicas de las desigualdades dentro del sistema y su relación con el empleo, el ingreso y la estructura social del país. Debido a la naturaleza estructural de las desigualdades educativas es necesario darle seguimiento a la situación de forma prospectiva. La toma de decisiones para introducir cambios en el sistema educativo debe considerar de forma explícita las implicancias de las desigualdades educativas para el cumplimiento del derecho a la educación y la participación de las personas en la actividad económica. En ese contexto se ubica el enfoque de la eficacia escolar, el cual propone que desde la *escuela* se puede romper con el ciclo de reproducción de las desigualdades que se forman a través de los procesos de subjetivación. Empero, los enfoques teóricos que se utilizan para analizar el sistema deben reconocer que la configuración actual es la manifestación de una dinámica histórica en la que han incidido factores endógenos y exógenos. Por esta razón, la construcción y fortalecimiento de sistemas de información que generen información cualitativa y cuantitativa del sistema son imprescindibles para su gobernanza.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco Mundial 2012 Mejores empleos en Panamá: El rol del capital humano
- Becker, Gary 1983 *El capital humano* (Madrid: Alianza Editorial)
- Bhattacharya, Nandini y Mahalanobis, Prasanta 1967 Regional Disparities in Household Consumption in India. *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 62, N° 317.
- Blanco Bosco, Emilio 2009 “La desigualdad de resultados educativos: Aportes a la teoría desde la investigación sobre eficacia escolar” en *Revista Mexicana de Investigación Educativa* (México DF) Vol. 14, octubre-diciembre.
- Bracho, Teresa 2002 “Desigualdad social y educación en México. Una perspectiva sociológica” en *Educación* (México DF) Vol. 29.
- Cantón, Alfredo (1955) *Desarrollo de las ideas pedagógicas en Panamá 1903-1926* (Panamá: Imprenta Nacional).
- Castillo, Noemí 2013 “Políticas docentes en Centroamérica. Tendencias nacionales: Panamá” en < <https://www.oas.org/cotep/LibraryDetails.aspx?lang=es&id=66>>

- Cimadamore, Alberto y Cattani, Antonio (coords.) 2008 *Producción de pobreza y desigualdad en América Latina* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores).
- Cingano, Francesco 2014 “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth” en *OECD Social, Employment and Migration Working Papers* (Paris) N° 163
- Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae) 2002 Informe de progreso educativo de Panamá: el reto es avanzar.
- Deaton, Angus 1997 *The analysis of household surveys : a microeconomic approach to development policy* (Washington, D.C. : The World Bank). <http://documents.worldbank.org/curated/en/1997/07/694690/analysis-household-surveys-microeconomic-approach-development-policy>
- Instituto de Estadísticas y Censos de Panamá (INEC) 1960 – 2010 Boletín “Panamá en Cifras”
- Le, Ahn y Miller, Paul 2002 “Educational attainment in Australia: a cohort analysis” en http://research.acer.edu.au/lsey_research/29
- Lorel, Benoit 2008 *Assesing Brazilian educational inequalities* en <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402008000100002>
- Méndez Pereira, Octavio (1916) *Historia de la instrucción pública en Panamá* (Panamá: Tip. Moderna).
- Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) 2014 Revisión nacional 2015 de la Educación para Todos
- Minnesota Population Center 2015 *Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 6.4* [Machine-readable database] (Minneapolis: University of Minnesota).
- Molina Galarza, Mercedes 2012 en Pérez Rubio, Ana María y Antequera Durán, Nelson (comps.) *Viejos problemas, viejas alternativas: estrategias de lucha contra la pobreza gestadas desde el Sur* (Buenos Aires: CLACSO).
- Passeron, Pierre y Bourdieu, Jean-Claude 1996 *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza* (Barcelona: Editorial Laia, S.A.).
- UNESCO Instituto de Estadísticas 2015 Serie de Estadística sobre educación en “<http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/BrowseEducation.aspx>”

ANEXOS

Gráfico 1

Tendencia del gasto público en el sector educativo como porcentaje del Producto Interno Bruto

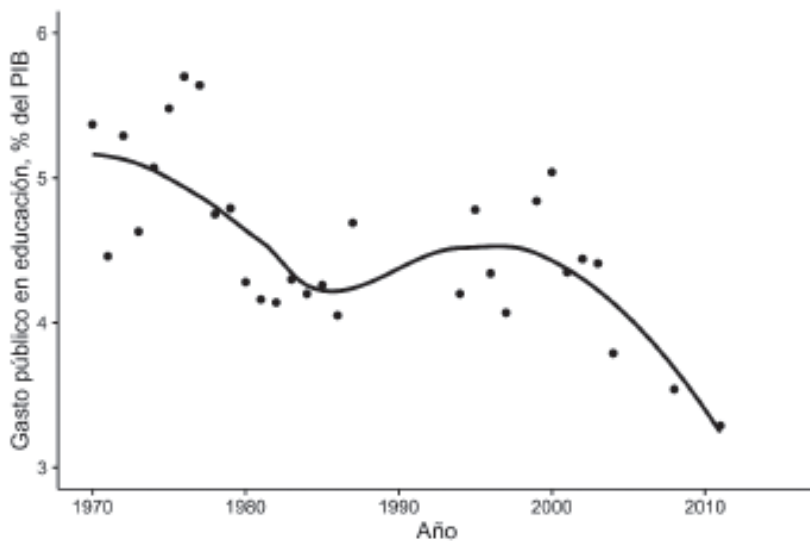
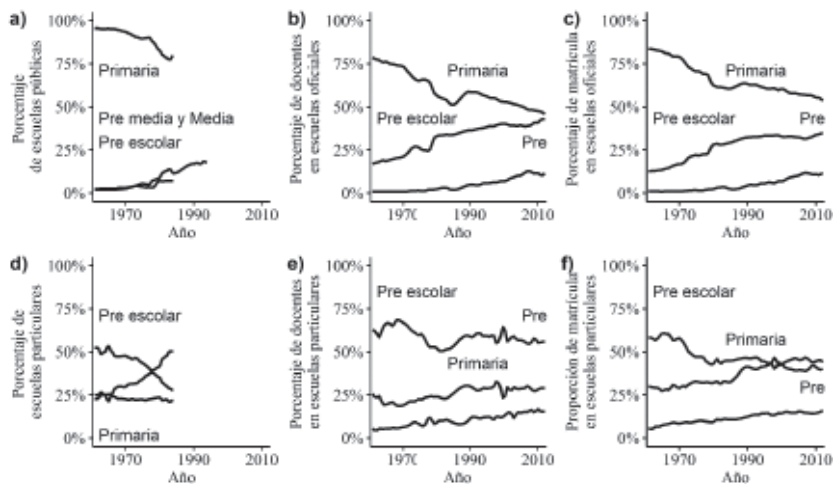


Gráfico 2

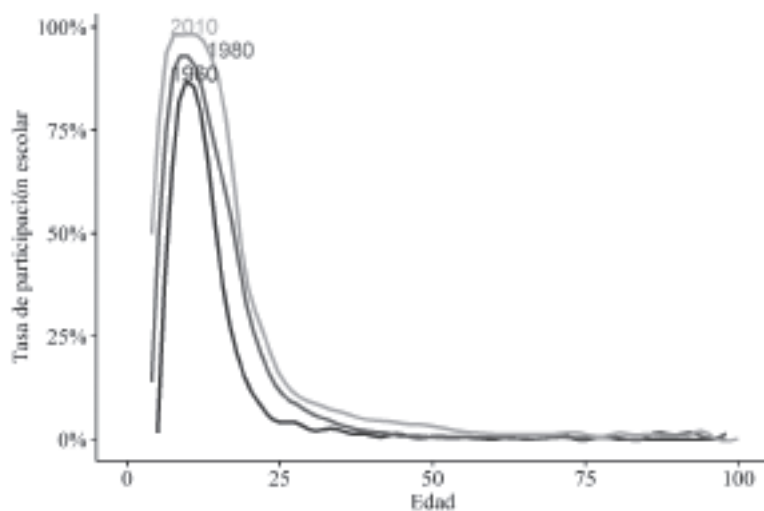
Distribución de matrícula, docentes y escuelas según nivel educativo y tipo en Panamá. 1960 - 2010



Fuente: Elaboración propia con base a datos de INEC.

Gráfico 3

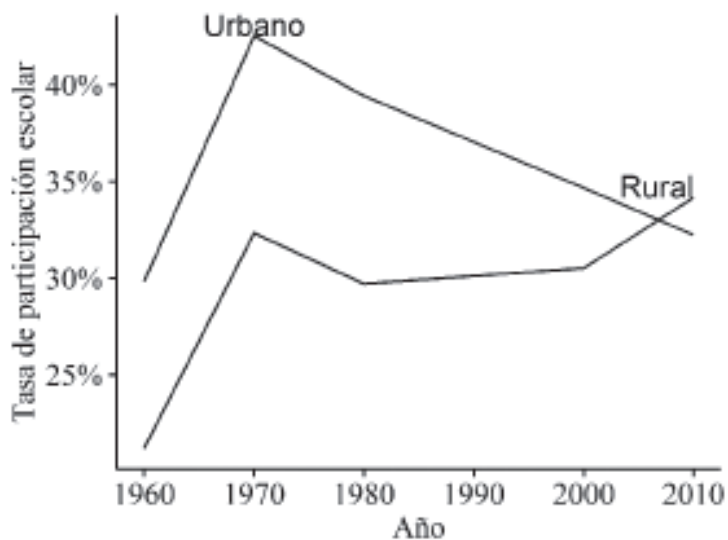
Tendencia de la participación escolar por edad y por año en la Rep. de Panamá. 1960 - 2010



Fuente: Elaboración propia con base a datos de IPUMS (2015) e INEC (1960 - 2010).

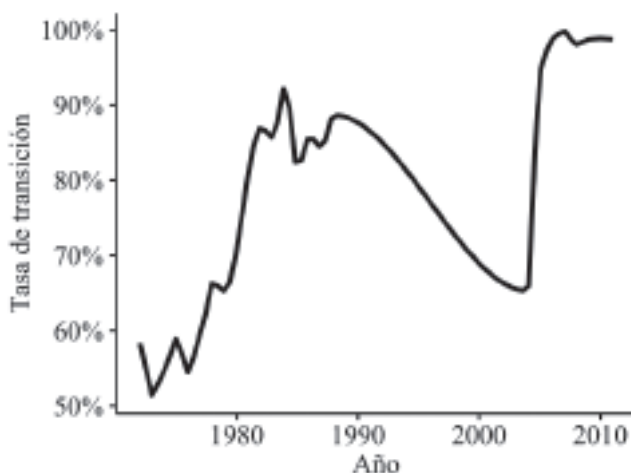
Gráfico 4

Tasa de participación escolar según zona urbana y rural. 1960 - 2010



Fuente: Elaboración propia con base a datos de IPUMS (2015).

Gráfico 5
Tendencia de la transición de educación primaria a educación secundaria



Fuente: Elaboración propia con base a datos de UNESCO (2015).

Cuadro 1
Contribución del tipo de área geográfica a la desigualdad total
de resultados educativos en Panamá. 1960 - 2010

Desigualdad	1960	1970	1980	1990	2000	2010
Total	0.50	0.48	0.43	0.37	0.34	0.31
Urbana	0.62	0.58	0.51	-	0.42	0.40
Rural	0.34	0.34	0.31	-	0.26	0.24

Contribución a la desigualdad total

		1960	1970	1980	1990	2000	2010
Intragrupal	Absoluta	0.21	0.20	0.19	-	0.17	0.16
	Relativa	41%	42%	44%	-	50%	51%
Intergrupal	Absoluta	0.24	0.23	0.19	-	0.12	0.11
	Relativa	48%	47%	44%	-	36%	34%
Residuo	Absoluta	0.06	0.05	0.05	-	0.05	0.05
	Relativa	11%	11%	12%	-	14%	15%

Contribución a la desigualdad intragrupal

Urbano	Absoluta	0.08	0.08	0.06		0.03	0.03
	Relativa	40%	38%	35%	-	19%	17%
Rural	Absoluta	0.12	0.12	0.12	-	0.13	0.13
	Relativa	60%	62%	65%	-	81%	83%

Cuadro 2

Contribución del sexo (masculino, femenino) a la desigualdad total de resultados educativos en Panamá. 1960 – 2010

Desigualdad	1960	1970	1980	1990	2000	2010
Total	0.50	0.48	0.43	0.37	0.34	0.31
Masculino	0.51	0.48	0.43	0.37	0.33	0.31
Femenino	0.49	0.48	0.43	0.37	0.34	0.31

Contribución a la desigualdad total

Intragrupal	Absoluta	0.25	0.24	0.21	0.19	0.17	0.15
	Relativa	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Intergrupal	Absoluta	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
	Relativa	1%	2%	1%	1%	3%	4%
Residuo	Absoluta	0.24	0.23	0.21	0.18	0.16	0.14
	Relativa	49%	48%	49%	49%	48%	46%

Contribución a la desigualdad intragrupal

Masculino	Absoluta	0.14	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
	Relativa	54%	54%	51%	50%	49%	47%
Femenino	Absoluta	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08
	Relativa	46%	46%	49%	50%	51%	53%

EDUCACIÓN Y DESIGUALDADES SOCIALES

ANÁLISIS DE LAS MISIONES RELIGIOSAS PROTESTANTES (1960-1970) Y DEL PROYECTO DE LAS “UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO” (2006-2014) EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

José Alberto Flores Jácome*

INTRODUCCIÓN

En la capital ecuatoriana se localiza la “Capilla del Hombre”, obra emblemática del pintor-muralista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín (1919-1999). La misma recoge un número importante de cuadros elaborados por el mismo. El cuadro central de esta obra es el denominado “Potosí, en busca de la Luz y la Libertad”, se ubica en la cúpula de la mencionada “capilla”. El cuadro retoma el proceso de explotación colonial realizado en las minas de plata-cobre, mismo que se asentó sobre la operacionalización de los cuerpos al sistema colonial para la generación de excedentes coloniales, tanto a nivel económico por medio del trabajo simbólico y material, como también a nivel del sentido (Gago y Obarrio, 2016: 19). El excedente de sentido consiste en elaboraciones discursivas por medio de dispositivos de poder que generan exclusión del sujeto colonizado. De esta forma, el presente análisis no pretende ingresar en los pormenores del mural de Guayasamín, más bien intenta contribuir a la descodificación de los dispositivos de poder

* Educador, investigador y sociólogo. Su formación la ha realizado en Ecuador (Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Las áreas de investigación que trabaja son: filosofía latinoamericana, pedagogía crítica y estudios amazónicos.

que legitiman la lógicas de extracción de recursos y de subjetividades a favor de la expansión del capitalismo, proceso de desposesión que se ha desarrollado en América Latina.

A partir de la obra de Guayasamín, el carácter moderno de la dominación capitalista puede ser diseccionado. En primer lugar, el autor revela al sujeto colonial como sujeto hablante que propone su propia reivindicación al intentar salir de la máquina de violencia y horror. Los cuerpos intentan salir de su realidad de miseria, se dirigen hacia la luz, es una actitud que confronta, resiste y se enfrenta a las redes de poder que, en la presente interpretación, se apoyan en regímenes de verdad que producen explotación y sometimiento hacia unas estructuras que utilizan el giro antropológico de la modernidad a los intereses del capital y su correspondiente acumulación. Por otro lado, la centralidad del sujeto en la “Capilla del Hombre” es un elemento que muestra otro de los rasgos constituyentes de la modernidad: desplaza la centralidad en la idea del “dios” cristiano; la obra puede ser leída como la superación a la divinidad institucionalizada en la Iglesia Católica y, los cuerpos que presentan el proceso de explotación y camino desesperado hacia la ‘Libertad y Luz’, pueden ser entendidos también como subjetividades históricas emergentes que hablan por sí mismas al denunciar el horror de procesos colonizadores, en especial contra pueblos indígenas y negros.

En este sentido, el presente trabajo muestra que el discurso moderno que se centra en el giro antropocéntrico de la historia y la superación de lógicas religiosas para la formación del Estado, no es sustentable. La argumentación se centrará en dos premisas que recorren el *corpus* argumentativo a partir de la utilización de los dispositivos coloniales articulados en la actualidad en 1) utilización de la centralidad del sujeto por parte del capitalismo en beneficio de los procesos de acumulación y, 2) articulación de las lógicas religiosas dentro de los procesos de subjetivación de poblaciones bajo los intereses del capitalismo. Los dispositivos coloniales se articulan con el estado moderno y, crean maquinarias de desposesión, no solo de recursos naturales, sino también de formas de subjetividades.

La generación de un excedente de sentido respecto a las poblaciones indígenas de América Latina, se producen por medio de dispositivos concretos que sostienen influencia directa sobre el común de las poblaciones. Es decir, el aparataje de difusión de información se torna central en este análisis debido a su función per formativa. Los sujetos indígenas han sido construidos históricamente desde de la acumulación de discursos que los objetivan en lo grotesco, salvaje, violento, irracional...

El presente análisis, localiza al sujeto excedido (excluido) en el centro de los discursos que evocan los dispositivos modernos, éstos se articulan en la formación estatal contemporánea con la finalidad de

plantear un debate crítico en el contexto latinoamericano. El camino de este análisis localiza materialidades de representación donde el sujeto “habla” en la configuración de dispersiones sobre el acontecimiento humano, inscrito en archivos históricos de instituciones sociales¹. Este análisis permite identificar prácticas o lo que se podría llamar la materialización de los saberes, para determinar formas concretas en que los sujetos son definidos por la empresa colonial y moderna. De esta forma, la “práctica” llega a determinar la continuidad de la historia hasta el *aquí y el ahora* (Deleuze, 2014:19), es una continuidad que surge de la contingencia en que rupturas, mutaciones o continuidades configuran la realidad. Es así que se localiza la noción de “práctica” como un elemento constitutivo de los procesos de subjetivación.

Antes de adentrarse en las profundidades de los procesos de subjetivación, conviene responder la interrogante sobre el sentido de un análisis de disección de los dispositivos modernos en América Latina. El escenario regional requiere de una crítica de la forma en que el capitalismo racializa a poblaciones indígenas. Siguiendo el principio emitido por Gago y Obarrio “[l]a crítica de la modernidad permanece incompleta sin el examen exhaustivo acerca de cómo el principio de raza se afirmó como un corpus de saberes, discursos, fantasías y formas de explotación y dominio naturalizadas” (2016:14). La modernidad significa para la región latinoamericana la generación de formas de vida catastróficas para poblaciones enteras. Por lo tanto, un trabajo como éste contribuye a la desmitificación del mito del progreso generado por la modernidad capitalista y sus instituciones (Echeverría, 2006).

Asimismo, la importancia del análisis de las contradicciones del capitalismo fomenta la transformación social. Para América Latina, y

¹ El trabajo tomó en cuenta el archivo del Instituto Lingüístico de Verano; su sede ubicada en Texas proporcionó un total de veinte documentos que se puede clasificar como material antropológico y pedagógico, usado en su labor pedagógica y evangelizadora con la población Waorani. Por otro lado, se accedió a la colección Abya Yala de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, donde se localizó material pedagógico e histórico relacionado a las actividades del ILV con la población Waorani (67 documentos). El archivo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador permitió localizar las colecciones del 1) Boletín Ecuatoriano de Antropología (Universidad Central del Ecuador) y, 2) Revista de Antropología (PUCE), mismos que sirvieron para localizar debates académicos respecto a las actividades realizadas con grupos indígenas. Asimismo, se realizó una revisión sistemática en las diferentes instancias del Ministerio de Educación sobre programas educativos y documentación referida a las Unidades Educativas del Milenio. Finalmente, vale la pena considerar en la revisión de representaciones sobre indígenas Waorani, el trabajo realizado en 1) archivos audiovisuales (Cinemateca Nacional y, de los EDOC-Encuentros de Otro Cine) y, 2) revisión a profundidad de las fuentes primarias analizadas por Cabodevilla (2010 y, 1994). Para las argumentaciones aquí realizadas, el trabajo de archivo fue triangulado con una extensa revisión bibliográfica y trabajo de campo realizado en las ciudades de: Limoncocha, Arajuno, Toñampare, El Coca, Puyo y Quito.

en el caso ecuatoriano en concreto, es una lucha contra las estructuras coloniales (Polo, 2012: 60), mismas que han sometido (y someten) a las minorías indígenas a situaciones de exclusión. Estas estructuras coloniales son estructuras de poder, que han penetrado hasta dimensiones epistémicas de producciones de conocimiento en la región.

El presente estudio, localiza a las estructuras coloniales que operan en instituciones modernas, tales como la “escuela”, como productoras de desigualdad social. Ésta última se evidencia en cifras de pobreza e indigencia muy elevadas, que en el caso en cuestión, ubican a la región amazónica como una de las que más aporta de forma directa a la economía nacional², pero que al mismo tiempo es la más pobre del país. Esta situación será detallada más adelante. Vale la pena adelantar que esta realidad es sentida por las poblaciones indígenas en la cotidianidad con empleos precarios, falta de acceso a los diversos niveles educativos, acceso limitado a instituciones de salud, viviendas precarias y, contaminación de territorios considerados como ancestrales (Trujillo 1999, 20).

El recorrido plantea un doble movimiento, entender el presente a partir del pasado y, por otro lado, entender el pasado a partir del presente. El acontecimiento pasado ubica a la primera maquinaria pedagógica destinada a formar sujetos modernos indígenas en el territorio indígena de la nacionalidad Waorani, el “Protectorado indígena” creado por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) hacia la década de 1960. Mientras que el acontecimiento presente es definido por la maquinaria pedagógica de las Unidades Educativas del Milenio que se desarrolla dentro del mismo territorio. De esta forma, la apuesta explicativa intenta cuestionar las formas en que la modernidad disciplinaria y colonial penetra en las subjetividades indígenas para “integrarlas” al proceso de desarrollo planteado por el Estado. Tres momentos de análisis planteado definen este proceso. En primer lugar, la localización de lógicas coloniales que se articulan en el desarrollo moderno, determinando los procesos actuales de penetración hacia el territorio amazónico por medio de superestructuras tales como las Unidades del Milenio (segundo momento), para finalmente localizar el antecedente pedagógico que la modernidad no logra superar en el proyecto de cercamiento y “civilización” que el Instituto Lingüístico de Verano proponía para la población Waorani. En fin, el análisis da cuenta que el presente se configura por medio de las contradicciones del pasado, estrategia que el capitalismo aprovecha para consolidarse en la contemporaneidad del proceso que determina la vida en la Amazonía del Ecuador.

² El análisis de Acosta (2009) recuerda que “el petróleo representó el 22,2% del PIB, el 63,1% de las exportaciones y el 46,6% del Presupuesto General del Estado, en el año 2008”.

A. LA AMAZONÍA ECUATORIANA Y SU RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA”

1.1 ARTICULACIÓN DE LÓGICAS MODERNO-COLONIZADORAS EN LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA”

Ecuador se divide en cuatro regiones naturales³. La más grande de ellas es la región amazónica. El territorio amazónico comprende seis provincias Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Esta región tiene la particularidad de albergar a varias nacionalidades⁴ reconocidas constitucionalmente por el Estado: Achuar, Andoa, Cofán, Kichwa, Sápara, Sekoya, Shiwiar, Shuar, Siona y Waorani⁵ (CODENPE 2014). Así mismo, parte de este territorio constituye el hábitat de grupos en aislamiento voluntario, familiarizados con la nacionalidad Waorani, y denominados Tagaeri-Taromenani.

Dentro del proyecto político de la “Revolución Ciudadana” en el Ecuador, el Estado se ha relacionado con la región amazónica en tres momentos: conocimiento y comprensión de las desigualdades sociales en la región (2007-2010), trazado de estrategias para la utilización de los recursos naturales (2009-2013) y, efectivización de estrategias de apropiación de dichos recursos (2013-2017). A continuación se describirán cada uno de estos momentos.

El conocimiento y comprensión de la situación social de la Amazonía ecuatoriana (2007-2010), llevado a cabo por parte del proyecto de la “Revolución Ciudadana” consiste en entenderlo a profundidad como el territorio con los mayores índices de desigualdad y exclusión social⁶. Así como también como la región con menor índice de reducción de brechas de pobreza entre 1998-2006, donde por ejemplo la tasa neta de desnutrición desciende muy poco, “[...] la cual alcanzaba 26,3%, en 1998 y llegó a 24,5%, en 2006” (SENPLADES, 2007:98). Asimismo, y revisando el campo educativo, las tasas netas de matriculación escolar básica apuntan a la región como la más deficiente en este aspecto, con el 90,00% en relación con la región Costa (90,8%) y Sierra (90,9%)

3 Las regiones naturales son: Litoral o Costa, Interandina o Sierra, Amazónica, e Insular o Galápagos.

4 El censo del 2001 muestra que el 19,6% del total de indígenas se concentra en la región amazónica (Chisaguano, 2006: 31).

5 Como el análisis se concentrará en esta nacionalidad conviene acotar que tal como lo menciona Laura Rival, “a lo largo de los años se han usado diferentes formas de escribir este nombre” (2015: 9). En el presente trabajo utilizamos la de “Waorani” y no “Huaorani” en el sentido de acentuar el carácter oral-fonético de este término, en contra la de carácter escrito-ortográfico de escribir este nombre”.

6 Estos datos se pueden observar en el informe presentado por el INEC en el año 2006, donde la región que aparece con mayor concentración de pobreza es la Amazónica: 59,7% de pobreza y, 39,6% de indigencia.

(SENPLADES, 2007:100). En este contexto, “[l]os niveles inferiores de acceso a educación básica lo tienen los indígenas (86%)”⁷ (SENPLADES, 2007:100). Esta etapa, puede ser descrita como un diagnóstico de la zona para definir los programas a desarrollarse con la finalidad de articular negociaciones que beneficien tanto a la explotación petrolera, como a las poblaciones indígenas⁸. Vale puntualizar que para las nacionalidades indígenas, y de manera específica en el caso Waorani, se concretan iniciativas como la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenani (ZITT) para la protección de pueblos en aislamiento voluntario. Esta iniciativa, desde el año 2012 hasta la actualidad entrará en debate debido a la ampliación de la frontera petrolera hacia territorio de la ZITT; los mapas legitimados por el Ministerio del Ambiente favorecen la concesión de bloques petroleros para el inicio de las operaciones extractivas⁹.

El segundo momento, se identifica como el trazado de estrategias para la utilización de recursos (2009-2013). Éste se define por la intensificación del proceso extractivo¹⁰ para la articulación de un modelo post-petrolero denominado como “biópolis ecoturística”. El mismo “Plan de Desarrollo 2009-2013” propone el incremento de la producción petrolera (SENPLADES, 2009: 87). Además, la región amazónica es determinada como una importante reserva de recursos naturales no renovables: petróleo y yacimientos de minerales metálicos y no metálicos. La explotación de los mismos, supone un impacto ambiental, pero al mismo tiempo de valor significativo para el funcionamiento de la sociedad como “fuente de divisas para el país” (SENPLADES, 2009:103). Esta visión supone diversificación de las formas de propiedad, como por ejemplo despojo de territorios a comunidades locales en beneficio de una inserción estratégica en el capitalismo contemporáneo. Por otro lado, supone también políticas de compensación locales como por ejem-

7 Según el documento estatal del 2007 (Plan Nacional de Desarrollo) la población afroecuatoriana tiene una tasa neta de acceso a la educación básica de un 87%. Por otro lado, los mestizos con el 91,8% y, blancos con el 90,7%.

8 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 intentará plantear las dimensiones de atención social del Estado. Esta será la base sobre la que se sostendrá el discurso político que pregona el de cambio de matriz productiva, mismo que plantea el paso de un modelo primario exportador y extractivista hacia un modelo denominado “biópolis ecoturística” (SENPLADES, 2009:7). El cambio conllevará la profundización de las actividades extractivas para la inversión social y de infraestructura que sostenga el mencionado proyecto.

9 Para profundizar en esta problemática se puede revisar la “Intervención de Eduardo Pichilingue Ramos, en el pleno de la Asamblea Nacional” (2012).

10 La XI ronda petrolera es una muestra de la intensificación de la actividad extractiva en el Ecuador. Se licitan nuevos bloques petroleros entre 2013 y 2014. Para profundizar revisar Vallejo (2014).

plo la construcción de infraestructuras, tales como “Ciudades del Milenio”, “Universidades”, “Carreteras” y “Unidades Educativas del Milenio”¹¹, en sectores que se ven influenciados directamente por la actividad extractiva. Es la etapa de negociaciones entre los diversos actores de la actividad extractiva y poblaciones locales. Otro ejemplo a considerar en el campo de las negociaciones, corresponde al planteamiento de políticas de reparación a comunidades que han sido afectadas por la contaminación de la actividad extractiva; el Estado se compromete a la “remediación ambiental en la Amazonía mediante el tratamiento de piscinas en los campos petroleros, tratamiento de los suelos contaminados, inversión en facilidades para reinyección para el agua de formación, entre otros procesos” (SENPLADES, 2009:270).

El tercer momento, posterior al diagnóstico y negociación de beneficios de la actividad extractiva, corresponde a la operacionalización de las actividades extractivas (2013-2017). Se promueven las industrias estratégicas con el discurso de la reducción de las brechas sociales. Cabe indicar que la materia prima de estas industrias son los hidrocarburos (petróleo y gas), minería (metálica y no metálica) y recursos forestales. Estos sectores favorecen la inserción del Ecuador en el capitalismo contemporáneo dentro de redes internacionales hacia Europa, Asia y América, de manera especial se miran los centros capitalistas de China, Corea, Brasil y Estados Unidos. Así mismo, desde el año 2012 se incrementa la inversión estatal en infraestructura, proyecto funcional al incremento de la producción de materia prima, para favorecer la consolidación del modelo económico utilizable al capitalismo contemporáneo. Las principales obras de infraestructura que dinamizan los sectores estratégicos en el Ecuador tiene que ver con redes viales, saneamiento ambiental, infraestructura de salud, comunidades del milenio-infraestructura habitacional, infraestructura deportiva, infraestructura de servicio eléctrico, infraestructura educativa, infraestructura para la protección del ambiente, infraestructura para el desarrollo urbano, infraestructura para el ámbito cultural, entre otros (Ecuador Estratégico, 2016).

La profundización de la industria extractiva, genera un proceso de re-elaboración sobre el significado mismo de la Amazonía ecuatoriana. Los actores externos, tales como las empresas petroleras o el Estado, determinan una nueva configuración espacio-temporal de la región (Harvey, 2005). Vale aquí la descripción que realiza Pizarro (2009):

11 Datos oficiales presentados por el Ministerio de Educación localizan a 61 Unidades Educativas del Milenio en funcionamiento, 52 en construcción y, 212 en proyecto de construirse (Ministerio de Educación, 2016). Es decir, del total proyectado (325), el 34,8% se ha ejecutado-incluyen las que se encuentran en construcción, faltando el 65,2% de proyectos a concretarse.

“la Amazonía es una región cuyo rasgo más general es el haber sido construida por un pensamiento externo a ella”. Una visión “eldoradista” (Svampa, 2013: 43) que la ubica como una fuente inagotable de recursos. Sin duda, ésta es la visión fundante de la modernidad en la región. De esta forma, y tal como lo señalan Wilson, Bayón y Diez, el proceso de urbanización de la región amazónica resulta de “un complejo proceso histórico de expansión y consolidación territorial, extracción y exportación de materias primas, y desposesión y ‘civilización’ de la población indígena” (2015:9). Estos autores sintetizan lo que se podría denominar el dispositivo de control¹². Éste opera en tres dimensiones: extracción de recursos, control territorial y control social. Así, la instauración del dispositivo moderno localiza el ingreso de Ecuador al mercado mundial (Wilson, Bayón y Diez, 2015:8) durante el inicio de la conquista española hacia 1538 (hasta 1809). Este dispositivo opera a nivel de extracción de recursos mediante la apropiación de oro, en un sistema encomendero, donde el control social es realizado por reducciones manejadas por la Iglesia Católica. El segundo momento, que localizan los autores es el definido por la apropiación del caucho (1880-1920), éste opera en un sistema de haciendas y el control social se lo realiza por medio de las “correrías” para la captura de esclavos. El tercer momento, es el relativo a la extracción de petróleo (1940-2007), el control territorial se define por la creación de las primeras ciudades (relacionada con el ingreso de colonos), la definición de bloques y pozos petroleros; el control social se articula entre militares y misiones (católicas y protestantes). Finalmente, los autores enuncian el dispositivo contemporáneo (2010-2035), basado en la extracción del conocimiento local (amazónico), en circunscripciones territoriales de conexión regional como el proyecto IIRSA¹³, donde la conexión interoceánica Manta-Manaos determina el intercambio de bienes y servicios; las “Ciudades del Milenio” o centros de conocimiento como la “Universidad Amazónica Ikiam” determinan el control social en el ámbito de las prácticas de “lo cotidiano” y del “conocimiento de la naturaleza” respectivamente.

Los distintos momentos en que opera el dispositivo de control en la historia de la Amazonía ecuatoriana están configurados alrededor de la extracción de recursos. Uno de los elementos que al interactuar con la población indígena de la región se puede apreciar, es que los grandes beneficiarios de las actividades de extracción no han sido las poblaciones amazónicas. Dentro del desarrollo capitalista, estas poblaciones son catalogadas como “sobrantes” y por lo tanto son excluidas,

12 Para ampliar esta estructuración, revisar la infografía desarrollada por Wilson, Bayón y Diez (2015:11).

13 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

encomendadas, reducidas, esclavizadas o civilizadas. Los relatos recogidos en el trabajo de campo, mencionan que lo que se ha denominado como dispositivo de control, tiene un doble efecto sobre las poblaciones, “había esa doble dimensión de vaciamiento y concentración” (MB)¹⁴, una estrategia que a más de asegurar el control y aprovisionamiento de recursos, lograba que “las poblaciones indígenas molestaran lo menos posible” (MB), es decir, se vieran obligadas a conformarse en condiciones muy precarias de vida.

El proceso que el proyecto de la “Revolución Ciudadana” ha planteado en la Amazonía ecuatoriana, a recordar: conocimiento de la situación y principales demandas, negociación de las actividades extractivas para su posterior operacionalización, es un proceso que sostiene lógicas reproducidas a lo largo de la historia en la región. Resulta una lógica perversa, una “economía de rapiña” (Federici, 2010:296), donde se utiliza el conocimiento previo de las necesidades de la población, para posteriormente entablar el proceso de mediación y finalmente, apropiarse de los recursos que forman parte de sus territorios. Se determinarán las formas en que el capitalismo contemporáneo genera sujetos “sobrantes”, excluidos, concentrados-vaciados en la región amazónica del Ecuador. Se analizará el caso de la nacionalidad Waorani y el proceso que en el lenguaje de “lo común” se ha denominado como “contacto” en contraste con el proyecto que se desarrolla en la localidad de Toñampare, la instauración de una Unidad Educativa del Milenio. No solo se extraen recursos, también se extraen subjetividades y en este proceso, los discursos articulados por parte de los actores externos a la región amazónica toman especial realce, ya que a las poblaciones indígenas se las fabrica como una “exterioridad salvaje” (Gago y Obarrio, 2016:12). Estos dos momentos se definen a partir de programas de dominación que a más de explotar el valor de la región, constituyen sistemas de “descalificación moral” y social de la población indígena Waorani, en el marco de un supuesto proyecto de modernización-civilización pedagógico.

1.2 LOS WAORANI EN LA HISTORIA DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA

COMPRIENDIENDO LAS FUENTES HISTÓRICAS

Los estudios que se han desarrollado sobre esta nacionalidad muestran dos dimensiones de representación y registro que han marcado la forma en que se ha entendido a esta población: subexposición y sobreexposición. Un registro o archivo marcado por la subexposición generalmente

¹⁴ De esta forma se indicarán los relatos de entrevistas realizadas. Si ha optado por esta forma para proteger la identidad de los entrevistados.

vacía de contenido a un pueblo y, por el contrario, la subexposición genera excedentes o estigmas en la forma de entender a un pueblo. De esta forma, la historia del pueblo Waorani puede entenderse como una puesta en escena de una serie de imágenes creadas por distintos actores, con la finalidad de instaurar un imaginario común sobre este pueblo, más allá de sí mismo, en diálogo con otras formaciones sociales.

La representación es de esta forma un ejercicio de poder. Huberman (2014) localiza dos bandos en esta relación. Por un lado, los actores del capitalismo (colonial o moderno) y, por el otro al pueblo. Es en estas encrucijadas de poder donde se determinan las relaciones de representación: subexposición, sobreexposición o exposición. Mientras que las dos primeras son funcionales a los intereses del capitalismo, la tercera responde a los intereses del pueblo. Es en este sentido, que la historia del pueblo amazónico Waorani ha estado marcada por representaciones funcionales a la industria extractiva y, otras funcionales para la visibilización de sus intereses en el marco de una verdadera integración con la “nación” ecuatoriana.

Los registros de subexposición o sobreexposición transmiten las amenazas que ha sufrido el pueblo indígena. Éstas pueden ser entendidas como la falta de participación de los Waorani en la definición de sus intereses y la consecuente invisibilización de su historia, de sus conocimientos y de sus instituciones; otra consecuencia de tal invisibilización es la exclusión de la participación directa por definir “lo común”.

Las primeras fuentes de conocimiento escrito sobre los indígenas de la Amazonía refieren a la época colonial. Por ejemplo, la ruta trazada por Francisco de Orellana y documentada por el cura dominico Fray Gaspar de Carvajal (Cuesta, 1999: 51). En este tipo de relatos de la época mencionada se resalta el oro y otros recursos de la región. Posterior a este momento, aproximadamente hasta 1890 se encuentran escritos de misiones religiosas católicas (jesuitas, franciscanas y mercedarios), mismos que describen a grupos de salvajes definidos como záparos, avigiras, avishiras, ahuishiris, aushiris, entre otros (Cabodevilla, 1994:114). Estos grupos serán reducidos, esclavizados o evangelizados. En estos momentos históricos, la lógica de subexposición determina la comprensión de la existencia de estos pueblos desde mitos referentes a recursos naturales o humanos (conversión de almas), desde los intereses extractivos del protoestado colonial. Así mismo, la subexposición está definida por la poca documentación generada por las misiones religiosas. Esta situación se heredará durante la época republicana del Ecuador, hasta la reconfiguración de los intereses capitalistas alrededor del recurso petróleo.

Durante las primeras exploraciones petroleras, desarrolladas aproximadamente hacia 1937 por la Royal Dutch Shell (Narváez, 1996),

el Estado mostrará mucho interés por las poblaciones amazónicas. Se articulan misiones católicas, misiones protestantes, petroleras, antropólogos, centros universitarios y el estado ecuatoriano para una nueva economía política de producción de conocimiento sobre las poblaciones amazónicas. Se desarrolla un proceso de sobreexposición de la población Waorani en la etiqueta de “auca”, palabra Kichwa que significa salvaje. Las construcciones que apelan a esta etiqueta acusan a los “aucas” de “haber asesinado a cinco misioneros evangélicos (1956) [...] a dos misioneros capuchinos (1987) y a varios empleados petroleros (1970-1994)” (Trujillo, 1999: 13). Así también, la prensa escrita se focaliza en esta población y, como argumenta Rival, las categorías de construcción del otro: salvaje, víctima, buen salvaje, contribuye a la diferenciación de “la comunidad nacional civilizada en oposición a los otros salvajes” (Rival, 1994:283). Un ejemplo de tal representación, es la realizada por los diarios informativos en referencia a las muertes perpetradas en 1956: “[m]isioneros y científicos extranjeros han sido masacrados por la sanguinaria tribu de los Aucas de la región Oriental [...] los cinco guapos blancos [...] como soldados caídos en el cumplimiento de su deber” (Rival, 1994: 263-264). Esta sobreexposición no considera a los Waorani como personas.

Así mismo, la producción de archivos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), institución que se encargó de los primeros procesos de “contacto” con los Waorani a partir de 1952, puede ser interpretada como una dialéctica de representación entre subexposición y sobreexposición. Aparecen con las actividades de esta institución las primeras narraciones Waorani, recogidas de manera escrita, la lengua de este pueblo (Wao Tededo) es traducida al español y, se producen materiales de carácter educativo, religioso y del campo de la salud para la utilización en procesos de alfabetización y de promoción de la salud llevados a cabo con la población indígena. En esta representación, los mal llamados “aucas” son presentados como “Huaorani” (verdaderos seres humanos).

Así también, fuentes escritas donde la representación es realizada por los propios Waorani ha sido desarrollada, como por ejemplo la obra de Nenquimo (2014), recoge las tradiciones, historias, mitos y leyendas de su pueblo para explicar las relaciones que se tejen con los grupos en aislamiento voluntario Tagaeri-Taromenani.

Estudios más recientes de carácter histórico y antropológico, han mostrado las complejidades del pueblo Waorani y su relación con la naturaleza o con los diversos actores que configuran la región amazónica, sintetizados en Rival (2015: 9-33), logran exponer los intereses de esta nacionalidad.

Lamentablemente, el acceso a los diversas fuentes de representación sobre los Waorani constituye una problemática, debido a que la

mayor parte de los mismos se encuentran fuera del país conformando colecciones académicas con costo económico de consulta. Por ejemplo, el país carece de un riguroso archivo de documentación respecto a las actividades desarrolladas por el ILV. Los centros académicos y políticos de la Nacionalidad Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (NAWE) no poseen bases de datos o registro alguno sobre los estudios que se han realizado sobre la nacionalidad¹⁵.

Hay una imagen privatizada de las representaciones generadas a lo largo de la historia de los Waorani. Esta situación genera una problemática no solo para investigadores, sino sobre todo para la misma nacionalidad indígena, que ha sido privada del conocimiento realizado sobre ella.

COMPRENDIENDO LAS FORMACIONES POLÍTICAS. EL NANICABO

En la historia de la Amazonía, es importante considerar las formaciones políticas que los pueblos indígenas han desarrollado a lo largo de la historia. Es sumamente importante, ya que se sale de las fuentes escritas para intentar entender desde la mirada local la articulación histórica que se ha elaborado.

Los nanicabos son *unidades domesticas*. Con unidades se intenta enfatizar la singularidad de las múltiples formas de organización de la población Waorani. No intenta mostrar una homogenización en las formas organizativas, o peor aún, la existencia de un prototipo de organización ideal en esta población. Es así que, el *nanicabo* (nanicaboiri¹⁶) constituye el dispositivo que posibilita la agrupación de personas de la misma ascendencia o linaje (endogámicas). Es un conjunto de relaciones que determina la formación de un grupo humano, desde la perspectiva indígena amazónica desarrollada por los Waorani.

Rival observó que el término es también utilizado para referirse a grupos de animales o plantas (Rival 1996, 138). Pero para referirse a un grupo Waorani, el término va precedido por el nombre del líder que puede ser una anciana o un anciano. Otra forma de referirse, es la utilización del nombre del anciano (a) líder y acompañado del sufijo para plural “iri” (*Ompureiri* por ejemplo). Esta formación social está conformada generalmente por el anciano líder, sus esposas, sus hijas casadas, sus hijos solteros y, uno de sus hermanos con sus mujeres e

15 Por citar un ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin genera un total de mil trescientos documentos sobre los Waorani, donde el 90% se encuentra en inglés. Si se realiza un contraste con la biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, se genera alrededor de cincuenta documentos sobre la misma población indígena. Una búsqueda en la Universidad San Francisco de Quito genera diez textos.

16 El sufijo “iri” connota al plural en el idioma Waorani (*wao tededo*).

hijos (Rival, 1996: 139). La lógica que atraviesa estas formaciones son definidas como uxori-local, es decir el hijo casado sale de la residencia de sus padres, y se traslada a la de su esposa, pero rara vez permanecen con sus padres. Los *nanicabos* concentran varios hogares que se ubican de manera cercana (a uno o dos días de camino).

A pesar de los impactos de la modernización en la infraestructura de las casas, Rival pudo observar la tradicional casa denominada *nanicabo onco*, donde todos los miembros comparten el espacio. En las casas modernas, la lógica persiste a pesar de existir habitaciones separadas (en algunos casos) para padres e hijos casados (Rival 1996, 139).

Por otro lado, el ciclo del *nanicabo* experimenta su punto más tensionante cuando los ancianos han envejecido demasiado. Este cálculo se lo realiza “cuando los últimos nietos están por casarse” (Rival, 1996:141). Y es en este momento, cuando la búsqueda por constituirse en el nuevo líder del *nanicabo* se desarrolla. En estas tensiones, y sin romper los lazos constituidos, los yernos suelen regresar al núcleo de sus padres para favorecer la consolidación de la nueva formación. También los hermanos podrían aliarse y formar el propio *nanicabo*, o sino competir entre sí formando “alianzas con parientes políticos o hermanos mayores” (Rival, 1996: 141). El desenlace de la nueva configuración puede tener varios caminos donde también el hijo mayor o una de las hijas casadas pueden ponerse al frente del *nanicabo* (cfr. Rival, 1996: 142). El o la líder se denomina *ahuene* y la pertenencia a un *nanicabo* depende de la fidelidad de los miembros a éste (Rival, 1996: 142). La pareja mayor decide dónde se localiza la casa y, además organiza las fiestas alrededor de la construcción de la maloca.

El significado del *nanicabo* se lo puede comprender así: vivir, comer y dormir en el mismo espacio, dispositivo que conlleva compartir una misma sustancia, es decir “el reparto dentro del *nanicabo* y la realidad física de comer lo mismo y dormir bajo el mismo techo implican una cercanía tan fuerte que los miembros del *nanicabo* sienten que comparten una esencia física, sean o no parientes consanguíneos” (Rival, 1996: 142). Si una persona enferma, el resto de miembros comparte su situación al llevar una dieta especial para ayudarlo a sobrevivir. Rival sintetiza esta experiencia en la frase “la idea de compartir una misma sustancia proviene de la noción de que el vivir juntos hace idénticas a las personas”.

Un buen *nanicabo* es sinónimo de “buena vida”. Siguiendo a Mauss (2004), se puede mencionar que esta forma de organización indígena posiciona la posibilidad de convivir en condiciones de intercambio mutuo. Esto en contraste a las relaciones utilitaristas que la población Waorani experimentó a través de la historia, desde el lado de los agentes a quienes el Estado encargó, ya sea de forma directa o indirecta (margi-

nalización o ausencia), su administración. Actores que se enfocaron en la captación de recursos de la Amazonía ecuatoriana y que sutilmente o aplicando violencia, desarrollaron sus propias formas de valoración del mundo, y por lo tanto, formas políticas de organización en concreto.

1.3 EL PROYECTO PEDAGÓGICO MODERNO DE LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA” Y LA NACIONALIDAD WAORANI

El análisis pretende orientar a una de las principales preocupaciones emitidas por la nacionalidad Waorani. Ésta manifiesta el interés por insertarse en la contemporaneidad nacional, regional y global. Constituye una expectativa de los sujetos por adquirir destrezas y conocimientos que a manera de herramientas les permita crear, mantener y articular relaciones sociales desde sus intereses como nacionalidad. Es la referida a la educación. Álvarez menciona que la “educación [para los Waorani] es la única posibilidad de insertarse plenamente en contextos sociales, tanto locales como regionales” (2015:3). La misma autora menciona que, la educación para los Waorani constituye una herramienta para “metamorfosearse en el otro ‘civilizado’ y sobre todo en el otro que es fuerte y civilizado a la vez (Álvarez, 2011).

Referirse a la nacionalidad Waorani es hablar de una minoría poblacional que habita aproximadamente 809.339 has (Lara, 2007: 314) correspondientes a la región amazónica. El censo nacional de población y vivienda realizado en el año 2010, manifiesta que en Ecuador existen 2.416 Waoranis¹⁷. Esta cifra comparada con el total de la población¹⁸ del país representa el 0,017%. Las estadísticas oficiales consideran a 2.026 personas, de las cuales: 300 personas no han accedido (o acceden) a ningún nivel de instrucción (12,41% del total de la población¹⁹), 41 manifiestan su vinculación con centros de alfabetización (1,7%), 34 acceden al nivel pre escolar (1,41%), 642 se relacionaron con el nivel primario (26,52%), 307 con el nivel secundario (12, 71%). Así como también, el 387 personas (16,02%) tiene educación general básica, 124 personas (5,13%) han cursado hasta el bachillerato, 69 personas (2,86%) han cursado el nivel superior. Lamentablemente, el censo poblacional menciona que ningún miembro de la nacionalidad Waorani ha cursado por un programa de posgrado.

Claramente, la falta de inserción en educación superior por parte de esta población es uno de los principales problemas a resol-

¹⁷ En relación al censo de Población y Vivienda desarrollado en el año 2001, la población Waorani creció en un 31% para el 2010. En este sentido, la población Waorani estimada para el 2016 es de 3000 personas.

¹⁸ La población total en el Ecuador bordea los 14'483.499 (VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010)

¹⁹ Para este cálculo, se considera la población total Waorani indicada en el censo del 2010.

ver. Con menos del 3%²⁰ del acceso de la población a la universidad y, con menos del 6% de finalización del nivel de bachillerato, se denota un modelo educativo excluyente que no ha logrado incluir las particularidades de la población Waorani y, que más bien ha favorecido la reproducción del proceso de exclusión. En este sentido, y siguiendo la tesis de Ibarra (1992), el Estado capitalista funcionaliza las demandas por educación de sectores indígenas, se generan negociaciones que se operacionalizarán de forma precaria, y de esta forma se logra asegurar el control del territorio, que posteriormente será concesionado a la industria petrolera. Muestra de la anterior afirmación, resulta la precaria infraestructura escolar, la falta de oferta universitaria en la región, la falta de maestros para las unidades educativas existentes y problemas con el acceso terrestre a las localidades. Es una relación que en el sector es descrito como de “ausencia de las instituciones del Estado” (RR). Sin duda, la infraestructura destinada al funcionamiento de una de las instituciones modernas por excelencia, la escuela formal, resulta de las negociaciones que las poblaciones indígenas realizaron de forma directa con empresas petroleras o misiones religiosas.

El discurso actual del proyecto de la “Revolución Ciudadana”, intenta contrarrestar la historia moderna de la educación en la Amazonía como “parte de la renovada forma de aprovechar los recursos naturales de la región” (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, 2013), donde las “Unidades Educativas del Milenio” atenderán a “los sectores rurales más pobres a nivel nacional, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas [...] con instituciones educativas caracterizadas por la baja calidad educativa y por la ausencia de las condiciones mínimas para la formación” (Ministerio de Educación, 2012). Es en este escenario donde el Estado articula la construcción de la “Unidad Educativa del Milenio Toñe” (Nihua y Uwi, 2016). El 17 de diciembre del 2012 se firma el contrato entre la empresa estatal “Ecuador Estratégico”²¹ y, “Cantárida CÍA. LTDA.” para la construcción del establecimiento educativo (Ecuador Estratégico, 2012). Este proyecto, se ubica dentro del objetivo estratégico de “incrementar la infraestructura para el servicio educativo en las localidades asentadas en las áreas de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos” (Ecuador Estratégico, 2016).

²⁰ Porcentaje calculado del total de la población Waorani.

²¹ Empresa pública encarga de ejecutar políticas de compensación en poblaciones que se ven afectadas de manera directa por la industria extractiva. Utiliza el 12% de las utilidades y excedentes producidos por el extractivismo para su financiamiento.

B) LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO” EN TOÑAMPARE

2.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE TOÑAMPARE

Toñamapare es una comunidad definida como Waorani. Ésta se ubica en la parroquia Curaray²², cantón Arajuno²³, en el noreste de la provincia de Pastaza²⁴. El “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” elaborado por técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Arajuno en el año 2011, indica que está conformada por 301 habitantes, familiarizados directa o indirectamente a la nacionalidad Waorani²⁵. El origen de esta localidad, está directamente relacionado al Instituto Lingüístico de Verano (ILV), misión evangélica protestante cuyo análisis se retomará posteriormente. Esta comunidad aparece hacia 1978 (Lara, 2007: 181-185) luego de la disolución de la reserva indígena Waorani llevada a cabo por el ILV, y conocida también como Protectorado. Antes de las acciones llevadas a cabo por la misión religiosa, la zona era habitada por un grupo Waorani denominado Guikitairi.

La zona donde habitaba el grupo Guikitairi hacia 1952²⁶, es decir Toñampare, toma especial significado para la nacionalidad Waorani. En esta zona nace Dayuma, la primera mujer en ser contactada hacia 1958 por el ILV. Y, por otra parte, el discurso religioso se encargará de cargar a la localidad con un profundo valor simbólico debido a la cercanía a “Palm Beach” o “Playa Palma” a orillas del río Curaray, lugar en el cual cinco miembros del ILV y un indígena murieron en 1956²⁷ como producto del enfrentamiento, que se produjo por la actitud invasiva de los primeros momentos del denominado “contacto civilizatorio”

22 Curaray alberga a 948 personas identificadas como Waorani según el censo de población del 2010. Es considerada como la parroquia más extensa del Ecuador (8.162 Km² aproximadamente). La población de ésta se conforma por miembros de la nacionalidad Waorani y, por miembros de la nacionalidad Kichwa.

23 El censo poblacional del año 2010 indica que en Arajuno habitan 956 personas pertenecientes a la nacionalidad Waorani.

24 El censo poblacional del año 2010 indica que en Pastaza habitan 1.184 personas pertenecientes a la nacionalidad Waorani (49% del número total de miembros de la nacionalidad).

25 A partir de la observación de campo y de las entrevistas a expertos se concluye que, la localidad tiene un alto índice de influencia de la nacionalidad Kichwa. Las dos nacionalidades han realizado alianzas por medio de matrimonios.

26 Tal como lo mencionan Rival (1996) y Cabodevilla (1994; 2010), antes de la intervención del ILV, existían cuatro grandes grupos Waorani. Eran las “unidades regionales”: Guikitairi, los Piyemoiri, los Baihuairi y los Huepeiri. Éstos a la vez están formados por familias ampliadas o nanicabos. Cada nanicabo tenía zonas definidas de cacería, de cultivo y de recolección de frutos.

27 Los misioneros del ILV muertos fueron: Nate Saint, Jim Elliot, Ed McCully, Peter Fleming y Roger Youderian.

(Stoll, 1985; Patzelt, 2002:117). Por el alto número poblacional en relación a otros asentamientos y, por el simbolismo dado por el discurso religioso, Toñampare es considerada como la “Capital Waorani” (KA). El monumento que le imprime significado es la tumba de Dayuma y de la misionera norteamericana Rachel Saint.

2.2 LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN TOÑAMPARE

La primera mega infraestructura que se construye para la nacionalidad Waorani se la realiza en su “capital”, y estará destinada a satisfacer una de sus más importantes necesidades: la educación (Álvarez, 2013). Es una obra que supera los 5'522.799,17 de dólares norteamericanos (cfr. Ecuador Estratégico, 2012; 2014). La “Unidad Educativa del Milenio” (UEM) de Toñampare es calificada en la tipología estandarizada por el Ministerio de Educación como “menor, con capacidad de 570 estudiantes por jornada”. En palabras de Minteguiaga, estas obras son:

“edificios cuyo diseño arquitectónico considerará las características etnográficas de su zona de influencia y accesibilidad para las personas con limitaciones físicas; sus aulas suponen diseños temáticos, con equipamiento de apoyo y de tecnología de punta (pizarrones electrónicos, ordenadores personales, etc.), bibliotecas y espacios para la práctica de la lectura; dotación de mobiliario ergonómico, compra de maquinarias, construcción de talleres, laboratorios y centros de prácticas técnicas, deportivas, culturales, etc. En igual sentido, las unidades suponen la construcción de espacios dedicados al servicio de alimentación (comedor), de salud y de apoyo psicológico; y cuando el Modelo Pedagógico y el PDI²⁸ lo demanden, pueden incluir hasta una residencia estudiantil” (Minteguiaga, 2014:118).

Considerando la población de Toñampare (aproximadamente 300 habitantes), la iniciativa estatal considera una capacidad que supera en un 89% a la población total de la localidad. Así mismo, al crear el Ministerio de Educación una especie de catálogo de UEM con modelos estandarizados (planteados con el criterio de dinamizar costos), la premisa de considerar las características etnográficas de la población no se cumple. Por otro lado, el acceso a esta localidad es muy dificultoso: conlleva caminatas de dos o tres horas por la espesura de la selva amazónica hacia las comunidades más cercanas. Vale mencionar que los procesos de re-ordenamientos educativos conllevaron el cierre de varias escuelas

²⁸ Proyecto de Desarrollo Institucional.

interculturales bilingües²⁹ de estructura uni-docente con el justificativo de que la UEM recibirá a estudiantes procedentes de sectores aledaños (aunque no cercanos) a Toñampare. De esta forma, se plantea una residencia estudiantil para albergar a los estudiantes que se encuentren en la situación mencionada. Lo que no considera este modelo, es la particularidad cultural de la nacionalidad en el sentido de entender a la familia como un núcleo central en el aprendizaje y subsistencia de los niños y niñas, algunas mujeres manifiestan esta preocupación:

“al cerrarse su escuela, cómo mandan a sus hijos a la escuela de Toñampare con dos días de camino. Te hablo por ejemplo de las comunidades de Teweno y sus alrededores. [...] bueno ya voy y le dejo ¿Pero quién le da de comer en las residencias? Ahí no tenemos familia! [...] Si tú no creas proyectos que consideren a los grupos aliados, no solamente a una comunidad, estás frito [...] en Toñampare algunos no tienen ningún , primo o familiar. Los niños se van a morir de hambre y nadie les va a dar de comer. No les van a dejar sembrar. El niño no se va a mantener con el arroz, lentejas y galletas que solían darles en las escuelitas [...] es una cuestión de desarraigo, de separación y de llevarles a un lugar no conocido a un lugar que solo los visitas” (KA).

Gran parte de la población Waorani continúa siendo muy regionalista y, ante una situación que ponga en riesgo al núcleo familiar, podrían optar por retirar a sus hijos e hijas de escuelas que resulten estar muy alejadas de sus asentamientos tradicionales.

NEGOCIACIONES Y CONSTRUCCIÓN

La “Unidad Educativa del Milenio Toñe” se concretó en un contexto marcado por las negociaciones de la “XI Ronda Petrolera”, que definió bloques petroleros que quizá no afectan de manera directa a Toñampare, pero sí a la nacionalidad Waorani. La iniciativa fue bien recibida por la población, “todo el mundo estaba contento, la idea de una gran construcción en medio de la selva impactaba” (KA). En la actualidad, luego de tres años de no concretarse, el descontento ha crecido. El primer contrato firmado en el 2012 establecía un plazo de 270 días. Las obras se paralizaron para finiquitar un contrato complementario que resuelva problemas de reajustes de costos. El plazo de entrega de la obra se extendió a 120 días más a partir de la suscripción del contrato

²⁹ En el año lectivo 2006-2007 se contabilizaron 1.976 instituciones de carácter intercultural-bilingüe, para el año lectivo 2014-2015 se redujeron a 1.912 (Ministerio de Educación, 2015).

complementario el 3 de diciembre del 2014. Ecuador Estratégico (2015) estimaba la finalización de la obra el 30 de abril del 2015, pero hasta la actualidad no se termina la obra. En este sentido, “muchas denuncias se han emitido al respecto” (KA), culpabilizando al Estado por la falta de transferencia de fondos:

“[...] he hablado con el arquitecto [...] Y me dice que la primera fase que es la infraestructura en sí está en un 93% , de ahí no ha avanzado. Ahí se quedó. Hasta el mes de diciembre que no hubo pagos, ni una sola transferencia a ‘Cantárída’. Se paralizó todo [...] y no sabemos hasta cuando, porque no sabemos cuándo irán a pagar. De mobiliario no hay nada” (GC).

Es el proyecto educativo de unidades del milenio que más ha tardado en ejecutarse y entrar en funcionamiento. Sin duda alguna, las condiciones históricas de abandono, asilamiento y falta de vías de comunicación han determinado la demora. Así como también, las condicionantes de la circulación de capital dentro de una industria petrolera en crisis, ha dificultado la realización de los pagos a la empresa ejecutora de la obra. Esta situación, visibiliza la forma en que el capital da forma a la región amazónica, construye instituciones que rompen fronteras de lo local, como el caso de las familias, y sitúa otras formas de relación.

LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN TOÑAMPARE

El discurso oficial afirma que el diseño de las UEM considera las “características etnográficas de la zona de influencia”. Lo cierto es que el planteamiento en Toñampare ha seguido los parámetros estandarizados de la “tipología menor” de estas infraestructuras. El Ministerio de Educación las describe de la siguiente forma:

“2 Bloques de 8 aulas: incluye baterías sanitarias, rampa y escalera de acceso.

Bloque A:

Planta Baja: Laboratorio de CCNN, 2 aulas para 2do y 3er grado de EGB.

Planta Alta: 4 aulas para 4to, 5to, 6to y 7mo grado de EGB.

Bloque B:

Planta Baja: Inspección, 2 aulas para 8vo y 9no grado de EGB.

Planta Alta: 4 aulas para 10mo de EGB, 1ro, 2do y 3ro curso de Bachillerato.

3 Bloques de Educación Inicial: 6 aulas para Educación Inicial 1, Educación Inicial 2, y 1ro de EGB. Incluye baterías sanitarias.

Bloque de laboratorios de Física y Química (2 aulas).

Bloque de laboratorios de Tecnología e Idiomas (2 aulas).

Bloque de Administración: incluye rectorado, vicerrectorado, sala de reuniones, archivo, colectoría, secretaría, recepción y 4 baños.

Bloque sala de uso múltiple – comedor.

Bloque de bar.

Bloque vestidor –bodega.

Bloque cuarto de máquinas.

Patio Cívico.

1 Cancha de uso múltiple.

1 Cancha de fútbol.

Portal de acceso.

Áreas Exteriores para Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato.

Parqueaderos.

Planta de tratamiento de agua.

Planta de tratamiento de aguas servidas.

Biblioteca” (Ministerio de Educación, 2013).

El trabajo de campo evidenció que la infraestructura escolar sigue siendo “una institución de cemento que representa la modernidad occidental” (LR). La cotidianidad es organizada “racionalmente”. Cada actividad es destinada a un espacio, dentro del cual se desarrollará un proceso clasificatorio: por tiempos de estudio, por edades, por materias a estudiar, entre otros. Además, esta estructura se convierte en el escenario para la formación de “ciudadanos ecuatorianos”, en contraste de la cosmovisión Waorani representada en el “jaguar”, sujetos con pleno conocimiento de la naturaleza y, defensores de su territorio. En referencia a la estructura física, cabe la pregunta de Fanon: ¿cómo es la ciudad del colonizador?, la respuesta: “es una ciudad dura, toda de

piedra y hierro” (1963:19).

La “escuela” dentro de la nacionalidad Waorani es considerada como el espacio de formación para vivir la “modernidad”. De la misma forma, es el espacio donde el Estado y el capital inciden en las conductas de hombres y mujeres indígenas. Es una maquinaria pedagógica capaz de “aumentar las fuerzas, las aptitudes y la vida en general” (Foucault, 2005:149). Es decir, donde una serie de conocimientos y destrezas deben ser aprendidas (aprehendidas) por los individuos para ser sujetos modernos. Sin duda opera un proceso de homogenización en Toñampare. El sujeto moderno Waorani resulta de las relaciones que se tejen en este escenario pedagógico caracterizado como un proceso continuo para aprender a habitar en las lógicas de vida del colonizador, vida que se desarrolla en el “metal y cemento”, en contraste con la selva amazónica.

Las UEM conllevan formas modernas de concebir el mundo: espacios (aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres, centros deportivos, comedores, centros médicos y psicológicos...), así como formas concretas de relacionarse en él (normas para cada lugar, tecnología...). De igual manera, la implantación de este proyecto conlleva la formación de sujetos que lo habiten y que lo pongan en funcionamiento. Es aquí donde opera el currículum como una especie de *software* para el correcto funcionamiento de la maquinaria escolar.

DESCRIPCIÓN DEL CURRÍCULUM EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN TOÑAMPARE

La forma en que el presente análisis, entiende al planteamiento curricular desde la conflictividad emergente de un proceso de “exclusión de discursos” (Foucault, 2002). Los discursos se articulan en instituciones, y la conflictividad se define por el ejercicio constante del poder entre los actores. Dentro del currículum se definen una serie de prohibiciones, rechazos y, los parámetros de verdadero y falso (Flores, 2016: 87-93). De esta forma, la revisión del material pedagógico como son los textos escolares, entregados por el Estado, evidencia que el conocimiento que debe desarrollarse en los centros educativos del milenio es el referido a la racionalidad occidental (contenidos), impregnado en una cultura escrita (forma). Los saberes verdaderos, aceptados y por lo tanto fomentados en la institución son: matemática (en todos los niveles), lengua y literatura (en todos los niveles), ciencias naturales y, ciencias sociales. Estos saberes son sistematizados en textos escolares, los mismos que son entregados a todas las instituciones públicas del país, incluidas las instituciones como la de Toñampare que se ubican en zonas indígenas.

El trabajo de campo evidenció que no se distribuyen textos escolares en el idioma indígena, por lo que en las instituciones escolares bilingües la mayor parte de la clase se efectúa en español (en varios

casos, se desarrollan todas las clases en español). Esta situación se complejiza en la localidad de Toñampare, debido a que varios de los profesores indígenas son de la nacionalidad Kichwa y no manejan el idioma Waorani y, con respecto al castellano, éste sigue siendo, en la mayor parte de los casos, un obstáculo al cual dominar.

Asimismo, esta institución, contraria a las políticas que orientan al sistema actual de Educación Intercultural Bilingüe, no permite que se

“respeten los ritmos de aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos ancestrales [no se pretende] incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas que aporten al desarrollo armónico de la persona y del medioambiente” (Minsiterio de Educación, 2010)

Los ritmos que el currículo exige son contemplados en horas de trabajo con un material definido a nivel nacional, es decir textos cuya dificultad principal en el campo de la representación se relaciona con el modelo urbano-citadino que transmiten las ilustraciones y los ejemplos mismos. Los conocimientos ancestrales del pueblo Waorani aún no son incorporados en los textos y guías que reciben los docentes. La interculturalidad en este sentido, se limita al uso de la lengua indígena y no a la participación de las cosmovisiones ancestrales de los pueblos indígenas para definir el escenario de lo común. A la UEM de Toñampare se la ubica en el proyecto de “Unidades Educativas Guardianas de la Lengua” (Ministerio de Educación, 2015). En palabras de autoridades de educación del país, este proyecto es explicado así,

“Cada una de las Unidades Educativas del Milenio ‘Guardianas de la Lengua’ estará ubicada en sectores donde existe mayor concentración poblacional de cada nacionalidad y tendrá la misión de fortalecer, conservar, promover la lengua ancestral, así como de custodiar las cosmovisiones de las nacionalidades y establecer un diálogo constante entre los saberes ancestrales y el conocimiento occidental” (Ministerio de Educación, 2014)

Estas problemáticas respecto al currículum homogéneo para las ciudades, campos y selva amazónica, se originan por el desinterés del Estado hacia las minorías étnicas. No se evidencian cambios estructurales en el campo de la educación de la nacionalidad Waorani. Las intervenciones que se han realizado por parte de actores externos han determinado de forma más intensa el ingreso de esta población a las lógicas del capitalismo, proceso marcado por la asimilación del pensamiento occidental y modelos de vida que bien diagnosticados por los diversos actores, determinan negociaciones que a la larga, a más de la pérdida cultural,

se genera pérdida de recursos tanto subjetivos como territoriales. El conocimiento Waorani se ha configurado históricamente con la satisfacción de sus necesidades en la selva amazónica. Así por ejemplo, hay conocimientos muy valorados en esta cultura como los relativos a la autosuficiencia y autonomía. En contraste al currículum planteado por el Estado, éstos se aprenden en la selva mediante intensos recorridos por la selva,

“los y las jóvenes Waorani al caminar por su territorio construyen su identidad Waorani, conocen cada rincón, cada planta, cada río. Los olores, los sabores, los sonidos y los peligros de la selva. Recorren por lugares de la memoria donde se inscribieron las grandes batallas, donde se sembraron los hitos que los conectan con sus ancestros. Además, al caminar por su territorio establecen alianzas con otros grupos, y construyen los caminos que conducen hacia los aliados y hacia los enemigos [...] por estos factores se percibe mayor deserción escolar en los colegios ya que muchos de los jóvenes Waorani prefieren asistir a las enseñanzas de sus abuelos y abuelas” (Álvarez, 2015).

La nacionalidad Waorani se configura por formas abigarradas de organización (Tapia, 2009), noción que se traduce en la existencia de formas modernas de habitar la región como la dada al valor de la educación, en convivencia con formas ancestrales como la referida a la importancia de la familia ampliada o a la convivencia “en” y “con” la naturaleza. El sistema educativo que se instaura en la localidad de Toñampare no considera este proceso de abigarramiento, y da más valor a las formas económicas modernas que a las formas económicas de los pueblos ancestrales en la organización de la vida. Este proceso donde lo moderno ejerce más fuerza por sobre lo ancestral articula el carácter mismo de concentración y ejercicio de poder del Estado en alianza con petroleras y otros actores del capitalismo, frente a la nacionalidad Waorani. La nacionalidad históricamente ha negociado procesos asistenciales con los actores que definen al capital, situaciones que también han determinado el crecimiento de los niveles de pobreza en la población y, la falta de un cambio estructural para la misma. Tanto a nivel de currículum como de planificación de la UEM, la nacionalidad indígena y de manera muy sutil- ha sido homogenizada para su adscripción al escenario de “lo nacional” por medio de la escuela, escenario en el cual las poblaciones son administradas por medio del ejercicio de un poder experimental que inventa sujetos y los regula en la interiorización de normas y leyes ajenas a sus características étnicas, para el correcto comportamiento,

primero dentro de la escuela, y posteriormente al interior de la nación ecuatoriana desde su interacción como ciudadanía impuesta.

C. LA LABOR PEDAGÓGICA LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO

Se ha mencionado que el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) entra en las lógicas de control social en la Amazonía ecuatoriana. Este instituto se articula desde la década de 1950 con dos instituciones: empresas petroleras y estado ecuatoriano. A continuación, no se expondrá un debate respecto al desarrollo histórico del ILV. Más bien, localizará al accionar de este instituto con la población indígena de los Waorani en el denominado “Protectorado”, siendo éste un antecedente importante a considerar para el análisis de la UEM de Toñampare. Tanto el “Protectorado” como la UEM constituyen proyectos planteados desde las lógicas del capitalismo moderno. Estas lógicas homogenizan a la población indígena para asimilarlos en el contexto de lo nacional en dos movimientos: 1) vaciar de las formas ancestrales y primordiales de los Waorani, proceso que incluye el vaciamiento de subjetividades y recursos naturales y, 2) reemplazo y copamiento con nuevas formas de relacionarse y acordes al proceso capitalista.

Este doble proceso lo podemos ubicar desde la memoria oral de la población Waorani. Uno de los relatos más comunes en esta población respecto al trabado del ILV es el que pone a la labor en función a los intereses religiosos y evangelizadores de este instituto. “Hubo alfabetización con los misioneros, pero para sus intereses. Era hecho desde su idioma y para evangelizarnos” (ME). Las acciones del ILV se realizan desde su propia matriz institucional determinada por las lógicas del protestantismo y, de sus actividades lingüísticas. Es decir, desarrollaron estudios lingüísticos en la población Waorani desde sus intereses: alfabetización para la evangelización y, por otro lado, apostando por un monolingüismo, estudio del idioma para la traducción de los escritos evangélicos al idioma indígena en procura de su misión institucional: la Biblia traducida a todos los idiomas del mundo³⁰. Uno de los más claros ejemplos donde el vaciamiento acontece por parte de la maquinaria protestante es la referente a las celebraciones festivas de los Waorani centradas en los recursos selváticos y danzadas desde la desnudez de éstos:

Antiguamente, las fiestas eran frecuentes. Y la organizaban diferentes líderes, por lo que varias veces en el año podían

³⁰ En referencia a esta afirmación, se puede revisar el texto denominado como “Waenoni yiwaemonjä: Mannoco nanö yiwaemonë waaponi inpa”. Constituye el evangelio de Marcos en idioma “auca”.

disfrutar de ellas. Desde la entrada de los misioneros del ILV y la evangelización, estas fiestas fueron prohibidas, por lo que actualmente ya no se celebran [c]uando llegaron los misioneros del ILV prohibieron la realización de esta fiesta³¹ [fiesta de Emero], junto con otras manifestaciones tradicionales (INPC, 2016a)

Las festividades centradas en la selva será reemplazada por las que se centrarán en los símbolos y discursos religiosos. Posteriormente, y por el inicio de la escuela moderna con el mismo ILV en la zona, las fiestas se centrarán no solo alrededor de los discursos religiosos³², sino también en los discursos de tintes nacionalistas y patrióticos³³ (cfr. Rival, 1996). El ILV actuará también para cubrir la desnudez de los “salvajes” y llenarlos de destrezas, conocimientos y valores para la integración nacional. El texto del *Subsecretario de Educación* de 1962, Jorge Isaac Royo, ilustra la labor del ILV en función de las anteriores afirmaciones:

“el Ministerio de Educación y el Instituto Lingüístico de Verano publican las presentes cartillas³⁴ con el objeto de preparar a los analfabetos para el aprendizaje del idioma español como paso previo para la traducción, a cada lengua, de las leyes nacionales y de los consejos sobre salubridad y actividades agrícolas y de pequeñas industrias [...] es tal vez el medio más efectivo de que la cultura vaya penetrando, así fuera lenta y dolorosamente, en aquellas regiones donde todo es difícil por los obstáculos de la naturaleza [...] es un aporte innegable para que las tribus del Oriente vayan incorporándose a la vida institucional del país” (Ministerio de Educación Pública, 1962: 1).

El relato consta de dos secciones. En la primera se identifica el rol del ILV: representante del Estado. Como representante debe dar a cono-

31 Se refiere a celebraciones centradas en la “abundancia” entregada por la selva y la familia ampliada.

32 En este sentido se puede revisar los materiales pedagógicos elaborados para la alfabetización y evangelización de los Waorani denominados: “El nacimiento de Cristo” y, “La muerte y la resurrección de Jesús”.

33 Para profundizar esta afirmación se puede revisar el material pedagógico elaborado por el ILV denominado: “El 10 de Agosto” y, “Asistimos al curso de capacitación”.

34 Las “cartillas” son materiales pedagógicos elaborados por el ILV en colaboración con el Ministerio de Educación para fines de alfabetizar y, sobre todo, facilitar el cambio de una estructura fonémica del lenguaje a una fonética (paso de la oralidad hacia la escritura). Comprenden los siguientes materiales: “Wipo” (1962), “Titae” (1968), “Guía de enseñanza. Castellano oral” (1980a), “Wao Tededö” (1980b) y, “Waadani yewämöni aquinta” (1992).

cer la ley, la moral respeto al cuerpo y, los sistemas industriales de producción que posteriormente determinarán la participación de los Waorani como empleados de la industria petrolera. Sin reparo alguno, el representante estatal da a conocer que el proceso llevado a cabo por el instituto es “doloroso” para la cultura Waorani. Y a continuación complementa que este proceso se define como la incorporación y por lo tanto, asimilación de la población minoritaria por parte de la mayoritaria. El análisis que se desarrollará a continuación mostrará esta relación definida por el dolor indígena, mismo que caracteriza el proceso de extracción de subjetividades y de recursos naturales, que sin abandonar las lógicas coloniales, determina un continuo proceso de despojo para el desarrollo nacional.

3.1 UNA IMAGEN CANÍBAL DEL ESTADO ECUATORIANO COMO DETERMINANTE EN LA RELACIÓN CON LOS WAORANI

“Saturno devorando a un hijo” es una de las representaciones míticas más impactantes para la humanidad. Dos imágenes han sido capturadas por la pintura barroca de Rubens en 1636 y luego, por la pintura de Goya hacia 1819. Posteriormente, esta imagen será ocupada por Freud para relacionarla con el acto destructivo del ser humano que pone en peligro su reproducción a partir de la negación que experimenta en sí mismo (Freud, 1938). En este sentido, se alude a esta imagen para intentar describir la relación entre indígenas Waorani y estado ecuatoriano acontecida en uno de los puntos más álgidos de la historia moderna del país, la década de 1950 cuando el Estado asume un rol de padre hacia los indígenas de esta nacionalidad, ofreciéndoles las maravillas de la sociedad occidental, pero al mismo tiempo condenándoles a su destrucción. Es una relación marcada por la incapacidad del Estado para dar cabida al miembro emergente dentro del escenario nacional.

La relación que se grafica entre Estado y población indígena Waorani es la de un *padre* que devora a su *hijo*. Es decir, la de una nación que no logra integrar al sujeto indígena en su plan de desarrollo. Por el contrario, es una relación que al destruir al *hijo*, los intereses y planes del *padre* pueden desarrollarse sin obstáculo alguno. En el caso en cuestión, la conocida frase “los indígenas amazónicos son vistos como un obstáculo para los planes de desarrollo” (Trujillo, 1999: 19). El motivo de la negación del *padre* al *hijo* remite a que éste último se localiza en la *frente inagotable de recursos*, tal como fue entendida la Amazonía desde 1950, por la presencia de petróleo. Así por ejemplo, el presidente del Ecuador que iniciaba la explotación y exportación del *oro negro*, mencionaba que “se tumba la selva, y que se siembre petróleo ya que el petróleo será la fuente de riqueza en el país y que toda selva

debería ser convertida es pastizales o en zonas productivas de agricultura” (Trujillo, 1999: 24).

El dispositivo por el cual se devora a la nacionalidad indígena, es el referido a la religión. Éste operó en la configuración de una nueva forma de organización política, dando especial énfasis a la conformación de un tipo de *familia comunitaria*. En ese sentido, se describe a la relación del Instituto Lingüístico de Verano como un dispositivo pedagógico que se encargará de administrar a la población Waorani. El ILV inicia contrato con el estado ecuatoriano en 1952. Este contrato se concretará como decreto presidencial, firmado por José María Velasco Ibarra en 1956. A continuación, se analizará la forma en que esta institución, siguiendo los preceptos del protestantismo intenta conjugar un modelo doméstico comunitario en contraste con el *nanicabo* Waorani, que tiene un modelo doméstico más disperso geográficamente, y caracterizado por ser una familia ampliada de carácter itinerante.

En esta relación, el Estado no administra directamente a la población. Y, encarga a una misión religiosa protestante la tarea de generar conocimiento de los Waorani, mismo que será utilizado estratégicamente para expandir la frontera petrolera en la región. Se vacía al territorio y, se concentra a la población para asegurar la explotación, que hasta ese entonces habían generado relaciones muy conflictivas entre los “aucas” y las petroleras.

3.2 LOS WAORANI CONOCEN A LOS COWODEN

Tal como lo menciona Miguel Ángel Cabodevilla, el material producido por el ILV en las épocas correspondientes al inicio del contacto puede “mostrar mucho mejor la enorme complejidad que significaba tratar con los Waorani” (Cabodevilla, 2016). Un documento producido en 1964, y que resulta de la traducción del relato de un indígena denominado como *Tío Gikita*, y realizado por la célebre misionera norteamericana *Rachel Saint* muestra el imaginario indígena tejido sobre el mundo occidental. Es la imagen que el *hijo* tiene del *padre*. Y es una imagen similar a la representada por Rubens y Goya, es una imagen de canibalismo. La identidad del *otro*, el *no Waorani* es construida mediante la imagen de un *caníbal* que ataca y devora a los indígenas:

[...] los Aucas llegaron a ser menos y menos en número. Es porque eran comidos vivos. Mucho antes de eso, todos habían vivido juntos, los Aucas juntos con los Cowoden [...] puesto que los Cowoden siempre volvían a comerles, los Aucas decidieron huir. Pero los Cowoden los persiguieron y les agarraron a algunos [...] se los llevaron a su casa y al tener hambre, se

los comieron [...] dijeron los Aucas ¡o huimos río arriba o no vamos a quedar ni uno de nosotros! (Tío Gikita, 1964: 1)

Cowoden es la palabra que remite a los *come gente*, los *de afuera*, *extraños*, *caníbales*. Es decir, la representación de los indígenas hacia 1964 (a ocho años de haberse establecido el contacto pacífico con misioneros del ILV) es la de un extraño que se come al ser humano. Esta imagen, para Casey High es fruto de dos configuraciones que determinaron la relación con el mundo occidental: 1) las violentas persecuciones que la población indígena experimentó a lo largo de la historia y, 2) la influencia religiosa de *presa en el centro* que revela una apropiación del mensaje bíblico de Cristo (cfr. Rival, 2015: 21).

Retomando esta formulación, se puede comprender que la persecución llevada a cabo por actores a los cuales el Estado encargó la administración de la Amazonía, como los misioneros protestantes, no solo contribuyeron a la formación de subjetividades Waorani en el campo de los imaginarios sociales, sino también evidencia una vez más la incapacidad del estado ecuatoriano para desarrollar políticas contextualizadas a la realidad local. Ni el protoestado colonial, ni su versión moderna han logrado incorporar estructuras indígenas a sus lógicas de entender el desarrollo. La violencia ejercida en la zona amazónica es la expresión más clara de la mencionada incapacidad de un modelo liberal que se articula en el Ecuador.

La incapacidad del Estado que se argumenta, encuentra su origen en el desconocimiento de las estructuras políticas Waorani. Quienes se relacionarán directamente y generarán el conocimiento sobre esta población son los miembros del ILV. Esta institución mediará entre el Estado y la población. Por un lado, lo que el Estado conoce es lo que la misión religiosa muestra, cuenta o relata en la construcción del saber sobre la población. Por otro lado, lo que la población indígena conoce es lo que el ILV le muestra sobre el mundo llamado occidental, moderno o capitalista. En la cronología comprendida entre 1960-1970, el ILV es un actor fundamental ya que crea estructuras políticas y formas de organización desde las lógicas a las que la institución responde: capitalista y utilitarista que abrirá paso al ingreso de la industria petrolera en la región amazónica.

3.3 RECONFIGURACIONES EN LOS WAORANI A PARTIR DEL ILV

La representación basada en la etiqueta de *salvaje* atribuida al pueblo Waorani, es la base sobre la cual opera la misión evangélica norteamericana. La relación entre ILV y población indígena inicia en 1958. No interesa entrar en los detalles del proceso de encuentro entre estos dos

actores³⁵, más bien profundizar la base sobre la cual opera el dispositivo religioso. El pueblo *salvaje* necesita ser culturizado (en la lengua del padre: castellano), domesticado para el cumplimiento de la ley por medio de la educación y descrito para el conocimiento de la nación ecuatoriana (estudios antropológicos). Es decir, el ILV será el encargado de visibilizar al pueblo Waorani en el escenario nacional y, al mismo tiempo, mostrar los valores nacionales a mencionado pueblo. En esta relación de doble efecto, quien ejerce el poder de conocimiento es la misión evangélica.

La representación que uno de los antropólogos del ILV realiza a veinte años del contacto- sobre los Waorani remite a economías de subsistencia que se relacionan con la industria petrolera y a los efectos que dicha relación tiene para las *familias*:

[...] a pesar del cambio tecnológico tan grande que ha ocurrido, la economía básica de subsistencia permanece intacta. Unos cuantos hombres huao se han unido al personal de las compañías petroleras en los dos últimos años tanto para ganar dinero [...] el principal impacto cae sobre las esposas y las familias de los hombres que se van; no tienen quien vaya de cacería para traerles carne ni quien tale el bosque para las plantaciones de yuca mientras los hombres están ausentes (Yost, 1978)

A tan solo veinte años de labores del ILV con los Waorani, una de las primeras consecuencias es el cambio tecnológico. Los *robos* registrados a haciendas, campamentos petroleros o a misiones católicas posibilitaron la adquisición de hachas o machetes. Yost describe que en los últimos años, el cambio tecnológico ha sido significativo. Personal del ILV dotó de estos materiales a la población indígena. Además, entre 1958 y 1978 se construyen varias pistas de aterrizaje en las localidades Waorani que han resultado de la disolución del *Protectorado*³⁶. Así mismo, el ILV contribuyó a la utilización de armas de fuego y dinamita para la caza de animales y, hasta para la defensa del territorio. En ese sentido, y a diferencia de la afirmación de Yost, las economías de subsistencia, basadas en la caza y pesca, si se ven modificadas ya que por ejemplo la población Waorani ingresa en economías de monetización para la compra de municiones y, así reemplaza el uso tradicional de lanzas y cerbatanas por el de escopetas. Vale aclarar este punto con la descripción que el propio Yost realiza:

35 Para profundizar el proceso de contacto y, la gama de actividades desarrolladas por el ILV y dirigidas hacia los Waorani se pueden revisar tres obras emblemáticas: Trujillo (1981), Stoll (1985) y Barriga (1992).

36 Reserva indígena creada por el ILV en la localidad de Teweno, cercana a Toñampare. Funcionó de 1968 a 1978.

la mayor parte de la tecnología ha tenido poca influencia negativa, con dos notables excepciones que son la dinamita, obtenida mediante transacciones con los quichuas o con trabajadores de las compañías petroleras, y el DDT, comprado ocasionalmente a los rociadores contra la malaria. Ambos son utilizados para la pesca. El DDT, al ser arrojado a los ríos, actúa como sustituto para los venenos nativos (Yost, 1978: 22).

Así, en primer lugar hay referencias directas del cambio de relaciones hacia un mayor intercambio con los *cowoden*. También, hay una referencia a la capitalización del trabajo masculino por parte de las petroleras. Los trabajadores Waorani reciben un salario por su trabajo. Finalmente, Yost realiza una representación de la población indígena Waorani de la década de 1970 basada en el rol que los hombres tienen tanto para la caza, como para el cultivo de yuca. Así, si la influencia de las petroleras marca el empleo de hombres dentro de las mismas, la mayor afectación la sufren las mujeres.

La representación dada por Yost no considera las configuraciones históricas que las formas indígenas de organización desarrollaron a través de la historia. Rival observó hacia la década de 1990 roles indiferenciados y ciertos grados de autonomía en lo que describe como unidades domésticas Waorani o *nanicabos*. La caza es asumida por los hombres, y el cuidado de plantas es asumido por hombres y mujeres. Lo que podemos deducir es: Yost en su representación muestra un claro acercamiento al prototipo de familia cristiana-de índole protestante-marcada por la definición de roles en hombres y mujeres y la centralidad del rol de aprovisionamiento que realizan los primeros y, los roles de cuidado que realizan las segundas. La anterior manifestación se aprecia en la relación de dependencia de las mujeres y la configuración de una especie de *sufrimiento* por la ausencia de los hombres. En el relato de Yost se puede afirmar que la representación se entrecruza con lógicas religiosas, que en diálogo con los intereses estatales, más que describir al pueblo indígena, describe los alcances del proyecto civilizador iniciado en los albores de la década de 1950.

3.3 EL ESTADO Y EL ILV FUNCIONALES A LAS LÓGICAS DEL CAPITALISMO

Tal como se ha presentado a lo largo de todo el debate, las promesas de “modernización y civilización” llegaron en varios momentos de la historia de la Amazonía ecuatoriana. Éstos funcionaron en la región como dispositivos de control e incorporación de la población Waorani a un proceso gubernativo, por medio del control de la vida: espacios, tiempos, saberes y conductas. Así, en el caso del ILV, junto con el Estado

y las lógicas del capital, recluyeron hacia 1968 dentro de una “reserva indígena”, conocida como Protectorado, al 97% de la población Waorani. Promovieron formas específicas de organización política como el modelo de familia comunitaria, introdujeron el modelo escolar y los procesos de alfabetización entorno al castellano, la vida se organizó en la localidad de Teweno, desde el modelo de asentamiento urbano, similar al de grandes ciudades concentradas, con infraestructura que hasta la fecha había sido desconocida (como salones de madera para clases, o las estructuras de aterrizaje), pero sobre todo, mostraron un nuevo modelo cultural basado en la cultura escrita. Ante todo este escenario, las lógicas capitalistas penetraron para la delimitación de bloques petroleros y su correspondiente explotación que aseguraron el ingreso del país dentro de una fuerte industria.

La lógica más perversa que el análisis revela, responde a la participación de los Waorani, desde el momento de los primeros contactos en la definición de “lo común”, es decir, en lo relacionado a fijar los intereses locales para la construcción de lo nacional. Esta población no participa en lo “común”, ya que las lógicas protectoras de los misioneros norteamericanos y del propio Estado, no permite su autogobierno dentro del sitio de protección. Dentro de estos juicios, si los Waorani no estaban de acuerdo con algo, simplemente abandonaban la reserva, a precio de perder las comodidades que la tecnología de los occidentales les habían presentado.

Por otro lado, las formas en que participan en “lo común”, ya no dentro de los límites de la reserva indígena, sino dentro del Estado-nación, desde la adscripción de ciudadanos es también prescrita por tradiciones anteriores a su apareamiento en este escenario. Como ciudadanos y dentro de su territorio, están muy influidos por actores externos y al mismo tiempo, determinados por intereses ajenos a los suyos. De esta forma, junto a Rancièrre, se puede plantear la pregunta ¿quién define las formas en que las personas/poblaciones tienen parte dentro de “lo común”? (Rancièrre, 2000: 9). Cuando los Waorani son internados dentro de la reserva del Protectorado, ¿quién definió la participación de cada uno de ellos en la vida cotidiana dentro de la misma? Una primera respuesta puede ser, los miembros del ILV. Pero, éste debió cumplir un contrato con el estado ecuatoriano, mismo que intentaba ingresar en la economía basada en la explotación petrolera, por lo que la respuesta debe tornarse un poco más compleja. Una serie de actores locales, nacionales e internacionales pueden ser localizados en la articulación de discursos que determinan la forma en que los Waorani participan en la definición de “lo común”. No queremos dar nombres de personajes o instituciones, más bien queremos anotar algunas lógicas que permiten el funcionamiento de la maquinaria de intervención y administración de poblaciones.

El aparecimiento de los Waorani en el escenario de lo común está marcado por la asimilación de los valores, instituciones, conocimientos e intereses de las mayorías. El Estado y el ILV aparecen como funcionales al capitalismo, mismo que definió la política petrolera en el país. Las empresas petroleras definieron los lugares a ser explorados y explotados. La noción de desarrollo que se tejió en 1950 consideraba a los Waorani como obstáculos, ya que su vida se desarrollaba dentro de un territorio rico en recursos hidrocarbúricos. Además, quienes iban a manejar los capitales petroleros ya estaban determinados. Y por otra parte, las regiones que se beneficiarían del plan de desarrollo estaban ya definidas. La Amazonía sería tratada como el patio trasero de la gran casa en construcción (Aguirre, 2008).

Para finalizar, hay que acentuar que al momento en que los Waorani emergen en el campo de lo nacional, los parámetros de ciudadanía estaban ya definidos. Una cultura blanco-mestiza, determinada por familias de tradición militar y oligarcas controlaban el país hacia 1950-1980. De esta forma, parecería que el reparto de las herramientas para influir en el campo de la política estaba ya definida al momento en que los Waorani aparecen en el escenario nacional. Por lo tanto, quiénes determinaban los temas de debate respecto a la Amazonía y quiénes participaban, estaban definidos en gran parte por las lógicas de la lucrativa industria petrolera. Narváez (1996) identifica actores invisibilizados en este debate como ecologistas o ciertos sectores indígenas de la zona andina y amazónica que emitían sus pronunciamientos frente al desarrollo de esta lucrativa empresa. El debate planificado llegó a adjudicar bloques petroleros en zonas protegidas, como las del Parque Nacional Yasuní (Narváez, 1996: 37). El análisis muestra que estas lógicas se han reactualizado con la construcción de Unidades Educativas del Milenio, tal como ha sido argumentado anteriormente.

3.4 “PROTECTORADO” VS UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO

Uno de los documentos producidos por el ILV titula “Entre los Aucas” (1969). Éste constituye uno de los documentos que presenta de manera sistematizada la “labor civilizadora” del instituto en el territorio Waorani. Es un documento importante debido a que proporciona información respecto a principales actividades desarrolladas por los indígenas y misioneros. A más de eso, presenta imágenes panorámicas del “Protectorado”. La organización territorial de la reserva muestra que Teweno, “ciudad donde la Srta. Raquel Saint ha residido desde 1958” junto a miembros de las familias ampliadas, está conformada por casas contiguas y ubicadas junto a una pista de aviación. La imagen ubica la primera consecuencia del “contacto”. La concentración poblacional de más del 90% de los indígenas Waorani en la reserva promovió el ingreso

de la industria petrolera en la región. La pacificación llevada a cabo por el ILV no terminó con conflictos entre clanes, pero sí determinó la disminución significativa de la violencia ejercida por los indígenas contra petroleras y otros actores del capitalismo en defensa de su territorio.

La articulación del “Protectorado” con la industria petrolera es un elemento presente en la memoria de los Waorani:

“[L]a gente empezó a vivir tranquila, pero sin saberlo llegó la compañía Texaco. Como habían dejado sus chacras allá, volvieron al Cononaco pero encontraron que la compañía ya había empezado a perforar los pozos. Llegó entonces un helicóptero a Teweno y los gringos dijeron que la compañía venía del Coca, que se llamaba Western” (INPC, 2016b).

Es precisamente que la funcionalidad de la reserva indígena para el desarrollo del capitalismo tiene una conexión directa con el proyecto contemporáneo de la UEM en Toñampare. La UEM compensa la explotación petrolera en territorio Waorani y, al mismo tiempo permite la negociación de territorios indígenas para la concesión de nuevos bloques petroleros. Así mismo, tanto el “Protectorado” como la UEM resultan instituciones extrañas a la nacionalidad. Son ajenas a su desarrollo económico-cultural primordial. Así, las escuela moderna entra con personal del ILV en territorio Waorani: “[p]ara entonces no sabíamos aún qué era una escuela³⁷. Allí dijeron los gringos ‘vamos a crear una escuela y van a aprender a leer y escribir’” (INPC, 2016b). La lectura y la escritura en el proceso de ciudadanización tienen sentido si apuntan al conocimiento de la ley que regula el comportamiento social (Flores, 2016: 31). Por lo tanto, se cumple la intención estatal de montar una maquinaria de homogenización ya que el correcto ciudadano, mismo que no produce conflicto o ejerce violencia hacia las instituciones del Estado es el ideal a formar en los dos proyectos. Esta afirmación es muy clara en la documentación oficial del ILV: [en el Protectorado] las lingüistas Raquel Saint y Catalina Peeke desempeñan una ardua labor [...] la civilización de la tribu auca” (Instituto Lingüístico de Verano, 1969).

La concentración poblacional difiere en los dos periodos cronológicos. Con el ILV, el “Protectorado” se concentra junto a la pista de aterrizaje. Con el Estado la concentración poblacional se realiza junto a una edificación que muestra las promesas de la modernidad: la escuela. La concentración difiere en los intereses de las poblaciones que van de tener medios de comunicación a posibilitar el ingreso a la modernidad por medio de la formación escolar. Así mismo, queda claro

37 Refiriéndose al momento del “Protectorado”.

que la infraestructura moderna es una motivación para el agrupamiento de la población indígena. La infraestructura entrega servicios tales como medicina y comunicación con el ILV, o una configuración para la operacionalización de capitalismo extractivo en la localidad junto a la UEM tales como: bienes y servicios que giran alrededor del petróleo y sus derivados.

Una de las diferencias fundamentales entre la labor desarrollada en el Protectorado con la de la UEM recae en la primacía de un proyecto monolingüe por parte del primero, en contraste con el bilingüismo del proyecto actual. Los textos producidos por el ILV para la escritura y lectura de la población Waorani carecen de una traducción al castellano, solo las indicaciones están en el idioma mayoritario. Quizá una interpretación posible ubica al acto pedagógico del ILV como eterno aprendiz de la cultura dominante al “salvaje”, mientras que el lugar de quien da las indicaciones y posibilita el aprendizaje es un sujeto que se identifique con la lengua o creencias dominantes. Por otro lado, el proyecto actual cae en la paradoja de buscar bilingüismo si materiales en la lengua indígena y, en el caso de Toñampare, con un alto número de profesores pertenecientes a la nacionalidad Kichwa. Para el caso de la nacionalidad Waorani, la Educación Intercultural Bilingüe sigue manteniéndose como una de las promesas incumplidas de la modernidad a precio de consolidar pérdida cultural y, falta de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y reducir las brechas de inequidad en referencia a otros grupos mayoritarios.

Finalmente, vale indicar que el proyecto del “Protectorado” tiene sentido en las labores alfabetizadora y evangelizadora llevadas a cabo por los lingüistas-misioneros norteamericanos. La religión se convierte en un aspecto central: “los indígenas aprender a leer la Biblia”. Y desde los imperativos de religiosos del protestantismo ubican las normas de convivencia en el “Protectorado”:

“Aquí no matamos ni a aucas ni a extraños. No convivimos con las hermanas de nuestras esposas. No permitimos el infanticidio, ni enterrar vivos a los enfermos. Aquí vivimos contentos según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Les hemos traído a éste lugar para que puedan encontrar una vida nueva y feliz con nosotros, siguiendo al verdadero Dios y a su Hijo el Señor Jesucristo, para que nuestros corazones puedan ser purificados” (INPC, 2016b).

El sujeto pensado es una mezcla entre modernidad y religiosidad. Es el correcto ciudadano y buen cristiano. El sujeto moderno del ILV es uno determinado por las estructuras morales del cristianismo: maneja de

la vida, cuerpo y mente, a través del discurso religioso. Y por lo tanto, con implicaciones en la forma de vestirse (se enseña costura), de llevar el cuerpo (se enseña sexualidad y salud), de cuidar el cuerpo (medicina occidental) y de aprender las normas (estudio de la Sagrada Escritura). En la UEM, el sujeto parte de la noción planteada por su antecedente más significativo en el sentido de plantear el espíritu religioso como la base para el sujeto dentro del capitalismo. El sujeto que busca la modernidad ecuatoriana es aquel que asegure la reproducción del capital por medio de la actitud pacífica en los procesos de despojo territorial en nombre del desarrollo nacional, y también por medio de su capacidad para manejar una serie de destrezas y contenidos que lo convierten no solo en auspiciante del capitalismo, sino en su materia más importante. Las lógicas coloniales-modernas del ILV no desaparecen en la UEM y quienes sufren las consecuencias son las poblaciones indígenas.

A MODO DE CIERRE

La perspectiva que se asume respecto a los actores más determinantes en la región amazónica puede definirse desde su particular articulación con las lógicas capitalistas. Éstos han sido funcionales al desarrollo de estas lógicas. El capitalismo se rearticula en la región amazónica no desde la desaparición del Estado, sino desde su funcionalidad en el sistema, al momento de administrar poblaciones.

El Estado se construye a partir de la expansión de la soberanía del territorio hacia sus habitantes (Stavenhagen, 2001), noción que puede ajustarse a la noción de biopolítica planteada por Foucault en la célebre premisa de “dejar vivir, hacer morir” (Foucault 2000). En este sentido, se realiza un proceso de “definir la vida como despliegue y la manifestación del poder” (Mbembe, 2011: 21), mismo que se traduce en la formación de políticas públicas para su administración.

Desde la constitución del estado ecuatoriano en el siglo XIX, éste ha planteado formas indirectas o directas de gobierno para las poblaciones indígenas en la región amazónica.

La de gobierno indirecto (cfr. Guerrero, 2010: 197) o de desatención estratégica está ligada al “manejo por los ciudadanos particulares, y bajo regímenes republicanos, de grupos demográficos (s. XIX), que por una razón u otra de la historia, no son considerados aptos para el trato cotidiano en igualdad” (Guerrero, 2010: 161). Por otro lado, a la forma de gobierno directo se la puede definir hoy por hoy, como la desprivatización y descorporativización de las formas de gobierno indirecto y el correspondiente retorno del Estado hacia las poblaciones.

En estas formas en que el poder del Estado se despliega hacia las poblaciones, entran en tensión lógicas de relación y ejercicio del poder. Stavenhagen caracteriza tres lógicas que dan el carácter de poscolonial

a los estados latinoamericanos. Estas lógicas han determinado procesos de evolución de las formas de explotación colonial y la formación de sistemas estratificados étnica y racialmente, “jerarquía entre una clase dominante y sus descendientes por un lado, y una masa de ‘nativos’ por otro” (Stavenhagen, 2001: 33), y principal manifestación de la relación entre Estado y capital.

La primera lógica de relación entre Estado y población indígena, es la *poliétnica etnocrática*. Es decir, reconocimiento de varias etnias, donde solo una ejerce el poder. De esta forma, el Estado funciona a favor de una etnia dominante, mientras que las etnias dominadas deben conformarse con ese patrón. Este tipo de lógica hace que la etnia dominante “identifique a ella misma a la nación [...] y tienda a excluir a las etnias minoritarias” (Stavenhagen, 2001: 17). El Estado desatiende estratégicamente a la población indígena en *pro* de sus intereses particulares. Exclusión o desatención no significa abandono. Es el proceso donde el Estado pone a una población bajo la administración de intereses particulares, como sucedió en 1958 cuando los Waorani fueron puestos bajo el tutelaje del ILV para fines particulares de estudios lingüísticos, evangelización y educación. Un beneficio estratégico para el Estado, y para los intereses que éste representa, puede interpretarse desde la expansión de la industria petrolera a partir de los años sesenta (cfr. Lara, 2007: 183).

La segunda lógica, es la *asimilacionista*. Es así que, “la ideología del Estado-nación proclama la unidad y la homogeneidad nacional como valor supremo y a menudo adopta políticas diseñadas para asimilar, integrar o incorporar rápidamente a las etnias o nacionalidades a un molde dominante” (Stavenhagen, 2001: 70-71). Es decir, planteamientos que niegan a las minorías poblacionales en función de lo nacional (Wieviorka, 2003: 17-32). Esta lógica puede convivir con formas de administración directa o indirecta. Por citar un ejemplo de esto, a partir de 1968 se van a plantear los procesos de escolarización para la población Waorani, mismo que llegarán a consolidarse en 1978 con la fundación de las comunidades waorani luego de la disolución del “Protectorado”. Las escuelas creadas en estas comunidades, son analizadas por Rival; ella entiende a la educación como el instrumento que asegura las condiciones para que “las identidades dominantes menoscaben la continuidad de las identidades minoritarias” (Rival, 2000: 316).

La tercera lógica, es la de *colonialismo interno*³⁸. Atender a esta

38 La literatura latinoamericana en torno a la problemática del colonialismo interno, sugiere la revisión de los discursos referidos a la cultura como una de las bases sobre las que se asienta dicha problemática. De esta forma, el aporte de Casanova es relevante al momento de caracterizar cierta analogía entre las poblaciones ladinas (mestizas) con la población indígena. Los discursos ubican a los indígenas en “estereotipos [...] en que los indios no son gentes de razón, son flojos buenos para nada y en que la violación de las re-

lógica nos puede situar en “factores subjetivos, como la actitud de los miembros de una etnia que se considera superior o más valiosa que las demás [...] luchas políticas por el poder o los recursos” (Stavenhagen, 2001: 70). Actitudes que pueden también reproducirse al interior de la misma etnia. Puede traducirse en negación de la cohetaniedad en un mismo espacio entre sujetos, es decir la identificación de poblaciones consideradas atrasadas en el tiempo o no desarrollados. Es aquí, donde el proceso de disputa por la noción de desarrollo, citando un ejemplo, Féliz la ubica “entre el nuevo desarrollismo de matriz neo estructuralista y el proyecto societal del buen vivir” (Féliz, 2015). La pregunta es ¿qué capitales entran en juego en cada noción? En este mismo sentido, esta disputa puede manifestarse en los planteamientos educativos, dentro de los cuales, en los currículos o en la organización administrativa, arquitectónica o temporal pueda distinguirse una forma concreta de entender el desarrollo, misma que excluye su contraparte o su posibilidad de alternativa.

Éstas tres lógicas se han desarrollado en la Amazonía ecuatoriana. Hoy la lógica del colonialismo interno está presente dentro del sistema de educativo intercultural bilingüe. Ésta se manifiesta en el currículo nacional, ya que no se consideran formaciones políticas alternativas desarrolladas por sectores minoritarios, como son las poblaciones indígenas. Los contenidos en su mayoría pertenecen al sector mestizo y, la identificación indígena se refiere a la nacionalidad Kichwa. Sin duda, queda la tarea por introducir las formas políticas, conocimientos y lógicas desarrolladas por todas las minorías indígenas, solo ahí se podrá hablar de una verdadera Educación Intercultural Bilingüe.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, Alberto 2009 *El buen vivir: una vía para el desarrollo* (Quito: Abya Yala).
- Aguirre, Milagros 2008 *Dayuma, ¡Nunca más!* (Quito: CICAME).
- Álvarez, Kati 2011 *Prácticas funerarias en los waodani* (Quito: FLACSO-Abya Yala)
- Álvarez, Kati 2013 “Salud emocional” en Flora Lu y Sorensen, Mark (comps.) *Integración al mercado y salud indígena en el nororiente ecuatoriano* (Quito: Abya Yala).

glas estrictas de cortesía, lenguaje, vestido, tono de voz por parte de los indígenas provoca reacciones de violencia verbal y física en los ladinos [...]” (Cardoso y F. Weffort, 1970: 180).

- Álvarez, Kati 2015 “ Literacidad vernácula, relación intergeneracional con la escritura y la construcción de saberes en los Waorani del Ecuador” en <<http://analyticadelsur.com.ar/literacidad-vernacula-relacion-intergeneracional-con-la-escritura-y-la-construccion-de-saberes-en-los-waorani-del-ecuador/>>
- Barriga, Franklin 1992 *Las culturas indígenas ecuatorianas y el Instituto Lingüístico de Verano* (Quito: Amauta).
- Blomberg, Rolf 1996 *Lo aucas desnudos. Una reseña de los indios del Ecuador* (Quito: Abya Yala).
- Cabodevilla, Miguel Ángel 1994 *Los Huaorani en la historia de los pueblos del Oriente* (Coca: CICAME).
- Cabodevilla, Miguel Ángel 2010 *La nación Waorani. Noticias, historia y territorio* (Francisco de Orellana: Mapas-Engeotec S.A.).
- Cabodevilla, Miguel Ángel 2016 “Material producido por el ILV” (entrevista de José Flores).
- Chisaguano, Silverio 2006 *La población indígena en el Ecuador* (Quito: INEC).
- CODENPE 2014 “Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador” en <www.codenpe.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=125&catid=96>.
- Cuesta, Salomón 1999 “Los Huaorani y el reto de la civilización” en Trujillo, Patricio y Cuesta, Salomón (comps.) *De guerreros a buenos salvajes modernos. Estudios de dos grupos étnicos en la Amazonía ecuatoriana* (Quito: Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas, Abya Yala).
- Deleuze, Gilles 2014 *El Poder. Curso sobre Foucault* (Buenos Aires: Editorial Cactus).
- Echeverría, Bolívar 2006 “La actualidad del discurso crítico” en *Contrahistorias* (México)
- Ecuador Estratégico 2012 *Contrato para la ejecución de la obra ‘Construcción de la Unidad Educativa del Milenio, en la comunidad Waorani de Toñampare, ubicada en la parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza’* (Quito: Ecuador Estratégico, 2012)
- Ecuador Estratégico 2014 *Contrato Complementario al contrato para la construcción de la Unidad Educativa del Milenio, en la comunidad Waorani de Toñampare, ubicada en la parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza* (Quito: Ecuador Estratégico).

- Ecuador Estratégico 2015 *Plan Anual de Inversiones (PAI)* (Quito: Ecuador Estratégico).
- Ecuador Estratégico 2016 *Plan estratégico institucional* (Quito: Ecuador Estratégico).
- Fanon, Franz 1963 *Los condenados de la Tierra* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Federici, Silvia 2010 *Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria* (Madrid: Traficantes de Sueños).
- Féliz, Mariano 2015 “¿Qué hacer con el desarrollo? Neodesarrollismos, buen vivir y alternativas populares” en *Sociedad y Economía* N° 28 (Cali).
- Flores, José 2016 *Pedagogía y colonialidad en la Amazonía Ecuatoriana* (Quito: PUCE).
- Foucault, Michel 1988 “El sujeto y el poder” en *Revista Mexicana de Sociología* N° 3 (México).
- Foucault, Michel 1992 *El Orden del Discurso* (Buenos Aires: Tusquets Editores).
- Foucault, Michel 2000 *Defender la Sociedad* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Foucault, Michel 2005 *Historia de la sexualidad. I, La voluntad de saber* (Madrid: Siglo XXI).
- Freud, Sigmund 1938 “El Ortiba” en < www.elortiba.org/freud6.html >.
- Fuentes, Bertha 1997 *Huamoni-Huarani-Cowode. Una aproximación a los Huaorani en la práctica política multi-étnica ecuatoriana* (Quito: Abya Yala).
- Gago, Verónica, y Obarrio, Juan “«Ex libris: Achille Mbembe»” en Mbembe, Achille *Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo* (Barcelona: Ned Ediciones).
- Guerrero, Andrés 2010 *Administración de poblaciones, ventriloquía y transescritura: análisis históricos, estudios teóricos* (Quito/Lima: FLACSO/Instituto de Estudios Peruanos).
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Arajuno 2011 *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial* (Arajuno: GDMPz).
- Harvey, David 2005 “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión” en *Socialist register* (CLACSO).

- Huaorani 198 *El 10 de agosto* (Quito: ILV).
- Huberman, Didi 2014 *Pueblos expuestos, pueblos figurantes* (Buenos Aires: Manantial).
- Ibarra, Alicia 1992 “Los indios del Ecuador y su demanda frente al Estado” en *Boletín de Antropología Americana* N° 26.
- Instituto Lingüístico de Verano 1969 *Entre los aucas* (Quito: ILV).
- Instituto Lingüístico de Verano 1975 *El 10 de agosto* (Quito: ILV).
- Instituto Lingüístico de Verano 1977a *El nacimiento de Cristo. Narración por Dahua Ima* (Quito: ILV).
- Instituto Lingüístico de Verano 1977b *La muerte y la resurrección de Jesús. Por Yohui Tañi Huaorani* (Quito: ILV).
- Instituto Lingüístico de Verano 1979 *Asistimos al curso de capacitación* (Quito: ILV).
- Instituto Lingüístico de Verano 1992 *Waodani yewäemöni aquinta* (Quito: ILV).
- Ima, Huimi 1980 *Animales de cacería* (Quito: ILV).
- INPC 2016a *Fiesta de la abundancia (Emero)* en <www.sipce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/mostrarPatInmaterialesRegistros.jsf>.
- INPC 2016b *Historia bélica Waorani y congregación en el Protectorado (nani tenonte weni beye)* en <<http://sipce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/mostrarPatInmaterialesRegistros.jsf>>.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2015 “Ecuador en cifras en <www.ecuadorencifras.gob.ec/13-millones-de-ecuatorianos-salieron-de-la-pobreza-en-los-ultimos-ocho-anos/>.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “Sistema Integrado de Consultas (REDATAM)” en <www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/>.
- Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 2013 “Desarrollo Amazónico” en <www.desarrolloamazonico.gob.ec/ciudad-del-milenio-ya-es-una-realidad-en-playas-de-cuyabeno/>.
- Lara, Rommel 2007 “La política indigenista del Estado y el territorio huao. Yasuní en el siglo XXI” en Fontaine, Guillaume y Narváez, Iván *El Estado ecuatoriano y la conservación de la Amazonía* (Quito: FLACSO–Sede Ecuador, IFEA, Abya Yala, Petrobrás, CEDA, WCS).

- Mbembe, Achille. 2011. *Necropolítica* (Barcelona: Melusina).
- Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos *Industrias Estratégicas, nuevas oportunidades de desarrollo. Propuesta ecuatoriana para desarrollar sus Industrias Estratégicas* (Quito: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos).
- Ministerio de Educación 2010 “Educación Intercultural Bilingüe” en <www.educacion.gob.ec/educacion-intercultural-bilingue/>.
- Ministerio de Educación 2012 “Proyecto emergente de Unidades Educativas del Milenio y Establecimientos Réplica” en <www.educacion.gob.ec/proyecto-emergente-de-unidades-educativas-del-milenio-y-establecimientos-replica/>.
- Ministerio de Educación 2013 “Unidades Educativas del Milenio. Criterios de ubicación” en <www.educacion.gob.ec/criterios-de-ubicacion/>.
- Ministerio de Educación 2014 “Unidades Educativas del Milenio ‘Guardianas de la Lengua’ preservan y revitalizan las lenguas ancestrales” en <www.educacion.gob.ec/unidades-educativas-del-milenio-guardianas-de-la-lengua-preservan-y-revitalizan-las-lenguas-ancestrales/>.
- Ministerio de Educación 2015 “Ayuda Memoria para entrevista con Radio Francia Internacional sobre Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) y Guardianas de la Lengua” (Quito: Ministerio de Educación).
- Ministerio de Educación 2016 “Programa de Unidades Educativas del Milenio” en <www.educacion.gob.ec/unidades-educativas-del-milenio/>.
- Ministerio de Educación Pública e, ILV 1962 *Wipo* (Quito: ILV).
- Ministerio de Educación Pública e, ILV 1968 *Titae* (Quito: ILV).
- Ministerio de Educación y Cultura e, ILV 1980a *Guía de enseñanza. Castellano oral* (Quito: ILV).
- Ministerio de Educación y Cultura e, ILV 1980b *Wao Tededö* (Quito:ILV).
- Minteguiga, Analía 2014 *Las oscilaciones de la calidad educativa en el Ecuador. Estudio sobre políticas, planes, programas y proyectos gubernamentales de “escuelas de calidad” (1980-2010)* (Quito: IAEN).
- Montaluisa, Luis 2008 “Trayectoria histórica de la educación intercultural bilingüe del Ecuador” en Vélez, Catalina(comp.) *Educación*

Intercultural Bilingüe y Participación Social, (Quito: CARE International).

Moya, Ruth 1987 “Educación Bilingüe en el Ecuador: retos y alternativas” en *Indiana* N° 11.

Muratorio, Blanca 1982 *Etnicidad, evangelización y protesta en el Ecuador. Una perspectiva antropológica* (Quito: CIESE).

Muratorio, Blanca 1987 *Rucuyaya Alonso y la historia social y económica del Alto Napo 1850-1950* (Quito: Abya Yala).

Narváez, Iván 1996 *Huaorani vs Maxus. Poder étnico, poder transnacional* (Quito: Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales).

Narváez, Iván; De Marchi, Massimo y Pappalardo, Eugenio 2013 *Yasuní zona de sacrificio. Análisis de la Iniciativa ITT y los derechos colectivos indígenas* (Quito: FLACSO-Ecuador).

Nenquimo, Ima 2014 *Taromenani-Tagaeiri. Los guerreros de la selva* (Quito).

Nihua, Fernando, y Cledir Uwi 2016 *Propuesta pedagógica de la Unidad Educativa del Milenium “Toñe”* (Arajuno: Ministerio de Educación).

Patzelt, Erwin 2002 *Los Huaorani. Los últimos hijos libres del jaguar* (Quito: Banco Central del Ecuador).

Peeke, Catherine 1971 *Preliminary grammar of Auca* (ILV).

Pichilingue, Eduardo 2012 “Intervención en el pleno de la Asamblea Nacional” en <www.flacsoandes.edu.ec/observatoriodiscriminacion/index.php/notas/345-itt-cdes-contundente-en-asamblea-nacional-la-vida-de-los-indigenas-aislados-no-se-puede-entregar-por-dinero>.

Pizarro, Ana 2009 *Amazonía: el río tiene voces: imaginario y modernización* (Madrid: Fondo de Cultura Económica).

Polo, Rafael 2012 *La crítica y sus objetos. Historia intelectual de la crítica en Ecuador (1960-1990)* (Quito: FLACSO).

Rancière, Jacques 2000 *El reparto de lo sensible: estética y política* (Santiago de Chile: LOM Ediciones).

Rival, Laura 1994 “Los indígenas huaorani en la conciencia nacional: alteridad representada y significada” en Muratorio, Blanca *Imágenes e imagineros* (Quito: FLACSO).

Rival, Laura 1996 *Hijos del sol, padres del jaguar. Los huaorani de ayer y hoy* (Quito: Abya Yala).

- Rival, Laura 2000 “La escolarización formal y la producción de ciudadanos modernos en la Amazonía ecuatoriana” en Guerrero, Andrés *Etnicidades* (Quito: FLACSO).
- Rival, Laura 2015 *Transformaciones huaoranis. Frontera, cultura y tensión* (Quito: Abya Yala).
- Saint, Rachel, y Pike, Keneth 1975 *Estudios homólogos de lenguas vernáculas del Ecuador (fonética del idioma Huarani-Auca)* (Quito: ILV).
- Saint, Rachel, y Pike, Keneth 1962 *Auca phonemics* (ILV).
- Sarmiento, Alberto 1958 *Monografía Científica del Oriente Ecuatoriano* (Quito: Abya Yala).
- Savage, Roberto y, Crespo, José 1956 *El drama del Curaray. Historia de los cinco misioneros sacrificados por los aucas en la selva ecuatoriana* (Quito: Editorial Artes Gráficas).
- SENPLADES 2007 *Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010* (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo).
- SENPLADES 2009 *Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013* (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo).
- SENPLADES 2013 *Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017* (Quito: Secretaría Nacional de Planificación Y Desarrollo).
- Sociedades Bíblicas en el Ecuador 1964 *Waenonī yiwaemonjã: Mannoco nanö yiwaemonë waaponi inpa* (Quito: SBE).
- Stavenhagen, Rodolfo 2001 *La cuestión étnica* (México: El Colegio de México).
- Stoll, David 1985 ¿Pescadores de hombres o fundadores de imperio? El Instituto Lingüístico de Verano en *América Latina* (Quito: Desco).
- Svampa, Maristella. “Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina” en *Nueva Sociedad* N° 244 (Buenos Aires).
- Tementa 1979 *Asistimos al curso de capacitación* (Quito: ILV).
- Tío Gikita 1964 *Los Aucas y los Caníbales. Cómo llegaron los Aucas al Ecuador*. (Traducido por Rachel Saint) (Quito: Summer Institute of Linguistics)
- Toscano, Marco 1999 “Los Huaorani: una problemática sobre el poder” en Trujillo, Patricio y Cuesta, Salomón *De guerreros a buenos salvajes*

modernos. Estudio de dos grupos étnicos en la Amazonía ecuatoriana (Quito: Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas, Abya Yala).

- Trujillo, Jorge 1981 *Los oscuros designios de Dios y del Imperio: el Instituto Lingüístico de Verano en el Ecuador* (Quito: Publicaciones CIESE).
- Trujillo, Patricio 1999 “El salto a la modernidad: los Huaorani y el juego de las misiones y el petróleo” en Trujillo, Patricio y Cuesta, Salomón *De guerreros a buenos salvajes modernos. Estudio de dos grupos étnicos en la Amazonía ecuatoriana* (Quito: Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas, Abya Yala).
- Trujillo, Patricio 2011 *Boto Waorani, Bito cowori. La fascinante historia de los Wao*. (Quito: Fundación FIAAM).
- Vallejo, Ivette 2014 “Petróleo, desarrollo y naturaleza: aproximaciones a un escenario de ampliación de las fronteras extractivas hacia la Amazonía suroriente en el Ecuador” en *Anthropologica* Vol. 32 N°32 (Lima).
- Wallis, Ethel 1960 *The Dayuma story. Life under Auca Spears* (New York: Hasper&Brothers).
- Wilson, Japhy, Bayón, Manuel y Diez, Henan 2015 *Posneoliberalismo y Urbanización planetaria en la Amazonía Ecuatoriana* (Quito: IAEN, CENEDET).
- Wieviorka, Michael 2003 “Diferencias culturales, racismo y democracia” en Mato, Daniel *Políticas de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización*, de (Caracas: Universidad Central de Venezuela).
- Yost, James, y Kelley, Patricia 1992 *Consideraciones culturales del terreno. El caso Huaorani, Amazonía Ecuatoriana*. (Quito: ILV).
- Yost, James 1976 *Veinte años de contacto. Los mecanismos de cambio en la cultura Huao (auca)* (Quito: ILV)
- Yost, James 1979 *El desarrollo comunitario y la supervivencia étnica. El caso huaorani* (Quito: Instituto Lingüístico de Verano-Ministerio de Educación y Cultura).

EFFECTOS DEL USO DIFERENCIADO DE LAS REMESAS EN LA DESIGUALDAD SOCIAL. UN ESTUDIO EN LA CAPITAL CUBANA

Denisse Delgado Vázquez*

INTRODUCCIÓN

En Cuba, como en América Latina y el Caribe, resultan escasos los estudios que analizan los efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Ha existido una tendencia a examinar sus impactos en la generación de desarrollo, donde priman las visiones optimistas que consideran los potenciales beneficios de quienes emigran, mientras existen grandes vacíos en el conocimiento sobre sus efectos no deseados, especialmente aquellos que generan desigualdad social. Pero son las remesas y su efecto en la desigualdad social dos temas claves para comprender los cambios actuales que se generan en el entramado social cubano.

Esta realidad presenta un referente contextual que se remonta a la década de los noventa del siglo XX, la cual marcó un antes y un después en Cuba. El Periodo Especial, resultado de la influencia de una serie de circunstancias externas como el derrumbe del campo socialista y el recrudecimiento del Bloqueo Económico y Financiero, ha acarreado consecuencias negativas para el pueblo cubano, tanto en los escenarios

* Máster en Desarrollo Social e investigadora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)..

económico, político, social, cultural, como en las condiciones de vida cotidiana de las familias.

Si bien hasta finales de los 80 prevalecía un estado de homogeneidad relativa alcanzado como consecuencia de un proceso largo y complejo iniciado con el Triunfo de la Revolución, con el Período Especial la sociedad cubana experimentó una creciente carencia económica. Antes de la crisis económica prevalecía una correspondencia más o menos funcional entre los ingresos y los gastos de la población dentro de las expectativas de consumo existentes. El costo de la vida de los trabajadores cubanos era mayoritariamente afrontable con sus ingresos, al tiempo que se disfrutaba de un indiscutible, aunque modesto, desahogo económico, personal y familiar que tenía como complemento una amplia cobertura de necesidades de primer orden a través de los fondos sociales de consumo (Martin, J. L. et. al., 2000).

La crisis económica provocó la desaparición casi instantánea de la correspondencia hasta el momento existente entre ingresos y costo de la vida, disminución significativa del poder adquisitivo del salario, devaluándose el mismo como medio de vida y perdiendo, hasta hoy, la capacidad para que las personas puedan satisfacer a través de él sus necesidades básicas de manera aceptable. Como consecuencia, el empleo estatal y particularmente su retribución salarial dejaron de ser el medio de vida, para convertirse en uno de los medios de vida.

En ese contexto algunas familias valoraron la emigración hacia el exterior como vía para paliar los efectos negativos de la crisis económica y ayudar a su familia residente en Cuba mediante el envío de remesas. Otras valoraron su incorporación al trabajo por cuenta propia, para sobrevivir o mejorar sus condiciones de vida. Tanto una alternativa como otra funcionaron, pero siempre en menores magnitudes con las que hoy pueden apreciarse.

Emergió una multiespacialidad económica y, consecuentemente, surgieron nuevos actores laborales. Esta diversificación de actores trajo consigo un aumento de la heterogeneidad social, comenzando un proceso denominado reestratificación social, que implica la presencia de cambios significativos de las posiciones sociales ventajosas de unos grupos con respecto a otros, el ensanchamiento de las desigualdades y la polarización socioestructural, entre otros (Espina et. al. 1999). Al respecto, aunque las estadísticas no permitan identificar perfiles socio-demográficos en los estudios sobre estratificación social, al menos tres ejes expresan una ampliación de las brechas de equidad: diferencias de género, por color de la piel y territorial (Espina et. al., 2008).

De manera más reciente, a partir del año 2010, comienza otra etapa de reajustes socioestructurales en Cuba, caracterizada por la llamada "Actualización del modelo económico y social" que impulsa un

conjunto de medidas, de carácter permanente y estructural, contenidas en los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, entre las que sobresale el relanzamiento del sector privado (Vidal y Pérez, 2012). Paralelamente, aumenta el recibo de remesas como modo de participación desde el exterior en el desarrollo de las nuevas dinámicas.

Si bien las remesas en Cuba jugaron un papel trascendental en la década del noventa del siglo pasado donde muchas familias emigraron como estrategia para paliar los impactos de la crisis económica y enviar dinero a sus familiares residentes en la Isla; las dinámicas en torno a las remesas han cambiado. Las remesas siguen siendo utilizadas para solucionar necesidades básicas familiares, pero se ha producido un incremento sostenido de sus montos en los últimos años en comparación con los años 90 (Morales, 2012). Se ha calculado que desde el 2010 hasta la actualidad los montos de remesas monetarias que ingresan por vías regulares oscilan entre 1.500 y 2.500 millones de dólares anuales (Everlery, 2015; Rodríguez, 2016). A ello se suma la dificultad para estimar la cantidad de dinero enviado por emigrantes a través de vías informales.

Un conjunto de transformaciones ha favorecido el incremento de los montos de remesas, entre los que se encuentran el relanzamiento del sector privado como se había mencionado, pues una parte importante de las remesas es utilizada como capital de trabajo para el desarrollo de las iniciativas privadas. Hay quienes emigran con el interés de participar desde el exterior en el desarrollo de prácticas privadas a partir del envío de remesas, de modo que capitalizan su condición económica y favorecen la de sus familiares, amigos, vecinos o asociados (Delgado, 2015: 53).

De igual modo, la Reforma Migratoria del año 2013 ha favorecido el carácter temporal y circular de la migración y, junto a ella, el incremento de la entrada de remesas al país; al mismo tiempo que favorece las visitas de familiares a Cuba y los viajes temporales de cubanos al exterior, lo cual resulta un modo de captación de remesas. De hecho, la Reforma Migratoria ha beneficiado la emigración de cubanos que salen con el fin de realizar trabajos temporales en el exterior, regresar a la Isla con ingresos e invertirlos en el desarrollo de negocios privados, o simplemente consumirlos.

Asimismo, la contratación de telefonía celular y el recibo de recargas dobles desde el exterior en los últimos tiempos, ha sido uno de los modos en que las remesas económicas llegan a las familias cubanas a través del acceso a servicio telefónico. Por su parte, la eliminación de restricciones a cubanos residentes en la Isla a hospedarse en hoteles, y la liberación de la compra y venta de casas y automóviles, han permitido que algunos cubanos receptores aprovechen estos cambios a partir de las remesas familiares.

Adicionalmente, desde enero de 2015 el gobierno estadounidense –es Estados Unidos el principal país receptor de emigrantes cubanos– ha suprimido el límite de los montos de remesas que se envían a Cuba. Ello forma parte de un conjunto de medidas tomadas por ese gobierno con el fin de flexibilizar el bloqueo económico vigente en la Isla desde 1962.

De manera contrastante, se produce un abanico de dinámicas complejas e interconectadas, donde unos utilizan las remesas para la satisfacción de necesidades básicas de consumo mientras que otros aprovechan su potencial como capital de trabajo. En consecuencia, se evidencian expresiones de desigualdad social, tanto en el acceso al bienestar material como en el acceso al bienestar subjetivo entre ambos grupos de receptores. Esto limita los actuales propósitos la política social en Cuba, dirigida a promover la justicia social, al mismo tiempo que introduce alteraciones a la conexión socialismo-igualdad, lo que plantea al gobierno cubano diversos retos y oportunidades.

De esta realidad parte el presente estudio, guiado por la pregunta ¿Qué efectos genera el uso diferenciado de las remesas familiares en la desigualdad social? Por consiguiente, esta investigación constituye una aproximación a una realidad cercana, compleja, que requiere múltiples acercamientos.

La estructura que se sigue para la exposición de las ideas comienza con la presentación de debates teórico-conceptuales en torno a las remesas y la desigualdad social. Se pone encima de la mesa un abordaje de los conceptos de estudio y se abordan perspectivas teóricas, donde se transita desde posiciones tradicionales hacia otras más recientes y novedosas, lo que permite aprovechar las contribuciones de estos conceptos adecuados al contexto concreto en el que se examinan.

Seguidamente se comparten los fundamentos metodológicos del estudio, de carácter descriptivo-analítico, explicativo y comparativo, donde se vinculan las perspectivas cualitativa y cuantitativa de la investigación. Asimismo, tiene lugar la presentación de los resultados, donde se identifican diferencias entre quienes usan las remesas para el consumo y como capital de trabajo, según características sociodemográficas de la muestra; lo que contribuye a la distinción de grupos que ocupan posiciones sociales ventajosas y desventajosas. En este sentido, se realiza una comparación del uso diferenciado de las remesas familiares en el bienestar material y subjetivo, identificando cuándo reproducen desigualdades sociales históricas y cuándo generan nuevas expresiones.

Como parte de la investigación, se plantean consideraciones finales del estudio, las cuales sirven de preludeo para próximos acercamientos. Tanto los resultados obtenidos como las consideraciones finales motivan la presentación de un conjunto de recomendaciones en aras

de favorecer la reducción, contención y disminución de desigualdades sociales en Cuba.

Por otra parte, resulta oportuno hacer extensivo un agradecimiento a aquellas personas e instituciones que han apoyado la realización del presente estudio. Entre ellas, el Concurso de Becas de Investigación: “La producción de las Desigualdades en América Latina y el Caribe”, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ha devenido un estímulo importante; así como la coordinación atenta en los detalles, tutores, profesores invitados y compañeros de seminario, quienes han contribuido con sus pertinentes observaciones.

Se agradece, igualmente, a los colegas del Grupo de estudio de Estructura Social y Desigualdades del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, especialmente a las amigas Succel Pardini y Ana Danay Rodríguez, por el apoyo y el cariño. Asimismo, al Consejo Científico del CIPS por la aprobación para participar en este concurso, sus sugerencias y el apoyo en general. A los lectores especiales de la actividad académica realizada en el marco de la Beca y a las observaciones precisas y valiosas del Dr. Eduardo Chavéz, la Dra. María Isabel Domínguez y la Dra. Consuelo Martín.

Se comparte también la gratitud con los Informantes Clave y con los especialistas entrevistados: Dra. María del Carmen Zabala, Dra. Dayma Echevarría, Dr. Omar Everleny Pérez, Msc. Pablo Rodríguez, Dra. Blanca Munster y Dr. José Luis Rodríguez. Ellos dedicaron su tiempo y una vastísima información –la cual no ha podido ser contenida toda en este texto.

A los colegas Carlos S. Rodríguez e Ignacio Oliva, quienes apoyaron en el procesamiento de información estadística y generación de tablas y gráficos para el análisis. Se agradece a los amigos y colegas que han formado parte del equipo de aplicación del cuestionario; a Pedro G. Suárez Martín por el apoyo incondicional; y, aunque por último no menos importante, a la familia.

DEBATES TEÓRICO-CONCEPTUALES EN TORNO A LAS REMESAS Y LA DESIGUALDAD SOCIAL EN EL ACTUAL CONTEXTO CUBANO

En el presente estudio se considera necesario realizar un ejercicio de definiciones sobre remesas y desigualdad social, útiles para comprender el contexto concreto en el que se analizan, la sociedad cubana. De este modo, se intenciona el debate entre planteamientos realizados por estudiosos de estos temas –desde presupuestos tradicionales y otros más recientes– y las propias reflexiones de la autora.

¿CÓMO ENTENDER LAS REMESAS?

Las definiciones sobre remesa, así como los indicadores para medirlas y las maneras en que los países compilan sus estadísticas son diversas.

Tradicionalmente, las remesas han sido entendidas desde un punto de vista financiero como transferencias unilaterales entre residentes de dos países distintos, suponiendo que son familiares, con el fin de contribuir a su manutención (Munster, 2016). Son ingresos monetarios enviados con cierta sistematicidad por los migrantes a sus lugares de origen con el propósito de sufragar los gastos ordinarios para la subsistencia familiar y para garantizar el acceso de la familia a determinados bienes y servicios (Márquez, 2007 en: Munster, 2014; Everleny, 2015).

Sus usos familiares van dirigidos fundamentalmente a la reproducción material, en tanto alimentación, vestimenta, abrigo, educación, salud; así como a la reproducción social, vista a partir de los vínculos y comunicación establecidos entre receptores y emisores, celebraciones familiares, reencuentros (Munster, 2014).

Miradas complementarias a este concepto plantean dos dimensiones de las remesas. La primera se refiere a la económica, y la segunda a la sociocultural.

Desde esta perspectiva las remesas económicas, además de comprender las tradicionales transferencias monetarias, incluyen el envío de equipos, medicinas, alimentos, recargas de servicio de telefonía celular y productos de difícil acceso en el país al que se transfieren (Barbería, 2012).

Algunos economistas cubanos (Everleny, 2015; Rodríguez, 2016) consideran que la inclusión de estos elementos podrían acarrear dificultades al estudio de las remesas, pues introducirían nuevos sesgos al cálculo de estimados, lo cual los haría incomparables con respecto a las cifras que se manejan internacionalmente. Al decir de uno de los especialistas entrevistados: “Ciertamente llega a la misma gente que recibe remesas monetarias, no hay diferenciación; pero ¿cómo se calcula cuántas personas han recibido aire acondicionado por la Aduana? Tendría que hacerse una estadística micro de cada uno de los casos y luego valorar si es un equipo de uso o si es nuevo; lo cual se hace prácticamente imposible de calcular y no es comparable” (Rodríguez, 2016).

Teniendo en cuenta esta alerta, el presente estudio asume las tradicionales transferencias monetarias como parte de la definición de remesas. También incorpora otros elementos que constituyen formas de ayudas externas que aumentan el bienestar de los receptores, como son equipos, medicinas, alimentos, recargas de telefonía celular por los familiares desde el exterior y otros productos de difícil acceso; pero desde el entendimiento de que sería inapropiado realizar una estimación de sus montos e incluirlos en los cálculos internacionales de remesas, debido al sesgo que supondría.

Asimismo, las miradas complementarias al concepto de remesas abordan la dimensión sociocultural, tal como se había anunciado. Estas consisten en bienes inmateriales e insumos transmitidos consciente o inconscientemente, ideas, comportamientos e identidades, expresiones de la cultura que sufren alteraciones por los movimientos de ida y vuelta (Levitt; en Rodríguez, 2006; Flores, 2006: 5) y que transforman el sistema de valores, actitudes, prácticas sociales y demás rasgos culturales. Más que una transferencia del patrimonio cultural de una sociedad a otra –lo cual no sería posible–, las remesas socioculturales comprenden la difusión de ideas, conocimientos, experiencias, prácticas y hábitos que a veces adoptan magnitudes transnacionales.

Justamente la Teoría de los Espacios Sociales Transnacionales contribuye a la comprensión de las remesas socioculturales como un encuentro entre culturas, mixtura de elementos que van produciendo transformaciones en las sociedades de origen y de recepción, donde en el actual contexto globalizado y globalizante las dinámicas transnacionales presentan mayores condiciones de intensidad, frecuencia y simultaneidad. El acceso a Internet ha brindado la posibilidad de que los sujetos se sitúen en varios mundos de manera simultánea, aprender a funcionar con nuevas lógicas que muchas veces son enseñadas por los propios familiares que residen en el exterior (Delgado, 2015: 57-58).

El conocimiento y la experiencia adquirida en el extranjero pueden ser instrumentales en las decisiones de dirigir iniciativas privadas familiares o de motivar a los familiares residentes en la sociedad de origen para que establezcan una. En este sentido, la Teoría de los Espacios Sociales Transnacionales agrega la idea de la participación de actores privados a través de iniciativas económicas (Orozco, 2000; Flores, 2006; Levitt, 2006; Feldman-Bianco, Rivera, Stefoni y Villa, 2011) que buscan capitalizar las oportunidades en las áreas de origen y de recepción (Portes, 2002: 139).

El nuevo conocimiento de los migrantes puede favorecer la economía privada familiar al transmitirlo a sus contactos en la sociedad de origen. Las ideas transmitidas pueden ser acerca de formas adoptadas por el empresariado, que permita actualizar las modalidades utilizadas hasta el momento, valores y principios subyacentes a las mismas, formas de promoción más efectivas, nuevos estilos de vida (Abella y Ducantes, 2007: 80-81). De esta forma, muchos migrantes participan en dos economías, son ciudadanos transnacionales que se convierten en actores económicos en más de un país simultáneamente, sin que eso implique un retorno a casa (Orozco, 2000: 11).

Como se puede apreciar, los elementos económicos y socioculturales se encuentran estrechamente vinculados, por lo que resultaría complejo –y probablemente inadecuado– separar el análisis de las mis-

mas, pues la realidad demanda su abordaje interconectado. También reclama esclarecer que los actuales usos de las remesas no se limitan al histórico consumo familiar para la subsistencia.

Los usos de las remesas se han ido diversificando, lo cual no contradice el importante papel que juegan hoy en día en la solución de necesidades básicas de las familias en su vida cotidiana. Al respecto, la investigadora Consuelo Martín (2000: 34) agrega que durante los momentos más duros de crisis económica en Cuba –o Período Especial como también se le conoce, las remesas fueron clave para la satisfacción de necesidades económicas básicas de muchos cubanos. No obstante, en la actual sociedad cubana emerge de manera notoria el uso de las remesas como capital de trabajo, sobre todo para los negocios privados (Munster, 2016); lo cual es consecuencia de los recientes cambios en Cuba, entre ellos, la llamada “actualización del modelo económico”, el relanzamiento del trabajo por cuenta propia, las modificaciones en la ley migratoria, la liberalización de la compra y venta de casas y autos, el permiso de hospedaje a cubanos en hoteles.

La remesa como capital de trabajo incluye tanto el gasto corriente, o consumo familiar, como la inversión (Rodríguez, 2016), pues forma parte de un conjunto de ingresos que las familias no suelen separar.

El economista cubano Omar Everleny (2015) llama la atención sobre este aspecto: “A diferencia de los mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos y envían remesas para mantener a su familia, en el caso de Cuba se ha mezclado. Como no puede venir dinero para inversiones de parte de Estados Unidos por vía bancaria, lo envían como remesa, es capital de trabajo. En un envío mandan 5.000 USD, y en otro 4.000 USD, y probablemente está escondida la inversión de Estados Unidos”.

Manuel Orozco (2015a: 1), además, plantea que las remesas son parte del conjunto total de ingresos de los hogares a partir del cual se pagan los gastos familiares. Considera que, a pesar de que algunos investigadores y políticos asumen que las remesas se mantienen separadas de alguna manera de todas las otras fuentes de ingresos, el trabajo de campo y la participación regular con los hogares receptores muestran que son fungibles. En este sentido, aunque existen variaciones entre países, el patrón es que las remesas complementan los ingresos familiares.

En el concepto tradicional, la remesa no tiene contrapartida, es una transferencia que, al ser unilateral, se gasta en el país de recepción (Ibídem). En los últimos años se han diversificado las dinámicas desarrolladas por algunos receptores de capital de trabajo, quienes transfieren parte de las ganancias de sus negocios hacia el exterior, lo cual dota a las remesas de un movimiento multidireccional. “A veces la mitad es de tu familia de allá que está en el negocio de manera conjunta contigo,

y después lo devuelves y envías el dinero a ellos” (Everlery, 2015). Se trata de inversiones utilizadas para el desarrollo de iniciativas privadas familiares en Cuba, que implican el envío de ganancias hacia el exterior (Delgado, 2015: 69).

DEFINICIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD SOCIAL

Desde las Ciencias Sociales la desigualdad social también se ha caracterizado por presentar una diversidad de posturas y elementos de definición. Siendo interés de este estudio analizar los efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social, resulta oportuno debatir las definiciones sobre desigualdad social y su vínculo con otras categorías que aportan a su comprensión.

Al menos dos nociones generales parecen dar forma a la desigualdad social: estructura y estratificación (Espina, 2010b: 125). La estructura sintetiza el conjunto de cualidades básicas de lo social, entre ellas, la condición de totalidad dinámica ordenada, constituida por partes articuladas y organizadas para cumplir funciones diversas; y la dependencia mutua de las partes-elementos e intercambio entre ellas –lo cual no se contradice con la idea del conflicto y la tensión–, que dan a la sociedad su condición de entramado de fuerzas en interacción. De este modo, la estructura social aporta el componente de análisis fijodinámico (Ídem: 126).

Por su parte, la noción de estratificación social describe las desigualdades estructuradas y expresadas en estratos, entre los que se distinguen posiciones superiores e inferiores. Es una estructura que tiene un arriba y un abajo, un conjunto de posiciones asimétricas –que muchas veces forman parte de los procesos institucionalizados de desigualdad–, de manera que la estratificación social aporta el componente de análisis entre el ascenso y el descenso (Íbidem).

De esta manera, la desigualdad social tiene una conexión estrecha tanto con la estructura social existente en un momento determinado, como con los procesos que van teniendo lugar en ella como parte de su funcionamiento, presentando un componente de carácter estático y otro componente de carácter dinámico (Zabala, 2015). Consecuentemente, la desigualdad social constituye una operación cultural de interiorización o anormalización de determinados grupos sociales por otros, lo que se corresponde con la presencia de barreras de movilidad, que supone una apropiación diferencial de ventajas y desventajas en el acceso al bienestar material y al bienestar espiritual –o subjetivo, como se entiende en los marcos de este trabajo– (Espina, et. al., 2010a: 2-4).

En este sentido, el bienestar material responde a la satisfacción de necesidades económicas de la familia, que pueden ser estudiadas a

partir de dimensiones como acceso a las remesas, ingresos familiares, ahorros, tenencia de recursos y bienes económicos, y equipamiento. Asimismo, el bienestar subjetivo (Victoria y González, 2000; Aparicio, 2011) permite conocer percepciones y valoraciones de los sujetos en torno a su propia vida y a los sucesos que ocurren en ella, entre ellos, a los efectos del uso de las remesas a partir de indicadores como: acceso a servicios y espacios de consumo; vacaciones y vacaciones ideales, así como expectativas de futuro; efectos de las remesas para sus vidas; posición en la estructura social; y percepciones sobre las desigualdades sociales devenidas del uso diferenciado de las remesas.

Los especialistas entrevistados sobre el tema de la desigualdad social (Rodríguez, 2015; Zabala, 2015; Echevarría, 2016) concuerdan en que los indicadores sociodemográficos (sexo, edad, color de la piel, nivel de instrucción y ocupación, municipio de residencia) y las dimensiones económicas expresan desigualdades sociales en Cuba. Asimismo, un tema en el que se sugiere profundizar, es en la problematización de las desigualdades en término de acceso y de resultados “porque por la política existente en Cuba, según los términos legales o constitucionales, hay igualdad de acceso para toda la población donde quiera que viva, sin diferencia de género, de color de la piel, religiosa etc., pero el acceso real a esa oportunidad humana está mediado por esas desigualdades de que hablamos, y los resultados son distintos” (Zabala, 2015).

También resulta aportador al análisis la idea planteada por la investigadora Dayma Echevarría (2016), quien explica la existencia de desigualdades injustas, referidas a aquellas que no están asociadas a las capacidades, sino a la manera de estructurar el sistema de oportunidades. Ocurren cuando las personas tienen acceso diferenciado a espacios aparentemente de igualdad generados por las políticas sociales, cuando algún actor económico, social o el gobierno, no favorece determinada estructura de oportunidad. Esta idea resulta interesante y motiva la reflexión sobre si son las políticas sociales, el logro, o incluso una mezcla de estos elementos, determinantes en la distribución de las riquezas, lo cual podría ser un aspecto a profundizar en estudios posteriores.

Al respecto, León y Martínez, según Sémblér (2006: 43), se centran en el análisis de la desigualdad social considerada desde la generación de barreras a la movilidad social que tienden a crear grupos sociales diferenciados por razones que reproducen formas de vida y *ethos* culturales, lo cual permite comprender la interconexión entre desigualdad social y movilidad social desde una mirada dinámica de la desigualdad.

Uno de los aportes realizados por los estudios desarrollados desde la Sociología Latinoamericana de las Desigualdades Sociales es que, sin desconocer los impactos de los macrofactores, se rescatan las expli-

caciones de la movilidad social y la reproducción de las desigualdades articuladas a las prácticas cotidianas. Dentro de las explicaciones de micronivel se destacan las relacionadas con las estrategias familiares (Espina, et. al., 2010b: 154).

En este sentido, los estudios sobre estrategias familiares de vida permiten establecer diferencias entre estrategias de sobrevivencia (limitadas a la satisfacción de necesidades básicas elementales), de acumulación (intentan ampliaciones de la satisfacción de necesidades básicas, incluyen compras de equipo, arreglo y ampliación de la vivienda, etc.) y de movilidad (se refieren a migraciones internas y externas, y a acciones directamente vinculadas a mejora la ubicación de clase o de estrato social) (Citado de Gutiérrez, 2006 en Ídem: 157).

Los grupos sociales –“las clases” en sus palabras– tienen acceso diferenciado a una serie de recursos sociales disponibles que otorgan poder y determinadas posibilidades de vida (Portes y Hoffman, 2003: 41). Su formación está directamente relacionada con aspectos de desigualdad de oportunidades, por lo que difícilmente una sociedad de clase presentaría igualdad de oportunidades para individuos de distintos orígenes, aunque tampoco un encerramiento total de oportunidades (Chávez, Molina y Pla, 2010: 107); a la vez que, aquellos que ocupan las mismas posiciones tienen todas las posibilidades de tener los mismos *habitus*, al menos hasta el punto de que las trayectorias que les han llevado hasta estas posiciones son similares (Bourdieu: 108). Los miembros de una misma clase son relativamente homogéneos en el nivel de recursos, tienen similares experiencias en las fluctuaciones estructurales y se hallan unidos por similares intereses específicos de clase (Francés, 2009: 51). Al decir de Kenneth Prandy (1999), las personas que comparten una posición social similar, tienen más probabilidad de interactuar socialmente en términos de igualdad con miembros del mismo grupo (Ídem: 54).

La crisis y reforma en Cuba durante los años noventa del siglo XX configuraron un escenario de reestratificación social, expansión de las desigualdades sociales en los diversos ámbitos y alteraron el tipo de conexión socialismo-igualdad establecido con anterioridad para diferentes grupos sociales (Espina, et. al., 2010b: 178).

Esta es la razón por la cual comienzan a realizarse en esa época y hasta la actualidad estudios sobre satisfacción de necesidades básicas, estrategias de sobrevivencia, potencialidades y limitaciones de las familias para revertir su situación, y se priorizan líneas como: desigualdades distributivas en los sistemas económicos, multidimensionalidad de las desigualdades, desigualdades raciales, espaciales, de género, dimensiones culturales y estudios de política social, entre otros (Ídem: 180-181). De manera general, resulta valioso el abordaje sobre

las dimensiones económicas de la desigualdad social como posiciones socio-ocupacionales, desigualdades patrimoniales y remesas; así como las desigualdades educativas y etarias (Zabala, 2015). Las conclusiones de estos estudios apuntan a un predominio de tendencias de ampliación de las desigualdades, ensanchamiento de distancias sociales, aparición de nuevos actores socioeconómicos, configuración de claros espacios de ventaja y desventaja, y procesos de heterogenización de las subjetividades (Espina, et. al., 2010b: 187-188).

Estos procesos se han visto acelerados con las actuales reformas puestas en vigor en Cuba a partir de 2011, las cuales han estado sustentadas por un proceso de “Actualización del Modelo Económico y Social”.

VÍNCULOS ENTRE REMESAS Y DESIGUALDAD SOCIAL

Los efectos de los usos de las remesas se mueven en una relación de tensión permanente entre el desarrollo y la desigualdad social (Delgado, 2015). Sin embargo, en Cuba –como en América Latina y el Caribe–, resultan escasos los estudios que abordan los vínculos remesa-desigualdad, mientras que predominan aquellos que atienden a los efectos de las remesas en el desarrollo.

Según la economista cubana Blanca Munster (2014: 25) emerge con mucha fuerza el paradigma denominado “remesas para el desarrollo”, que se centra en el análisis de los efectos beneficiosos de las remesas en los hogares y en las comunidades de los países de origen. “Para Kaushik Basu, economista en jefe del Banco Mundial y vicepresidente superior de Economía para el Desarrollo el mensaje es optimista «La migración y las remesas ofrecen una tabla de salvación a millones de personas y pueden jugar un papel fundamental para el despegue de cualquier economía»” (Ibídem).

Desde este paradigma, uno de los impactos positivos de las remesas sobre el desarrollo local está dado por un efecto directo en los hogares receptores, donde se incrementan los ingresos, el consumo y se produce un mejor acceso a la salud y a la educación, lo cual alivia la pobreza y disminuye la vulnerabilidad frente a situaciones de crisis. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, estos supuestos son cuestionables, pues el impacto de las remesas está mediado por diversos factores, como la ubicación y el nivel de ingreso de los hogares donde se reciben y también de los hogares desde los cuales se envían. De este modo, podría beneficiar a clases sociales con posiciones más ventajosas en el mercado. En ese caso, se crearían nuevas formas de desigualdad o se profundizarían las existentes (Ídem: 26-30).

Teóricamente el enfoque de “remesas para el desarrollo” no tiene en cuenta la heterogeneidad de los hogares receptores, ni la necesidad

de distinguir entre la proporción de hogares de altos ingresos dentro del total de hogares receptores y la proporción del monto total de remesas que llega a los hogares de bajos ingresos (Munster, 2016).

Investigaciones realizadas sobre Cuba indican que los envíos de remesas están distribuidos de forma dispereja entre grupos de ingresos diferentes y a partir de disparidades raciales y espaciales (de la Fuente, 2001; Barbería, 2008; Hansing & Optenhögel, 2015). Con el incremento de las remesas en los últimos cinco años en Cuba, junto al relanzamiento del sector privado –que estimula dicha tendencia– algunas familias cubanas han recibido montos importantes como capital de trabajo para impulsar el desarrollo de iniciativas privadas que generan nuevos ingresos, mientras que otras reciben cantidades inferiores como remesas de consumo (Delgado, 2015). Estos procesos producen desigualdades sociales vinculadas a la existencia de nuevas dinámicas y actores económicos emergentes que ocupan posiciones sociales más ventajosas que otros. Como consecuencia, la desigualdad cala en la subjetividad social, dando lugar a la percepción del surgimiento de “nuevos ricos” (Pañellas, 2012; Delgado, 2015).

Asimismo, las iniciativas privadas en Cuba son heterogéneas en su interior. Algunas han sido reconocidas por el Estado como “trabajo por cuenta propia”, aprobadas a partir del otorgamiento de licencia y pago de tributos (Resolución 353/2013); pero este término es ampliamente debatido por dos razones. Por una parte, con frecuencia la actividad se realiza en grupos y no individualmente, incorporando la participación de otras personas ya sea en calidad de socios como mediante el empleo asalariado, por lo que se crea una suerte de pequeñas y medianas empresas (PyMES). Por otra, existe una variada cantidad de iniciativas privadas desarrolladas por un sector de la población de manera no regulada por el Estado. Estos negocios, de igual forma, vienen a complementar la actividad estatal en la producción de bienes y prestación de servicios a la población. Por esta razón, la presente investigación aborda el concepto de iniciativas privadas para hacer alusión tanto al trabajo por cuenta propia como al desarrollo de iniciativas económicas no reguladas, donde las remesas juegan un papel importante para su desarrollo.

De este modo, algunas familias receptoras usan las remesas únicamente para el consumo y otras como capital de trabajo. Resulta interesante abordar esta relación en tanto las remesas influyen en el desarrollo de los negocios familiares, si bien es complejo identificar hasta qué punto (Delgado, 2015).

El incremento de la incorporación de familias que emprenden iniciativas privadas, así como el aumento del uso de remesas para su desarrollo, dan cuenta del surgimiento de grupos sociales con acceso

a nuevos espacios y posiciones sociales ventajosas, mientras que otros encuentran barreras para su movilidad social. Esto sucede en el contexto del llamado proceso de actualización del Modelo económico y social de Cuba que intenta conducir a la Isla hacia el desarrollo, ratificando al Estado como garante de justicia social, propósito que queda limitado por la agudización de las desigualdades sociales.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de los elementos teóricos antes expuestos, se elabora una propuesta de estudio basada en los fundamentos metodológicos que se exponen a continuación:

La interrogante principal que guió la investigación fue formulada en los siguientes términos para un problema de investigación: ¿Qué efectos genera el uso diferenciado de las remesas familiares (consumo y capital de trabajo) en la desigualdad social.

Respecto a la pregunta fundamental del estudio surgió la elaboración de la siguiente hipótesis: El uso diferenciado de las remesas familiares (consumo y capital de trabajo) reproduce desigualdades sociales existentes y genera nuevas expresiones entre receptores, tanto en el acceso al bienestar material como en el acceso al bienestar subjetivo.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y/O HIPÓTESIS

El propósito fundamental que la investigadora se propuso alcanzar con este estudio fue:

Analizar efectos del uso diferenciado de las remesas familiares (consumo y capital de trabajo) en la desigualdad social.

Objetivos específicos:

- 1- Identificar diferencias entre quienes usan las remesas para el consumo y como capital de trabajo, según sus características sociodemográficas.
- 2- Comparar efectos del uso diferenciado de las remesas familiares (consumo y capital de trabajo) en el bienestar material.
- 3- Comparar efectos del uso diferenciado de las remesas familiares (consumo y capital de trabajo) en el bienestar subjetivo.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

En correspondencia con los objetivos propuestos en la presente investigación, con los debates teórico-conceptuales en torno a remesa y desigualdad social y con los resultados que se presentarán, se parte

de comprender como conceptos centrales los siguientes: remesas familiares, uso diferenciado de las remesas (consumo y capital de trabajo), desigualdad social (bienestar material y subjetivo) e iniciativa privada.

Remesas familiares: Son entendidas, desde su dimensión económica, como transferencias monetarias, equipos, medicinas, alimentos, recargas de celular y productos de difícil acceso enviados con cierta sistematicidad entre residentes de dos países distintos (Barbería, 2012). Desde su dimensión sociocultural, constituyen la difusión de ideas, conocimientos, experiencias, prácticas y hábitos, son bienes inmateriales transmitidos –consciente o inconscientemente– que transforman el sistema de valores, actitudes, prácticas sociales y demás rasgos culturales (Levitt; en Rodríguez, 2006; Flores, 2006: 5).

Uso diferenciado de las remesas: Las remesas se usan en el consumo del hogar o como en forma de capital de trabajo.

- *Consumo:* Contribuyen a la manutención de la familia receptora, tanto para la solución de necesidades de subsistencia, como para garantizar su acceso a otros bienes y servicios que le complementan en la reproducción de la vida cotidiana (Martin, 2000: 34; Rodríguez, 2016).
- *Capital de trabajo:* Es cuando las remesas se usan en el desarrollo de iniciativas privadas, de manera que incluye tanto el gasto corriente o consumo familiar, como la inversión; pues forma parte de un conjunto de ingresos que las familias no suelen separar (Munster, 2016; Rodríguez, 2016).

Desigualdad Social: Constituye una operación cultural de interiorización o anormalización de determinados grupos sociales por otros, lo que se corresponde con la presencia de barreras de movilidad, que supone una apropiación diferencial de ventajas y desventajas en el acceso al bienestar material y espiritual –o subjetivo, como se entiende en los marcos de este trabajo– (Espina, et. al., 2010a: 2-4). Es inherente a la sociedad en prácticamente todos los momentos de su desarrollo y tiene una conexión estrecha tanto con la estructura social como con la estratificación social (Zabala, 2015).

- *Bienestar material:* Responde a la satisfacción de necesidades económicas de la familia. Pueden ser abordadas teniendo en cuenta indicadores como acceso a la remesa, ingresos familiares, ahorros, tenencia de recursos y bienes económicos, y equipamiento.
- *Bienestar subjetivo:* Responde a las percepciones y valoraciones de los sujetos en torno a su propia vida y a los sucesos que ocu-

rren en ella (Victoria y González, 2000; Aparicio, 2011), entre ellos, a los efectos del uso de las remesas a partir de indicadores como: acceso a servicios y espacios de consumo; vacaciones y vacaciones ideales, así como expectativas de futuro; efectos de las remesas para sus vidas; posición en la estructura social; y percepciones sobre las desigualdades sociales devenidas del uso diferenciado de las remesas.

Iniciativa privada: Conjunto de actividades económicas muy heterogéneas en su interior, que incluye las actividades aprobadas por el Estado como “trabajo por cuenta propia” a partir del otorgamiento de licencia y pago de tributos (Resolución 353/2013) y otro conjunto de actividades no reconocidas por el Estado que son realizadas por un sector de la población de manera no regulada pero que también presta servicios a la población. Pueden ser realizadas individualmente o en grupos –conformados por personas que participan en calidad de socios o mediante el empleo asalariado–, por lo que en ocasiones se crea una suerte de pequeñas y medianas empresas (PyMES).

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de carácter descriptivo-analítico, explicativo y comparativo que permite plantear hipótesis a demostrar en posteriores estudios representativos. Se sigue una estrategia metodológica mixta, a partir de la combinación de métodos y técnicas cualitativa y cuantitativa.

UNIVERSO, SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO

El estudio se realiza en La Habana, actual capital de Cuba. Es la más pequeña de todas las provincias del país, representando el 0,6% del total del territorio nacional. De este modo constituye la capital política y administrativa de la República que se divide en 15 municipios y en ella se encuentran representadas todas las actividades económicas y manifestaciones artístico–culturales del país (ONEI, 2015: 16-17).

Es un territorio esencialmente heterogéneo. En su interior confluyen espacios de alto valor patrimonial y arquitectónico, con las llamadas ciudadelas, albergando sectores muy diversos de la población, lo cual evidencia contrastes entre municipios, y entre zonas luminosas y opacas por su desarrollo socioeconómico, todo lo que influye en la calidad de vida de sus habitantes.

La muestra de estudio cuenta con sujetos que residen en cada uno de los 15 municipios de la capital. Asimismo, la selección no se realizó de manera representativa debido a la dificultad en el acceso a

información oficial sobre la cantidad de receptores de remesas en la capital y sus características (dichos datos, levantados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba –ONEI–, no son de carácter público), por lo que se siguió una estrategia de formación de la muestra no probabilística a partir de un “muestreo a propósito”, por lo que la muestra no resulta aleatoria o representativa. No obstante, la distribución de la muestra por sexo, edad, color de la piel, nivel de instrucción y ocupación, corresponde con el comportamiento general de la población residente en la capital.

El criterio de selección de este estudio incluye a familias que reciben remesas hace al menos 1 año. De este modo, se aplicaron cuestionarios a un total de 74 familias, 41 de las cuales las utilizan para el consumo familiar (55,4%) y 33 como capital de trabajo en el desarrollo de iniciativas privadas (44,6%).

La sensibilidad que provoca en Cuba abordar temáticas como: remesas, ingresos familiares, iniciativas privadas y desigualdad social, influyó en el procedimiento de aplicación de los cuestionarios. Por ello, los sujetos fueron encuestados a partir de lazos de confianza.

Se contó con un equipo de apoyo para la aplicación del cuestionario en aras de lograr una mayor diversidad de los casos de estudio (sobre todo en lo referente a la ubicación territorial, y al desarrollo de iniciativas privadas variadas para el caso de los receptores de capital de trabajo), lo cual constituye una adaptación a la técnica Bola de Nieve, creando un esquema de telaraña que fue útil en el crecimiento de la muestra más que en la consecución de los casos.

Al mismo tiempo, el equipo de apoyo estuvo compuesto por 31 colegas de las áreas de la Sociología, Psicología, Trabajo Social, Historia, Pedagogía, Derecho, Arte Audiovisual, Ciencia de la Información e Informática; quienes contaban con experiencia previa en la aplicación de este tipo de instrumento y quienes, a su vez, recibieron orientación sobre las peculiaridades conceptuales del tema objeto de estudio.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la consecución de los objetivos propuestos en la investigación, resultó esencial la revisión bibliográfica de materiales de referencia de alcance nacional e internacional sobre el tema en cuestión, así como de otras investigaciones sobre temáticas cercanas.

Se aplicaron cuestionarios a receptores de remesas, tanto a aquellos que las usan para el consumo familiar, como en forma de capital de trabajo. Esta técnica brinda la posibilidad de recoger información cuantitativa en breve tiempo, la cual es procesada y analizada a partir del uso del paquete estadístico SPSS. El cuestionario se aplica al receptor de remesas familiares, quien se convierte en portavoz de la experiencia familiar.

En el mismo, se incluyó una escala de valoración, a partir de la cual se pidió a los encuestados que se ubicaran en uno de los 6 posibles estratos de la sociedad cubana, teniendo en cuenta la posición socioeconómica ocupada antes y después del recibo de remesas. De este modo, el escalón 1 representa la posición más desventajosa, mientras que el 6 la más ventajosa.

Paralelamente se aplica la entrevista en profundidad a Informantes claves (Nº 1: Trabajador en una agencia de envío-recepción de remesas; Nº 2: Coordinador de grupo de promoción de negocios privados en Cuba; Nº 3: Dueño de un restaurante privado exitoso) con el fin de complementar la información recogida en los cuestionarios y ahondar en temáticas que, por su sensibilidad y/o profundidad, los encuestados no desarrollan suficientemente.

Asimismo, la aplicación de la entrevista semiestructurada a expertos residentes en Cuba favorece el abordaje crítico y actualizado de los tópicos de interés. De este modo fueron entrevistados en el tema de las remesas, la Dra. Blanca Munster –Investigadora del Centro de Investigaciones sobre Economía Mundial (CIEM)–, Dr. José Luis Rodríguez –Ministro de Economía y Planificación de Cuba durante los años 1995-2009 y actual Investigador del Centro de Investigaciones sobre Economía Mundial (CIEM)– y Dr. Omar Everlery Pérez –Investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). Sobre el tema de las desigualdades sociales fueron entrevistados la Dra. María del Carmen Zabala –Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba)–, la Dra. Dayma Echevarría –Investigadora del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC)– y el Msc. Pablo Rodríguez –Investigador del Instituto Cubano de Antropología (ICAM).

La aplicación de estos métodos y técnicas, así como el estudio comparativo sobre las realidades de los dos grupos, permite analizar los efectos de los usos diferenciados de las remesas en la desigualdad social.

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Por su parte, cada uno de los investigadores consultados en calidad de especialistas dio su consentimiento para utilizar la información ofrecida en el desarrollo de este estudio. Del mismo modo, los receptores de remesas encuestados dieron su consentimiento a participar en la investigación, ofreciendo información valiosa, en este caso, bajo anonimato y en un ambiente de mayor confidencialidad posible, sin revelar características personales que permitiesen identificarlos.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Con la información recogida se conformó una base de datos en SPSS, versión 11.5, para lo cual fueron categorizadas las variables cualitativas. Se crearon categorías para la interpretación de las preguntas abier-

tas del cuestionario, a las cuales se le realizó un análisis de frecuencia de aparición.

Para el cumplimiento del objetivo específico 1 se emplearon como medidas de resumen frecuencias absolutas y relativas, y en el caso de las variables cuantitativas se emplearon la media y la desviación estándar (DE).

En las comparaciones entre los grupos de receptores (consumo y capital de trabajo) en relación a los efectos del uso diferenciado de las remesas familiares vistas en la dimensión de acceso al bienestar material y en el acceso al bienestar subjetivo, se utilizaron las pruebas Ji cuadrado y U de Mann Whitney, según se tratase de variables cualitativas y cuantitativas, respectivamente. Cuando el porcentaje de frecuencias esperadas inferiores a 5 sobrepasó el 20%, no se empleó Ji cuadrado sino el estadígrafo Fisher.

En el análisis de las percepciones sobre la reproducción de formas de desigualdades también se establecieron comparaciones entre los grupos a partir de los estadígrafos mencionados, así como intragrupal, como fue en el caso de la autopercepción de la posición socioeconómica antes de recibir remesas y en la actualidad. En este último caso se empleó el test de Wilcoxon, por tratarse de muestras relacionadas medidas con una escala ordinal.

En todos los análisis estadísticos realizados se fijó un nivel de confianza del 95 %.

La información se presentó en tablas resúmenes y gráficos con vista a facilitar la comprensión y poder arribar a conclusiones con mayor facilidad.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En aras de analizar los efectos del uso diferenciado de las remesas familiares en la desigualdad social, se identifican contrastes entre quienes usan las remesas para el consumo y quienes la usan como capital de trabajo, según sus características sociodemográficas. Asimismo, se comparan los efectos del uso diferenciado de las remesas familiares en el bienestar material y subjetivo.

Vale recalcar que los resultados alcanzados explican el comportamiento para la muestra de estudio, la cual no resulta representativa para la población cubana receptora de remesas, pues fue seleccionada a partir de un criterio de intencionalidad basado en la confianza.

DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

La identificación de las diferencias que se presentan entre los grupos receptores de remesa, teniendo en cuenta las características sociodemográficas de los sujetos encuestados en la muestra, con-

tribuirá a la distinción de grupos que ocupan posiciones sociales ventajosas y desventajosas.

MUNICIPIO DE RESIDENCIA

La muestra de estudio cuenta con sujetos que residen en cada uno de los 15 municipios de la capital. Si bien los cálculos a partir de la muestra identifican que es en Centro Habana el municipio donde menos remesas recibe, la mayor parte de los sujetos encuestados se concentran en dos de los municipios más poblados según las estimaciones de la ONEI (2016: 16-17): Diez de Octubre (con un 23% de la muestra) y Plaza de la Revolución (con un 21,6%).

Los datos de la muestra revelan que estos dos municipios cuentan con más casos que reciben remesa en concepto de capital de trabajo que en consumo, notándose diferencias debido a la mayor recepción en Plaza de la Revolución, territorio que se caracteriza por una situación socioeconómica favorable, que en Diez de Octubre, medianamente favorable (Espina, et. al., 2004: 10-17) y uno de los territorios más poblados de la capital. A tono con lo anterior, los residentes en Diez de Octubre mencionan padecer mayores situaciones de suciedades, malos olores y hacinamiento en el entorno. Sin embargo, el Informante Clave N° 2, coordinador de grupo de promoción de negocios privados en Cuba, percibe que en ese municipio se ha producido un incremento en la cantidad de iniciativas privadas y de su estabilidad en el tiempo, con una clientela local y muy sólida.

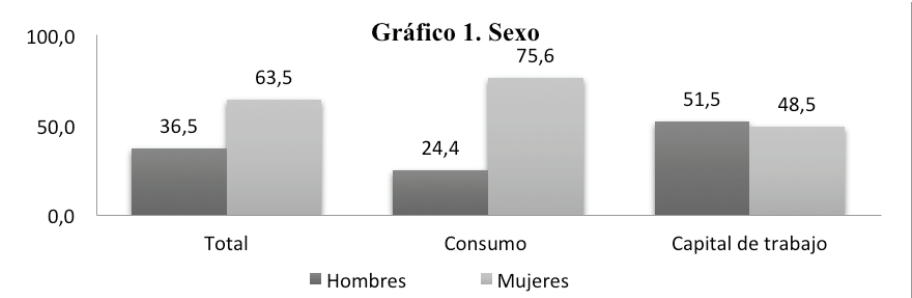
El impacto de las remesas es diferente según la ubicación y los montos recibidos en los hogares receptores. Estudios han develado que la recepción de remesas para el desarrollo de iniciativas privadas favorece la inversión en el entorno (Delgado, 2013). En opinión del especialista Omar Everleny (2015): “Al mejorar el nivel de vida de los receptores, mejora la imagen de la ciudad, la pintan y aumenta el nivel de vida de todos, porque las remesas tienen beneficios tanto personales como colectivos”.

Esto se corresponde con un componente históricamente asociado a la diferencia en la calidad del medio ambiente entre los municipios, así como al desarrollo de iniciativas privadas y obtención de ingresos que devienen de las mismas. “Los territorios brindan conectividad y condiciones infraestructurales diferentes, posibilidades a acceder a empleos, ingresos, educación, mejor vivienda” (Zabala, 2015).

SEXO

El análisis estadístico ($p < 0.05$) de la muestra visibiliza una mayor cantidad de mujeres (63,5%) con respecto a la de hombres (36,5%). En términos generales, la muestra presenta la tendencia de distribución

por sexo de La Habana donde, según el Censo de Población del año 2012, ellas representaban el 52,1% y ellos el 47,9% (ONEI, 2012: 115).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra

La idea de que las remesas aportan importantes beneficios a las mujeres receptoras ha sido ampliamente debatida desde los estudios de género. Uno de los elementos defendidos es que las remesas presentan un considerable potencial para sacar a las mujeres de una posición de menores ingresos que la de los hombres y, por consiguiente, les permite tener un mejor manejo de los hogares (Orozco, 2014a: 99).

Asimismo, existe la consideración de que el estatus de la mujer receptora consigue un impacto transformador en la familia, pues se le reconoce mayor independencia y poder de decisión como elementos de estatus a nivel intrafamiliar. De hecho, algunas perciben que al recibir dinero o artículos se empoderan, pues deciden sobre la distribución de las remesas entre los miembros de la familia y su uso. A la sazón, el estatus de la mujer a nivel intrafamiliar comienza a transformarse, pues el resto de los miembros le consultan sobre posibles movimientos económicos, respetando sus decisiones. No obstante, lo que pudiera parecer verdadera autonomía, se transfigura en un modo más de dependencia que desaparece en el justo instante en que el familiar residente en el exterior abandona el rol de emisor (Delgado, 2011: 265).

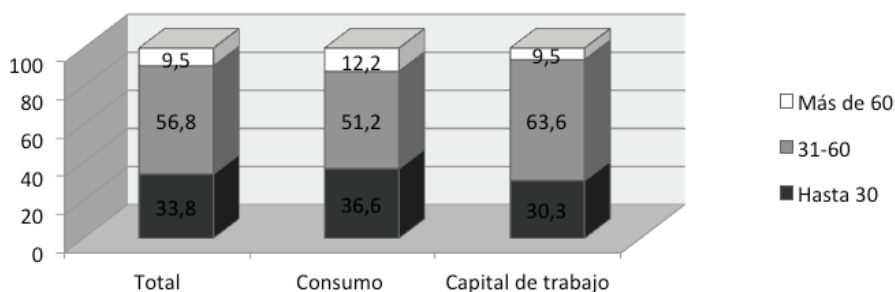
Resulta interesante la diferencia estadística ($p < 0.05$) que se presenta al comparar los grupos de receptores de remesas según sexo, siendo que la cantidad de mujeres es aún mayor cuando se usa para el consumo (75,5%) y los hombres entre quienes reciben capital de trabajo (51,5%). Ello refuerza la idea de que los patrones culturales privilegian a los hombres en espacios de poder económico, mientras que subordinan a las mujeres a la condición de dependencia de ingresos para la subsistencia. Consecuentemente, Manuel Orozco (2014: 99) agrega que un enfoque de género para el desarrollo se centraría en mejorar la posición de la mujer en la sociedad, para lo cual se requeriría mejorar

su acceso al crédito, mayor independencia personal y fortalecimiento de su capital social.

EDAD

La muestra refleja comportamientos similares a las características sociodemográficas de la capital según la edad: mayor representación de quienes se encuentran entre 31-60 años de edad (56,8%) –siendo un 44,3% para la población de la capital (ONEI, 2012: 32)–, seguido por el que comprende hasta 30 años (33,8%) –siendo un 35,2% para la capital (Ibídem)– y, en tercer lugar, el que integra sujetos con más de 60 años (9,5%) –en la capital 20,5% (Ibídem).

Gráfico 2. Edad



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra

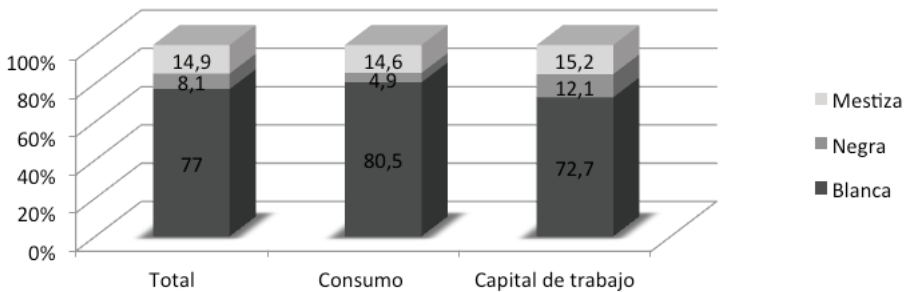
Tanto en el caso de quienes reciben remesas para el consumo, como quienes en forma de capital de trabajo, el grupo etario más representado es el de 31-60 años de edad. Es también este grupo quien cuenta con mayor representación entre los receptores de capital de trabajo (63,6%).

Los jóvenes que tienen hasta 30 años cuentan con menores posibilidades relativas de utilizar remesas en el desarrollo de sus iniciativas privadas (30,3%), y es menor aún en aquellos que presentan más de 60 años de edad (9,5%). Ello probablemente tenga que ver con el hecho de que los más jóvenes se encuentran en desventaja para obtener los empleos mejor remunerados, pues se espera de ellos mayor experiencia (Zabala, 2015). También podría tener que ver con el hecho de que la tercera edad está saliendo de la supuesta “edad económicamente activa y productiva”, lo cual agrava la desventaja de este para aprovechar las oportunidades de inversión. Esto se encuentra relacionado con el acceso diferenciado a recursos que otorgan poder y posibilidades para la vida.

COLOR DE LA PIEL

El color de la piel es otro indicador que refleja comportamientos parecidos a las características sociodemográficas de la capital. De esta forma, las personas de color de piel blanca son las más representadas (77,0%) –siendo un 58,4% para la población de la capital (ONEI, 2016: 20)–, seguido por mestiza (14,9%) –un 26,4% para la capital (Ibídem)– y negras (8,1%) –en la capital 15,2% (Ibídem). No obstante la tendencia, en comparación con las características sociodemográficas de La Habana, la muestra refleja una sobrerrepresentación de las personas de color de piel blanca.

Gráfico 3. Color de la piel



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra

Estas prevalecen tanto entre quienes usan las remesas para el consumo y como para quienes como capital de trabajo, sin embargo, sobresalen diferencias entre quienes usan las remesas como capital de trabajo (en montos anuales aproximados 15.372 CUC, siendo 7 veces mayor que la recibida por personas de color de piel negra, y 23 veces mayor en comparación con los mestizos). En consecuencia, quienes reciben remesas en mayores cantidades responden a un fenotipo blanco y con negocios.

Un factor que influye en este comportamiento es la propia historia migratoria cubana, caracterizada por la salida de personas fundamentalmente de color de piel blanco, de manera que las remesas benefician más a las familias blancas (de la Fuente, 2001). Como resultado de este fenómeno, prolongado a lo largo del tiempo “la diáspora cubana hoy es mucho «más blanca» que la población de la isla” (Hansing & Optenhögel, 2015: 11), razón por la cual es de suponer que las remesas lleguen a manos de parientes blancos residentes en Cuba.

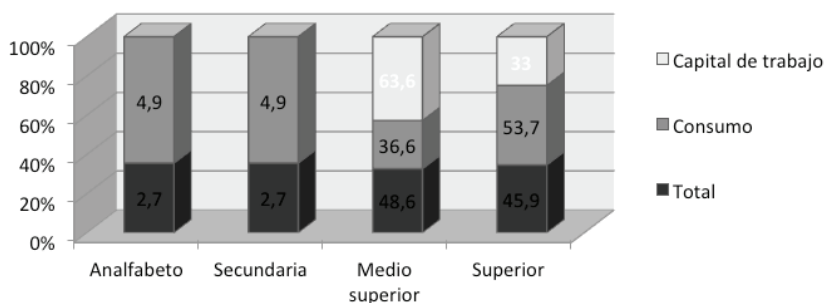
Por otro lado, luego de ser beneficiadas las personas de color de piel negra y mestiza por los cambios que la Revolución cubana impulsara a partir de 1959, el Periodo Especial agudizó las desigualdades por

color de la piel (Ibídem). “La población negra no estuvo comprendida en los grupos poblacionales al cual el modelo social dio un tratamiento preferencial [...] debido a la creencia o suposición de que todas las políticas sociales iban a beneficiar por igual a toda la población” (Zabala, 2015). Todo ello reproduce desigualdades según color de la piel, las cuales se hacen evidentes cuando se compara quienes las usan para el consumo y quienes como capital de trabajo.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN

La muestra sobresale por el alto nivel de instrucción de los sujetos, elemento que también caracteriza sociodemográficamente a la capital. De este modo, un 48,6% tiene nivel medio superior y un 45,9% nivel superior. Al mismo tiempo, las ocupaciones laborales más representadas son trabajo en el sector estatal (37,8%) y trabajo por cuenta propia (28,4%).

Gráfico 4. Nivel de instrucción



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra

Al comparar los grupos receptores, llama la atención una mayor concentración del nivel superior en aquellos que reciben las remesas para consumo (53,7%), quienes son esencialmente trabajadores estatales, y del nivel medio superior entre quienes reciben capital de trabajo (63,6%), donde predominan los trabajadores por cuenta propia. Complementariamente, trabajadores por cuenta propia que reciben capital de trabajo cuentan con un monto anual de remesas 17 veces mayor que las remesas de consumo percibidas por trabajadores estatales.

Asimismo, el salario promedio mensual de los trabajadores del sector estatal en Cuba es alrededor de 24 CUC (ONEI, 2015), lo cual difícilmente alcanza para satisfacer necesidades familiares y, por consiguiente, disminuyen sus posibilidades de invertir en un negocio.

Tabla N°1 Ocupación

Variables	Consumo	Capital de trabajo
Sin vínculo	4,9%	0,0%
Estudiante	4,9%	6,1%
Ama de casa	22,0%	6,1%
Estatad	58,5%	12,1%
Cuentapropista	0,0%	63,6%
Cooperativa	2,4%	0,0%
Jubilado	4,9%	3,0%
No regulado	2,4%	9,1%
Total	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra

De los datos se desprende que quienes cuentan con mayor nivel de instrucción no acceden a los espacios más remunerados, a diferencia de otros países donde el logro educativo puede determinar una mejor ubicación en el mercado de empleo (Zabala, 2015). “¿Cuál es la manera en que ellos (trabajadores en el sector estatal) van a mejorar su condición para ubicarse en una mejor posición que les permita aprovechar las oportunidades que existen en nuestro país?” –reflexiona la investigadora María del Carmen Zabala (Ibídem).

En este sentido, la realidad cubana refleja la llamada “pirámide invertida” (Guzmán, 1995) que comienza a expresarse en Cuba desde finales de los años ochenta del pasado siglo, en tanto intercambio de las posiciones privilegiadas y desventajosas en la estructura social por una brusca modificación de las vías de acceso al bienestar material y de la escala de prestigio social de las profesiones (Espina, 1997). Esta realidad también entra en debate con el patrón de las remesas a nivel internacional, donde su función suele ser complementar los ingresos familiares.

El panorama refleja notables diferencias entre grupos sociales por ocupación; mientras unos presentan un mayor poder adquisitivo, otros dependen de las remesas para subsistir, todo lo cual plantea notables retos para las políticas sociales: “Yo creo que la respuesta de Cuba es reconocer que este país cambió, es lo primero. Cuba tiene que eliminar todas las políticas generales y tiene que pasar a políticas focalizadas” (Everlery, 2015).

Por otro lado, sin acercarse a la mayoría de la muestra, al menos un 29% (distribuido de manera similar entre receptores de consumo y

de capital de trabajo) ha expresado utilizar parte de las remesas para la superación personal o de los familiares, especialmente de hijos; donde se incluye el pago a repasadores, profesores particulares de idioma, música y baile, fotografía y cine, con el fin de complementar la enseñanza formal de las instituciones oficiales tanto de educación primaria y secundaria, como nivel medio superior y superior. La búsqueda de una educación alternativa, paralela a la estatal, emerge no solo entre quienes se preparan para la realización de exámenes de ingreso a la universidad; sino también con el fin de complementar la educación de los hijos y hacerles más competentes.

Algunos padres invierten en educación privada para sus hijos desde las edades más tempranas (entre 1 y 5 años de edad). Con un costo cercano a las 100 CUC mensuales –equivalente a casi cinco sueldos promedio en la Isla– comienzan a florecer los llamados “cuidadores particulares” o “jardines privados de infantes” (Hansing & Optenhögel, 2015). Los infantes reciben clases de idioma, deporte, música, ajedrez y cultura general, cuentan con uniformes y son recogidos en sus hogares por un transporte particular; algo que resulta novedoso para un sector social de la población en Cuba en los últimos años, a partir del relanzamiento de la iniciativa privada y el incremento de la recepción de remesas. Ello forma parte de un recorrido formativo que comienza “desde la cuna” y puede continuar acompañando la educación hasta el nivel superior.

Al mismo tiempo, en la actualidad se debate con fuerza sobre las desigualdades generadas por las políticas educativas (Echevarría, 2016): “Quienes están accediendo cada vez más a la Educación Superior son las personas blancas, mujeres, hijos de profesionales o dirigentes, que viven en las cabeceras municipales”. La Dra. María del Carmen Zabala (2016) agrega que el acceso a la educación superior está siendo mayor en hijos de cuentapropistas, como un modo de iniciativas privada. A ello habría que agregar el papel de las remesas en el acceso a la educación complementaria.

EFFECTOS DEL USO DIFERENCIADO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL BIENESTAR MATERIAL

La disponibilidad de recursos con que cuentan los receptores de remesas para disfrutar de las posibilidades de vida influye en el acceso diferenciado al bienestar material. Como se verá, las remesas constituyen un recurso que visibiliza las desigualdades sociales presentadas en estos grupos.

TRANSFERENCIAS MONETARIAS: FRECUENCIA, MONTO Y ANTIGÜEDAD DE RECIBO

El acceso a las remesas monetarias constituye el ingreso más importante para el 89,2% de la muestra. De manera general, son recibidas con

una frecuencia mensual (47,3%) o cada dos meses (18,9%), y el monto promedio anual es de 5.698,5 CUC.

Sin embargo, presentar esta cifra de manera global significaría ocultar diferencias al interior de los grupos. Las estadísticas ($p < 0.05$) revelan que quienes reciben remesas para el consumo perciben un monto promedio anual de 1.003,7 CUC, aproximadamente 100 CUC en cada envío; mientras que quienes cuentan con capital de trabajo adquieren anualmente 11.532,5 CUC, 11 veces más, y la cantidad promedio por envío suele ser, para unos, más de 200 CUC (33,3%) y, para otros, entre 101-199 CUC (24,2%). También se encuentran particularidades al interior de los receptores de capital de trabajo quienes, a diferencia de los receptores de remesas de consumo, presentan un 6,1% que las obtiene con frecuencia quincenal (alrededor de 11.100 CUC) y otro 6,1% que ha contado con un monto inicial (120.000 CUC).

Este panorama motiva dos reflexiones. La primera se encuentra vinculada a lo que representa para cubanos residentes en la Isla recibir 100 CUC mensuales en concepto de remesas de consumo individual, en comparación con lo que podría significar para receptores residentes en otro país de América Latina. El economista José Luis Rodríguez (2016) explica que los cubanos tienen resuelto algunos gastos sociales que un receptor de otro país no, por ejemplo, un sistema de acceso gratuito a la salud y a la educación, así como una canasta básica de alimentación subvencionada. “Hay países donde se gasta hasta el 20% del ingreso de la población en salud y educación”, agrega (Ibídem). De este modo, los residentes en la Isla cuentan con mayor poder de compra, a pesar de que la disponibilidad de recursos en el mercado nacional podría ser limitada.

La segunda reflexión tiene que ver con la recepción de altos montos de capital de trabajo para el desarrollo de iniciativas privadas en Cuba, algo que no sucedía hace 10 años. En lo tocante, un estudio de maestría realizado en el año 2013 sobre remesas y restaurantes privados familiares en La Habana (Delgado, 2015) permitió conocer casos en los que se recibe hasta 200.000 CUC para la compra de un apartamento o casa, que después debe ser arreglado, transformado y adecuado para el desarrollo de una actividad económica.

Por otro lado, según la antigüedad del recibo, resaltan tres subgrupos de la muestra: un 28,4% recibe remesas desde hace apenas un año, un 23% entre 4-6 y un 18,9% hace más de 10 años. Las diferencias se perciben al interior de los grupos receptores, siendo mayores los montos entre quienes reciben remesas para el consumo desde hace más de 10 años (aproximadamente 1.450 CUC anuales), favorecido por la

estabilidad económica alcanzada por los familiares en el exterior; mientras que para los receptores de capital de trabajo los montos son mayores entre quienes la perciben desde hace 4-6 años (aproximadamente 15.370 CUC), lo cual se corresponde con el periodo de relanzamiento de la actividad privada en Cuba.

MONTO ANUAL, INGRESO FAMILIAR, AHORRO Y TENDENCIA DE LAS REMESAS

La tabla muestra diferencias significativas ($p < 0.05$) entre los grupos receptores cuando se analiza, de manera cruzada, monto anual y tendencia de las remesas, ingresos familiares y ahorros.

Por un lado, en la medida en que los montos de remesas son mayores para quienes reciben capital de trabajo, aumentan sus ingresos familiares¹ y su capacidad de ahorrar². En consecuencia, los receptores de remesas de consumo reciben menores montos, por lo que sus ingresos familiares son inferiores³ y su capacidad de ahorrar es pequeña⁴.

La tabla refleja que un poco más de la mitad de los receptores de remesas de consumo (53,7%) tienen ingresos familiares no mayores a 100 CUC. Asimismo, según los cálculos estadísticos ($p < 0.05$), en los hogares conviven 3 personas como promedio, de manera que las remesas podrían estar constituyendo parte de una estrategia familiar de sobrevivencia limitada a la satisfacción de necesidades básicas elementales.

1 Para la mayor parte de la muestra (el 60,6%) es mayor a 200 CUC mensuales.

2 El 84,8% de este grupo ahorra, de los cuales un 30,3% guarda entre 500-1.000 CUC al año, y un 21,2% más de 1.000 CUC.

3 Solo un 22,0% adquiere más de 200 CUC.

4 Si bien más de la mitad ahorra (el 63,3%), la mayor parte de ella (56,1%) alcanza a guardar menos de 500 CUC.

Tabla N° 2 Monto anual, ingreso familiar, ahorro y tendencia de la remesa

Variables	Consumo	Capital de trabajo
Monto anual de remesas	1.003,7	11.532,5
Ingresos familiares mensuales		
Menos de 50	9,8%	0, 0%
50-100	43,9%	9,1%
101-200	24,4%	30,3%
Más de 200	22,0%	60,6%
Ahorros		
Menos de 500	56,1%	33,3%
500-1.000	4,9%	30,3%
Más de 1.000	2,4%	21,2%
No ahorran	36,6%	15,2%
Tendencia de las remesas		
Aumenta	34,1%	39,4%
Igual	36,6%	33,3%
Disminuye	17,1%	12,1%
No responde	12,2%	15,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra

No obstante, en general, los resultados sugieren que los receptores de remesa tienen capacidad para ahorrar, aunque en mayor medida cuando reciben capital de trabajo. Esta característica también se refleja al analizar a los receptores que ahorran más de 1.000 CUC al año, siendo que los de remesas de consumo ahorran como promedio 2.000 CUC, mientras que los de capital de trabajo guardan alrededor de 45.790 CUC (22 veces más).

Con respecto al año anterior, la tendencia de los montos de remesas para receptores de consumo ha tendido a mantenerse estable (36,6%) más que a aumentar (34,1%). De otro modo, los montos de las remesas suelen incrementarse (39,4%) para quienes reciben capital de trabajo, más que a recibir iguales cantidades (33,3%).

El economista cubano José Luis Rodríguez (2016) fundamenta esta tendencia: “La remesa como fondo de consumo no va a crecer mucho más [...] La que sí va a crecer es la remesa de capital de trabajo, evidentemente en el sector privado, sobre todo los cuatro escalones básicos que más ganan (arrendamiento, paladares, transportistas y artesanos) porque es un sector que funciona de los ingresos que provienen del exterior”.

Finalmente, quienes ahorran más de 1.000 CUC al año, tanto receptores de consumo como de capital de trabajo, perciben un aumento en los montos, demostrando que las remesas no solo funcionan para la subsistencia de los grupos más necesitados; sino que también mantienen y fortalecen el estatus de grupos que se ubican en posiciones ventajosas.

¿QUÉ HACEN LOS RECEPTORES CON LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS?

La distribución de las remesas se realiza a través de gastos diversos, relacionados con la reproducción material y social de la familia.

A tono con la reproducción material, los grupos suelen combinar estrategias familiares de sobrevivencia para la satisfacción de necesidades básicas elementales como la compra de alimentos (86,5%), productos de aseo (67,6%), ropa y calzado (60,8%); con estrategias de acumulación que incluyen el arreglo de la vivienda (59,5%), la compra de equipos electrodomésticos (56,8%) y la transportación en taxi colectivo (44,6%). Sin embargo, a diferencia de quienes usan las remesas para consumo, quienes cuentan con capital de trabajo son más propensos al acceso a recursos adicionales, como la compra de muebles (48,5%), combustible para vehículo (36,4%), arreglos de los mismos (33,3%) y adquisición de productos de difícil acceso en el país (33,3%).

Con respecto a la reproducción social, resulta común en ambos grupos el gasto de una parte de las remesas recibidas en la satisfacción de necesidades de recreación familiar (82,4%), comer en restaurantes (62,2%) y acceder a Internet (56,8%); ya sea a través de conexión *wifi* o desde la casa, lo cual facilita la comunicación con los familiares residentes en el exterior, más directa y en tiempo real, y la transmisión de aprendizajes, valores y estilos de vida, que permite a la familiar funcionar en espacios sociales transnacionales.

En este sentido, nuevamente quienes cuentan con capital de trabajo tienen mayor acceso a servicios y recursos, entre ellos Internet (69,7%), servicios de belleza y relajación en *SPA* (42,4%), hospedaje en hoteles ubicados en zonas turísticas del país (42,4%) como La Habana, Varadero y Cayos, y viajes hacia otros países (39,4%), entre los que se encuentran, según mencionan: Estados Unidos, España, México, Ecuador, Canadá, Rusia, Perú, República Dominicana, Brasil, Panamá y San Martín. Al respecto, uno de los sujetos encuestados dueño de negocio expresa “Conozco más sobre otros lugares del mundo que sobre mi propio país” (Encuestado N° 27). Otro plantea que, cuando se siente agotado de trabajar, viaja al exterior y alquila una isla para él y su familia (Encuestado N° 16).

OTRAS AYUDAS EXTERNAS RECIBIDAS

Otras ayudas recibidas por los receptores constituyen formas de remesas menos tradicionales que, igualmente, aumentan su bienestar material.

Con respecto a las remesas económicas, la muestra ha recibido fundamentalmente ropa y calzado (81,1%), recargas de saldo celular (75,7%), celulares (64,9%), medicamentos y útiles de la salud (58,1%) y productos de aseo (54,1%).

Los datos resaltan que, estadísticamente ($p < 0.05$) el grupo receptor de capital de trabajo ha tenido mayor acceso al consumo de este tipo remesas, sobre todo de aquellos productos que figuran como difícil acceso (54,5%). Mencionan fundamentalmente productos útiles para el desarrollo de sus iniciativas privadas, sobre todo en negocios de casas de alquiler, talleres de reparación de electrónica y celulares, negocios de audiovisuales, salones de belleza y relajación (SPA) y Paladares y cafeterías.

Más allá del uso de este tipo de remesas en sus negocios, este grupo cuenta con mayor acceso a equipamiento electrodoméstico como televisores plasma (45,5%), otros equipos (42,4%) como: teléfonos inalámbricos, computadoras de última tecnología, equipos para cocinar, equipos para el tratamiento del cabello; piezas y materiales para vehículos (24,2%) y aires acondicionados (21,2%),

No menos importantes resultan las remesas socioculturales. Los receptores de capital de trabajo prevalecen entre quienes dicen recibir la influencia de ideas y conocimientos. En relación a ello, es significativa ($p < 0.05$) la recepción de revistas y productos educativos (51,5%) con impacto tanto para el desarrollo de los negocios, como para el incremento del nivel de educación personal y de la familia. Del mismo modo reciben materiales de escritorio y juegos didácticos para niños, pero esencialmente documentos con información técnica y especializada en áreas muy diversas, como: historia, arte, música y fotografía; idioma inglés y francés; arquitectura, diseño, moda y decoración; *marketing* y publicidad; informática y electrónica; biología y medicina.

Aunque en menor por ciento, resulta llamativo para este grupo el acceso a nuevos valores (27,3%), otra manifestación de las remesas socioculturales. Se refieren a la influencia que ejercen los familiares residentes en el exterior a partir de la transmisión de ideas, consejos, conocimientos, expresiones culturales y estilos de vida distintos a los cubanos.

Referente a los negocios, mencionan valores como: cortesía y amabilidad, buen trato al cliente; aprendizaje sobre la gestión capitalista de los negocios, uso de *rewards* (recompensas) para ganar clientes y fidelizarlos; mantener la desconfianza en el cuidado de los recursos, aprender cómo invertir las ganancias y, en sus palabras, “conocer la

forma capitalista de pensar los negocios, aprovecharse de la necesidad de los demás” (Encuestado N° 12). También mencionan el interés por ganar dinero, recibir una remuneración que se corresponda con el valor del trabajo realizado; tener contenido de trabajo y aprovechar el tiempo *time is money* (Encuestado N° 27); así como ser honestos, eficientes, responsables y puntuales. Referente a la vida personal y familiar, resaltan la independencia y el respeto al espacio de los demás, la libertad de expresión y de movilidad hacia otros países, y estar actualizados en la tecnología que se usa a nivel mundial.

Los receptores de capital de trabajo sacan provecho del uso de las remesas al utilizar los nuevos conocimientos sobre negocio para obtener mayores ganancias económicas. El diseño es un elemento que resulta atractivo: “Hay negocios que son una combinación de un buen lugar en Nueva York, o de un buen lugar en Italia, porque hace contrastes de negro con blanco” (Everleny, 2015).

Los aprendizajes sobre modelos de negocios capitalistas les acercan al campo de la educación financiera internacional la cual, según el economista Manuel Orozco (2015a: 3-4), no constituye un instrumento financiero de por sí, pero puede ofrecer herramientas de gestión de dinero e información acerca de cómo utilizar los productos financieros existentes para su mejor ventaja. Paralelamente, los beneficios económicos obtenidos a partir de la puesta en práctica de los aprendizajes sobre modelos de negocios capitalistas traen consigo nuevas expresiones de desigualdad social entre los grupos de estudio. Como resultado, se produce un contraste entre el beneficio económico y el incremento de las desigualdades sociales.

EFFECTOS DEL USO DIFERENCIADO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL BIENESTAR SUBJETIVO

El uso diferenciado de las remesas familiares favorece el acceso al bienestar subjetivo para unos grupos más que para otros, lo cual constituye una expresión de desigualdad social. Esto se encuentra estrechamente interconectado con procesos de estratificación y movilidad social. En lo tocante, se realiza una comparación de los efectos del uso diferenciado de las remesas en el bienestar subjetivo, por lo que se ponderan las percepciones y valoraciones de los sujetos estudiados.

ACCESO A SERVICIOS Y ESPACIOS DE CONSUMO

El aumento en los ingresos familiares como consecuencia del recibo de remesas aumenta, consecuentemente, el acceso a servicios y espacios de consumo familiar, lo cual influye en el mejoramiento del bienestar subjetivo en comparación con el momento previo a la recepción de remesas.

Los dos grupos perciben un mayor acceso a servicios y espacios de consumo favorecido a partir del recibo de remesas. Sin embargo, pueden notarse mayores posibilidades entre aquellos que reciben capital de trabajo, sobre todo en lo que respecta a tomar unas copas y/o comer fuera de casa (60%), donde combinan las visitas a lugares prestigiosos con otros de moda. También resaltan entre quienes tienen mayor acceso a visitar espacios para escuchar música y/o bailar (57%), sobresaliendo discotecas, bares y clubes nocturnos en hoteles. Quienes reciben remesas de consumo, por su lado, frecuentan en menor medida lugares para tomar unas copas y/o comer fuera de casa (39%), así como para escuchar música y/o bailar (36,6%). De manera general, ellos mencionan el disfrute de estas actividades en la casa donde viven, o en la de amigos y familiares.

Empero, llama la atención que receptores de remesas de consumo disfrutan en mayor medida la realización de un *hobby* o afición (63,4%), mencionando la práctica de deportes al aire libre, ver películas y series, navegar por Internet, asistir a cines y a teatros, y visitar sitios históricos. Por otro lado, solo un 36,4% de los receptores de capital de trabajo disfrutaban de la realización de un *hobby*, lo cual podría deberse a una limitación del tiempo libre ante la demanda de trabajo, pues la práctica de aficiones suele ser más sistemática en el tiempo. No obstante, los receptores de capital de trabajo que practican algún *hobby* suelen acceder a espacios y servicios más costosos, como gimnasios, SPA en hoteles, asociarse a hoteles para acceder a canchas de tenis, buceo y nadar en zonas turísticas.

El Informante clave N° 3 entrevistado para este estudio, dueño de un restaurante privado exitoso y receptor de remesas, expone que: “Ir al gimnasio (en un hotel de La Habana) es la única forma que tengo de escaparme de aquí (negocio), lo hago más que por una forma física o de apariencia, para liberar energía, porque los días que no voy al gimnasio me despierto en la madrugada pensando en todo lo que tengo que hacer al otro día”.

De igual modo, si bien la muestra en su generalidad tiene nociones sobre marcas de productos de aseo, ropa y calzado, celular y computadoras, el conocimiento resulta mayor entre quienes reciben capital de trabajo. Al decir del economista Omar Everleny (2015): “Cambian los hábitos, las marcas de preferencia; quieren distanciarse, tienen otras posibilidades, van cambiando, son accionistas, empresarios, microempresarios, capitalistas, sobre todo los que tienen un Paladar (restaurante privado)”. Surgen así nuevas dinámicas y emergen actores económicos que se ubican en estratos superiores a otros, reflejando un ensanchamiento de las posiciones asimétricas en la estructura social. Al mismo tiempo, sus experiencias los hacen similares dentro del grupo,

con intereses compartidos, y más diferentes con respecto a los que se encuentran fuera de este.

¿QUÉ HACEN EN VACACIONES? ¿CUÁLES SERÍAN LAS IDEALES? ¿CÓMO PLANIFICAN EL FUTURO?

La muestra en su conjunto disfruta de vacaciones en casas y hoteles *all inclusive* en la playa (44,6%), ubicados en las zonas turísticas del país (Varadero y Cayos). De ellos, una mayor proporción (63,3%) son receptores de capital de trabajo.

Sin embargo, para la mayoría viajar al extranjero (78,4%) resulta las vacaciones ideales, siendo mayor el deseo entre receptores de consumo (80,5%) que entre receptores de capital de trabajo (75,8%). Esta diferencia podría estar dada por el hecho de que, para estos últimos, resulta más cercano a la realidad que a un sueño teniendo en cuenta que son quienes más han viajado según los datos de la muestra.

Usualmente se menciona el deseo de realizar un “*tour* por Europa”, “ir de crucero”, “darle la vuelta al mundo”, “ir a sitios históricos que solo se conocen por libros, series y películas”, “visitar a Estados Unidos, España, Italia, Francia”, o simplemente “viajar a un país”.

La investigadora Katrin Hansing (2015) opina que para los cubanos obtener un pasaporte español es lo más parecido a “ganarse la lotería”, no solo porque les permite viajar por todo el mundo (conocer, comprar productos y regresar) sino, también, porque les da la posibilidad de vivir y/o trabajar legalmente en Europa.

Esto se relaciona con las expectativas de futuro, donde una mínima parte (6,8%) mencionó el viaje como modo de regreso a casa, mientras que un 24,3% expresó su deseo de emigrar. No obstante, para más de la mitad de la muestra la expectativa futura ha sido mejorar económicamente (54,1%), cifra que aumenta más entre receptores de capital de trabajo (60,6%) que en los de consumo (48,8%).

EFFECTOS DE LAS REMESAS PARA SUS VIDAS

Casi la totalidad (91,9%), sin distinción significativa ($p < 0.05$) entre receptores, percibe que las remesas han aumentado su nivel y calidad de vida. Específicamente, los receptores de remesas de consumo estuvieron más representados entre quienes opinan que las remesas han ayudado a solucionar necesidades primarias de subsistencia (46,3%), mencionando frases como “asegurar un mínimo de calidad de vida”, “menos asfixia” y “ha mejorado mi manera de vestirme y comer”; lo cual se corresponde con los usos de las remesas para el desarrollo de estrategias de sobrevivencia.

Por su parte, tal cual se ha mencionado, los receptores de capital de trabajo planifican extender o abrir un nuevo negocio (75,8%), lo cual refleja usos de las remesas para el desarrollo de estrategias de acumu-

lación, vinculado a sensaciones de realización expresadas en cómo las remesas han ayudado a “poner un negocio y ahora tengo prosperidad” y “darme un gusto que antes no”. A su vez, ello contribuye a que receptores de remesas de consumo y receptores de capital de trabajo se encuentren en estratos sociales diferentes.

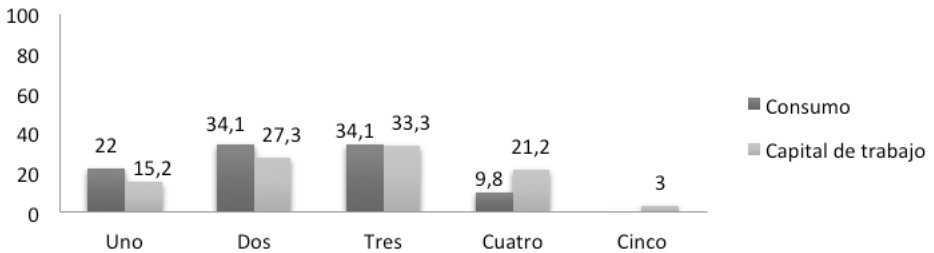
POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA SOCIAL Y PERCEPCIONES SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES

En conexión con lo anterior, puede notarse una movilidad socioeconómica ascendente mayor para receptores de remesas de capital de trabajo. Tal como muestran los gráficos, los receptores de capital de trabajo pasaron de las posiciones 2-3 antes del recibo de remesas, a las 4-6 a partir de la recepción; mientras que los receptores de remesas de consumo se movieron de las posiciones 2-3 a las posiciones 3-4.

Resulta llamativo que antes de la recepción de remesas ninguno de los sujetos se ubicaba en la posición más favorecida, es decir, es escalón número 6.

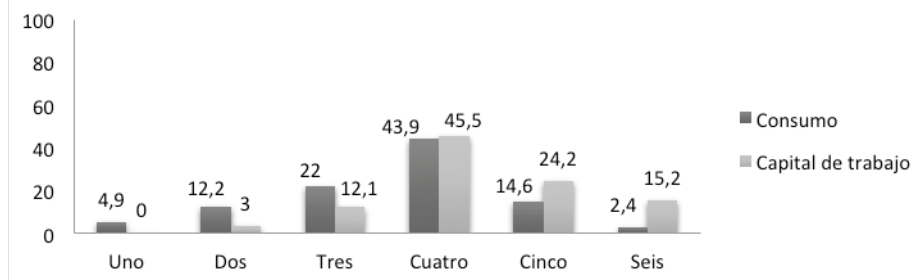
Los gráficos reflejan la existencia de topes que funcionan como barreras de movilidad social para unos grupos –en este caso los receptores de remesas de consumo–, al ubicarse en posiciones inferiores.

Gráfico 5. Percepción sobre posición en la estructura social. Antes de la recepción de remesas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra

**Gráfico 6. Percepción sobre posición en la estructura social.
Después de la recepción de remesas**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra

También resultan interesantes las percepciones que tienen unos grupos con respecto a otros, pues cada cual los imagina en estratos superiores al que declaran pertenecer. Aunque los imaginarios sociales que se construyen alrededor del receptor de remesas son diversos, los que priman, sobre todo para receptores que desarrollan una actividad privada es el de “elitista, pudiente y especulador”, “afortunado, privilegiado, con suerte, dichoso”, “como un tipo de dinero”, “la maseta”, “como un millonario”, “como dioses”.

Sin embargo, los encuestados han mencionado que la posición que se ocupa en la estructura social depende de diversos factores, entre ellos: contar con recursos (dinero, objetos de valor, propiedades, negocios exitosos, viajar con dinero propio), diferencias en los montos y frecuencia de la remesa, así como usos que se hace de la misma. También algunos encuestados tienen la percepción de que existen actores sociales que cuentan con mayor poder adquisitivo que ellos. Estas opiniones las compartieron fundamentalmente receptores de capital de trabajo que no se autoubican en las posiciones superiores, y perciben que en el escalón N° 6 se sitúan: receptores de muy altos montos de remesas, dueños de negocios muy exitosos, músicos y deportistas que viajan al extranjero con su propio dinero, algunos médicos en misión internacionalista y algunos familiares de altos dirigentes.

Las opiniones de los encuestados también reflejan el entramado desigual y estratificado: “La sociedad ha cambiado, antes todo el mundo estaba igual. Ahora hay quien tiene dinero para comprar una casa, un carro, poner un negocio” (Encuestado N° 9), “Hay gente que gasta 100 CUC en una noche, mientras que otros en dos meses” (Encuestado N° 25), “Indudablemente quienes han logrado establecer un negocio

particular viven mejor, como resultado existen marcadas diferencias sociales en Cuba” (Encuestado N° 29). Complementariamente, un 24,4% de los receptores de remesas de consumo, y un 24,2% de los receptores de capital de trabajo, consideran que los grupos receptores de remesas son desiguales entre sí.

“Los nuevos ricos, están reflejando una burguesía que viene desde la marginalidad [...], que ostenta comiendo, con casas extravagantes, que necesitan tener 3 pisos y 3 cadenas de oro, tienen la necesidad de sentirse superiores al otro, y ya no les importa lo que está sucediendo porque se encierran en su cascarón cada vez más individualista, cada vez más explotador y se desentienden por completo” (Rodríguez, 2015). Debido al incremento de la heterogeneidad social, se ha visto un aumento de la desigualdad social, muy vinculada a la existencia de nuevas dinámicas, actores económicos que ocupan posiciones sociales ventajosas, y nace en la sociedad cubana la percepción de “nuevos ricos”, al mismo tiempo que algunos valores sociales se van transformando.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de los resultados obtenidos a partir de una muestra no probabilística confirma la hipótesis planteada para este estudio: el uso diferenciado de las remesas familiares (consumo y capital de trabajo) reproduce desigualdades sociales existentes y genera nuevas expresiones entre receptores, tanto en el acceso al bienestar material como en el acceso al bienestar subjetivo.

La caracterización sociodemográfica ha permitido identificar grupos en posiciones ventajosas y desventajosas teniendo en cuenta el uso de la remesa, a partir de indicadores como sexo, edad, color de la piel, nivel de instrucción, ocupación, municipio de residencia.

De este modo, el perfil ventajoso lo presentan quienes reciben capital de trabajo, y dentro ellos, hombres, entre 31-60 años, blancos, con nivel de instrucción medio superior, con iniciativas privadas y residentes en el municipio Plaza de la Revolución. Por su parte, el perfil desventajoso es para quienes reciben remesas de consumo, particularmente, mujeres, menores de 30 años y mayores de 60, mestizas, con nivel de instrucción superior, trabajadoras del sector estatal y residentes en el municipio Centro Habana.

Estas diferencias plantean desigualdades injustas debido a que los elementos de partida, entre ellos el uso diferenciado de las remesas, determinan las posiciones de los sujetos para el aprovechamiento de las oportunidades, independientemente de la capacidad de cada quien. De manera conectada, se producen procesos de estigmatización que ocurren en sociedades más igualitarias como la cubana.

De esta forma, el uso diferenciado de las remesas agudiza desigualdades sociales históricas expresadas en Cuba, las cuales se encuen-

tran vinculadas a elementos económicos, culturales y territoriales, así como a diferencias de género, desigualdades etarias, brechas raciales, desigualdades en el ámbito educativo en vínculo con el empleo y los ingresos, lo cual limita tanto el acceso a oportunidades como los resultados. Se refuerza la pirámide invertida que intercambia posiciones sociales ventajosas y desventajosas debido a la modificación de las vías de acceso al bienestar y prestigio social, al mismo tiempo que privilegia a unos grupos en espacios de poder económico mientras que otros se refuerzan en una condición de dependencia. Las desigualdades en este sentido develan la importancia de realizar estudios posteriores que entrecrucen los factores sociodemográficos, alcanzando una mayor profundidad de este aspecto.

Por su parte, la comparación de efectos del uso diferenciado de las remesas familiares en el bienestar material, da cuenta del surgimiento de nuevas expresiones de desigualdad social, marcando diferencias notorias entre dos grupos: quienes reciben remesas para el consumo y quienes reciben capital de trabajo.

De manera general, el acceso al bienestar material se encuentra limitado para quienes reciben remesas de consumo en comparación con quienes reciben capital de trabajo. En primer lugar, el promedio de los montos de remesas anuales de los receptores de capital de trabajo es 11 veces superior a los recibidos por receptores de remesas de consumo. Consecuentemente, sus ingresos familiares y capacidad de ahorro aumentan.

En contraste, más de la mitad de los receptores de remesas de consumo perciben montos que no sobrepasan los 100 CUC mensuales, los cuales deben cubrir necesidades de 3 miembros de la familia. Esto vincula a más del 50% de ese grupo al desarrollo de estrategias familiares de sobrevivencia para la satisfacción de necesidades básicas, mientras que los receptores de capital de trabajo presentan mayor propensión al desarrollo de estrategias de acumulación y de movilidad socioeconómica ascendente.

Esta realidad se fortalece ante la tendencia al incremento de los montos de remesas para receptores de capital de trabajo en comparación con el año anterior, y una tendencia a mantenerse estable para los receptores de remesas de consumo. Pareciera ser que quienes tienen mayor acceso al bienestar material, continuarán recibiendo mayores montos, de manera que se fortalecen las distancias entre los grupos.

Particularmente las remesas monetarias suplieron la compra de productos de primera necesidad de ambos grupos receptores; pero ampliaron el acceso de los receptores de capital de trabajo a gastos en equipamiento, bienes, servicios, transporte, redes sociales virtuales, comunicación con familiar/es emigrado/s y recreación familiar.

Asimismo, se evidencian desigualdades en el acceso a oportunidades generadas por las políticas sociales en Cuba en los últimos años. En este sentido, quienes cuentan con capital de trabajo pudieron aprovechar mejor, gracias al recibo de remesas, las modificaciones que la Ley Migratoria ha brindado para realizar viajes al exterior; el permiso a nacionales para hospedarse en hoteles, una de las opciones más populares disfrutadas durante el tiempo de vacaciones por este grupo; y el relanzamiento del trabajo por cuenta propia, que ha motivado el desarrollo de iniciativas privadas. De hecho, un 75,8% de ellos considera que la recepción de remesas les ayudará a extender el presente negocio o crear uno nuevo. Como se ha podido constatar, las desigualdades en el acceso a las oportunidades para estos grupos traen consigo resultados distintos y nuevas expresiones de desigualdad social.

Paralelamente, la recepción de otro tipo de remesas económicas ha sido útil para ambos grupos. Sobresale el recibo de ropa y calzado, recargas de celular, celulares, medicamentos y productos de aseo. Sin embargo, nuevamente los receptores de capital de trabajo reciben más equipos electrodomésticos, así como productos de difícil acceso para el desarrollo de sus iniciativas privadas, facilitando el éxito de las mismas y la obtención de ingresos adicionales.

Las remesas socioculturales son especialmente resaltadas por los receptores de capital de trabajo en su aporte al desarrollo de las iniciativas privadas. Al respecto, destacan la transmisión de nuevas ideas, conocimientos y valores por sus familiares residentes en el exterior. Algunas de ellas reflejan un interés por aplicar modos de funcionamiento capitalistas, lo cual introduce alteraciones a la conexión socialismo-igualdad, esencialmente aquellas que defienden la solidaridad, el humanismo y el bienestar colectivo por encima del egoísmo y el individualismo.

Como se ha visto, la comparación de efectos del uso diferenciado de las remesas familiares en el bienestar subjetivo, también da cuenta del florecimiento de nuevas expresiones de desigualdad social, marcadas por claras diferencias entre los dos grupos de receptores.

De igual modo, el acceso al bienestar subjetivo también se encuentra limitado para quienes reciben remesas de consumo, mientras que es mayor para quienes obtienen capital de trabajo. El análisis de las percepciones de los encuestados sobre los impactos de las remesas en sus vidas permite confirmar una tendencia al desarrollo de estrategias de sobrevivencia para receptores de remesas de consumo, y de estrategias de acumulación y movilidad social para receptores de capital de trabajo. En este sentido, los receptores de capital de trabajo presentan mayores posibilidades en el acceso a espacios de servicio y de consumo costosos y tienen mayor cultura sobre marcas de productos de aseo, ropa y calzado, celular y computadoras.

Por su parte, los receptores de remesas de consumo disfrutan en mayores proporciones la práctica de un *hobby* en espacios y ambientes naturales, generalmente libres de costo; mientras que, si bien los receptores de capital de trabajo practican este tipo de actividades en espacios más costosos (gimnasio, *SPA* en hoteles, asociarse a hoteles para acceder a canchas de tenis, buceo y nadar en zonas turísticas), las realizan con menor frecuencia. Los receptores de capital de trabajo no cuentan con suficiente tiempo personal para el esparcimiento y viven en una dinámica más estresante, de preocupación y de desconfianza sobre un negocio por cual deben velar continuamente. Este grupo sobredimensiona los beneficios económicos, entre ellos el acceso a servicios y espacios de consumo costosos, que aportan las remesas con respecto a los beneficios para la salud mental, llevar una vida relajada y disfrutar de más tiempo de intimidad familiar.

Aunque no es una actividad que se realiza cotidianamente, en el abordaje de los elementos que definen el bienestar subjetivo se confirma que son receptores de capital de trabajo quienes disfrutan en mayor proporción sus vacaciones en casas y hoteles *all inclusive* en zonas turísticas. Por su parte, las vacaciones ideales de la muestra en general son viajar al extranjero, lo cual presenta una mayor proporción en el grupo de los receptores de remesas de consumo, quienes han tenido menores oportunidades para visitar otros países. Para más de la mitad de la muestra la expectativa futura es mejorar económicamente, sobre todo para los receptores de capital de trabajo. Es justamente ese grupo quien encuentra mayor conexión entre sus aspiraciones y los logros alcanzados, lo cual constituye una expresión de realización personal.

Como se puede apreciar, los efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social traen consigo grupos marcados, que muestran la reproducción de desigualdades existentes, pero también reflejan el surgimiento de nuevas expresiones de desigualdad –distintas a las expresadas en Cuba en la década de los noventa del siglo XX. Estos grupos son similares a su interior teniendo en cuenta su acceso a espacios de consumo y servicios, cultura de las marcas y acceso a vacaciones, planes futuros, valores que desarrollan, estratos que ocupan, experiencias de movilidad ascendente similares e intereses comunes. En contraste, ambos grupos perciben que son desiguales entre sí, y la expresión “nuevos ricos” cala en la subjetividad. Como consecuencia, surgen nuevas dinámicas y emergen actores sociales y económicos que se posicionan de manera asimétrica en la estructura social.

El panorama mostrado plantea que los usos diferenciados de las remesas generan efectos en la desigualdad, produciéndose una combinación entre el reforzamiento de desigualdades sociales y el nacimiento de nuevas expresiones, tanto en la dimensión acceso al bienestar material como en la

dimensión acceso al bienestar subjetivo. Se produce, así, una frontera entre la realidad concreta y la intención política de promover justicia social.

El horizonte, a su vez, proyecta múltiples interrogantes en el contexto de los cambios que vive Cuba. Entre ellos, se esperan nuevas transformaciones en el reordenamiento económico interno (como la unificación de la tasa de cambio, la eliminación de la doble moneda y la extensión de la facultad de comercio exterior al espacio privado), así como transformaciones que puedan devenir de las recientes y futuras relaciones entre Cuba y Estados Unidos en su progresiva normalización. ¿Se producirán cambios radicales en el tema de las remesas? ¿Se mantendrán las remesas como capital de trabajo? ¿Serán fondos para inversión mediante transferencias bancarias y créditos? ¿Cómo se podrían disminuir los efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social? Son algunas de las interrogantes que podrían matizar los vínculos entre remesas y desigualdad en el futuro de corto y mediano plazo de la Isla.

RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

En aras de favorecer la reducción, contención y disminución de las desigualdades sociales en Cuba, en vínculo con los usos diferenciados de las remesas (consumo y capital de trabajo), se presentan las siguientes recomendaciones:

- 1- Generar espacios de debate entre académicos y decisores de política de construcción conjunta sobre los conceptos remesa y desigualdad social, aterrizados a las particularidades de la sociedad cubana.
- 2- Concebir talleres de diálogo entre instancias políticas y académicas para profundizar en la temática de las desigualdades sociales en Cuba, en especial el vínculo remesas-desigualdad.
- 3- Contribuir a dibujar un mapa de las desigualdades sociales en Cuba, insertando la relación remesas-desigualdad.
- 4- Dar continuidad a este tipo de estudios con la realización de investigaciones que profundicen en el entrecruzamiento de diversos factores sociodemográficos.
- 5- Divulgar la información oficial recogida sobre los montos de las remesas en Cuba, así como características de la población receptora; en aras de favorecer el desarrollo de estudios representativos y profundizar, de este modo, en el abordaje del tema en cuestión.
- 6- Incluir acciones afirmativas y trazar políticas focalizadas para grupos en desventaja social, marcados por el desarrollo de des-

igualdades injustas, tanto históricas como a partir de la emergencia de nuevas expresiones.

- 7- Trazar estrategias de reducción de expresiones de desigualdad social relacionadas a las temáticas estudiadas, a partir de la estimulación de procesos de movilidad social ascendente de sectores en desventaja socioeconómica, sin afectar a quienes la han alcanzado de manera legítima.
- 8- Favorecer un acceso equitativo al aprovechamiento de los cambios generados recientemente por la política social en Cuba.
- 9- Mejorar acceso al crédito, mayor independencia personal y fortalecimiento del capital económico y social.
- 10- Estimular la posibilidad de emprender cooperativas entre receptores que estén dispuestos a unir sus remesas de consumo para crear un capital de trabajo común.
- 11- Trazar políticas que potencien la responsabilidad social como valor en receptores de capital de trabajo con iniciativas exitosas.
- 12- Concebir servicios de capacitación sobre gestión de negocios y recursos, donde participen receptores de capital de trabajo y receptores de remesas de consumo interesados en realizar un uso productivo de las mismas.
- 13- Visibilizar la participación de los emigrados cubanos como actores de la economía de la Isla a partir del trazado de estrategias de desarrollo que los incluya.
- 14- Desarrollar mecanismos legales que conduzcan la participación de los emigrados cubanos en los espacios económicos, velando por el cumplimiento de las normas y logrando un mayor aprovechamiento de su agencialidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Abella y Jeffrey Ducantes 2007 “¿Es el transnacionalismo un nuevo paradigma para el desarrollo?” en Castles, Stephen y Raúl Delgado (Coord.) *Migración y desarrollo perspectivas desde el sur* (México: Colección migración, Instituto Nacional de Migración).
- Aparicio, Abraham 2011 “Bienestar subjetivo del consumidor y concepto de felicidad” en *Argumentos* (Mexico), Vol. 24 N° 67, septiembre-diciembre.

- Arés, Patricia 2004 “Definición de familia y fundamentos básicos para su estudio desde la Psicología” (Colombia: Externado de Colombia).
- Argibay, Juan Carlos 2009 “Muestra en investigación cuantitativa” en *Subjetividad y procesos cognitivos* Vol.13, N°1. [Online].
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-73102009000100001&script=sci_abstract
- Barbería, Lorena 2008 “Remesas, pobreza y desigualdad en Cuba” en *Espacio Laical* (La Habana) Vol. 2.
- Barbería, Lorena 2012 Entrevista a especialista realizada por Denisse Delgado Vázquez en “Dinámica familiar, cuentapropismo y remesas. Estudio de casos en familias del barrio capitalino El Vedado, Cuba”, Tesis de Maestría en Desarrollo Social, Murcia.
- Bourdieu, Pierre “¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y práctica de los grupos. Poder, derecho y clases sociales” (Datos no recuperados)
- Chávez, Eduardo, Molina, Pablo y Jérica Pla 2010 “Entre la adscripción, la estructura y el logro: Determinantes de la movilidad social” en *Sur del Gran Buenos Aires* (Buenos Aires) N° 70.
- De la Fuente, Alejandro 2001 *A Nation for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba* (Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press).
- De la Fuente, Alejandro 2014 *Una nación para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba 1900-2000*. (La Habana: Imagen Contemporánea).
- Delgado, Denisse 2011 “Impacto en la dinámica familiar, de la emigración de algunos de sus miembros. Un estudio de caso en el Consejo Popular ‘El Carmelo’” en *Novedades en población* (La Habana) N° 2, diciembre.
- Delgado, Denisse 2013 “Dinámica familiar, cuentapropismo y remesas. Estudio de casos en familias del barrio capitalino El Vedado, Cuba”. Tesis de Maestría en Desarrollo Social, España, marzo.
- Delgado, Denisse 2015 “Entre el desarrollo y la desigualdad: Familias cubanas receptoras de remesas con iniciativas privadas” en *Mundi Migratios* (La Habana) Vol. 3, N° 2, julio–diciembre
- Echevarría, Dayma 2016 Entrevista a especialista realizada por Denisse Delgado Vázquez en Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Programa de Estudios sobre la Pobreza y las Desigualdades, CLACSO-CROP.

- Espina, Mayra Paula et. al. 1997 “Componentes y tendencias socioestructurales de la sociedad cubana actual”. Resultado de investigación. La Habana.
- Espina, Mayra Paula, et. al. 1999 “Expresiones territoriales del proceso de reestratificación”. Informe de investigación. La Habana: CIPS.
- Espina, Mayra Paula et. al. 2004 “Heterogenización y desigualdades en la ciudad. Diagnóstico y perspectivas”. Resultado de investigación. La Habana: CIPS.
- Espina, Mayra Paula, et. al. 2008 “Equidad y movilidad social en Cuba. Impactos del reajuste estructural”. Informe de investigación. La Habana: CIPS.
- Espina, Mayra Paula 2010a *Desarrollo, desigualdad y políticas sociales. Acercamientos desde una perspectiva completa*. (La Habana: Publicaciones Acuario)
- Espina, Mayra Paula, et. al. 2010b “Desigualdad, equidad y política social. Integración de estudios recientes en Cuba”. Informe de investigación. La Habana: CIPS.
- Espina, Mayra Paula y Dayma Echevarría 2015 *Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico*. (Cuba: Ciencias Sociales/ Ruth Casa Editorial).
- Everlery, Omar 2015 Entrevista a especialista realizada por Denisse Delgado Vázquez en Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Programa de Estudios sobre la Pobreza y las Desigualdades, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO-CROP).
- Feldman-Bianco, Bela, et. al. 2011 “Introducción” en Feldman-Bianco, et. al. (Comp.) *La Construcción del sujeto migrante en América Latina: Prácticas, representaciones y categorías* (Quito: FLACSO / CLACSO/ UAH).
- Flores, Juan 2006 “La diáspora contrataca. Reflexiones sobre las remesas culturales” en *Revista Caminos*, N° 41.
- Francés, José Francisco 2009 “Elementos para el estudio de la estratificación social en las sociedades avanzadas: estrategias operativas. La estratificación social en sociedades avanzadas” en *Obets*, N° 3.
- Guzmán, Arturo 1995 “Redimensionamiento y reestructuración de la economía cubana”.

- Intervención en Seminario por el Primer Aniversario del Sindicato de las Ciencias, La Habana.
- Hansing, Katrin y Manuel Orozco 2014 “The Role and Impact of Remittances on Small Business Development during Cuba’s Current Economic Reforms” en *desiguALdades.net*.
- Hansing, Katrin y Optenhögel Uwe 2015 “Cuba: las desigualdades se tornan visibles Consecuencias de la economía de escasez y reformas” en *Nueva Sociedad*, N° 255, enero-febrero, www.nuso.org
- Hansing, Katrin 2015 “Racial inequality in the new Cuba” en *Cuba counterpoints* <http://cubacounterpoints.com/features/racial-inequality-in-the-new-cuba-by-katrin-hansing/>
- Martín, Consuelo 2000 “Cuba. Vida cotidiana, familia y emigración”, Tesis de doctorado, Estudios de Migraciones Internacionales, La Habana.
- Martin, Juan Luis. et. al. 2000 “Reajuste y Trabajo en los 90”. Informe de investigación. La Habana: CIPS.
- Morales, Emilio 2012 “Explosión de remesas a Cuba: \$2,294 millones en el 2011” en *Postedon Café Fuerte* [Online]. <http://cafeuerte.com/cuba/economia-y-negocios/1663-explosion-de-remesasacuba-2294-millones-en-el-2011/>
- Munster, Blanca 2014 *Remesas y pobreza desde una perspectiva de género el caso del consejo popular de Santa Fe (Cuba)* (Buenos Aires: Colección de estudios sobre desigualdades CLACSO).
- Munster, Blanca 2016 Entrevista a especialista realizada por Denisse Delgado Vázquez en Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Programa de Estudios sobre la Pobreza y las Desigualdades, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO-CROP).
- ONEI 2014 “Informe Nacional Censo de Población y Viviendas”, Oficina Nacional de Estadística e Información, Cuba.
- ONEI 2015(2014) “Anuario estadístico de La Habana”, Oficina Nacional de Estadística e Información, Cuba.
- ONEI 2016(2012) “El color de la piel según el Censo de Población y Vivienda”, Censo de Población y Viviendas 2012. Oficina Nacional de Estadística e Información, Cuba.
- Orozco, Manuel 2000 *Becoming Latin@s*. (U.S: Harvard University).

- Orozco, Manuel 2009 “The Cuban Condition: Migration, Remittances, and Its Diaspora”, *Inter-American Dialogue*, Costa Rica.
- Orozco, Manuel 2011 “Remittance recipients and the present and future of micro-entrepreneurship activities in Cuba”, *Inter-American Dialogue*, Costa Rica.
- Orozco, Manuel 2013 *Migrant Remittances and Development in the Global Economy* (Estados Unidos de América: Lynne Rienner Publishers Inc.)
- Orozco, Manuel y Caryn Gay Ellis 2014 “A New Perspective on Human Mobility in the South” en *Springer Science+Business Media Dordrecht* (Estados Unidos de América)
- Orozco, Manuel 2014a “Critical issues shaping money transfers”, Informe, Estados Unidos de América.
- Orozco, Manuel 2014b “La migración y las remesas hacia América Latina y el Caribe: tendencias, mejores prácticas y experiencias de desarrollo”, Informe (Datos no recuperados).
- Orozco, Manuel y Mariellen Jewers 2014 “Recent data on Remittance trends: Findings on Migrant Survey for 2013”, *Inter-American Dialogue*, Estados Unidos.
- Orozco, Manuel 2015a *On the “Productive” Use of Remittances and their Significance for Asset Building* (Datos no recuperados).
- Orozco, Manuel 2015b *Economic Status and Remittance Behavior Among Latin American and Caribbean Migrants in the Post-recession Period*. Suiza: Springer International Publishing.
- Pañella, Daybel 2012 “Grupos e identidades en la estructura social cubana”, Tesis de doctorado, Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, La Habana.
- Portes, Alejandro 2002 “La sociología en el hemisferio. Hacia una nueva agenda conceptual” en *Nueva Sociedad*. N° 178, marzo-abril.
- Rodríguez, José Luis 2016 Entrevista a especialista realizada por Denisse Delgado Vázquez en Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Programa de Estudios sobre la Pobreza y las Desigualdades, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO-CROP).
- Rodríguez, María Ofelia 2006 “Población de Origen Latinoamericano en Estados Unidos. Un Análisis de su Posición Social en el

Escenario Estadounidense Actual”, Tesis de Maestría en Sociología, Universidad de La Habana, La Habana.

- Rodríguez, Pablo 2015 Entrevista a especialista realizada por Denisse Delgado Vázquez en Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Programa de Estudios sobre la Pobreza y las Desigualdades, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO-CROP).
- Sémblér, Camilo 2006 “Estratificación social y clases sociales. Una revisión analítica de los sectores medios”. (Datos no recuperados).
- Victoria, Carmen e Idarmis González 2000 “La categoría bienestar psicológico. Su relación con otras categorías sociales” en *Revista Cubana de Medicina General Integral* (La Habana), Vol. 16 N° 6, noviembre-diciembre.
- Vidal, Pavel y Omar Everlery Pérez 2012 *Apertura al cuentapropismo y la microempresa, una pieza clave del ajuste estructural*. (La Habana: Editorial Caminos).
- Zabala, María del Carmen 2013 *Algunas claves para pensar. La pobreza en Cuba* desde la mirada de jóvenes investigadores. (La Habana: Publicaciones Acuario).
- Zabala, M María del Carmen 2015 Entrevista a especialista realizada por Denisse Delgado Vázquez en Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Programa de Estudios sobre la Pobreza y las Desigualdades, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO-CROP).

MOVIMIENTOS SOCIALES Y LUCHA POR VIVIENDA EN COSTA RICA: EL CASO DE RIVERA DEL RÍO¹

Adrián Jaén España*

INTRODUCCIÓN

El presente artículo expone los principales hallazgos que arroja un trabajo de investigación realizado entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, en Rivera del Río, una comunidad en precario en la parte oeste de la ciudad de San José, Costa Rica, la cual se enmarca en el concurso *La producción de las desigualdades en América Latina y el Caribe*, promovido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) con apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD).

1 Un agradecimiento a Zoe Jaén Mora, quien colaboró arduamente con la sistematización de muchos de los productos del trabajo de campo realizado en esta investigación; a Dayan Cruz Muñoz, por su desinteresado apoyo en el trabajo de campo y otras actividades relacionadas con el trabajo comunitario, y su indolegable compromiso con la búsqueda de conocimiento en el tema de los movimientos sociales y la lucha por vivienda digna; y muy especialmente a Ariadna Gonzáles, quien me abrió las puertas de la comunidad, colaboró con la coordinación del equipo de IAP y compartió generosamente su conocimiento sobre la comunidad estudiada. Por último, un agradecimiento a las y los pobladores de Rivera del Río, que participaron también activamente en el proceso de investigación y que nos permitieron entrar a sus hogares y a una parte de sus vidas durante los últimos meses.

* Profesor de Sociología de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica - Sede Regional, San Carlos. Profesor de la Maestría en Desarrollo Rural Territorial, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica. Profesor de Sociología en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.

El proceso de investigación realizado analizó, en conjunto con un equipo de Investigación Acción Participativa (IAP) de la comunidad, las principales características de las y los pobladores, las formas de organización de la comunidad, los marcos interpretativos y los marcos de acción colectiva, así como la vinculación política del comité de lucha local con el Foro Nacional de Vivienda, organización que funciona a nivel nacional y que aglutina a diversas comunidades que luchan por vivienda en el país.

La idea de analizar estas organizaciones desde la perspectiva de los movimientos sociales tiene que ver con que, durante mucho tiempo, estuvieron fuera de la contienda pública, pero durante los últimos dos años han retornado a la palestra política con mucha beligerancia. Al respecto, durante los años ochenta y noventa en Costa Rica se desarrollaron intensos procesos de movilización y de organización popular relacionados con la lucha por vivienda, periodo en el que, de igual forma, se realizaron diversas investigaciones en Costa Rica que intentan dar explicación al fenómeno²; sin embargo, existe un periodo largo durante el que no se han realizado investigaciones; por ejemplo, en los últimos años, sobre el tema de vivienda solo existen informes gubernamentales.

La articulación de organizaciones que luchan por vivienda es un fenómeno social relacionado con el desarrollo, evolución y expansión del sistema capitalista y con el desarrollo de los procesos de industrialización y urbanización. No obstante, este vínculo entre industrialización y urbanización no puede comprenderse de manera mecánica o maniquea, es necesario tener presente la complejidad del fenómeno urbano, tal y como lo plantea Lozano, para quien “el proceso de urbanización no debe ser visto únicamente como un tipo específico de apropiación humana del espacio. Debe considerarse sobre todo como un proceso de articulación de relaciones sociales, económicas, culturales y políticas entre grupos y clases sociales.” (Lozano, 1997 : 13) En este sentido, la industrialización-urbanización debe considerarse una orientación o

2 Al respecto se pueden consultar los textos de Alarcón (1991), que se enfoca en los procesos organizativos de los Frentes de Vivienda, que tienen su etapa más álgida durante los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, sobre todo los años 1983 y 1984. También es importante el texto de Castro, Cruz, Chaves, Alba, Quesada y Sánchez (1984) quienes avanzaron propuestas interesantes para explicar las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo de las organizaciones de lucha por la vivienda, que utilizaron en aquella época la recuperación de tierras ociosas como principal mecanismo de lucha. Para ver análisis desde la perspectiva institucional o desde el punto de vista de las acciones impulsadas por el Estado se pueden consultar los trabajos de Acón, Coto, Chavarría, Hernández y Ulate (1987) y el de Arias, Bolaños y Oviedo (1987). Para ver el papel de la mujer cuando juega el rol de líder comunitaria en los procesos de lucha por vivienda se puede revisar a Poveda (1994). Chamorro, Rodríguez y Zúñiga (1988) realizan un estudio sobre los movimientos sociales en lucha por vivienda en Liberia, provincia de Guanacaste.

principio en relación con el método, más que una operación automática de causa y efecto.

Se utiliza un modelo teórico novedoso³ como lente para observar el fenómeno que intenta integrar distintas corrientes y autores que analizan los movimientos sociales; se busca también realizar el proceso investigativo tomando en cuenta las opiniones, necesidades, aspiraciones y criterios de las mismas organizaciones en lucha, para que estas puedan participar activamente del proceso de recolección y análisis de información, motivo por el que se opta por una metodología participativa para llevar a cabo este proceso.

Las preguntas de investigación que se plantearon, luego de un proceso de readecuación de la propuesta original⁴ fueron las siguientes: ¿Cómo se organizan en la actualidad estos movimientos reivindicativos? ¿Cuáles son los marcos interpretativos de las personas que participan en las tomas de tierra y cuáles son los marcos de acción colectiva que construyen las organizaciones? A partir de estas preguntas se propone la tarea de analizar, desde la perspectiva de los marcos interpretativos y de los marcos de acción colectiva, tomando en cuenta las formas de organización, los movimientos sociales urbanos que reivindican el derecho a la vivienda en Costa Rica y que surgen luego de la crisis económica de 2008. Después de ver distintas posibilidades, se decide realizar este proceso de análisis centrando la atención en el caso particular de Rivera del Río.

³ Este modelo es construido como marco teórico de mi tesis de maestría (2013). Se considera este trabajo una oportunidad de testear nuevamente el modelo propuesto, que fue muy útil para comprender mejor el fenómeno de los movimientos sociales, pero que por las mismas características del trabajo, sobre todo por tratarse de un trabajo de sociología histórica, contiene muchos planteamientos teóricos que no se pudieron probar directamente en una organización, pues la metodología empleada tenía que privilegiar el rescate de las trayectorias militantes. Este trabajo de investigación permite un trabajo más directo con las organizaciones en lucha, por lo tanto presenta condiciones para explorar otros aspectos del modelo y de hacerlo de manera más directa. También se probará el modelo con organizaciones que no necesariamente responden a un eje de clase, en el sentido estricto, desde una perspectiva marxista; esto es importante porque la hipótesis planteada en la tesis es que el modelo podría aplicarse a organizaciones sociales en lucha en donde se pudiera visualizar claramente contradicciones, pero que estas no respondían directamente al conflicto fundamental del sistema capitalista, aunque en el caso particular de las organizaciones que luchan por vivienda, se tenga un componente importante de clase trabajadora, la cual sin embargo, no se organiza como tal, en una organización de trabajadoras y trabajadores, sino que se organiza en comités de lucha por vivienda.

⁴ Esta readecuación se realizó después de participar en un taller metodológico, en el marco del concurso. En un inicio se había pensado realizar una comparación entre las nuevas organizaciones que surgían de los nuevos asentamientos en precario y las "viejas", por decirlo de algún modo, realizando un proceso de caracterización de estas últimas a partir de la recuperación y análisis de información bibliográfica, sin embargo, se aceptaron las recomendaciones de reducir un poco las expectativas y acotar mejor el objeto de estudio.

Para cumplir esta labor, el proceso se subdivide en tres pasos, desde el punto de vista analítico. Primero se propone probar el modelo analítico propuesto, utilizado anteriormente en una investigación de sociología histórica para una tesis de maestría, en movimientos de lucha contemporáneos y activos, específicamente en movimientos sociales de lucha por vivienda. Para ello se readecua el modelo y se lo vincula a algunas nociones importantes relacionados con la lucha por vivienda, como el espacio urbano y algunas nociones importantes de la lucha por vivienda. Luego, se plantea la necesidad de describir las principales características sociales de las personas que integran los comités de lucha por vivienda y que habitan en los asentamientos en precario, en este caso específico los habitantes de Rivera del Río en su contexto particular. Por último, se propuso trabajar con algunos conceptos específicos de la teoría contemporánea de los movimientos sociales, en concreto, la identificación de las formas de organización, los marcos interpretativos y los marcos de acción colectiva presentes en las organizaciones que luchan por vivienda, tomando como referente los elementos presentes en la comunidad en cuestión.

El diseño metodológico se basó en las etapas y fases de la Investigación Acción Participativa (IAP) planteadas por Martí (2000). Dicho diseño permite incorporar información recopilada tanto con métodos cuantitativos como cualitativos, pero también permite incorporar métodos participativos; por otro lado, invita a mantener una postura crítica, tanto del proceso de investigación como del método técnico operativo y procura la participación e integración de los destinatarios al proceso de investigación. Este último elemento se consideró particularmente importante por dos razones: primero, por tratarse de un proyecto por desarrollar con organizaciones de lucha por vivienda activas, cuyos integrantes están insertos actualmente en la lucha y que pueden aportar con acciones e ideas al proceso de investigación; segundo porque los objetivos propuestos buscaban indagar sobre motivaciones y marcos interpretativos, tanto individuales como colectivos, y estos son más fáciles de captar en ambientes distendidos y participativos, a partir de planteamientos investigativos honestos que fomenten la confianza, la solidaridad y la camaradería. Por cuestiones de tiempo se adoptó la entrevista semiestructurada como una de las principales herramientas de recolección de información, privilegiando esta técnica sobre los talleres y otras técnicas más participativas, que requirieron de un proceso de enseñanza aprendizaje que no había sido contemplado en el diseño inicial.

Como parte del diseño técnico operativo se consideró importante proteger la identidad de las y los informantes que de manera tan amable brindaron su tiempo para colaborar con esta investigación, en algunos

casos de manera muy comprometida; por lo tanto, los nombres de las personas entrevistadas que aparecen en el presente artículo son todos pseudónimos, excepto el de Manuel Salinas, quien, por ser uno de los dirigentes principales del Foro Nacional de Vivienda, se le considera figura pública a quien se solicitó autorización para que apareciera su nombre tal cual en este artículo.

Los criterios de selección que se utilizaron para elegir las comunidades⁵ en conflicto fueron los siguientes: a) Deben ser comunidades en precario de reciente fundación (no más de cinco años), debido a que interesa conocer a grupos de lucha por vivienda o asentamientos que se han organizado recientemente, y que podría tener relación con las nuevas condiciones económicas derivadas de la crisis del 2008 (por derivación del modelo analítico). b) Las comunidades deben estar efectivamente en una toma de tierra, no se consideran importantes para la investigación comunidades que luchan por vivienda pero que están esperando un proyecto y que por mientras alquilan o resuelven su problema habitacional de alguna otra forma. c) Las comunidades seleccionadas deben participar activamente en el Foro Nacional de Vivienda y asistir, en términos generales, a las convocatorias de las movilizaciones que se realizan desde dicha organización para presionar al gobierno. d) Las y los dirigentes del comité de vivienda de las comunidades deben estar anuentes a participar en un proceso de investigación acción participativa en su propia comunidad e invitar a las y los vecinos a colaborar con la misma.

Para facilitar la lectura del texto se dividió en varias secciones. La primera describe brevemente la comunidad y demuestra que es un

⁵ En un inicio se esperaba poder realizar el proceso en cuatro comunidades, pues se consideraba que se tenía un contacto más o menos seguro con ocho organizaciones distintas; sin embargo se fueron descartando por distintos motivos: algunas porque no eran organizaciones que estuvieran ya en el terreno, sino que estaban esperando algún proyecto, en otras ocasiones porque eran tomas de tierra que tenían ya más de 10 años de existencia. Después del taller metodológico se había decidido trabajar en dos comunidades con características similares, pero una en lo que se conoce en Costa Rica como el Gran Área Metropolitana y otra en una zona urbana también, pero periférica; sin embargo en una de las comunidades no se pasó del contacto inicial, pues las principales dirigentes de la toma de tierra no tuvieron interés en el proceso, sin embargo no lo manifestaron con mucha claridad al principio, por lo que se mantuvo cierta expectativa de poder integrarlas al proceso, cosa que al final no sucedió. Cuando fue claro que en Puntarenas no iba a ser posible desarrollar el trabajo de campo se consideró sondear algunas comunidades en lucha en la zona atlántica del país, sin embargo no se logró contactar a tiempo a las y los dirigentes de estas comunidades. Por lo tanto, ya con un proceso muy avanzado en Rivera del Río se decidió concentrar los esfuerzos en obtener la mayor cantidad de información posible; por otro lado, se consideró también que iba a ser muy difícil replicar el proceso en Pavas en otra comunidad en tan corto tiempo, existía un riesgo muy grande de que hacer un enorme esfuerzo para sacar algo que quizá iba a resultar superficial, arrojando datos que iban a ser difíciles de comparar con Rivera del Río, aunque se lograra conseguir una comunidad con similares características.

asentamiento de muy reciente formación y relaciona este fenómeno con otro paralelo de fortalecimiento relativo de las organizaciones que luchan por vivienda. El segundo apartado expone el modelo teórico propuesto y sus vínculos y relaciones con el movimiento social de lucha por vivienda; todo lo anterior desde la perspectiva teórica y conceptual. En la tercera parte se analiza los efectos de la crisis económica del 2008 en el crecimiento de la desigualdad, para el caso específico de Costa Rica, en donde ya de por sí se vienen registrando aumentos de la desigualdad de manera sistemática desde principios de siglo, cuyas consecuencias impactan a la población, sobre todo los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora. En la cuarta parte, con base en los elementos que se plantean en las entrevistas realizadas a las y los pobladores de Rivera del Río, se describe, de manera cualitativa, a la población que habita en la comunidad. En la quinta sección se trabaja, también con base en el material de las entrevistas, con las formas de organización, los marcos interpretativos, los procesos de transcripción y los marcos de acción colectiva que generan las organizaciones.

RIVERA DEL RÍO O EL LABERINTO DE SACOS DE GANGOCHE

Rivera del Río es un conjunto de apretadas casitas hechas de latas de zinc y desechos de construcción –conocidas en Costa Rica como *ranchos*– las cuales se localizan entre el Río Torres y las últimas alamedas del barrio Bribri en Lomas del Río, Pavas⁶. Como muchas de las comunidades en precario, no cuentan con calles definidas, las calles se van conformando de la manera en que la gente ha ido construyendo y acomodando sus *ranchos*, las callejuelas de tierra serpentean por la ladera que va a dar al río; en algunas secciones las y los vecinos han improvisado gradas, la mayoría también de tierra apisonada y en algunas zonas existen una especie de tablados. Para poder levantar las modestas construcciones en algunas partes han tenido que levantar el terreno, que en muchas partes tiene una inclinación superior a los 40° de inclinación (Fiscalía de Pavas, 2014), con sacos rellenos de tierra, con los cuales las y los vecinos intentan desafiar a la física y a las inclemencias del tiempo. En los relatos de las y los pobladores es frecuente la referencia a las dificultades para mantener el piso de sus viviendas:

⁶ Pavas es el noveno distrito del Cantón Central de San José, cabecera de la provincia homónima. Es el distrito más densamente poblado de Costa Rica, siendo una unidad administrativa menor tiene más población que 69 de los 81 cantones del país; según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, basadas en el último censo, para el año 2016 tiene una población 84.102 personas en un espacio de 9,34 km²; unas nueve mil persona por km², muy por encima de la densidad nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011).

“Cuando nosotros nos pasamos ya habíamos trabajado nueve meses, escarbando tierra, llenando, como ahí: 650 sacos llenos de puro escombro, de tierra, de piedra... los llenamos, los amarramos e hicimos como una tapia, la levantamos, ¡verdad!, para que quedara así, como una pared. Casualmente ahorita en este invierno se nos fue la mitad de este solarcito al guindo de ahí. Y ahorita que ha estado temblando lo que me da miedo es que se vaya el resto del piso de la casa y que me vaya junto con mis chiquitos y mi esposo al guindo, ¡verdad! Entonces [...] [en] cualquier movimiento de tierra o por las muchas aguas, es un terreno inhabitable, por esto que se desliza el suelo.” (Corrales, Betty, entrevista personal, 25 de enero de 2016)

Sin embargo, hasta hace poco, este pequeño laberinto hecho de zinc, madera, sacos de *gangoche*⁷ y tierra apisonada, digno de un pasaje borgeano, no aparecía en ningún registro de las instituciones gubernamentales. A partir de los datos arrojados por el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, último censo en Costa Rica, se elabora un documento con los principales indicadores sociales de los asentamientos informales del país (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013). En este documento no aparece dentro de los asentamientos en precario existentes el asentamiento Rivera del Río. Tampoco aparece consignado en el listado de asentamientos en precario del Gran Área Metropolitana (GAM) para los años 2011-2013 (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, S.F.).

El asentamiento Rivera del Río no aparece en las listas oficiales porque es de muy reciente conformación. Las primeras evidencias en material escrito sobre el asentamiento son de la investigación realizada por la Fiscalía de Pavas, causa penal 14-300-283-PE: “...contra ignorado, por el delito de invasión de áreas de protección”. En esta misma investigación, se encuentra un oficio del 22 de enero de 2014, en donde consta que Luis Diego Hernández Araya, fiscal en jefe de la Fiscalía de Pavas, envía nota a Oscar Zúñiga Guzmán, jefe de la oficina de San José del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET)⁸ para solicitar una inspección, con la finalidad de “contabilizar el número de árboles cortados, sus diámetros y especies, así como determinar si se

7 Saco de embalaje elaborado de una tela burda de yute, utilizada para transportar el café; el tipo de saco se sigue utilizando para empacar productos agrícolas y fertilizantes, sin embargo el saco de *gangoche* original es difícil de conseguir en la actualidad, ahora se elaboran en su mayoría de fibras plásticas.

8 Nombre que adopta este ministerio durante el gobierno de Laura Chinchilla, actualmente volvió a tomar el nombre anterior de Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

está ocasionando un daño al área de protección del río”⁹ (Fiscalía de Pavas, 2014 : 5).

Como se puede constatar en los documentos arriba citados, Pavas es una zona en donde existen varios asentamientos en precario, sin embargo, la mayoría son de vieja data fundacional, como el precario Santa Lucía, de 1984; Loma Linda y Bella Vista, que se fundan en 1986 o Metrópolis I¹⁰ que surge en 1992. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, S.F.) Entre el último asentamiento en precario que surge en Pavas, registrado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y el poblamiento de Rivera del Río pasaron más de 20 años.

Lo anterior, que podría parecer un hecho aislado coincide con un fortalecimiento relativo de las principales organizaciones que luchan por vivienda, las cuales han tenido una actitud mucho más beligerante durante el gobierno de Luis Guillermo Solís en relación con los gobiernos anteriores. Durante el año 2014 y 2015 las organizaciones que luchan por vivienda han vuelto a aparecer en el escenario político como actores sociales que utilizan la calle y la movilización como espacio de reivindicación y como forma de visibilizar sus demandas. El jueves 28 de agosto de 2014, durante la presentación del informe de los primeros 100 días de gobierno, vecinos del proyecto de vivienda Eben-Enzer, en Purrul de Guadalupe colocaron una gran cantidad de pailas de atol¹¹ afuera del teatro Melico Salazar, lugar en donde se celebraba el evento, mientras que el 2 de setiembre se preparaban movilizaciones hacia Casa Presidencial por parte de varias organizaciones que luchan por vivienda (Sancho, 2014). Algunas de estas movilizaciones han terminado en enfrentamientos abiertos con el gobierno, como el 14 de agosto de 2014 o en febrero de 2015 en donde, en ambas ocasiones, son arrestadas mujeres que lideran los movimientos de lucha por vivienda (Garita y Chacón, 2015). Otro dato importante es que existe en este momento una organización nacional de vivienda, el Foro Nacional de Vivienda, que funcionan de manera medianamente cohesionada y que integra, a partir de finales de 2013 a varias organizaciones de vivienda que funcionaban a nivel más local (Salinas, 2016).

9 En el mismo folio se plantea el lugar exacto en donde se requiere la inspección: “Se requiere de manera URGENTE que profesionales a su cargo, realicen visita al sector de Lomas de Pavas, Bribri, Alamedas 6 y 7, por cuanto el día de ayer personal del O.I.J. detectó un área de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, aledaña al río Tiribí. (Legajo de investigación, 2014)

10 Conocido también, pintorescamente, como el precario de Tarzán, por el mote que llevaba su principal dirigente. (Salinas, 2016, entrevista personal).

11 El atol es una bebida tradicional hecha de maíz; existe un dicho popular: “dar atolillo con el dedo”, que se aplica cuando se logra engañar a otra persona de forma sistemática, manipulándola con alguna dádiva insignificante.

El mismo Manuel Salinas comenta lo respecto de las organizaciones que dieron origen al Foro Nacional de Vivienda:

“El Foro como tal va para dos años –el Foro como tal– siempre ha mantenido una estructura, anteriormente a quedarnos en el Foro existían cuatro grupos que más o menos tenía un carácter, tal vez no nacional, pero sí más amplio, de más de un solo grupo, que eran: Colupoa en Alajuelita, [...] que Colupoa son varias asociaciones de Alajuelita, que tengo entendido se extienden un poco para algunos otros lados, porque como que comienzan a sonar en la prensa; alguna gente los llama para que los ayuden y creo que tienen un grupo en Siquirres y otros en la zona Sur; creo que un par de grupos en Puntarenas también. Luego estaba lo que llamaban la Coordinadora que esa la lideraba Orlando Barrantes, que eso era... alguna gente en Heredia y alguna gente en la Zona Atlántica, y algunos grupos que se habían integrado de la primera gestión que se dio digamos de grupos, y estaba la otra cosa que nosotros llamábamos la Confederación que era digamos lo que lideraba yo, que estábamos trabajando para crear una Confederación Nacional de Vivienda, y este que se yo... de ahí nace la idea de crear el Foro, pero no como un foro en ese momento, sino que lo que buscábamos era hacer un Foro de discusión con los dos candidatos, Luis Guillermo Solís y Johnny Araya para ver cuál era su planteamiento en vivienda y logramos que llegaran una gran cantidad de grupos, que al final no tuvimos la discusión con ellos, porque Johnny renunció, pero ya quedó la estructura para crear la organización ya como tal.” (Salinas, 2016, entrevista personal).

Según el Informe de actualización de la Base de datos los asentamientos en precario y en tugurio de Costa Rica” (Liberoff y Saborio, 2012) los asentamientos informales se han incrementado, aunque de forma paulatina; en torno al tema, establece que en el año 1969 existían 32 asentamientos informales, seguido de la década de 1970 a 1989, en la cual se conformaron 160 asentamientos informales, continuado del periodo de 1990 al 2000 en el cual se crearon 131 tugurios y/o precarios, y en el periodo de 2001 al 2012 aparecieron 38 asentamientos, para un total de 384 en la actualidad. Si comparamos los datos de la última década del siglo pasado y la primera de este nos encontramos con una drástica reducción en el número de asentamientos en precario que surgen en terrenos nuevos. A partir de estos datos meramente estadísticos se puede ver que existe un periodo en que se reducen los niveles de confrontación en el tema de vivienda en Costa Rica, el cual va de finales de los años noventa del siglo pasado y se mantiene como un sector de bajo perfil durante unos quince años. Pero esa situación se puede observar también a partir de otros indicios como la aparición de nuevos procesos de tomas de tierra, después de un periodo en el que

las tomas de tierra y las movilizaciones se redujeron y el surgimiento de una entidad de coordinación nacional, lo cual implica niveles más complejos de organización y movilización.

MODELO TEÓRICO

BREVÍSIMO RECORRIDO HISTÓRICO DE LAS PRINCIPALES TEORÍAS DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN GENERAL

Existen al menos cuatro momentos fundamentales en la construcción teórica de los fenómenos de la acción colectiva y del surgimiento, auge y declive de los movimientos sociales: el primero de ellos, las dos grandes oleadas del movimiento obrero europeo decimonónico, en las décadas del 40 y del 80 del siglo XIX, a partir del cual se dan los primeros intentos de analizar los movimientos sociales por parte de “los padres fundadores” de la sociología, sobre todo Marx y Durkheim. Un segundo momento se desarrolla en el período de entreguerras, en donde surgen las perspectivas del interaccionismo simbólico y la perspectiva parsoniana estructural funcionalista. El tercer momento es la última parte de la década de los sesenta y la década del setenta del siglo XX, en donde irrumpen sorpresivamente diversos movimientos, sobre todo los grupos y las organizaciones estudiantiles y juveniles, que en buena medida, sorprenden a la sociología sin herramientas teóricas para analizar estos nuevos movimientos sociales (Riechman y Fernández, 1994).

El enorme auge de la movilización social y política y las características intrínsecas que se observan en estos nuevos movimientos produce un aumento tal de la producción teórica y empírica sobre los movimientos sociales que el tópico se convierte en todo un campo del quehacer sociológico. Sin embargo, a partir de este momento se despliegan dos corrientes que se mantienen aisladas durante mucho tiempo: en Estados Unidos se desarrolla la llamada *teoría de movilización de recursos*, mientras que en Europa a partir de la década de los setenta prevalece el enfoque de los *nuevos movimientos sociales*.

A partir de la década de los 80 se dan los primeros acercamientos entre ambas teorías, en una búsqueda no solo de síntesis sino también de encontrar las dinámicas que permiten el paso de las condiciones estructurales a las decisiones individuales de participar, importante vacío que ninguna de las dos teorías aborda (Rubio, 2004). En este intento de síntesis se deja de lado o se abandona la perspectiva histórico-dialéctica, la cual nunca estuvo presente en el desarrollo de la teoría estadounidense (al menos no mediante un reconocimiento explícito) y es fuertemente cuestionada por la teoría de los nuevos movimientos sociales. A mediados de la década de los años ochenta, Bert Klander-mans, Hans Peter Kriesi y Sidney Tarrow organizan dos congresos en donde se dan los primeros contactos entre los teóricos de la teoría de

movilización de recursos y de la teoría de los nuevos movimientos sociales, de los cuales surge, en 1988, un texto colectivo: *From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Cultures*, en el cual se intenta vincular ambos enfoques a través de un área oscura descuidada por ambos esfuerzos teóricos: los procesos que relacionan los procesos estructurales con la acción, en donde se produce lo que los autores denominan *movilización del consenso* y *movilización de la acción*. A partir de este primer encuentro se intensifican las relaciones entre ambas corrientes, propiciando una visión más comparativa, al permitir la confrontación de casos elaborados desde distintos contextos nacionales y un lenguaje más ecléctico.

En la actualidad se trabaja desde una gran variedad de perspectivas, pero la mayoría de los estudios hacen énfasis en tres factores: 1. la estructura de oportunidades políticas; 2. las formas de organización, tanto formales como informales; 3. los marcos interpretativos de atribución-construcción que median entre la oportunidad y la acción (Rubio, 2004).

LA CIUDAD COMO ESPACIO SOCIAL

En términos generales, en casi todos los países, la definición de ciudad se realiza a partir de la cantidad de habitantes; sin embargo, depende de la visión particular de cada uno de los departamentos estadísticos nacionales; tenemos así por ejemplo, que según Bottino (2009) en Dinamarca, Suecia y Finlandia se consideran ciudades las poblaciones de más de 200 habitantes, mientras que en Rusia solo son consideradas como ciudades las poblaciones que tienen más de 12.000 habitantes, y en Japón las que tienen más de 20.000. Por otro lado existe hoy día el fenómeno de la conurbación: cuando varias ciudades terminan por juntarse es difícil establecer los límites físicos entre una ciudad y otra, definición solo en términos geográficos, ya que no está incluyendo un tema mucho más complejo: el de las relaciones sociales que se establecen en estos gigantescos conglomerados de personas que hoy días se conocen como megalópolis. Por lo tanto, la definición de ciudad debería basarse no tanto en el tamaño en términos meramente numéricos, es decir, cantidad de habitantes, sino más bien a partir de las funciones del espacio social, las actividades socioproductivas y de consumo que realizan las personas que las habitan y también la autopercepción e identificación y la percepción del espacio urbano que tienen estas mismas.

En este sentido se recupera la noción de ciudad y de lo urbano que se encuentra presente en los trabajos tempranos de Castells¹², en donde la ciudad, o más bien, el proceso de urbanización es concebido

12 Nos referimos sobre todo a la *Cuestión Urbana* (Castells, 2008) y a *Problemas de investigación en sociología urbana* (Castells, 1992).

como una función particular del modo de producción (o de varios si es que coexisten dos o más) que se expresa en una formación social concreta. Por lo tanto, la ciudad sería un espacio social en donde se manifiestan, de manera cotidiana y específica, las contradicciones generales entre quienes poseen la fuerza de trabajo y quienes controlan los medios de producción, contradicciones que se expresan a partir de dos componentes principales: la producción y el consumo (o reproducción de la fuerza de trabajo).

Según González (1998), tal elemento socioeconómico de la organización del espacio urbano se combina, según la concepción de Castells, con el elemento político institucional y con el elemento ideológico. El elemento político institucional se integra al espacio urbano en torno a dos relaciones: por un lado, la *relación integración represión*, a partir de la noción de autonomía municipal y la jerarquía administrativa sobre las colectividades territoriales¹³; por otro lado, la *relación organización planificación* que no necesariamente la realiza el gobierno local (la puede realizar el estado) y no se ocupa del asentamiento espacial, sino de las relaciones sociales que estructuran el espacio social: ambas relaciones son necesarias para asegurar el predominio de las élites, así como para regular las crisis y contradicciones del sistema a fin de preservarlo. El elemento ideológico organiza el espacio como una red simbólica que racionaliza ciertos intereses (los de la clase dominante) para poder exponerlos (o imponerlos) como el “interés general”, de manera que se crea una suerte de “código urbano” que permite la vinculación de las y los ciudadanos, a partir del reconocimiento mutuo, pero también del desconocimiento común de todo aquello que queda afuera de la noción simbólica del código urbano.

Según la misma autora, para Castells “la vivienda y el centro urbano son dos de los lugares en donde se aprecia con mayor claridad la simbología urbana” (González, 1998 : 314): la vivienda no tiene una carga neutra a nivel simbólico, expresa la inserción social y una serie de símbolos, deseos y frustraciones que se concretan en ese espacio cotidiano e íntimo, en el marco de un proceso socioeconómico general.

Por otro lado, el concepto de centro tiene una función integradora y una función simbólica: en el centro urbano (o los centros urbanos)

13 Esta relación deberá manejarse con cautela, sobre todo tomando en cuenta lo que ya se mencionó con anterioridad: que los espacios urbanos tienden a imbricarse, por lo que cada vez es más difícil la administración de un territorio inmenso y políticamente multicéfalo; sin embargo, en términos concretos, la gente sigue perteneciendo a un lugar específico, que cuenta, en primera instancia, con un municipio, ayuntamiento o administración territorial equivalente en donde la gente debe pagar impuestos y donde debe acudir si necesita un permiso de construcción, una patente para un negocio; entre otras necesidades comunes que implican un cierto nivel de organización territorial.

se ubican el conjunto de signos que constituyen los ejes simbólicos de la ciudad (monumentos, edificios emblemáticos, etc); pero también, al mismo tiempo –y precisamente por aglutinar los principales elementos simbólicos del espacio social–, el ciudadano o ciudadana percibe el centro como un significante especial de tejido urbano que le otorga una significación política particular.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS DE LUCHA POR VIVIENDA

Antes que intentar una caracterización precisa de los movimientos sociales urbanos, que podría conducir a una discusión poco productiva sobre si los movimientos sociales son viejos, nuevos o novísimos, se intentará describir cómo se conciben las organizaciones sociales que luchan por vivienda y cómo se puede delimitar este sector. Por eso se plantea, de manera muy general y provisionalmente, que un movimiento social urbano es cualquier movimiento social que se ubique dentro del espacio urbano descrito en el apartado anterior y, como esta definición no tiene sentido si no se profundiza en el concepto de movimiento social y en las formas como se interpreta la contienda política, se realizará un breve repaso de los componentes fundamentales, desde un punto de vista teórico.

MODELO TEÓRICO PROPUESTO

Esta propuesta de modelo teórico para trabajar con movimientos sociales es un intento de síntesis y de integración del aporte de distintas corrientes y científicos sociales, por lo que en este apartado se explicará solamente la forma en la cual se vinculan cada uno de los elementos en el sistema de análisis. La propuesta se basa en el modelo planteado por McAdam (1999), el cual se considera pertinente, pero incompleto en tres sentidos. El primero de ellos tiene que ver con la forma en que concibe el fortalecimiento de las organizaciones de los grupos subalternos, el segundo, con la forma en que se aborda la cuestión que McAdam define como *liberación cognitiva* y el último, con cómo utiliza el cambio estructural y su relación con las estructuras de poder.

A diferencia del modelo propuesto por McAdam (1999), que le da una importancia particular al impacto que tiene el cambio estructural en el debilitamiento de las élites, el modelo aquí propuesto coincide con la perspectiva de Lenin (1973), en la cual lo que diferencia una situación que es solamente una oportunidad para las organizaciones de los grupos subordinados (lo que Lenin denomina *situación revolucionaria*¹⁴) de una situación en la cual existen realmente posibilidades para

14 Lenin (1973) plantea, por supuesto, los conceptos de *situación revolucionaria* y *crisis revolucionaria* pensando en el partido comunista y en las clases sociales principales que

la concreción de un movimiento social que desemboque en una ruptura más o menos prolongada de la hegemonía de los grupos dominantes, es precisamente el nivel de organización de uno o varios sectores de los grupos subalternos¹⁵ (lo que Lenin llama el *factor subjetivo*), es decir, la fortaleza (o el proceso de fortalecimiento) de estas organizaciones.

El proceso de fortalecimiento de las organizaciones de los grupos subordinados es un asunto complejo, que implica el desarrollo de varios procesos entrelazados, entre ellos un recrudescimiento (o un cambio brusco) en las condiciones de vida de los grupos subalternos, o al menos, un desnivel entre las expectativas socialmente construidas y la percepción del presente (o el futuro cercano) de estos grupos subalternos. Cuando este cambio estructural tiene un impacto masivo en los grupos subalternos genera un ascenso o una intensificación en la actividad de las masas, así como acciones más o menos espontáneas que buscan defender derechos adquiridos o realizar nuevas peticiones sobre temas específicos, lo cual a su vez produce una tendencia al fortalecimiento de las organizaciones que defienden los derechos o promueven los intereses de los grupos subalternos. Ciertamente, la generación del movimiento social no puede ser explicado solamente desde los intereses de los grupos o desde los sentimientos de agravio, pero tampoco podemos descartar el asunto y eliminarlo del análisis: el agravio, el marco de injusticia o la defensa de los intereses son componentes que dan sentido a un determinado movimiento y es lo que les confiere su carácter específico, por lo que resulta erróneo explicar el conflicto de manera mecánica a partir del agravio como obviarlo completamente del análisis.

De acuerdo con lo anterior, por lo tanto, existe una relación recíproca entre el ascenso de las masas de los grupos subalternos y el forta-

se derivan del sistema capitalista según la teoría marxista; aquí se amplía la premisa a otros movimientos sociales en los que se pueda precisar una contradicción dialéctica que enfrente a la clase dominante con sectores sociales subordinados que plantean reivindicaciones específicas, pero que cuestionan al modelo socioeconómico en su conjunto.

15 Adoptar el enfoque dialéctico no se niega la posibilidad de que existan movimientos sociales conformados por, o que defienden, los intereses de los grupos dominantes, simplemente se insertan también desde la perspectiva de un conflicto que tiene origen estructural, pero que en la práctica se manifiesta como un conflicto de dominación hegemónica. Tampoco es un aspecto que se pueda desarrollar ampliamente aquí, pues no es pertinente, pero también a manera de hipótesis se presume que cuando los grupos subordinados logran socavar de manera importante la dominación hegemónica, cuando no se pueden seguir utilizando los métodos usuales, sean estos formales o informales, para ejercer la dominación, los grupos poderosos recurren a otros métodos para tratar de mantener el control ideológico de los grupos subalternos, entre ellos el apoyo a grupos que generen movimientos de presión política a favor de sus intereses o, inclusive, la organización de nuevas organizaciones de la clase dominante, distintas a las usuales, que buscan promover los intereses de estas clases o al menos contrarrestar el fortalecimiento de las organizaciones de los grupos subalternos.

lecimiento de las organizaciones insurgentes que, al mismo tiempo, se relaciona con la pérdida de poder de los grupos dominantes. El ascenso de las masas, como una reacción semiespontánea de los sectores subordinados ante los cambios estructurales, forma una parte fundamental del proceso de desarrollo del movimiento social, pues es precisamente en este movimiento más o menos difuso en donde se “cocinan” (Scott, 2000) los *discursos ocultos* de los grupos subalternos. Estos discursos ocultos son los que la organización política intenta reorganizar y volver coherentes. Por ello, estos procesos están vinculados también con *procesos de transcripción* (Goffman, 1974), individuales, pero masivos. Ante el cambio brusco de las condiciones económicas la gente reinterpreta la realidad en la que vive, ya sea porque los efectos del cambio estructural cambian sus circunstancias, porque entra en contacto con una organización de los grupos insurgentes que lo hace cambiar de perspectiva o porque las circunstancias vuelven evidente una parte del discurso oculto de los sectores dominantes. Por lo tanto, el proceso de fortalecimiento de las organizaciones no puede comprenderse de manera adecuada sino se toma en cuenta que existe un proceso previo a la organización, que es más difuso pero más masivo y que este proceso se sostiene a lo largo del tiempo y que acompaña y que interactúa con el proceso de fortalecimiento de las organizaciones.

La existencia misma de la organización implica un proceso de ruptura cognitiva en cierto sector del grupo subordinado, los cuales se colocan en una posición dirigente durante determinado tiempo; la organización permite desarrollar trabajo concreto y elaborar un discurso específico con base en marcos de injusticia más o menos difusos a los que se logra dar coherencia, lo cual tiene un impacto en nuevos sectores de los grupos subordinados, que comienzan a valorar de manera distinta su posición a partir de los planteamientos político-discursivos de las organizaciones; es decir, se genera un proceso de retroalimentación entre las organizaciones y los sectores subordinados.

Entre el discurso político y la transcripción individual se desarrolla un proceso intermedio, generado desde la organización para alinear los *marcos interpretativos* (Goffman, 1974), adecuándolos a las elaboraciones colectivas y otorgándole sentido a las vivencias colectivas del grupo subalterno, proceso que se desarrolla en la organización misma. Como se indicó, es también en la organización del grupo subalterno en donde se le da coherencia al discurso oculto generado de manera espontánea por las condiciones de opresión, pero también el proceso de ordenamiento del discurso permite una radicalización del mismo. A través del discurso ideológico-político es que se pueden estructurar los marcos de acción colectiva y la interpretación coyuntural de la realidad, en cada momento específico: ambos elementos

son fundamentales para el desarrollo del trabajo político del grupo y del proceso de liberación cognitiva que, junto con el sentimiento de eficacia (que proviene no solamente de la *liberación cognitiva* sino también de los resultados concretos del trabajo político de la organización), permiten lo que Gramsci (1970) denomina procesos de ruptura de la *dominación hegemónica*.

Por lo tanto, un movimiento social se deriva de tres procesos esenciales: el debilitamiento de las élites, el fortalecimiento de las organizaciones de los grupos subalternos y la ruptura de la dominación hegemónica; de los tres procesos, el más sencillo es precisamente el debilitamiento de las élites y el más complejo el proceso de fortalecimiento de las organizaciones subalternas.

LA LUCHA POR VIVIENDA

En este apartado, se comparte la crítica de Argüello (1981) respecto de la noción de “marginalidad” muy difundida para referirse a la población que habita en barriadas urbanas que en Costa Rica se conocen como “tugurios” o “precarios”; que considera a estas poblaciones como gente “excluida del sistema” o al menos de la producción. Como demuestra este autor, en realidad, en la mayoría de los casos quienes habitan estos barrios, producto de tomas de tierra; es decir, de disputas sociales sobre el territorio, no son una población marginal ni excluida, sino que tienen múltiples vínculos con el modelo de producción capitalista, algunas veces de manera más directa y otras de manera indirecta, dependiendo de las condiciones del mercado y de la demanda de mano de obra. Juan Manuel Ramírez Saíz expresa de manera muy sintética la misma idea que expone Argüello en los capítulos primero y segundo de libro:

“La concentración de las fuerzas productivas en el espacio urbano determina que la ocupación y la apropiación del suelo y la instalación de redes, infraestructuras y servicios privilegien la producción del capital relegando la atención de las necesidades inherentes de la reproducción de la fuerza de trabajo. Por otra parte, a la socialización de las fuerzas productivas en las ciudades acompaña el crecimiento del proletariado urbano y la ampliación del ejército industrial de reserva, generalizando el desempleo y subempleo, su débil inseción en la actividad económica y el carácter mercantil del consumo urbano agudizan el deterioro de sus condiciones materiales de vida. A su vez, la especulación de que son objeto la tierra y la vivienda imposibilitan el acceso a ella a amplios contingentes de la población urbana.” (Ramírez, 1984)

Liliana Coto (S.F.) define la invasión o rescate de terreno como “una forma ilegal de adquirir un terreno y se caracteriza por ser colectiva, comunitaria e inmediata.” (p.97). Según la autora, las personas que participan en estos rescates suelen ser estratos distintos de la clase trabajadora, empleados temporales o informales o desempleados. Además de la necesidad de vivienda, las personas que participan en los rescates están unidos por creencias comunes derivadas de la identidad de pobreza, el anhelo por vivienda propia, la autoconstrucción como solución a la falta de vivienda, la necesidad como fuerza moral, lo cual contribuye a la construcción de una identidad colectiva:

“... la ocupación ilegal de terrenos es en general, desde el punto de vista urbanístico, una forma de suburbanización practicada por los sectores populares. Los rescates de terreno, las invasiones o tomas de tierras a las que aludimos tienen además la especificidad de que forman comunidades ilegales, asentamientos suburbanizadores –de la noche a la mañana–. Los pobres de la ciudad realizan esta tarea porque no tienen acceso a las viviendas suburbanas que los inversionistas construyen para las clases medias y la burguesía.” (Liliana Coto, S.F. p.3)

Es decir, la gente que se organiza en los centros urbanos para luchar por vivienda son personas que normalmente pertenecen a la clase trabajadora, aunque pueden ser de distintos estratos de la misma, usualmente se encuentran en situaciones precarias no solamente en sus condiciones de vivienda sino también en cuestiones de empleo, característica que no es una anomalía del sistema capitalista, sino parte normal de su funcionamiento, a menos de que existan espacios de movilización y lucha, en los que mucha de esta población permanece invisibilizada, tratando de sobrevivir de cualquier forma.

La movilización por vivienda es entonces una expresión de la lucha de clases que se da en el escenario urbano y que se deriva de las condiciones que el mismo sistema capitalista requiere, potencia y construye. Sin embargo, para poder entender la forma en que se desarrolla o se puede desarrollar un movimiento social de lucha por vivienda es necesario observar de manera más detallada y compleja el asunto, para poder ver cómo estos fenómenos estructurales impactan o se imbrican con otros procesos de carácter más político, institucional e ideológico, y también para poder penetrar de manera profunda a las razones y motivaciones de los sectores organizados y en lucha.

CRISIS ECONÓMICA Y AUMENTO DE LA DESIGUALDAD

En este apartado se analizará los principales indicadores económicos para Costa Rica en los años inmediatos a la crisis, para poder tener una

idea más clara de cómo se comporta la economía costarricense ante los efectos de la recesión económica mundial; esto es importante sobre todo porque se considera, en base al marco teórico, que los cambios bruscos en la economía y en las expectativas de los sectores subalternos están en la raíz de los incrementos de la conflictividad social; sin embargo, no es suficiente con decir que hubo crisis económica: es necesario buscar las conexiones lógicas con los grupos sociales que se analizan de manera concreta.

EL CONTAGIO DE LA CRISIS

A finales del 2007 se empezaron a mostrar los primeros síntomas de contagio de la crisis económica mundial en Costa Rica: comenzó a desacelerarse el ritmo de crecimiento de la producción, se incrementó la inflación, la entrada de remesas comenzó a caer al igual que la inversión extranjera y las exportaciones, la entrada de turistas se empezó a reducir, el consumo fue mermando y el desempleo aumentó. Al respecto, Morales (2009) señala que “durante todo el año 2008, la desaceleración fue muy evidente y pronunciada, tanto que desde el mes de octubre de dicho año y hasta el mes de julio del 2009, la variación interanual del Mensual de Actividad Económica (IMAE) ha venido siendo negativa (-2,63% al mes de julio del 2009), acumulándose 10 meses consecutivos de decrecimiento en la producción, según este indicador.”(p. 62) En este periodo Costa Rica muestra claros signos de recesión económica al presentar tres trimestres consecutivos de decrecimiento en la producción real.

En el año 2008 la fuerte desaceleración económica logró revertir el comportamiento económico extraordinario que presentó el país en los tres años precedentes (el crecimiento del PIB pasó de 7,8% en 2007 a 2,6% en el 2008). Al respecto, el Programa del Estado de la Nación (2010) explica que la diversificación del sector externo, principal motor del crecimiento económico en el país en el largo plazo, de poco sirvió ante el desplome del comercio exterior que provocó la recesión económica a nivel internacional a partir de finales del 2008. En ese momento el mercado interno presentó signos de reactivación del comercio intraregional centroamericano y el gasto público anticíclico que neutralizaron parcialmente esa caída

La crisis financiera internacional provocó distintos efectos depresivos sobre la economía real que abatió los altos precios internacionales del petróleo y de los alimentos, y de este modo anuló las fuertes presiones inflacionarias que se estaban creando en Costa Rica. En consecuencia, la recesión no coincidió con una espiral inflacionaria, que favoreció los ingresos reales de un amplio sector de la población, específicamente los sectores más adinerados, lo cual contribuyó a acentuar

la marcada tendencia al crecimiento de la desigualdad entre las clases sociales. La crisis afectó a algunos de los sectores más dinámicos de la economía nacional, como la construcción¹⁶, la industria manufacturera y el sector hotelero que generó, como era previsible, despidos masivos de trabajadoras y trabajadores. También, en el año 2008, por ejemplo, se perdieron 11.920 puestos de trabajo formales en el sector industrial. Pero fue en el 2009 cuando la economía costarricense sintió los efectos más severos de la crisis financiera internacional, “los ingresos del Gobierno se redujeron en 1,7 puntos porcentuales del PIB, con lo cual se anuló casi la totalidad del incremento registrado en los años previos. Además se produjo una importante disminución de la carga tributaria, que pasó del 15,4% del PIB en 2008, al 13,7%.” (Programa Estado de la Nación, 2010, p.62)¹⁷

En el año 2010 la economía costarricense inició, aunque de forma lenta, una ruta de crecimiento económico. Por ejemplo, la producción creció en términos reales un 4,2%, impulsada sobre todo por los sectores de exportación, turismo y los flujos de capital generados por la inversión extranjera directa. Dichos sectores y el de servicios se constituyeron en la “nueva economía costarricense” que desplazó a la “vieja economía” compuesta de empresas o actividades textiles, industrias constructoras, agrícolas, entre otras. De forma que, la aparición y fortalecimiento de estos sectores, favorecidos por políticas económicas internas y externas, logro dinamizar la economía local. Sin embargo, pese a los modestos signos de recuperación económica en Costa Rica continuó el proceso de deterioro de las finanzas públicas. (Programa Estado de la Nación, 2011)

El proceso de recuperación económica se sostuvo en el año 2011, un año positivo para la producción costarricense, si se le observa de manera general: su tasa de crecimiento fue de 4,2%, cifra cercana al 4,7% del 2010 y similar a la expansión promedio de largo plazo. Este crecimiento fue liderado por los sectores de servicios empresariales y telecomunicaciones, sectores que en conjunto contribuyeron con el 47,2% del crecimiento registrado por el PIB. “En términos de empleo, estos sectores son parte de la ‘nueva economía’ y absorben mano de obra con perfiles de alta calificación. En cambio, los sectores que emplean a los

16 Entre enero de 2008 y enero de 2009 el sector construcción decreció casi un 5%; el sector manufacturero mostró tasas de crecimiento negativas en el 2008, llegando a un mínimo de 15,69% en el 2009. (Morales Ramos, 2009)

17 Aunque el Programa Estado de la Nación no lo plantea, esta reducción de los ingresos del Estado se relacionan también con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, debido sobre todo a la reducción de los ingresos tributarios producto de la reducción de los aranceles.

grupos de población más vulnerables por su bajo nivel de calificación, informalidad y condición de pobreza, fueron los menos dinámicos, e incluso frenaron el crecimiento alcanzado en 2010. La agricultura y la construcción, que forman parte de la ‘nueva economía’, mostraron los resultados más bajos.” (Programa Estado de la Nación, 2012)

Es decir, aunque existe una recuperación económica, esta se traduce en mejores ingresos para las élites y para la mano de obra calificada; sin embargo, los sectores menos dinámicos vinculados con los sectores peor pagados de la clase trabajadora no se recuperan y continúa en fase recesiva.

EL CICLO PERVERSO DE INFLACIÓN, DESACELERACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA POBREZA

Otro de los efectos de la crisis, en primera instancia, es el encarecimiento de las materias primas; ante el descalabro del mercado financiero y especulativo, los grandes inversionistas mueven grandes sumas de dinero hacia el mercado de materias primas, entre ellas, sobre todo el petróleo, lo que provoca que se dispare el precio de los hidrocarburos. Esta situación se ve reflejada también en el encarecimiento de los alimentos que componen la canasta básica. Según Morales (2009), en el mes de septiembre del 2008, el costo de la canasta básica alimentaria presentó el mayor incremento con respecto al mismo mes del año anterior, “creció prácticamente al doble de la inflación (31,04% y 15,77%, respectivamente). Esta situación reitera que el mayor efecto inflacionario en la economía durante el 2008 lo presentó el incremento en el costo de los alimentos y, por lo tanto, fueron las familias de menores ingresos (ubicadas en pobreza extrema o en el primer quintil de la población) las más perjudicadas, al ser las que dedican el mayor porcentaje de su ingreso al consumo de alimentos”. (p. 66)

A partir del año 2009, el aumento de la inflación se revierte debido a la reducción en el precio de los alimentos y del petróleo, ligado a la menor demanda interna, lo que produjo una drástica reducción de la inflación; en agosto de 2009 la inflación acumulada llegaba tan solo a un 2,81%, porcentaje mucho menor al 10,77% acumulado al mes de agosto del 2008. Esto evidencia que los efectos de la crisis internacional en el año 2009 se concentraron en el sector real de la economía, es decir, sobre la producción, el empleo, los ingresos y el consumo. La inflación se ha mantenido muy baja a partir de entonces, lo que refleja el bajo nivel de consumo de la mayoría de la población. En un contexto de recesión económica mundial, los bajos niveles de consumo producen despidos masivos, siendo las y los principales afectadas, las y los trabajadores pertenecientes al sector informal, construcción y agrícola. También destaca la precariedad de las condiciones laborales. De forma

que “el empleo informal y la mano de obra menos calificada fueron los más afectados por la crisis” (Informe del Estado de la Nación, 2010 p. 59). Entre octubre de 2008 y julio de 2009 se perdieron más de 16.000 empleos en construcción y más de 11.000 en la industria de manufacturas (Morales Ramos, 2009) que, como se indicó, son los sectores de la economía nacional más golpeados por la crisis.

El crecimiento acelerado de los precios de los productos alimenticios, que son los bienes en los que la población con menores recursos destina la mayor parte de sus ingresos, seguido de un proceso recesivo que impacta sobre el empleo, sobre todo en los sectores de la economía que contratan la población de menores recursos ocasiona un crecimiento de los índices de pobreza que, aunque porcentualmente leve, puede estar colocando en situaciones de extrema necesidad a gran cantidad de personas, si se considera el aumento en términos absolutos. El peso de la crisis económica recayó sobre todo en los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, que enfrentó un aumento del desempleo, mayor desigualdad en la distribución del ingreso familiar y el empobrecimiento de sus condiciones materiales de existencia. La crisis económica contribuyó con el aumento de la desigualdad social en Costa Rica. Por lo tanto el resultado general del proceso es un aumento paulatino de los índices de pobreza.

La crisis económica provocó el incremento de la pobreza por ingresos que “revirtió la tendencia a la baja que mostraba en la incidencia de la pobreza desde el 2005. La pobreza total aumentó de 16,7% en 2007 a 17,7% en 2008 y la pobreza extrema pasó de 3,3% a 3,5%.” (Programa del Estado de la Nación, 2009, p.79) Esto significa que en términos absolutos la pobreza afectó a 931.967 personas, 95.000 más que en el 2007 (otros 19.670 hogares). Las regiones con mayor aumento en este indicador fueron la Huetar Atlántica y la Pacífico Central, zonas relacionadas históricamente con la pobreza. Esta tendencia al alza de los índices de pobreza se mantienen en el año 2009, cuando se alcanzó un “18,5% y la pobreza extrema pasó de 3,3% a 4,2%.” (Programa del Estado de la Nación, 2010, p. 75)

CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LAS Y LOS POBLADORES DE RIVERA DEL RÍO

Las personas que habitan en Rivera del Río en general pertenecen a la clase trabajadora, en los estratos más pauperizados de la misma. Son personas que tienen empleos temporales y que ganan salarios muy bajos en construcción, labores domésticas, como porteadores (taxistas informales), en servicios (también los peor pagados, como dependientes en pulperías, restaurantes de comida rápida o pequeños negocios barriales), o como vendedores ambulantes. Con base en las observaciones

realizadas en el lugar y lo planteado por las y los entrevistados, se puede afirmar que la mayoría de las familias tienen miembros que trabajan o intentan conseguir trabajo¹⁸. Las condiciones de hacinamiento en las que viven varían de una familia a otra, en algunos *ranchos* viven cuatro o cinco familias; sin embargo la mayoría tiene acceso a servicios de luz y agua potable. Muchas personas consideran que no tiene mucho sentido mejorar las condiciones de su vivienda o del espacio físico comunitario, porque consideran que los pueden desalojar en cualquier momento.

En todos los casos las personas entrevistadas en Rivera del Río coinciden en que decidieron mudarse a Rincón Grande porque ya no podían seguir pagando un alquiler, en algunos casos lo plantean como una cuestión de supervivencia:

“Si pagábamos alquiler no comíamos, lo poco que gano es apenas para comer, no me alcanzaba como para pagar un alquiler. Luego que la mayoría de la gente que le alquila un cuartito a uno, o una casa pequeña, la casa igual no es una casa grande, es una pequeña ... tienen demasiadas exigencias, que no hayan chiquitos, por ejemplo: ¡Imposible! Es imposible, como me van a decir a mí, o que si hay niños que no quieren oírlos llorando, o que no quieren oírlos travesando, verdad, y son después de las siete u ocho de la noche y ya no quieren escuchar bulla, ¡diay!¹⁹, cuando hay niños eso es imposible, uno trata de tranquilizarlos hasta donde se pueda, pero eso es imposible, entonces muchas exigencias... No existía la economía para pagar una mensualidad de una casa digna por ejemplo, pagar 120 mil pesos²⁰, 130 mil pesos, para vivir un poquito mejor, porque con ese dinero usted no va a pagar una casa bonita, fina, ¡no, no!: es una casita... casi que es un tugurito disfrazado, entonces, diay... La necesidad, es una de las razones que me obligó a venirme para este lugar.” (Sandí, 2016, entrevista personal)

18 Hay algunas pocas excepciones, gente muy mayor, gente enferma, algunas mujeres que reciben pensión alimenticia y pueden más o menos sobrevivir con ese ingreso; sin embargo en la mayoría de estos casos algún o algunos miembros de la familia realiza algún tipo de labor remunerada, aunque sea de manera temporal.

19 Expresión costarricense sin un significado muy preciso, puede sustituir un *pues* o un *bueno*; puede formar parte de un saludo o ser simplemente una muletilla, la mejor forma de entenderlo es verlo aplicado en el texto. Como su uso es muy frecuente en el habla cotidiana, para estas entrevistas se elimina en casi todos los casos, sin embargo se decidió conservarlo en casos como este en el que expresa un sentido muy fuerte; en este caso habría que entrevistarlo como: ¡Es obvio!

20 Forma coloquial de referirse a los colones, la moneda nacional.

En las demás entrevistas se relatan casos parecidos, con sus diferencias, sobre la decisión de mudarse a Rivera del Río. La relación entre la imposibilidad de pago del alquiler es confirmada por Ariadna en varias ocasiones, quien tiene además conocimiento de muchos de los casos y situaciones particulares de las familias. Por lo tanto puede verse la relación entre el impacto directo que tiene el cambio brusco en la situación socioeconómica nacional, descrito en el apartado anterior y la vida cotidiana de las familias que tomaron la decisión de mudarse a Rivera del Río. En otras entrevistas, varias, se plantea el asunto del estrés que produce la obligación de tener que pagar el alquiler y no tener el dinero para hacerlo; en algunas ocasiones se prefiere la zozobra del desalojo, que es una posibilidad, a la tensión que produce no poder cumplir con el pago del alquiler a fin de mes, que deja de ser una zozobra a convertirse en una certeza.

En las entrevistas se puede notar que existen conflictos y críticas, un poco de manera indirecta, a las condiciones en que se negocian los alquileres, o hacia las personas que ofrecen las casas en alquiler, que exigen condiciones difíciles de cumplir. Esta especie de intuición refleja el conflicto, la lucha por el espacio urbano, entre un sector de la clase trabajadora que ve disminuidas sus capacidades y oportunidades de sobrevivencia, frente a un sector de la burguesía o la pequeña burguesía nacional que lucra con el negocio de los alquileres. Sin embargo esta molestia tiene un carácter más bien intuitivo, no se logra todavía una noción clara de lucha de clase, un sentimiento colectivo de agravio, ni tampoco se logra tener una conciencia clara de grupo; las personas entrevistadas ubican su relato desde un punto de vista personal, como una especie de caída en desgracia personal, no relacionan su situación personal particular con fenómenos socioeconómicos y políticos que tienen efectos comunes sobre todas las personas que viven en la comunidad; es decir, no ven una situación común, sino solamente casos particulares y, a pesar de que la mayoría de las y los entrevistados consideran que la situación en la que se encuentran es injusta, no relacionan ese sentimiento de injusticia con una situación colectiva de posición de clase que tenga algún efecto aglutinador o que brinde un apoyo a la construcción de una identidad colectiva.

La vida en el precario se percibe más en clave de exclusión, que como un elemento sobre el cual se construya identidad; se percibe inclusive como una pérdida de la ciudadanía, casi como una pérdida de la condición humana misma. Esta vinculación de la pérdida de la ciudadanía o de la humanidad se relaciona con la imagen del delincuente como una no persona, una persona externa al sistema socioeconómico, y la equiparación que se realiza a través de los medios de comunicación y de otros mecanismos de construcción social de la identidad, o de las

autoridades judiciales, entre gente en estado de pobreza o indigencia con la ejecución de actos delictivos.

“Caer en un precario, te quita la sociedad, la gente no te ve, porque ya la visión que vivir en un precario por pobre o porque no puede cambiar. Ahora la gente piensa que si vivís en un precario es porque sos un delincuente. La gente no [se pregunta]: –¿vamos a ver qué fue lo que le pasó, por qué está ahí? y le ayudamos a salir de una vez–, porque no lo hacen. Más bien, al contrario, te insultan y te dicen, en mi caso, una vez me tocó que una señora, de aquí mismo de la alameda, me trató de *muerta de hambre* y me dijo que *éramos un montón de delincuentes* y yo no quise discutir con ella, porque aquí hay familias que, como en todo lado, hay delincuentes; como en casas de cemento. Entonces, cuando caes en un precario, la gente te desprecia, y no porque seas pobre, y no es porque no podás, es porque piensan que sos una mala persona, una delincuente, que solo vive gente mala, *chusma* le dicen, solo la *chusma* viven en precarios, no la gente pobre...” (González, 2016, entrevista personal)

En el relato de Ariadna se puede ver con claridad los efectos directos de la estigmatización social, asociada con la condición de habitante en precario. Sin embargo, a pesar de la estigmatización que pueda vivir la población que habita Rivera del Río, y a pesar de la insistencia de las principales dirigentes de la comunidad de la intención de cambiar pronto la condición social en la que se encuentran, existen diferencias significativas en la forma en la cual perciben la situación de vivienda en precario en la que se encuentran: hay una parte de la población, sobre todo la de origen costarricense, que tiene una percepción de haber “caído en desgracia”, sienten la situación de vivir en el precario como una condición vergonzosa y se sienten rechazados por familiares y antiguos amigos por vivir en el lugar en donde viven; en muchas ocasiones tienen la necesidad de mentir sobre el lugar en donde viven, por ejemplo a la hora de conseguir trabajo. También sintieron, como ya se planteó, que habían llegado a vivir a un sitio demasiado inseguro, al menos al principio, la mayoría de la gente considera que la situación de la delincuencia ha venido mejorando en los últimos meses.

Para otras y otros habitantes de Rivera del Río, sobre todo a la población de origen nicaragüense, llegar a vivir en ese lugar ha sido una “bendición”, porque les ha permitido más tranquilidad, incluso consideran que el lugar es menos peligroso que el lugar de donde provienen (Los Cuadros, Los Guido, por ejemplo). Por otro lado, existe la valora-

ción del lugar en donde vivían antes, pues en muchas circunstancias podían estar pagando un alquiler mensual en zonas que no reunían tampoco condiciones muy adecuadas para vivir, incluso, en términos de seguridad personal.

Mas no siempre fue así: Ariadna relata que al principio la cuestión de la delincuencia era muy complicada en el lugar, y que poco a poco se fue calmando; cuenta que los primeros días tenía mucha angustia y le daba mucho miedo dejar solas y solos a las niñas y niños, cuando tenía que salir a trabajar o realizar cualquier diligencia, o que hacían turnos para dormir entre ella y su hijos:

“Yo duré tres meses sin dormir, así dormía por raticos, de hecho levantaba a alguno de los chiquillos para que vigilara, para que me avisaran por aquello que alguien quisiera meterse, para que no me agarraran dormida [...] Un tiempo en que todo era terrible. En octubre, bueno en todo el mes de octubre, algo fatal: al frente de mi casa tengo huecos, donde dispararon. Un día recogí 27 casquillos de armas de escopeta, de esas grandes, y venían aquí y se agarraban entre ellos, y venía otro bando detrás corriendo, no les importaba, que uno estuviera ahí en la pasada.” (González, 2016, entrevista personal)

Hay una diferencia significativa entre el proceso fundacional de Rivera del Río y otros procesos de fundación de precarios, pues en este caso la participación de la delincuencia organizada juega un papel decisivo en la creación del asentamiento. Lo usual en las tomas de tierra era que la gente se organizara, buscara una tierra con condiciones favorables y “se metieran”; entonces primero se organizaban y luego realizaban la toma. En otras ocasiones, algunas familias se metían en un terreno y esto generaba un proceso masivo, ante la falta de respuesta, en estos casos la gente primero se metía y luego se organizaba. Usualmente esto ocurría de la mano de organizaciones político partidarias, que en cierta forma prometían o insinuaban que si el partido político electoral resultaba victorioso a la gente se le iba a dar pronto solución a su problema de vivienda. Entonces, en cierta forma los mismos partidos políticos, en la época en la cual predomina el bipartidismo, utilizaban la toma de tierra como una forma de hacer clientelismo político y esa práctica tiene mucho que ver con la creación de asentamientos informales en condición de precario. (Salinas, 2016, entrevista personal)

Sin embargo, Rivera del Río refleja otro fenómeno, que no está relacionado con el clientelismo político, sino más bien con el crimen organizado. De hecho en todos los relatos se puede constatar la relación

de la delincuencia organizada²¹ con la fundación del asentamiento, esto también se pudo observar en la investigación realizada por la Fiscalía de Pavas: las y los pobladores de Rivera del Río compraron los terrenos de manera irregular, compraron una especie de derecho de meterse al terreno, esto queda planteado en varios de los relatos, pero el de Ariadna es el que plantea de manera más clara la relación entre delincuencia organizada y el origen del asentamiento de Rivera del Río.

“Ariadna: Cuando llegue aquí, yo le compré a un muchacho; este terreno no era el mío; y para comprarle me tuve que endeudar en el trabajo que tenía, entonces yo saqué un préstamo, y le compro; pero no puedo construir porque no tengo el dinero, me toca quedarme un tiempo así, solo con el terreno comprado.

Adrián: ¿En cuánto compró el terreno?

Ariadna: Yo el terreno lo compré en 700 mil colones primero. Entonces, cuando vengo mi terreno no está, ya hay otra familia, él ya lo había, estaba una familia ya construyendo; entonces vengo yo y le digo que cómo es posible, que ese era mi terreno, que cómo hizo: –yo tengo mi papel aquí que usted me firmó–, y me dijo: –díay sí, pero usted nunca vino, y usted sabe cómo es acá, todo el mundo está necesitado de la vivienda y la gente está urgida de casa y usted no vino, salada–. Y le digo: –¡Cómo usted me va a hacer eso–, [entonces me dice:] –Vea, hagamos una cosa: agarre ese terreno de arriba, pero eso sí, tiene que venirse de una vez porque yo, si usted no se pasa de una vez, yo no le doy garantía. El terreno ese era de una persona que estaba en la cárcel, pero entonces yo me arregló con él, tranquilidad.– –Bueno entonces hágame otro papel, otro documento–, le dije yo. Entonces ya me lo hizo. Cuando ya tenía cierto tiempo de estar aquí, díay, ¡no apareció el verdadero dueño!, supuestamente me vino a exigir que yo le devolviera el terreno que era de él, y le digo yo: –no es que es mío, yo lo compré– y le enseñé los papeles. –Yo no sé pero usted me lo va a devolver–, me dijo. Venía con un montón

21 Nos referimos sobre todo a la venta y distribución de drogas, no se puede confundir este fenómeno con el problema de la criminalización de la protesta social y de los líderes comunales o luchadores sociales, impulsada como política de Estado por el gobierno de Luis Guillermo Solís y gobiernos anteriores; entre los casos de criminalización de la protesta social destaca el de Orlando Barrantes, dirigente social de la zona de Guápiles, uno de los principales dirigentes del Foro Nacional de Vivienda que es condenado a 12 años de prisión en setiembre del año pasado por coordinar un grupo que organiza una protesta en el año 2.000. En este momento el caso se encuentra en apelación y a Barrantes se le mantienen medidas cautelares.

de gente armada, hombres ahí armados que venían dispuestos a sacarme, entonces yo me quede así, callada unos minutos, y luego le dije: –si querés echarme, echame, el problema es que yo no tengo a donde irme con mis hijos, porque yo estoy endeudada, saque un montón de plata prestada para comprar aquí, y no tengo adonde irme, así que queda en su conciencia.– El hombre se quedó en silencio, se agachó e hizo que escribía en el suelo, un gran rato, como media hora y luego se puso de pie, se me acercó y me dice –vea doña, quédese ahí tranquila, no la voy a sacar, tranquilidad, no se preocupe, no la voy a sacar con sus hijos ahí, tranquilidad total; es más, si alguien le hace algún problema por cualquier cosa me avisa y yo le ayudo”. Y se fue, y gracias a Dios, nadie más me volvió a molestar por ese tema.” (González, 2016, entrevista personal)

Probablemente, el sitio fue tomado inicialmente por bandas dedicadas al trasiego de drogas que en algún momento les pareció buena idea lucrar con la venta de tierra²², como queda planteado en el relato de Ariadna, hay terrenos que fueron vendidos varias veces, además los precios eran antojadizos: “Estaba como caprichoso, porque a unos les daba más barato, a otros más caro entonces no había un monto exacto por cada lote, en algunos se alteraba mucho el precio, en otros era más accesible” (Carballo y Guerrero, 2016, entrevista personal). Ariadna le da un peso muy grande al papel de la policía en la transformación de Rivera del Río, ahora un sitio más seguro para vivir, sin embargo, se considera que el hecho de que se desarrollara este proceso de venta de lotes y que llegaran familias con trabajos, inestables, mal pagados, pero con otras dinámicas, resultó una de las principales razones por las cuales el lugar se transforma poco a poco en un barrio popular, en condiciones difíciles y complicadas, pero en donde mal que bien es un sitio habitable. Lo anterior es importante señalarlo porque existe, como lo plantean con claridad algunos relatos, una imagen estigmatizante de los asentamientos en precario y se asocia directamente con la delincuencia; sin embargo, al menos en este caso en particular la llegada de pobladoras y pobladores transforma el espacio físico y social de Rivera del Río.

²² Es posible que esta relación entre delincuencia organizada y fundación de asentamientos en precario se esté replicando en otras partes, aunque no podemos generalizar a partir de este caso específico, es una cuestión que se podría indagar en otras investigaciones, pues existen otros indicios de esta relación, por ejemplo en varios diarios de circulación nacional publicaron recientemente una noticia de que estaban a la venta, de forma ilegal, 23 lotes propiedad del Estado, en Barra de Tortuguero y San Francisco de Limón, que es una forma más sofisticada de hacer lo mismo que se hizo con los habitantes de Rivera del Río (Avendaño, 2016) y (Gray, 2016).

Existe cierto trabajo comunal de realización de mejoras, aunque también existe un sentimiento generalizado de que resulta trabajo y dinero perdido, pues las y los habitantes sienten que pueden ser desalojados en cualquier momento. Aun así, es claro que la toma del territorio de Rivera del Río es representativo de la disputa por el espacio urbano de un sector de la clase obrera: inicia con la utilización del espacio por bandas que se dedican a actividades ilícitas, que deciden en algún momento lucrar con los terrenos y venderlos a familias que consideran que ya no pueden seguir pagando un alquiler mensual, empujados por las difíciles condiciones socioeconómicas derivadas del impacto de la crisis económica mundial sobre la situación concreta de la economía costarricense; estas familias que compran los derechos de habitar en la zona poco a poco van transformando el lugar donde viven y las condiciones habitacionales del lugar, sobre todo en términos de mejoras del terreno: construcción de gradas y alamedas para acceder al terreno; acceso a servicios básicos, sobre todo agua y luz; también de manera más o menos indirecta, impactan sobre las condiciones de seguridad de la zona, pues el hecho de que existan familias obreras en el territorio termina obligando a las bandas que se dedican a actividades ilícitas a moverse a otros lugares. Para algunas familias vivir en Rivera del Río representa la culminación de un largo proceso de migración, algunas veces originado en Nicaragua, en donde la familia pasa a vivir primero en las zonas rurales, trabajando como peones agrícolas, al inicio de forma estacional, luego de formas más permanentes; para luego considerar desplazarse a vivir a zonas más urbanas en donde consideran que existen más oportunidades.

Es decir, a pesar de “la toma de tierra”, el asentamiento en precario, queda fuera de la “noción simbólica de código urbano” y es un espacio marginado y marginalizante, que coloca a la población que vive en el mismo en una situación de vulnerabilidad social, constituye un espacio geográfico de lucha, una expresión de la disputa de la lucha de clases en el territorio mismo, que adquiere una dimensión concreta en tanto la comunidad existe, que genera una reacción del Estado, que procura desalojar a las y los pobladores de Rivera del Río, mientras estas y estos generan estrategias de resistencia, liderazgos políticos y un incipiente discurso ideológico, así como una cierta noción de identidad, aunque todavía más bien difusa, como se verá con más detalle en el siguiente apartado.

FORMAS DE ORGANIZACIÓN, MARCOS INTERPRETATIVOS Y MARCOS DE ACCIÓN COLECTIVA

Las formas de organización son más bien rudimentarias y mucha de la responsabilidad recae sobre la principal dirigente; el reconocimiento de su papel dirigente es claro, los demás miembros del comité de vivienda hablan con mucho respeto de su compromiso con la lucha por vivien-

da, se da un tipo de liderazgo, que en términos weberianos podríamos categorizar como carismático (Weber, 1964). Esto tiene como correlato que a la principal dirigente se le recargan tareas y responsabilidades, algunas de las cuales trascienden la labor de lucha por vivienda propiamente dicha; como por ejemplo resolver conflictos entre las y los pobladores, organizar actividades festivas, como la fiesta de Navidad para las niñas y los niños de la comunidad. Casi siempre ella es la que asiste a las reuniones del Foro Nacional de Vivienda y es la que organiza a la comunidad cuando tienen que ir a los juzgados o a la Asamblea Legislativa, para realizar un reclamo, trámite o pedir apoyo para el movimiento. Cuando se le pregunta a Ariadna si la comunidad está organizada, ella responde que considera que no, pero sobre todo porque a ella le gustaría que la gente se preocupara por arreglar el lugar, invertir en mejorar “las entradas” y los senderos comunales:

“No, no estamos organizados. Como estamos así que nos van a desalojar, entonces la gente tiene miedo de organizarse, tiene miedo de invertir, entonces no estamos organizados, no estamos muy de acuerdo, digamos no caminamos al mismo lugar [...] si hay que arreglar una entrada, una calle, no todos aportan, no todos se ponen de acuerdo, si vamos a estar un día aquí, porque todos lo necesitamos, no en esa parte, no hay organización. [...] Si. Me han apoyado bastante. Si yo los llamo y les digo vamos a hacer esto y esto y [ven que] no tengo un grupo de apoyo, [me dicen] –si Ariadna, nosotros vamos–, pero al final de cuentas, si me siento sola en ese sentido porque no tengo el apoyo de nadie, digamos en ese sentido. Solo hay una señora que cuando ella puede, pero en ese sentido, que haya un grupo bien organizado, no lo hay.” (González, 2016, entrevista personal)

Aunque parezca un poco contradictorio, lo que se interpreta de este pasaje es que Ariadna se siente poco apoyada en las labores de organización y de intervención en espacios de participación política, como el foro de vivienda, o en las reuniones, o cuando se requiere planificar tareas o realizar cuestiones logísticas u operativas. Sin embargo, en varios de sus relatos queda más que claro que tiene mucho poder de convocatoria y que las y los vecinos se movilizan cuando ella se los solicita, además de que tiene redes de comunicación, en las que las niñas y los niños tienen un papel importante; se pudo observar el mecanismo en funcionamiento un par de veces²³. En el siguiente pasaje se puede apre-

23 Una ocasión, cuando convocó a una asamblea en un terreno que queda frente a la comunidad, que sirve como una especie de Salón Comunal al aire libre, entre otras cosas para presentarme a la comunidad y para solicitar permiso para realizar el proceso de

ciar también la función de dirección que ejerce y la respuesta positiva que recibe de la comunidad. Ariadna explica su liderazgo en función de que es la persona que ha sabido que hacer en momentos de tensión:

“Porque en determinados momentos, cuando han habido amenazas de desalojo, gracias a Dios que me ha dado la capacidad de poder encontrar a las personas indicadas para que nos ayuden y no ocurra un desalojo, entonces ellos han visto que yo he tratado de hacer las cosas bien, hay gente que me apoya, y que me escucha. Que si yo los llamo, están ahí, en momentos de tensión. [...] Si usted les pregunta quien lidera, todos le dicen que yo [...] por el momento, las cosas están así, pero si se fuera a tomar una decisión, lo mandan para donde mí. Dicen que lo haga yo, porque como ellos que no tienen tiempo, o lo que sea. Ellos me reconocen a mí como líder.” (González, 2016, entrevista personal)

Este liderazgo es reconocido por gente que está en el comité de vivienda, como otra gente que podríamos decir, más de base. Usualmente alguna gente de la comunidad la acompaña a realizar las gestiones, pero no siempre es la misma. Existe un comité de vivienda democráticamente electo, pero no funciona de manera regular, sobre todo porque las personas electas no tienen tiempo para dedicarle a las labores, no hay reuniones periódicas y usualmente reaccionan a los acontecimientos y a las convocatorias urgentes.

“Se supone que hay una junta directiva. Cuando empezamos [a organizarnos] a raíz de un problema de luz que hubo, llego una carta de la Fiscalía [diciendo] que nos iban a desalojar; en ese momento yo fui y me presenté, ¡diay!, por qué me llamaron a mí, porque preguntaron quién estaba a cargo, entonces ellos dijeron Ariadna. Entonces yo fui, y todo, y me dijo el Fiscal que sí, que teníamos la orden de desalojo, pero que él todavía no la había enviado porque él no sabía, que iba a estudiar el caso: [yo le dije:] –nombres si ahí lo que hay son puras familias, si quiere yo se las traigo todas–, y él se rio, seguro pensó que era mentira, –como esa mujer va a mover a tanta gente–, y en verdad le llevé a todas las familias, un miércoles por cierto, vieras qué susto [que se llevó] el Fiscal; porque le digo yo, y él me dice: –tráiga-

investigación, y explicarle a la comunidad un poco el proceso; la otra ocasión fue durante los preparativos para la fiesta de navidad, para la cual Ariadna me solicitó ayuda y a un grupo de personas voluntarias que se acercaron a colaborar con la comunidad a partir del trabajo de investigación.

las-, y yo: –claro que se las voy a traer– y entonces cuando él vio que yo tenía a ese montón [de gente] yo a todos los cité, les dije nos vemos a tal hora ahí en la Fiscalía, y todo mundo, por sus propios medios aparecieron, a como pudo llegó y ese fiscal, ese día: –pero qué es este montón de gente–; –di las familias que viven ahí– [le contesté]. Entonces él empezó a llenar los datos, a tomar la información y todo, y se dio cuenta que no, que lo que había aquí había eran familias: –yo me llamo fulano de tal y este es mi núcleo familiar–. Yo ya había enumerado las casas, entonces estaban enumeradas todas, y entonces se dijo yo vivo en la casa número 30, digamos, y mi familia es tal, y así. Él hizo el estudio y se dio cuenta que delinquentes no habían, entonces era como un –alto, suave un toque, entonces vamos a tener que estudiar qué fue lo que pasó acá–; todos dimos la misma versión: que nos engañaron, que nos timaron, que nos vendieron terrenos que en realidad no eran para construir. Entonces el Fiscal dijo: –¡No, no!, vamos a hacer un estudio, más minuciosos–, como quien dice. Entonces por eso se ha alargado [el proceso].” (González, 2016, entrevista personal)

A pesar de que ni Ariadna ni las demás personas entrevistadas reconocen con claridad la existencia de una organización, esta sí existe; la mayoría de las y los pobladores interpretaron la pregunta en sentido de mejoras urbanas y por eso consideran que no están bien organizados, sin embargo, incluso en ese sentido, están mejor organizados que otras comunidades, pues las y los vecinos se han puesto de acuerdo para dar pequeñas luchas, por la electricidad por ejemplo²⁴; o para realizar mejoras urbanas, como la construcciones de gradas y el remozamiento de los trillos de la comunidad; también se organizan para cortar el pasto en la parte de arriba, a la entrada del asentamiento. Existe un liderazgo claro, al que se le delega la atención cotidiana de los asuntos, pero también existe una respuesta de la comunidad a los llamados de movilización, sobre todo si se trata de detener un posible desalojo. Este liderazgo se ha ido desarrollando sobre todo en la práctica, ya que tiene que ver más con la efectividad práctica, con un saber qué hacer y cómo hacerlo; se relaciona con la valentía con la que se enfrenta a las autoridades, con el sacrificio de tiempo y en algunos casos hasta de recursos personales, en pro de la consecución de los objetivos comunes, aunque

24 Cuenta Ariadna que cuando llegó a vivir al asentamiento había una persona que “se había colgado” del cable de la electricidad y que le cobraba 10.000 colones por semana a varias familias por proporcionarles fluido eléctrico y que en algún momento varias compañeras no pudieron seguir pagando una tarifa tan elevada, por lo que se organizaron para conseguir la conexión eléctrica por otros medios.

también se entrelaza con cierta claridad discursiva, la cual no se relaciona directamente con los elementos de la lucha en cuestión, sino que puede asociarse a elementos de sentido común, incluso algunos de contenido religioso que son aceptados por toda la comunidad como posiciones políticamente correctas. Este desarrollo de dirigencias locales termina siendo un acervo que es aprovechado por la organización nacional, pues facilita por ejemplo las labores de convocatoria, pero también muchas veces las principales dirigentas comunales colaboran en labores logísticas y administrativas de la organización superior, en labores y tareas que van más allá de las que derivan del compromiso específico con las bases que lideran. También existen mecanismos de comunicación interna, de los cuales participan activamente las niñas y niños de la comunidad. Esta organización que se ha ido acomodando de manera más o menos espontánea puede mejorarse por medio de la planificación, de modo que haya una distribución de cargas más adecuada, que no se centralice tanto trabajo en una sola persona y que se puedan lograr metas y objetivos a mediano y largo plazo.

MARCO DE INJUSTICIA

La mayoría de la gente considera que la situación en la que se encuentran es injusta, sin embargo el marco de injusticia es incompleto, pues no tiene articulado en el discurso una explicación compartida sobre cómo se genera esta situación de injusticia, por lo tanto esta percepción de injusticia se concreta en el simple deseo de vivir en otro lugar o de manera distinta y casi siempre se elabora y se construye de manera individual; además consideran que cada familia debe salir de la pobreza y de la situación en la que se encuentra de manera individual, por lo que lo colectivo y lo organizativo tiene un objetivo muy concreto: evitar el desalojo al menos mientras exista una solución de vivienda alternativa:

“Siento que sí, no es justo que mis hijas estén aquí a la orilla, a la alameda de este río verdad, donde estamos en un lugar de riesgo, de alerta amarilla, ¿me entiende? Yo siento que sí, pero día y, uno lo hace a veces por necesidad de no irse a meter de viaje debajo de un puente a como hay muchas familias. (Corrales, 2016, entrevista personal)

Para Betty, quien debería resolver el problema es el gobierno, sobre todo en los casos como el de ella, que tiene un familiar con problemas de salud y que no puede trabajar. La injusticia para Betty se relaciona más con la falta de ayuda, y con la situación geográfica en la que viven, esto lo expresan también de manera muy similar otras vecinas y vecinos. (Corrales, 2016, entrevista personal). Tito considera que la situación de

injusticia se deriva de problemas de corrupción, el problema es que hay gente millonaria, involucrada en la política que se roba el dinero que podría servir para ayudarle a la gente pobre. (Sandí, 2016, entrevista personal). Hay una cierta intuición de que la forma de funcionar de las cosas empobrece a la gente, pero no queda completamente claro, en el discurso, como ocurre esto, al parecer se deriva del mismo robo y los mismos abusos de la gente que llega a “la política”. Sin embargo, Tito expresa con mucha más claridad que el problema de desigualdad y la injusticia de la situación no pasan por la cuestión geográfica, o simplemente la falta de ayuda gubernamental, sino que tiene que ver con un problema de distribución del poder y la riqueza, que “empobrece” a la gente. En el caso de Ariadna, la injusticia la ve de una forma muy particular, y lo relaciona con su condición de género y su obligación de “salir adelante” con su hijo y sus dos hijas. Cuando se le pregunta a Ariadna si los otros casos son parecidos al de ella, es enfática en plantear que todos son problemas distintos, pero que tienen un factor común: por alguna u otra circunstancia a la gente no le alcanza para pagar el alquiler, y que el problema es el elevado precio de los alquileres. (González, 2016, entrevista personal)

Como se puede apreciar, con distintas formas de interpretar el asunto, la noción de injusticia está relacionada con la situación de no tener acceso a una vivienda en mejores condiciones, lo cual es interpretado de manera distinta por diferentes sectores de la población que habita en el precario, pero es la característica común, lo que en cierta forma los identifica y los une en una misma situación de penuria y necesidad. Por lo tanto, en buena medida, la identidad colectiva se construye a partir de un sentimiento de carencia que se considera injusta, hay una especie de consenso en que nadie debería tener que vivir en esas condiciones. Cabe agregar, que las malas condiciones varían de una entrevista a otra: algunas personas resaltan la cercanía al río y el riesgo de derrumbe, otras ponen el énfasis en la estigmatización social; otras, en los riesgos sociales o las dificultades que se derivan de habitar en un precario. Por lo tanto es una condición común que da identidad, pero que resulta contradictoria, que genera en algunas ocasiones un impulso por defender el lugar de proveniencia, pero también es una cuestión penosa, que avergüenza, elementos que aparecen en una misma entrevista, inclusive. Aquí la noción de injusticia se enlaza con la construcción de identidad, que se analiza con más detalle en el siguiente apartado.

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

Tampoco se expresa con claridad en las narraciones una explicación colectiva de su circunstancia, no tienen una explicación común de su situación, probablemente porque es una población con orígenes dis-

tintos y muy heterogéneos. Sin embargo, sí se ha ido construyendo un cierto sentimiento de colectividad, muy mediado por la lucha por vivienda, la cual le da nombre al espacio y lo delimita geográficamente; a partir de la lucha por vivienda, Rivera del Río adquiere una identidad comunitaria y barrial, que es palpable a través de la necesidad autorreferencial: la primera lucha que da la comunidad de Rivera del Río es por el nombre; por ejemplo, Betty así lo entiende y expresa con mucha convicción: “Ante el gobierno está que existimos, que esto es Rivera del Río, ante el Ministerio de Vivienda. Casualmente yo estuve en reunión con Ariadna en el Ministerio de Vivienda, pa que vean que somos gente que existimos, y que hay muchos niños costarricenses aquí y que sí necesitan la mano de alguien que los apoye y [...] los levante.” (Corrales, 2016, entrevista personal)

La importancia de este proceso de dotar de nombre al lugar también es resaltada por Ariadna:

“Me llevé muchas mamás, un día me llevé a una, otro día a otras, y fuimos a muchas reuniones, montoneras de reuniones ahí, solicitando que nos firmaran un documento, para que reconocieran que nosotros existíamos, porque primero era que nos reconocieran como gente, porque no teníamos nombre, nosotros somos del asentamiento Rivera del Río: –adonde vayan digan que somos de Rivera del Río, no somos el precario Bribri–; nosotros colindamos con tres precarios, [...] Santa Lucía, Loma Linda y Bella Vista, aquí a la par. Nosotros no pertenecemos a Loma Linda ni Bella Vista, nosotros somos Rivera del Río, para que usted no los mezcle, –nosotros somos diferentes–, yo les decía a ellos. Entonces eso, empezó. Lo primero fue darle un nombre, que no lo tenían, identificarnos.” (González, 2016, entrevista personal)

La reivindicación del nombre tiene un carácter fundamental para Rivera del Río, porque le imprime un carácter fundacional, que refuerza el incipiente proceso organizativo y le brinda a la comunidad una construcción colectiva, un nosotros, que genera colectividad y permite o facilita el trabajo conjunto.

Uno de los elementos que contribuye con la cohesión y con la identidad del grupo es la profunda religiosidad de muchas de las personas que participan, sin embargo este es uno de los elementos inesperados del estudio, por lo que no se le prestó suficiente atención; al respecto, da la impresión de que mucha de las y los entrevistados practican religiones protestantes; sin embargo no es algo sobre lo que se profundizara ni estaba presente en los instrumentos de recolección de información, por lo tanto se anota como un elemento por tomar en

cuenta a la hora de trabajar la construcción de identidad de las organizaciones que luchan por vivienda.

UN CICLO DE MOVIMIENTO SOCIAL QUE ESTÁ INICIANDO

Muy brevemente se quieren resaltar algunos elementos que arroja el análisis inicial de las entrevistas y del proceso de Investigación Acción Participativa. Primero, que se considera que el caso de Rivera del Río es un buen reflejo de las presiones que sufren los sectores más explotados y empobrecidos de la clase trabajadora, y retrata sus carencias y sufrimientos; así como sus dificultades para organizarse, resistir y luchar por el derecho a una vivienda digna. El asentamiento en precario se convierte en un espacio segregado, que, como plantea González (2008), quedan fuera de la “noción simbólica de código urbano”. Sin embargo, ese espacio segregado es un lugar propicio para que se “cocinen a fuego lento” los marcos de acción colectiva de los grupos subalternos, sobre todo cuando la gente se siente identificada a partir de la carencia, la pobreza y la necesidad; en ese sentido, a partir de lo observado en Rivera del Río, hay concordancia con los planteamientos de Coto (S.F.) en cuanto a que la identificación y la identidad se relacionan con el anhelo por vivienda propia, la autoconstrucción como solución a la falta de vivienda, la necesidad como fuerza moral.

También se logra constatar que la población que se ve obligada a buscar un asentamiento en precario para poder sobrevivir es una población que no se encuentra marginada del sistema socioeconómico, sino que en su mayoría se inserta en los estratos laborales de los sectores económicos deprimidos del sistema capitalista o de los sectores que paga los peores salarios o que tienen las peores condiciones laborales; el sector de seguridad privada, el sector de la construcción²⁵ o el de los oficios domésticos. Por lo tanto, en muchos casos se presentan situaciones de empleo precarizado, que se entremezcla con la condición de vivienda precarizada y se convierten en condiciones sociales que se retroalimentan mutuamente.

Por otro lado, es importante anotar que sí se logra encontrar una relación entre el impacto de la crisis económica y las situaciones de necesidad de vivienda que orillan a varias familias a buscar ocupar un terreno; hay una relación entre las situaciones laborales precarias y la imposibilidad material de garantizar el pago de un alquiler sin comprometer la supervivencia de la familia, ya que, como queda planteado

25 Aquí se evidencia una contradicción enorme, paradójica: en una de las observaciones de campo, se pudo escuchar la conversación de un par de obreros de la construcción que hablaban con cierta tristeza sobre lo precario de su condición laboral, pero luego comentaban con mucho orgullo que habían trabajado en la construcción de grandes edificios: nuevos y lujosos *malls*, y nuevos edificios de apartamentos.

en varias entrevistas, hay que decidir entre pagar el alquiler y comer, y como lo segundo es impostergable, se busca una solución alternativa a la necesidad de techo. Como no se ve una pronta recuperación de la crisis económica en Costa Rica, como consecuencia de la profundización de la crisis que provoca la caída de los mercados bursátiles en China, se esperan más movilizaciones por vivienda y la conformación de nuevos asentamientos en precario.

Por último, se considera que existe un proceso de fortalecimiento de las organizaciones que luchan por vivienda, relacionado con la fundación y desarrollo de una organización nacional a partir de otras organizaciones regionales, además de por el surgimiento de nuevos asentamientos en precario que, como Rivera del Río, desarrollan liderazgos, procesos de interpretación y transcripción, así como mecanismos incipientes de organización política. A pesar de que para el caso de Rivera del Río no se puede observar con claridad aún procesos de transcripción y de adecuaciones del discurso, por tratarse de organizaciones recientes con niveles de organización incipientes y sin elementos discursivos propios altamente desarrollados: por último, se percibe el fortalecimiento de la organización mediante la concreción de nuevos liderazgos políticos que surgen al calor de las luchas, los enfrentamientos y las tácticas defensivas que idean y organizan las y los habitantes de asentamientos en precarios.

BIBLIOGRAFÍA

- Acón Hernández, Ana Cecilia; Coto Albán, Sonia; Chavarría Mora, Ana Luz; Hernández Gutierrez, Leyda María; Ulate Chaves, Yamileth 1987. "Análisis administrativo del Programa de Vivienda Oscar, y perspectivas del Trabajador Social en la Administración De Proyectos De Vivienda De Interés Social." Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ci. San José, CR: Universidad de Costa Rica. (Mimeo).
- Alarcón Alba, Angélica. 1991. "Las Luchas Sociales por la vivienda en Los Guido." Trabajo final de investigación sometido a la consideración del Programa de Estudios de Posgrado en Maestría de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. (Mimeo).
- Argüello, Manuel 1981 *Los más pobres en lucha*. (Heredia, CR: Editorial de la Universidad Nacional).
- Arias Jiménez, Elvia; Bolaños López, Bernarda; Oviedo Alfaro, Marlene 1987 "Análisis del proceso burocrático en el sistema de

- Adjudicación de Viviendas de Interés Social IMAS-INVU” *Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales.* . San José CR: Universidad de Costa Rica.(Mimeo).
- Avendaño, Manuel 2016 “Página web intenta ‘vender’ 23 propiedades que pertenecen al Estado” *La Nación Digital* (San José, Costa Rica) 26 de febrero de 2016 <http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Pagina-puso-venta-propiedades-pertenecen_0_1545045547.html> acceso 27 de febrero de 2016.
- Bottino Bernardi, Rosario 2009 La ciudad y la urbanización. *Estudios Históricos - CDHRP*- Agosto de 2009 - N° 2 ISSN: 1688, 1-14.
- Castells, Manuel 1992 *Problemas de investigación en sociología urbana* (México: Siglo XXI).
- Castells, Manuel 2008 *La cuestión Urbana* (México: Siglo XXI).
- Castro Arce, Oliva, Cruz Vargas , Heidy; Chaves Valerio, Alba Luz; Quesada Barrantes, Zaida; Sánchez Pacheco, Viria 1948 “Características de las acciones realizadas por las organizaciones de los asentamientos nacidos por invasión del Área Metropolitana de San José en función de la adquisición de vivienda” Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Tr. San José, CR: Universidad de Costa Rica. (Mimeo).
- Chamorro Umaña, Isabel; Rodríguez Rodríguez, Melba y Zúñiga Bustos, Juanita 1988 “Movimientos Urbanos Alrededor del Problema de la Vivienda en Liberia, Guanacaste” Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales. San José, CR: (Mimeo).
- Cotto Morales, Lilliana. (S.F). “Rescates de terreno, movimientos sociales y cultura política: un marco teórico” S.D. <<http://www.encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org/BIBLIOGRAFIA/PRACTICASDEINVESTIGACION/Rescates%20de%20Terreno,%20Movimientos%20Sociales%20y%20Cultura%20Politica.pdf>> acceso el 2 de junio de 2015.
- Fiscalía de Pavas 2014 Legajo de investigación, expediente # 14-300.283-PE .
- Garita, Andres; Chacón, Krisia 2015. “Oficiales detienen a seis mujeres por bloquear el paso en Puntarenas” *La Nación Digital* (San José, Costa Rica) 27 de febrero de 2015.<http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Detienen-manifestantes-bloquearon-paso-Puntarenas_0_1472252876.html> acceso 15 de diciembre de 2015.

- Goffman, Ervin 1974 *Frame Analysis: An essay on the organization of experience* (Londres: Harper and Row).
- González Ordovás, María José 1998 “La cuestión urbana”. *Revista de estudios políticos (Nueva Época)* (101), 303-333.
- Gramsci, Antonio 1970 *Introducción a la filosofía de la praxis* (Barcelona: Edicions62).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos 2013 *X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda: Principales indicadores sobre asentamientos informales* (San José, CR: INEC).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos 2011 *Costa Rica: Población total proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según provincia, cantón, distrito y sexo* INEC Costa Rica: <<http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx>> acceso el 11 de febrero de 2016.
- Jaén España, Adrián 2013 “Movimientos sociales y solidaridad política: La participación de la izquierda costarricense en la Revolución Sandinista” Trabajo de grado para optar al título de Maestro en Ciencias Sociales. Guatemala: FLACSO (Mimeo).
- Lara Poveda, Silvia 1994 “Feminismo y cambio social: el caso de las mujeres dirigentes en la lucha por vivienda en Costa Rica” Trabajo final de investigación sometido a la consideración del Programa de Estudios de Posgrado en Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, San José, CR: Universidad de Costa Rica. (Mimeo).
- Lenin, Vladimir 1973 *Obras, Tomo V (1913-1916)* (Moscú: Progreso).
- Liberoff Nemirovsky, Jenny y Saborio Morales, Rebeca 2012 *Informe de actualización de la Base de datos de asentamientos en condición de precario y tugurio de Costa Rica, al año 2012.* (SD: MIVAH).
- Lozano, Wilfredo 1997 *La urbanización de la pobreza. Urbanización, Trabajo y Desigualdad Social en Santo Domingo.* República Dominicana: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Martí, Joel 2000 “La investigación-acción participativa. Estructura y fases” En Villasante, Tomás; Montañés, Manuel; Martí, Joel (coord.) *La investigación social participativa (Colección construyendo ciudadanía)* (págs. 50-73). (Barcelona: Ed. El viejo topo).
- McAdam, Doug 1999 *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970* (Chicago: The University of Chicago Press).
- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (S.F.). *Biblioteca.* Obtenido de Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos:

- ⟨http://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Asentamientos_en_Precario_Dentro_GAM_2011-2013.pdf⟩ acceso 11 de enero de 2016.
- Morales Ramos, R. 2009 El impacto de la crisis económica mundial sobre la economía costarricense: Los efectos macro económicos. *Economía y Sociedad* (35 y 36), 61-73.
- Morris Gray, Krisia “Denuncian venta ilegal de 23 lotes del Estado” *Diario Extra edición digital* (San José, Costa Rica) 27 de febrero de 2016, de ⟨<http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285417/denuncian-venta-ilegal-de-23-lotes-del-estado>⟩ acceso el 27 de febrero de 2016.
- Programa Estado de La Nación 2010 *Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible* (San José, CR: Programa Estado de la Nación).
- Programa Estado de La Nación 2011 *Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible* (San José, CR: Programa Estado de la Nación).
- Programa Estado de La Nación 2012 *Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible* (San José, CR: Programa Estado de la Nación).
- Ramírez Saíz, Juan Manuel 1984 “Los movimientos sociales urbanos en México: Elementos para una caracterización” *Nueva Antropología* vol IV (24), , 21-34.
- Riechman, Jorge y Fernández Buey, Francisco 1994 *Redes que dan libertad: introducción a los nuevos movimientos sociales* (España: Paidós).
- Rubio García, Ana 2004 “Perspectivas teóricas en el estudio de los movimientos sociales” *Circunstancias*. Año I (3), SD.
- Sancho, Manuel 2014 “Ante protesta por vivienda, Gobierno defiende atención a demandas en ese tema” *CRHoy.com* (San José, Costa Rica) 2 de Setiembre de 2014: ⟨<http://www.crhoy.com/ante-protesta-por-vivienda-gobierno-defiende-atencion-a-demandas-en-ese-tema/>⟩ acceso 17 de diciembre de 2015.
- Scott, James 2000 *Los dominados y el arte de la resistencia* (México: Editorial Era).
- Weber, Max 1964 *Economía y Sociedad: esbozo de sociología comprensiva* (México: Fondo de Cultura Económica)

ENTREVISTAS PERSONALES

Aguirre, Rubén, entrevista personal, 28 de enero de 2016, Rivera del Río, Pavas, San José, Costa Rica.

Carballo, Julia y Guerrero, Marcos, entrevista personal, 25 de enero de 2016, Rivera del Río, Pavas, San José, Costa Rica.

Corrales, Betty, entrevista personal, 25 de enero de 2016, Rivera del Río, Pavas, San José, Costa Rica.

González, Ariadna, entrevista personal, 23 de enero de 2016, Rivera del Río, Pavas, San José, Costa Rica.

Meléndez, Karol, entrevista personal, 28 de enero de 2016, Rivera del Río, Pavas, San José, Costa Rica.

Salinas, Manuel, entrevista personal, 15 de febrero de 2016, Rivera del Río, Pavas, San José, Costa Rica.

Sandí, Tito, entrevista personal, 25 de enero de 2016, Rivera del Río, Pavas, San José, Costa Rica.

MERCADO INMOBILIARIO: HACIA UN PROCESO DE ESPECULACIÓN Y EXPOLIACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE 1980-2014

Rosa Nohemí Gómez Osorio*

INTRODUCCIÓN

La expansión urbana que ha experimentado el occidente de Guatemala, parte de la implementación de medidas de ajuste estructural que dieron lugar al predominio neoliberal en el país. La participación del Estado respecto al tema urbano a todo nivel quedo de lado, a partir de la orientación económica predominante ya establecida. Los desarrolladores inmobiliarios crearon un cumulo de inversiones en la ciudad, dirigiendo está, en los últimos años hacia los municipios periféricos, fomentando de esta manera un patrón de especulación rentista, que ha derivado en la construcción de urbanizaciones cerradas cuyo mercado es excluyente.

La trascendencia de los límites municipales como parte del crecimiento de la ciudad, dio lugar a un proceso de conurbación que generó la Metrópolización. Ésta forma parte de una dinámica social en la cual se dieron cambios espaciales constantes y el incremento de la población. Dando lugar a la apropiación privada de bienes naturales de propiedad

* Rosa Gómez: Economista (Universidad de San Carlos de Guatemala), Msc. En Gestión Social para el Desarrollo Local (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Guatemala). gomezosorio_7@hotmail.com

colectiva por parte de empresas inmobiliarias, lo cual contribuye a la precarización de las condiciones de vida de las comunidades locales. Esto se enmarca en lo que Harvey denomina acumulación por desposesión, noción que además de hacer referencia a la mercantilización de bienes naturales, incluye también los bienes comunes sociales, como la educación, la salud, el acceso a la vivienda y el acceso al agua potable (Albuquerque, 2016).

Los procesos urbanos también generan efectos o externalidades urbanas que van desde lo económico, ecológico y social. Por lo cual, la noción de expoliación urbana concebida como un sentimiento colectivo de exclusión derivado de la producción histórica por ausencia o precariedad de servicios que junto al acceso a la tierra y la vivienda son necesarios para la reproducción de los trabajadores, en la cual no importa la magnitud de la expoliación sino el significado que grupos, categorías o clases le atribuyen a estos procesos Kowarik (1979). La subjetividad social es el medio de interpretación de estos significados.

El tema urbano en el país se ha abordado principalmente desde la configuración territorial. Los estudios que se han realizado en el Occidente dan cuenta del crecimiento de la ciudad; y del cambio acelerado en el uso de suelo de agrícola a urbano en los municipios conurbados desde finales de siglo XX hacia los primeros años de la década del dos mil (Moran, 2010) y (Alvarado 2010). Sin embargo, aún no se ha tratado el tema respecto al proceso de urbanización, el papel de los actores que construyen el espacio urbano y su vinculación con la dinámica política y socioeconómica. Además se desconoce las implicaciones que el proceso de urbanización inmobiliaria ha generado para los municipios contiguos a la ciudad.

En torno a esto, precisa conocer cómo funciona y se ha dinamizado el mercado inmobiliario, y cuáles son las consecuencias que la expansión urbana genera a los habitantes locales. Por lo cual, esta investigación estableció como Objetivo general: Determinar cuáles han sido los efectos económicos y sociales que tiene para la población local las formas del uso, propiedad y valoración del suelo en el área conurbada del municipio de Olinstepeque durante el periodo de 1980-2014. De manera específica interesa caracterizar los efectos económicos y sociales que se derivan del incremento del precio de la tierra. Además, identificar y comprender los procesos organizativos y comunitarios generados a partir de la construcción de urbanizaciones cerradas.

La estructura del texto se presenta en dos componentes panorámicos, que aborda el diseño y la estrategia metodológica, así como aspectos de contextualización de la expansión urbana de Quetzaltenango hacia Olinstepeque. Por otra parte, se presenta tres apartados sobre la presentación de resultados y discusión de los hallazgos encontrados.

En el primer apartado, se exponen las características históricas del proceso de urbanización del área conurbada, el nivel de expansión urbana, así como las características de las empresas inmobiliarias y el tipo de urbanizaciones construidas. En el segundo apartado, Mercado Inmobiliario y la determinación del precio de la tierra, se da a conocer las características de este mercado, en el municipio de Olinstepeque. Además, los aspectos y estrategias que se utilizan para la determinación del precio del suelo, y la influencia de las urbanizaciones como fomento de especulación urbana. En el tercer apartado, se explica cómo se da el proceso de expoliación urbana en el municipio. También los efectos a nivel familiar, comunitario y municipal que genera la expansión urbana, por último se encuentran las conclusiones.

DISEÑO Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Esta investigación se realizó en La Aldea Barrios y El Cantón La Libertad, comunidades que conforman el área que conurbada entre la ciudad de Quetzaltenango con el municipio de Olinstepeque. Se planteó indagar aspectos como el proceso de conformación del área conurbada, las características y dinámicas del mercado inmobiliario; y las consecuencias económicas y sociales que la expansión urbana ha generado para los habitantes locales. Para lo cual, se tomaron como unidades de análisis el área conurbada, los desarrolladores inmobiliarios, los actores locales, habitantes de las urbanizaciones cerradas y habitantes locales.

La construcción del espacio no se realiza de manera inmediata y su transformación es evidente en un horizonte de tiempo. Por ello, se estableció como tiempo propicio para la investigación el periodo de 1980 - 2014, debido a que en estos años, se realizaron en el país cambios estructurales significativos que afectaron principalmente al sector agrícola y dieron inicio a expansión urbana. Por lo cual, este es un estudio diacrónico que reconstruye y analiza los procesos y aspectos que se tomaron en cuenta y que dieron lugar a la construcción de colonias y condominios en el municipio de Olinstepeque en tiempo estipulado.

La investigación es cualitativa, dado que reconstruir el proceso de expansión urbana, también se reconstruyeron las motivaciones, las vivencias, y las percepciones que tuvieron los distintos actores en el proceso de la construcción del área conurbada así como los efectos que éste, ha significado para la población local. El método utilizado es por tanto, analítico de carácter explicativo, puesto fue concebida para captar la subjetividad e intersubjetividad de los actores que intervienen, y la información se obtuvo por medio de entrevistas semiestructuras combinada con revisión documental, actividades que se detallan continuación.

Para reconstruir el proceso de la conformación del área conurbada se realizó en el Segundo Registro de la Propiedad revisión docu-

mental de nuevas fincas, donde se obtuvieron las fechas, el número de inscripciones, el número de desmembraciones, la medida de los terrenos, entre otros aspectos que tuvieron los inmuebles antes, durante y después de la construcción de las urbanizaciones en el área de estudio.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a exfuncionarios municipales que integraron el consejo municipal en los diferentes periodos (2002 al 2015), alcaldes, secretarios y síndicos encargados de la comisión de desarrollo territorial y urbanismo, medio ambiente, y oficina de planificación municipal, así como al encargado de la elaboración de plan de ordenamiento territorial. Se entrevistó al secretario municipal de la década de 1970 para conocer los procesos municipales con respecto al tema, en años anteriores.

Otro de los actores que han tenido un papel fundamental en el proceso de expansión urbana, son los desarrolladores inmobiliarios, por lo que se entrevistó a propietarios, personal administrativo y otros empleados de siete empresas inmobiliarias que han construido urbanizaciones en el área, además se entrevistó a vendedores independientes de bienes raíces y otros conocedores del tema inmobiliario.

Una de las particularidades que tiene el municipio de Olintepeque es que la organización comunitaria se originó por la necesidad del servicio de agua potable. Desde la década del ochenta la comunidad gestiona regula y administra todo lo concerniente al servicio de agua por medio de comités agua. Por lo cual, los líderes, representantes y directivos de los comités de agua y e integrantes de los comités comunitarios de desarrollo fueron actores claves a quienes se les entrevisto. También se realizó una entrevista grupal con la participación de nueve personas que representan las diferentes comisiones que tiene la organización comunitaria de una de las áreas de estudio. Por otra parte se entrevistaron a habitantes de colonias y condominios, así como habitantes locales, cuya localización fue seleccionado estratégicamente con el fin de conocer la percepción de todos los sectores.

Las diferentes apreciaciones acerca de la construcción del espacio urbano, el papel que cada uno ha desempeñado, la visión que se tiene respecto al mismo, permitió realizar y tener un panorama general de la importancia e implicación de la construcción social del espacio, que está en constante cambio. La búsqueda y reconstrucción del proceso urbano develo la desconfianza y la falta de acceso por parte de algunos desarrolladores inmobiliarios para brindar información financiera y estratégica respecto a los mecanismos de gestión urbana y acuerdos instituciones. Por otra, parte los actores locales en algunos casos también se mostraron precavidos al brindar información debido pues han tenido experiencia donde se ha realizado en contra de la protección de sus recursos naturales.

CONTEXTUALIZANDO LA EXPANSIÓN URBANA

El proceso de urbanización en Guatemala comenzó en los años cincuenta y se incrementó en los años noventa, como efecto, surgió la primacía de la ciudad capital, en el proceso se fortalecieron regiones como la del Altiplano Occidental. Donde Quetzaltenango ha sido una de las áreas más urbanizadas con crecimiento urbano continuo, por su rol y ubicación se considera que es la única ciudad intermedia del país con tendencia a metrópoli (Segeplan, 2014) y (Moran, 2010).

La ciudad de Quetzaltenango, en los últimos veinticinco años experimentó cambios significativos en la configuración de su territorio, derivados de cambios estructurales en el país. En los años noventa, el programa de ajuste estructural reorientó la política agrícola y provocó la reducción de este sector. Como consecuencia, en Quetzaltenango causó la eliminación de la gremial de trigueros que afectó a más 30 mil campesinos minifundistas, por lo que el trigo dejó de ser uno de los principales cultivos.

Hacia el año dos mil, la globalización se hizo presente con los tratados de libre comercio e ingresaron al país nuevos capitales. El sector empresarial tradicional cambió sus intereses e invirtió en productos de exportación con incentivos y ayudas estatales. Ésto en Quetzaltenango, provocó que se diera mayor inversión hacia el sector terciario, lo cual generó la creación de nuevas zonas comerciales; zona 2, 3, 5, 9, 8 entre otras, (Xicará, 2014). La inversión pública en infraestructura también generó importantes cambios en la ciudad; la construcción de la autopista los Altos y el tramo vial denominado El Periférico, proporcionaron fluidez y el acercamiento de la ciudad con otros municipios.

Expandiendo la urbanización de Quetzaltenango, configurando de esta manera una ciudad fragmentada y dispersa, dejando las unidades habitacionales ubicadas en el contorno de la ciudad, y aumentando así, el interés inmobiliario hacia los terrenos de municipios contiguos. En 2005 se estableció la mancomunidad “Metrópolis de Los Altos” conformada por ocho municipios del departamento de Quetzaltenango (Olintepeque, La Esperanza, San Mateo, Salcajá, Almolonga, San Juan Ostuncalco, Zuni y la Ciudad de Quetzaltenango).

En la Metrópoli de los Altos se han dado cambios significativos en la intensidad de uso del suelo principalmente en los municipios conurbados. En cuatro años, del 2002 al 2006 se expandió de forma acelerada la cobertura urbana de la ciudad hacia los municipios vecinos (Mapas N°1 y 2). Causando la eliminación del límite urbano entre el municipio de La Esperanza y San Mateo; y entre la ciudad de Quetzaltenango con el municipio de la Esperanza y Salcajá. La misma tendencia se dio hacia el municipio de Olintepeque. Con la salvedad que no ha sido absorbido en su totalidad. En esos años se dio el fenómeno de conurbación. De

acuerdo con Alvarado, se estimó que para el año 2014 es suelo urbano ocuparía un 38.5% del área total y para el año 2039 ocupará un área de 12,374 Ha 65.25% del área total, que provocara la desaparición por completo el suelo agrícola y reducirá el suelo forestal (Alvarado, 2010).

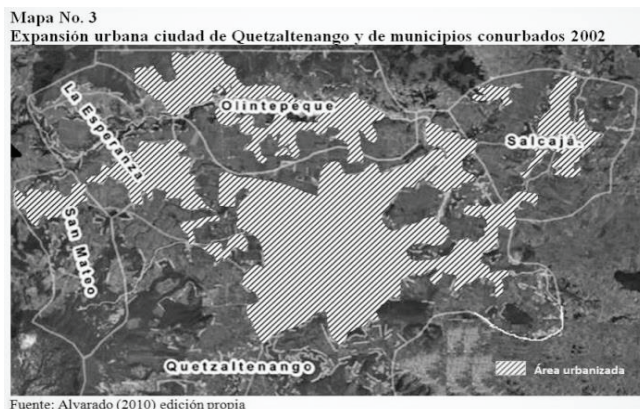
Mapa 1

Expansión urbana de la ciudad de Quetzaltenango y municipios conurbados 2002



Mapa 2

Expansión urbana de la ciudad de Quetzaltenango y municipios conurbados 2006

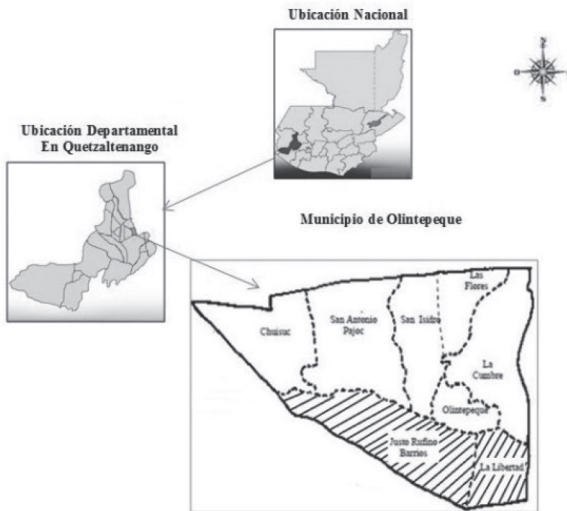


De los municipios conurbados Olintepeque es el de mayor extensión territorial, con mayor densidad poblacional y con mayor grado de pobreza. Es el único municipio que aun cuenta con importantes extensiones de tierra de uso agrícola en el área conurbada. Este municipio se

encuentra ubicado al Noreste de la ciudad de Quetzaltenango (Mapa 3), cuenta con una extensión de 36 Km² de los cuales el 45% es valle y 55% es montaña, tiene una población total de 37,457 habitantes, es un municipio altamente poblado cuya densidad poblacional es de 2312 habitantes por km².

Está dividido en nueve comunidades, al norte se encuentran: paraje Las Flores y Aldea La Cumbre, Cantón Chuisuc, Aldea San Antonio Pajoc, Cantón San Isidro, comunidades que limitan con el bosque municipal, el centro de la población, las otras dos comunidades ubicadas al sur son: la Aldea Justo Rufino Barrio y el cantón La Libertad estas últimas son las comunidades más grandes del municipio, ocupan 8.58 km² y 3.17 km² respectivamente, lo que equivale a casi el 50% del área poblada. Ambos concentran el 41.5% (17,042 hab.) de la población total del municipio según estimación censo INE 2002. Por su ubicación limitan con la ciudad de Quetzaltenango, ambas conforman el área conurbada del municipio.

Mapa 3
Ubicación geográfica de Olintepeque



Fuente: OPMO Olintepeque, Edición propia,

Por ser uno de los cuatro municipios hacia donde se ha dirigido la expansión urbana de la ciudad, se ha generado mayor crecimiento y cambio acelerado en el uso de suelo agrícola a urbano, incrementando el número construcciones de uso residencial. Tendencia que lo ha

catalogado como municipio dormitorio, considerando las siguientes características: espacio creado para la residencia de trabajadores de la ciudad; lugar de ubicación periurbana, donde la mayoría de sus pobladores, salen a trabajar, estudiar y a utilizar servicios diariamente a la ciudad; lugar con pocas actividades productivas y poco dinamismo económico local.

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN ÁREA CONURBADA MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE

En el último tercio del siglo XVIII, las tierras del municipio de Olin-tepeque donde se han construido colonias y condominios eran tierras comunales; que se les otorgó en grandes proporciones a cuarenta y cinco oficiales militares de mayor rango, indígenas y no indígenas de Olin-tepeque y Quetzaltenango (Rincón, 2014). Esta desarticulación de tierras, fue una expresión de la transformación de la estructura territorial y agraria en Guatemala ee la época liberal (SEGEPLAN, 2014). El uso que se le dio posteriormente a esas tierras, fue para cultivo exten-sivo de trigo, maíz y hortalizas.

Ilustración 1
Áreas residenciales construidas en el municipio de Olin-tepeque

año	1990-1994	1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010-2015
Urbanización	Col. El Trigal	Res. Covadonga	Cond. Marta Eliza	Cond. Valle Alto	Cond. Don Víctor
	Col. Villas de Don Luis	Col. Villa Los Luises	Cond. Los Llanos	Cond. Puerta del Valle	Cond. Villa Alejandra
		Cond. La Bendición	Cond. Villa Marcela	Cond. La Pinada	Cond. San Javier I
		Cond. San Miguel y del	Cond. La Perla I	Cond. Villas Claudia	Cond. San Javier II
		Col. Ceres II	Cond. Coventri	Cond. Villa de Don Marcelino	Cond. Valle de Florencia
		Cond. Bella Aurora		Cond. Santa Ana	Cond. Difiori
		Col. Santa Teresita		Cond. San Sebastián	Cond. Valle de Don Andres
		Cond. Pinar del Río		Cond. Villa de Fatima	
		Col. Santa Isabel		Cond. Paseo La Arboleda	

Fuente: Elaboración propia, información de campo. Lo sombreado está ubicado en Cantón la Libertad, el resto en Aldea Justo Rufino Barrios (Gómez, 2015).

En los años de 1990-1994 se construyó la autopista *Los Altos y El Peri-férico*. A partir de entonces, los terrenos ubicados en las márgenes de la ciudad cobraron mayor relevancia comercial y urbana. Se empezó a construir la Colonia el trigal, la primera urbanización en el municipio de Olin-tepeque (Ilustración 1). Como secuencia de que en esa época se había iniciado la construcción de la Colonia los Trigales y Colonia Jardines de Xelajú en la zona 7 de la ciudad de Quetzaltenango, fomen-tadas por el crédito estatal a través del Banco Nacional de la Vivienda

(BANVI). Los que pudieron comprar una de esas propiedades contaban con la capacidad de pago y tuvieron acceso al crédito bancario. La gestión pública por medio del impulso de estos proyectos sirvió para agrupar a personas con ingresos económicos similares.

En los siguientes cinco años, se construyeron ocho residenciales más, la mayoría seguía la tendencia de colonia sin embargo, tal como lo expresaron vendedores y desarrolladores de bienes raíces (EVI02; 2015)¹, en esa época en la ciudad de Quetzaltenango se empezó a marcar el estatus de *Alta Gerencia*; es decir, empleados de las principales empresas comerciales e industriales de la ciudad. Estos empezaron a demandar otro tipo de vivienda para distinguir su estatus de clase, por tanto, se origina un cambio en las inversiones hacia el municipio de Olintepeque.

La proliferación de nuevas construcciones urbanas en la ciudad de Quetzaltenango como centros comerciales, centros de convenciones, hotelería, restaurantes, parques y urbanizaciones privadas, entre otras, están vinculados principalmente al consumo, la educación, la salud y la seguridad. Además de la construcción de las carreteras antes mencionadas facilitó el tránsito a las zonas periféricas y se volvieron atractivas a las clases medias y altas, tal como ocurrió en las principales ciudades latinoamericanas de acuerdo con Borsdorf (2003) y Ciccolella (2002).

En Aldea Barrios, LADE inmobiliaria, fue la empresa pionera en construir residenciales privadas. El primer proyecto que realizó fue el de la Colonia Villas de Don Luis en 1990; que dio paso a la construcción particular de complejos residenciales. Le siguieron Residenciales Covandongua y Colonia Los Luises en 1995; Condominio La Bendición 1998; y Condominio San Miguel y del Llano 1999. La Colonia, Ceres II Condominio Bella Aurora, y Colonia Santa Teresita fueron proyectos desarrollados también el mismo periodo. Despertando el interés inmobiliario en terrenos del sector.

En el Cantón La Libertad, el primer proyecto urbanístico fue la construcción del condominio Pinar del Río en 1995. Este lo desarrolló la Corporación Watson, cuyo propietario era de origen estadounidense. La construcción de este condominio fue el primer proyecto que marcó la diferencia residencial en el área. Éste se caracterizó por la construcción de viviendas exclusivas, destinadas a clientes de alto poder adquisitivo. La construcción de esta urbanización dejó sin trabajo a más de 50 familias que realizaban el cultivo de hortalizas en ese terreno.

¹ Hace referencia al código, número y año de la entrevista. Los detalles de códigos son: EACB y EACL, entrevista al administrador de condominios en Aldea Barrios, y La Libertad respectivamente. EALL y EALB entrevista al actor local en La Libertad y Barrios. EFM entrevista a funcionario municipal. EHLB y EHLL entrevista habitante local en Aldea Barrios y la Libertad. EVBR entrevista a vendedor de bienes raíces.

Del 2000 al 2004 fue el periodo en que menos condominios se construyeron. En ese periodo se formuló y aprobó el reglamento municipal de construcción vigente hasta la fecha. En el siguiente lustro Del 2005-2010 se realizó el mayor número de construcciones de condominios, teniendo a la fecha más de 30 condominios y colonias construidas en el municipio. La mayor parte de estas áreas residenciales se encuentran ubicadas en Aldea Barrios; veinticuatro en total, Sin embargo, en el Cantón la Libertad, es donde se han construido las urbanizaciones de mayor extensión.

La extensión total del área urbanizada en Olinstepeque se estima que asciende a 32.5 Ha. Para la conformación de cada proyecto residencial se dio un proceso de unificación de dos, tres y hasta cuatro fincas en primer lugar. Posteriormente se realizaron las lotificaciones. En total en el área de estudio se estimó que se formaron 4 mil 777 nuevos lotes, cuyas medidas oscilan entre 90 m² los más pequeños como los del condominio Paseo La Arboleda, en promedio para el resto de urbanizaciones el área de cada lote es de 145 m². Se estimó que la población que reside en estas nuevas áreas urbanizadas asciende a 7 mil 200² hab equivalente al 42% de la población local, teniendo una población en esa área de 24 mil 242 habitantes. Por lo tanto, en esta área se concentra más del 65% de la población del municipio.

Por otra parte, de las más de treinta urbanizaciones, que se han construido hasta la fecha, al menos doce son las empresas inmobiliarias que han desarrollado los proyectos, y son al menos siete familias las dueñas de estas empresas (cuadro N°1). La mayoría pertenecen a la élite comercial indígena y no indígena tanto de Olinstepeque, como de Quetzaltenango.

En varios casos las propiedades se adquirieron por herencia. Por ejemplo, de acuerdo con libros del segundo registro de la propiedad en 1966 se unifican siete fincas cuyo área era de 3.88 Ha y fue registrado a nombre dos menores de edad. Quienes Actualmente son comerciantes indígenas muy conocidos de Quetzaltenango, dueños también de grandes capitales que heredaron. Durante más de veinte años, esas tierras estuvieron abandonadas. En 1992 se realizó la división de bienes y a partir de entonces, se puede decir que esta familia se ha dedicado al negocio de los bienes raíces propietarios de la Inmobiliaria Los Llanos, e Inmobiliaria VC.

Un abogado reconocido de la ciudad de Quetzaltenango heredo la finca que en 1979 se denominaba Labor San Isidro, ubicada en paraje

2 El total de numero de lotes en el área se estima es de 4777 (incluye los que están en fase de construcción). El No. de lotes ya ocupados asciende son 2400 a razón de 3 habitantes por casa se tiene una población de 7200 hab.

La Libertad de Olinstepeque, cuya extensión era de 17.29 Ha obtenido de la unificación de varias fincas años antes. De acuerdo con algunos vecinos del lugar, el señor antes de ser el dueño, daba préstamos a agricultores o propietarios de terrenos y cuando estos se atrasaban en el pago les embargaba sus tierras. Así es como en la comunidad se conoce el origen de la unificación de estas fincas. Después de esa unificación, el terreno se dio arrendado para cultivo de papa y trigo. A finales de noviembre de 2007 se registró la finca como propiedad de la compañía Inversiones de lo Alto S.A, año en el que se inició la urbanización de lo que hoy es Paseo de la Arboleda que cuenta con 1308 lotes. Se sabe también, que esta familia era propietaria otros terrenos que se han urbanizados y que hoy son los condominios San Sebastián y Villas de Fátima. Además poseen otros terrenos en el área que no han sido urbanizados.

Cuadro 1

Desarrolladores Inmobiliarios con proyectos residenciales en el municipio de Olinstepeque

Urbnización	Inmobiliaria /Empresa
Col. Villas de Don Luis, Res. Covadonga, Col. Villa Los Luises, Cond. La Bendición, Cond. San Miguel y del Llano	LADE Inmobiliaria
Cond. Pinar del Río, Cond. Santa Ana	Agroexportadora Watson S.A Desarrolladora Don Justo S.A.
Cond. San Sebastián, Cond. Villa de Fátima	Terra Nova Inmobiliaria
Cond. Paseo La Arboleda	Grupo MACRO y SIDECO
Cond. Valle de Don Andres	Inmobiliaria Los Llanos
Cond. Bella Aurora, Col. Santa Teresita	Valle Tobar
Cond. Villas Claudia	Inmobiliaria VC
Cond. La Pinada	Inmobiliaria AYA GENESIS, S.A. Bienes Raíces
Cond. Puerta del Valle	Grupo Inversor y Financiero S.A
Col. Villa Marcela	Inversiones Roca
Cond. Don Victor	Inversiones Haniel/Debursa
Cond. Villas de Florencia y Cond. Difiori	Guvaldi S.A
Cond. Valle Alto	S&J y Asociados
Cond. Difiori, Cond. San Javier I y II, Cond. Don Victor, Villa Alejandra	Real State Marketing (corretaje de bienes raices)

Fuente: elaboración propia, (Gómez, 2015).

El terreno del primer condominio exclusivo construido en el municipio (Pinar del Río), perteneció a una familia de Quetzaltenango que heredó la propiedad desde 1958. Sin embargo en el año de 1975 un extranjero de apellido Watson y su esposa compraron dicha propiedad, cuya extensión era de 5.37 Ha. Donde se cultivaban hortalizas para exportación. El terreno sirvió como aporte de capital en 1990 para conformar la So-

ciudad Casa Blanca S.A, que posteriormente en 1994 cambió de nombre a Agroexportadora Watson, S.A. y nueve años después se conformó la Corporación Watson. Fue a partir de noviembre de 1999 que se empezó a vender el terreno en lotes (220 en total), con fines urbanísticos.

El terreno que ocupa el Condominio Difiori, es uno de los proyectos residenciales recientes en el municipio. Perteneció a una familia indígena de agricultores de la comunidad originaria de Aldea Barrios Olintepeque, quienes eran conocidos por ser propietarios de varias fincas (4.36 Ha). Estos habían pertenecido a la misma persona por años. En 2008 siete hijos heredaron la propiedad y en 2010 realizaron la repartición de bienes. De acuerdo con la información del registro de la propiedad, en julio del 2012 venden el terreno a una señora, un mes después, esa misma finca lo compra la empresa Guavaldi S.A; y a finales de ese año, se aporta como capital para conformar el Condominio Difiori y Condominio Villas de Florencia. Sin embargo, algunos vecinos y conocidos de la familia manifestaron que debido a la falta de conocimiento, fueron víctimas de estafa y tuvieron que otorgar sus tierras. (EHB06, 2015). De cualquier manera, los desarrolladores de estos proyectos pertenecen a la elite comercial de Quetzaltenango con vínculos familiares de la elite nacional.

La Empresa Debursa, es propiedad de los hijos de un ex gobernador de Quetzaltenango. Dicha empresa es una de las más competitivas en la ciudad, pues entre los proyectos que ha desarrollado se encuentran: Cantabria Country Club, Condominio Burgos, Condominio Agapantos, Real Paseo la Reforma, Valle de Floresta, entre otros. Según un ex empleado de esta empresa, esta es una de las inmobiliarias con mayor número de proyectos urbanísticos de importancia. Esta persona actualmente es copropietaria de Real State Marketing, empresa dedicada al corretaje inmobiliario, también contribuye a la venta de algunos proyectos de su antiguo empleador. Además de proyectos propios, las empresas desarrolladoras también venden proyectos ajenos, lo cual se constató al entrevistar al gerente de la inmobiliaria en cuestión, al referirse que colaboran con otra desarrolladora para vender el proyecto Difiori ubicado en Olintepeque (EVBR02 y 03, 2015).

Por lo anterior, los dueños de las empresas inmobiliarias que tienen presencia en Olintepeque, también provienen de la élite indígena y no indígena del municipio como de la ciudad de Quetzaltenango; y tienen vínculos con el sector político-empresarial de esta ciudad. Realizan procesos de acomodamientos mercantiles necesarios para que la ley les facilite y los empleados públicos les contribuyan por acción u omisión las facilidades para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que incrementa sus ganancias.

La expansión urbana hacia el municipio de Olintepeque, expresada en la continua edificación de colonias y condominios, se ha rea-

lizado por medio de estrategias de unificación de fincas, la transición del suelo agrícola a urbano. La presión empresarial hacia el municipio, ha configurado nuevos espacios donde convergen actividades agrícolas tradicionales y residenciales. Estas características coinciden con lo que Capel (1991) y Puebla (2010) mencionan al referirse a los espacios periurbanos o conurbados.

Por lo tanto, lo que ha ocurrido en el municipio de Olinstepeque, confirma lo que menciona Harvey (2001): el espacio social se define como un producto social históricamente constituido por la dinámica de los modos de producción; es decir, es el reflejo de lo que acontece en la sociedad. Por tanto aquí se evidencia que en los periodos específicos: de 1990 al 2000 implementan de las políticas de ajuste estructural, que redujo el cultivo de trigo paulatinamente hasta su desarticulación por completo. El segundo periodo del 2005 al 2009 coincidió con la firma del tratado de libre comercio y como mencionó Xicará (2014) cuando las élites locales orientan su inversión en bienes de consumo, en ese periodo se construyeron los principales centros comerciales en la ciudad de Quetzaltenango, y se establecieron nuevas zonas comerciales. Esto confirma lo que menciona Healey citado en Harvey (2001) que el espacio es lo que la economía hace de él; y el paisaje económico es el producto de la estructura total del sistema económico, en el cual actúan los individuos que toman decisiones económicas.

TIPOS DE ÁREAS URBANIZADAS

En los últimos quince años la mayor parte de construcciones cerradas en el municipio son de tipo condominio. Las primeras urbanizaciones en el área de estudio fueron colonias y desde antes las construcciones populares también han tenido presencia. Las características particulares de cada una se describen a continuación.

Imagen 1

Tipo de construcciones ubicadas en colonias del municipio Olinstepeque



Fuente: archivo fotográfico propio. Colonia Los Luises/Colonia Villa de Don Luis (Gómez ,2015).

Colonias: Las colonias privadas (Imagen No.1) construidas en el municipio tienen como características generales: que son lotificaciones abiertas, no cuentan con áreas deportivas, y tienen pocas áreas verdes. En cambio las financiadas por el Banco Nacional de Vivienda (BANVI), por ser de mayor extensión, sí tienen al menos un área deportiva. Este tipo de urbanización tiene entre 70 y 190 lotes, de los cuales más 70% ya tienen casas construidas.

Condominios: Las características de algunos de los condominios en el municipio, (Imagen N°2), coinciden con las características de los barrios cerrados en América Latina. Es decir; se encuentran cercados por muros, separados del espacio público mediante una barrera o puerta y están vigilados por guardias y monitoreados a través de cámaras de video. Sin embargo, hay otros que a pesar de estar cercados, no tienen vigilancia, ni seguridad. También hay de otro tipo, un condominio con más de mil lotes, cuya construcción se realizó por etapas. Dicho condominio se encuentra dividido en clústers, cada uno consta entre 50 a 60 casas. Aunque cada clúster tiene garita de seguridad, no todos cuentan con vigilancia.

El tipo de casa es otra característica que diferencia a los condominios de las colonias. En los condominios las casas son estandarizadas; regido de acuerdo al estilo (colonial, moderno, español etc.), y la exclusividad del proyecto que diseñó la empresa inmobiliaria. “el desarrollador es quien deja su marca de acuerdo con su visión, en los proyectos que desarrolla” expresa un vendedor inmobiliario (EVBR01, 2015).

Imagen 2

Tipo de construcciones ubicadas en condominios del municipio de Olinstepeque



Fuente: archivo fotográfico propio, (Gómez, 2015). Condominio Villa de Fátima/Condominio Paseo la Arboleda.

En el municipio hay condominios exclusivos que tienen de ocho a quince casas; pero en promedio los condominios tienen entre 35 y 50 casas. Sin embargo, hay condominios más grandes que cuentan con 100, 190 y

más de 250 lotes. El de mayor extensión construido hasta ahora cuenta con 1 mil 308 lotes y está ubicado en La Libertad.

Actualmente se encuentra en fase de autorización la construcción de otro condominio, que se encuentra en disputa por jurisdicción entre en Aldea Barrios y el municipio de la Esperanza, cuya extensión es superior a las 127 Ha de terreno. De acuerdo con la información proporcionada por la inmobiliaria que lo desarrolla, ese proyecto contempla la construcción de áreas para: centros comerciales, cementerio, canchas y áreas deportivas. Así como también un área destinada a centros religiosos, hospitales, edificios educativos e institucionales. También contempla la construcción de un centro urbano de uso mixto, comercial en el primer nivel, y residencial o de oficina en los siguientes. De acuerdo con el plan maestro serán casi 1 mil 800 lotes para uso residencial.

Viviendas populares: Por otro lado, en el área conurbada también se encuentran las construcciones realizadas por particulares, habitantes locales, o personas originarias del lugar, cuyo tipo de vivienda (Imagen N°3) es rústica, en algunos casos de barro o adobe, y en otros de block. De estos últimos hay construcciones con terraza y con segundo nivel, que son producto principalmente de remesas.

La distribución de los hogares de acuerdo al tipo de vivienda, muestra la desigualdad residencial que existe en el municipio, que va desde ostentosas viviendas aglomeradas, hasta las edificaciones rudimentarias y dispersas de viviendas populares. En estos lugares residen personas de todos los estratos sociales agrupados de acuerdo a su condición económica. Por lo tanto, en La Aldea Barrios y el Cantón La Libertad del municipio de Olinstepeque existen grandes brechas de desigualdad. En tal sentido, se puede considerar que hacia el municipio se ha creado segregación a diferentes escalas relacionando esto con lo que menciona Duhau, (2013), a) Segregación a gran escala es decir, desde espacios interurbanos de la distribución de los barrios y localidades destinados para fines específicos. A Olinstepeque desde la Metrópoli de Los Altos se le ha catalogado como municipios dormitorio, determinando con esto una jerarquía inmobiliaria socio espacial hacia el municipio. b) segregación a pequeña escala, debido a que existe heterogeneidad dentro las colonias y condominios, así como entre las urbanizaciones del mismo tipo.

Imagen 3

Tipo de construcciones tradicionales del municipio de Olintepeque



Fuente: archivo fotográfico propio, septiembre 2015. Vivienda ubicada atrás del Condominio Paseo de la Arboleda, vivienda ubicada frente a Condominio Valle de Don Andrés /y viviendas ubicadas a pocos metros del condominio Pinar del Río y Villa de Fátima

EL MERCADO INMOBILIARIO Y LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LA TIERRA

ASPECTOS DEL MERCADO INMOBILIARIO EN GUATEMALA

En el país, debido a la reducción de funciones del Estado, no se han formulado durante muchos años las iniciativas públicas respecto al tema de vivienda. Una iniciativa de ley, la N°4114 presentada en 2010 dio muestra de la orientación del mercado inmobiliario en el país. Con el objetivo de promover la vivienda de interés social de alta densidad. Las propuestas principales de la ley fueron: 1). Reformar el artículo 19 del decreto 120-96 Ley de vivienda y asentamientos humanos modificando que el FOGUAVI otorgue subsidio a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza, y en cambio el subsidio se otorgue a las familias guatemaltecas en general. 2). Reformar el artículo 7 (exenciones de impuestos) del decreto 27-92 Ley del impuesto del valor agregado, pretendiendo que se exonere el IVA a las viviendas con un valor de hasta Q 250 mil y se elimine el IVA en la segunda venta (Plataforma urbana, 2010).

Finalmente, se proponía reformar el decreto 26-2007 Ley de adjudicación, venta o usufructo de bienes inmuebles propiedad del Estado, en donde se establecía que los empresarios de la construcción utilizarían tierras del estado, y podían obtener subsidios del FOGUAVI para construir proyectos de vivienda, que luego serían vendidos a quienes tuvieran capacidad de pago. Es decir, dicha iniciativa se formuló en favor del fomento inmobiliario de urbanizaciones cerradas, gestionado por desarrolladores privados.

Lo anterior reafirma lo que menciona García y Fernández (2014) que la constitución de la ciudad inmobiliaria es la visión hegemónica del hecho urbano que ha pasado por la presentación de los intereses particulares de clase capitalista como los intereses de toda la sociedad. Esto se da de manera definitiva cuando la vivienda asume el rol como

espacio de acumulación, produciendo y orientando la demanda de manera independiente a las necesidades reales de alojamiento.

La lógica de acumulación inmobiliaria, de acuerdo con Jaramillo (2014) la formación básica de la renta de suelo urbano, se determina a través del terrateniente original, el constructor capitalista que desarrolla el proyecto residencial, y el usuario final. En el proceso hay dos momentos donde se determina el precio. En un primer momento el terrateniente determina el precio por la venta del terreno y en el segundo, el constructor capitalista estipula precio de la vivienda.

El tiempo que lleva comercializar viviendas es mayor que el de otro tipo de mercancías, cada etapa del proceso de construcción de ella puede llevar años. Depende de la magnitud del proyecto, las fases que tenga, el tipo de infraestructura algunos incluyen centros comerciales, recreativos y más. La venta de casas no se realiza de forma masiva, se caracteriza por la sucesión del derecho legal del desarrollador a propietario final, asumiendo que éste sea el último. Sin embargo, la realidad muestra las personas que le compran al desarrollador, también otorgan sus derechos a otros de forma temporal o permanente. Por lo cual, la determinación del precio de la vivienda cambia de acuerdo al número de ventas que se realicen sobre el mismo bien.

El precio de la tierra en el mercado inmobiliario rompe con las leyes establecidas en la economía de mercado. Según García (2014,4) se genera un mercado inelástico en la oferta, (es poco sensible a las variaciones en los precios) y cuya demanda se observa como un nicho de acumulación capitalista con altas expectativas de rentabilidad que se prevén de acuerdo con las condiciones que le otorga las distintas herramientas urbanísticas. Unido a esto, la ubicación de la propiedad es un factor que favorece la fijación del precio con el *mayor valor que la demanda pueda soportar en cada momento y lugar*. García concluye que la tierra es una “mercancía” cuya excepcionalidad hace que su valoración dependa del conjunto de la sociedad y de las políticas de planeamiento que sobre ella se dicten.

Otro factor que influye en la variación del precio de la tierra se debe al delito de lavado de dinero. Baires (2012) menciona que en Guatemala esto se da por narcotráfico y corrupción que tiene alta influencia en la compra de casas, para esconder o disimular su origen y aparentar que proviene de una actividad legítima. El ciclo de lavado de dinero se completa al cobrar dinero limpio de alquileres ficticios a testaferros. Por lo cual, el sector inmobiliario es muy atractivo pues carece de controles que verifiquen el origen del dinero invertido, ni de contratos de arrendamiento. Entonces al tener liquidez se permite pagar en efectivo transacciones de alto nivel, dejando la posibilidad de lavar dinero en el sector de la construcción.

Lo anterior lo confirman los informes de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), donde refieren que funcionarios públicos han comprado varios terrenos y casas en zonas exclusivas del país. Además la comisión devela el vínculo que tienen las empresas de construcción con la financiación de la política en Guatemala. (CICIG 2015;69), se evidencia la relación entre empresas de construcción de obra pública y la Cámara Guatemalteca de la Construcción, que a su vez está integrada por la asociación nacional de constructores de vivienda ANACOVI y la Asociación Nacional de Contratistas de la Construcción, conformada por las denominadas empresas emergentes, que tienen vínculo con las élites tradicionales. Las empresas de construcción en el ámbito local dependen de los arreglos que alcancen con los diputados, alcaldes, consejos de desarrollo: y en otros casos, forman parte del entorno de los líderes políticos.

Varios son los sectores que se han fomentado en el desarrollo del mercado Inmobiliario en el país, con acciones encaminadas al incremento del precio del suelo urbano. En el ámbito legislativo el fomento ha sido poco, en general la importancia ha sido determinada principalmente por el sector empresarial, favorecido con la liquidez que tienen las actividades ilícitas como el narcotráfico y la corrupción, aunado a la complicidad de funcionarios públicos y en general la debilidad estatal respecto a la regulación urbana.

EL MERCADO INMOBILIARIO EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE

La construcción del espacio urbano en Olintepeque ha estado a cargo principalmente del sector empresarial y del Estado, por medio de las dependencias municipales. El mercado inmobiliario no es incipiente en el municipio. Como los terrenos son el insumo principal de éste, para tener el carácter de urbanos, requieren estar dotados de infraestructura y servicios públicos; los cuales no pueden ser producidos por el capital individual, sino que generalmente se proveen por inversiones del Estado.

Por lo tanto, ésta es la característica principal que busca un desarrollador inmobiliario, tal como lo manifiesta el administrador de Lade Inmobiliaria, al mencionar que lo primero que buscan para construir condominios, es un lugar donde haya “*desarrollo*”, y no donde haya pasado el desarrollo. Para ello hacen un sondeo de las áreas y realizan un estudio de mercado. Por otra parte, también manifestó que la topografía del suelo es otro factor importante. Y en el caso de Olintepeque es de superficie plana, es catalogada tanto por las municipalidades de Olintepeque y Quetzaltenango, como una zona libre de riesgo de inundaciones, deslaves y otros tipos de desastres naturales. (EACB04, 2015). Además, la disponibilidad y cercanía de servicios básicos es el complemento para atraer inversionistas.

LAS FASES DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN

Actualmente, debido al incremento de desarrolladores inmobiliarios, las empresas que lideran y tienen experiencia en el mercado realizan las siguientes fases para la urbanización de un terreno. En la primera fase se da el sondeo de las áreas que otorguen tranquilidad, las cuales se encuentran alejadas del centro de la ciudad. En la segunda, se da inicio a la urbanización, donde según la visión del empresario, se establece el tipo de vivienda a construir, el área, y los precios. En esta fase se empieza a comercializar, de ahí se realizan los vínculos con las instituciones financieras. La tercera fase es de construcción; ésta por lo regular, también la realiza la misma desarrolladora cuando es condominio. En colonias cambia porque la empresa solo vende los terrenos y por lo general el cliente es quien gestiona el proceso de construcción de su vivienda.

Por último, la cuarta fase es de administración, Esta se surge después de al menos dos años de haber iniciado el proyecto, dependiendo del tamaño del mismo. Por lo general, cuando más del 70% de los lotes se ha vendido, se realiza el proceso de transición, donde la inmobiliaria realiza el traspaso de la propiedad de las áreas comunes a un comité conformado por los propietarios del condominio; tal como sucedió en el condominio Santa Ana, Pinar del Río y Villa de Fátima. Sin embargo, en la mayoría de condominios, la inmobiliaria que urbanizó a pesar de que ya no es dueña de ningún lote figura como administradora o es propietaria de otra empresa que administra el servicio del agua potable.

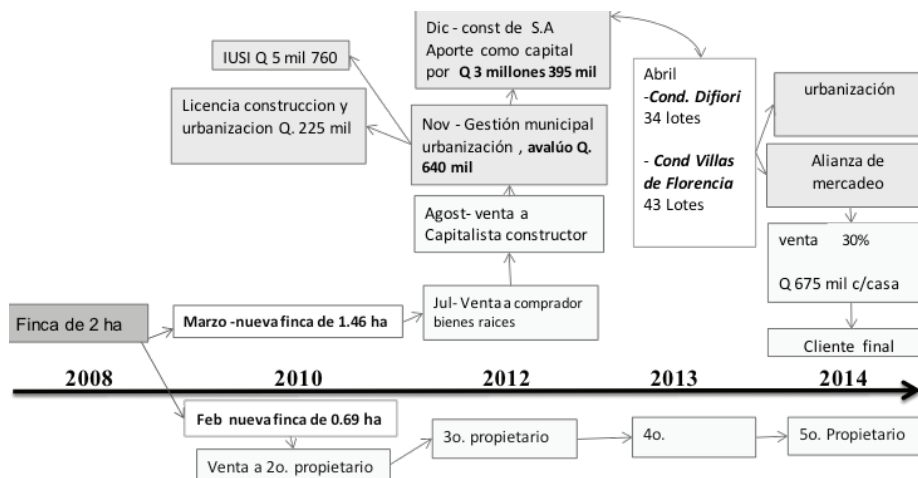
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL SUELO ENTRE PLUSVALÍA Y ESPECULACIÓN

Como se dijo en las generalidades del mercado inmobiliario, cada mercado tiene sus particularidades para determinar la renta urbana; y el caso de Olintepeque no es la excepción, pues en ausencia de estudios previos que proporcionen un punto de comparación, se puede decir que la construcción histórica de un proceso de urbanización en el municipio da una pauta de cómo funciona. La Ilustración 2 muestra las diferentes etapas y estrategias que se han utilizado para urbanizar un terreno. La información obtenida en el registro de la propiedad refleja que la finca de 2 ha, fue de un solo propietario por 39 años, en 2008 el terreno fue heredado a siete hijos. A principios del año 2010 se realizó dos desmembraciones de la finca.

Para el año 2012 se realizó un proceso acelerado de venta es decir, en término de dos meses se vende en dos ocasiones la propiedad el primero a un vendedor de bienes raíces, y el segundo a un constructor capitalista como lo llama Jaramillo. Después de tres meses, el capitalista constructor realizó los trámites municipales para la autorización

de la licencia de urbanización y aquí llama la atención que se realizó el avalúo de la propiedad por Q. 650 mil y se estimó un presupuesto de urbanización para el proyecto de Q 700 mil. Lo cual se evidencia la estrategia que se utiliza para reducir el pago del impuesto único sobre inmuebles, que el consejo municipal estimó en Q 5 mil 760.

Ilustración 2
Proceso de urbanización en el municipio de Olintepeque



Fuente: Elaboración propia, (Gómez, 2015). Con información del Registro de la Propiedad: finca 46413, folio 145, libro 250; expediente municipal No 10-11-12; entrevistas (EACB01 y EFM01, 2015).

Un mes después de la gestión municipal, el capitalista constructor aporta la propiedad como capital por 3 millones 395 mil quetzales para la constitución de una nueva sociedad. Por tanto lo el avalúo municipal se realizó por tan solo el 16% del precio real. El papel de la municipalidad en este proyecto, fue como facilitador, puesto que la licencia de urbanización y construcción del condominio Difiori, se autorizó un solo cobro por Q 225 mil, situación poco usual, pues suele realizarse por separado (EFM01, 2015). Además líderes comunitarios manifestaron que los funcionarios municipales no realizaron las supervisiones necesarias. Uno de los requisitos para la autorización de los condominios es contar con la carta de autorización del Comité Comunitario de Desarrollo, ésta no fue aprobada. A pesar de ello, la licencia fue autorizada. Por lo tanto, el papel del Estado por la desregulación, propicia condiciones de producción y auge inmobiliaria (O'Connor, 2001).

Entre el 2013 y 2014 se empezó a realizar las primeras fases de urbanización, la lotificación; se realizó alianza con corredores de bienes raíces para la promoción y venta del proyecto. Uno de los vendedores indicó que el desarrollador percibe al menos 30% de ganancia por cada proyecto, y ellos reciben una comisión del 10% no obstante, ambos manejan el mismo precio de venta para el usuario final. Este terreno se dividió en dos condominios uno de 34 lotes que se empezó a vender, el precio de cada casa es de Q 675 mil.

Por lo cual, si el precio final de cada casa del proyecto en cuestión tiene un costo de Q 675 mil y el condominio tendrá un total de 34 casas, el ingreso total de la inmobiliaria al finalizar la venta total será de 22 millones, 950 mil quetzales. Obteniendo una ganancia del 30% que se estima será de 6 millones 885 mil quetzales. Tomando el ejemplo de otros condominios que supera los 75 lotes (Villa de Fátima), la inmobiliaria se llevó al menos 6 años para la entregar el proyecto a los propietarios. Suponiendo que este condominio le lleve 3 años vender todas las casas, el capitalista constructor tendría una ganancia anual de dos millones de quetzales. Por Otro lado, el otro terreno que se desmembró de la misma propiedad en el 2010, ha sido vendido en cuatro ocasiones es decir cada año ha tenido un propietario diferente, por lo que no se descarta que quienes lo han comprado han sido especuladores.

La entrevista realizada a un vendedor que trabaja por cuenta propia, (EVBR0, 2015) y quien tiene más de 10 años vendiendo propiedades en Quetzaltenango, específicamente en el área de estudio, refleja que en Olintepeque el precio de los terrenos y casas también es afectado por factores adicionales a la oferta y la demanda. Pues él mencionó, que por ser intermediario lo contactaron para concretar la venta de una casa ubicada en el condominio Pinar del Río, cuyo valor era superior a los 700 mil Quetzales. El cliente sin ningún reparo lo acepto y realizó en efectivo el pago, situación que sorprendió al propietario. Sin embargo, como mencionó el entrevistado: *negocio es negocio* y el recibió la comisión. En una nota de prensa se mencionó que quien compro esa propiedad era un narcotraficante Jorge Ortiz (Chamale), a quien capturaron ahí y quien lideraba una estructura criminal para despojar a los propietarios de terrenos de gran valor económico, Castro (2012).

El incremento en el precio de la tierra en Olintepeque se determina por el número de veces que se ha vendido una propiedad. El historial de inscripciones en el registro de la propiedad del Condominio Pinar del Río, mostró que de los 220 lotes que tiene la urbanización, 140 fue adquirida para residir en el lugar. Hay al menos 50 propiedades que fueron vendidos a un tercero, y 30 propiedades que tienen entre cuatro y cinco inscripciones, es decir, han tenido más de tres dueños, uno a cada tres años. El incremento de los precios de las propiedades en este

condominio está vinculado directamente con el 36% de lotes o casas que se han vendido constantemente. Después de la urbanización, no se ha realizado ningún tipo de inversión pública, ni de inversión privada.

El 20% de propietarios han adquirido un inmueble con fines especulativos debido cambio o traspaso de propiedad en este condominio. Sin embargo, es preciso diferenciar los proto-especuladores, que de acuerdo Jaramillo (2012) son quienes compran propiedades tomándolas como alternativa de inversión a sus ahorros, y esperaran el incremento del precio del suelo, pero no se dedican a ello. En el área estudiada se identificó la existencia de este tipo de especuladores, y son las personas que reciben remesas, los propietarios de comercios pequeños, o personas particulares que tienen ingresos mayores al promedio. Un propietario de un terreno en Cantón La Libertad, manifestó que invierte parte de sus ganancias como comerciante y comprando terrenos. Menciono que le parecía una buena inversión, porque sabía que su dinero no estaba perdido (EHLL08, 2015), y que vendería cuando le hicieran una buena oferta.

Los especuladores son profesionales, que se especializan en la tarea de transar propiedades inmuebles, y cuyo objetivo es la rentabilidad que podrían obtener como inversionistas en otras esferas de la actividad económica. Se pueden tomar como especuladores urbanos los vendedores de bienes raíces por cuenta propia y a los propietarios de inmobiliarias; que persiguen obtener beneficio económico basándose exclusivamente en las variaciones del precio en el tiempo.

INFLUENCIA DE LAS URBANIZACIONES EN EL PRECIO DE LOS TERRENOS EN OLINTEPEQUE

A pesar de que la topografía del suelo y acceso a servicio en las comunidades de estudio tienen características comunes, el precio de la tierra varía drásticamente. El resultado constata lo que menciona Leal que “el precio de la vivienda definido por el mercado es el resultado de un proceso que resume el cambio en el valor social de las zonas que componen la ciudad y significa la desigualdad existente en la distribución de los hogares en términos sociales y económicos” (Leal 2002:60).

La diferencia en los precios de la vivienda reflejan las diferencias económicas y sociales de sus habitantes. El precio de los terrenos ubicados en los condominios más exclusivos de Olinstepeque oscilan entre Q. 1 mil 500 a Q 2 mil por m², con un promedio de incremento del 32% anual. El precio de las casas van desde Q 800 mil a Q 1.5 millones, porque solo quienes tienen *ingresos superiores a los Q 15,000 mensuales* puede comprar una vivienda de 140 m² en el lugar. Por lo tanto, ya que el 43% población local vive en pobreza, es decir tienen ingresos mensuales de Q 851.50 (ENCOVI, 2015). Tendría que tener ingresos semejantes a

PROCESO DE EXPOLIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE

Las condiciones de vida de la mayoría de habitantes del municipio de Olintepeque en la década de 1980, era precaria, pues no se contaba con servicio de agua potable, ni drenaje, solo el 5% de las viviendas tenían instalaciones adecuadas, y solo el 50% de las viviendas contaban con servicio de energía eléctrica Miralbes, (1986; 68). Los habitantes que contaban con estos servicios, eran los residentes del centro de la población o área urbana. Por lo cual, la población indígena ubicada en las comunidades rurales fueron excluidos al no contar con los servicios básicos para vivir.

Por lo que en esa misma década, los vecinos de Aldea Barrios empezaron a realizar las gestiones para ejecutar un proyecto de mini riego sin embargo, las condiciones del mercado no permitieron que prosperara, y para solventar la deuda que adquirieron para el mismo, decidieron proporcionarles el servicio a otros vecinos. Cada vecino que compró el servicio se convirtió en socio, conformando un comité y se estableciendo una junta directiva. A partir de entonces, por más de veintinueve años, que la comunidad administra, regula y gestiona todo lo concerniente al servicio de agua. Uno de los compromisos de los socios es prestar servicio voluntario si son elegidos por la asamblea para integrar el comité, situación que ha generado identidad y compromiso por la gestión del recurso hídrico.

La iniciativa de gestión del agua se replicó en la mayoría *de comunidades del municipio*. Los proyectos han sido auto sostenibles al grado que actualmente solo en las comunidades de estudio se cuentan con más de siete pozos que tienen más de 2 mil 600 socios. Este tipo de organización comunitaria es la más representativa. La mayoría de líderes comunitarios y vecinos manifestaron que el gobierno municipal no les proporcionó ayuda para llevar a cabo la iniciativa, ni realizó nada para suministrarles el servicio. Por esa razón la gestión del recurso lo asumió la población. La municipalidad sigue proporcionando el servicio de agua potable al centro de la centro de la población, a sectores cercanos, y a algunas colonias del municipio.

La gestión del suministro de agua potable realizada por los vecinos conllevó a que los terrenos en la comunidad aumentaran de precio. Dos agrónomos le ofrecieron un millón quinientos mil quetzales por 0.6 ha de terreno a uno de los fundadores del mini riego al año de haber iniciado el proyecto en 1986, oferta que duplicaba con creces el precio real.

Por otro lado, la organización comunitaria (Los comités de agua y los consejos comunitarios de desarrollo) entre 1985 a 1990 principalmente, gestionaron los servicios de drenaje, pavimento y energía eléctrica, que tampoco fueron promovidos por el gobierno local. En la

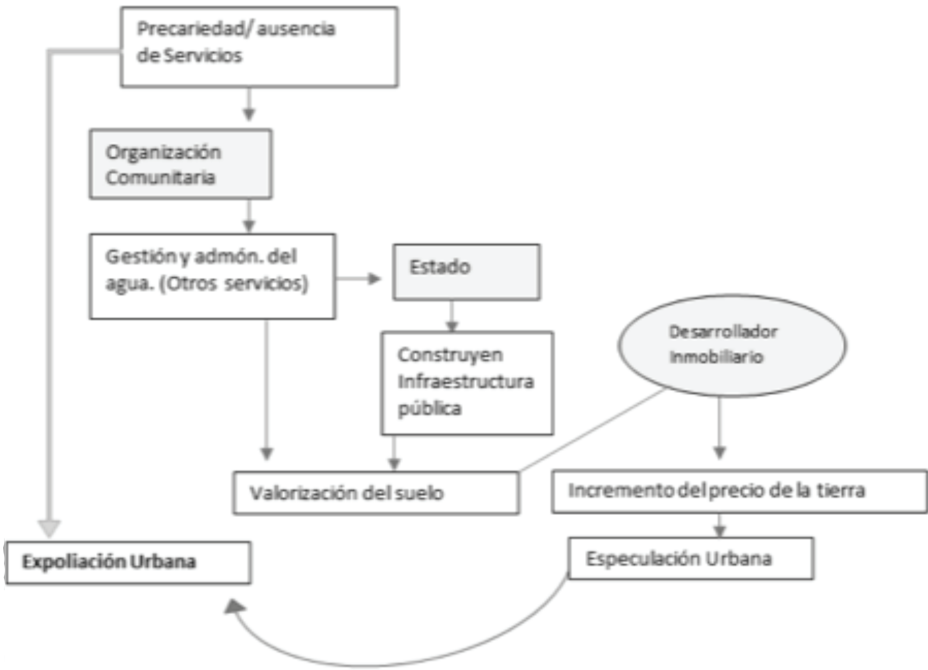
mayoría de los casos se realizaron con recursos públicos y con el aporte económico o de mano de obra de la población local. Estas acciones fueron las que *valorizaron la tierra*. Posterior a esto, surgió el interés de los desarrolladores inmobiliarios, quienes no hicieron inversión alguna para que las propiedades incrementaran de precio. Se basaron para desarrollar sus proyectos inmobiliarios en las condiciones que el área ya proporcionaba y las cuales fueron creados socialmente por la comunidad y el Estado.

Desde el inicio de la construcción de colonias y condominios, el precio de la tierra se ha incrementado generando la especulación urbana, puesto que no hay trabajo alguno, ni inversión que lo amerite. La especulación se puede concebir por la plusvalía obtenida a partir de la segunda venta de las propiedades; es decir, en la primera no, porque el aumento del precio se debe a instalación de servicios básicos o de infraestructura. Sin embargo en las siguientes ventas, el incremento en el precio no es justificado, puesto que no se realizó ningún tipo de mejoras, ni inversión en el área.

Además, dicho aumento impide que los pobladores locales compren terrenos en sus propias comunidades. Tanto los habitantes locales, como líderes comunitarios coincidieron que tienen escasas o nulas oportunidades de poder comprar un terreno en el sector. Esto se torna incongruente puesto que fueron ellos quienes originalmente valorizaron la tierra pero quedan excluidos para acceder a ella.

La precariedad de servicios básicos que la municipalidad no le proporcionó a la población indígena de las comunidades rurales en la década de 1980, fue la primera manifestación de expoliación urbana del gobierno municipal hacia los habitantes locales, puesto que los servicios solo eran proporcionados para habitantes no indígenas que residían en el centro de la población; Ésta exclusión originó que la población local se organizara y gestionara por cuenta propia el suministro de los servicios. A principios del años dos mil la expansión urbana provocó que las comunidades tomaran medidas de resistencia sin embargo, a las autoridades municipales obviaron los acuerdos comunitarios, además de otras manifestaciones de rechazo para la construcción de colonias y condóminos generado con ello, segunda manifestación de expoliación; la tercera, fue al destinar recursos municipales para solventar problemas de infraestructura en colonias provocado por la negligencia de desarrolladores inmobiliarias y autoridades de turno que estuvieron cuando que construyeron ciertas colonias y condominios.

Esquema 1
Proceso de expoliación urbana en Olinstepeque



Fuente: Elaboración propia, Gómez (2015)

Además, subsidiar el servicio de agua potable para habitantes de colonias, dejando con ello de proveer servicios y recursos para la población local.

Ahora bien, la exclusión por parte de los desarrolladores inmobiliarios es por el alza en los precios de los terrenos, y el aprovechamiento del valor del suelo producido por la comunidad. Esto comprueba la existencia de un proceso histórico de expoliación urbana hacia los habitantes locales del municipio de Olinstepeque (Esquema 2). Pues la noción de expoliación, Kowarik (1979), se comprende como el sentimiento colectivo de exclusión, producto de un conjunto de carencias de bienes y servicios que se consideran como un derecho. Se da como producción histórica inicialmente por la ausencia o precariedad en los servicios de consumo colectivo, que junto al acceso a la tierra y la vivienda son necesarios para la reproducción de los trabajadores.

EFFECTOS DE LA EXPANSIÓN URBANA PARA LA POBLACIÓN LOCAL

Los efectos que la expansión urbana ha generado desde sus inicios, en la década de 1990 en la Aldea Barrios y Cantón la Libertad se puede analizar desde el ámbito familiar, comunitario y municipal de la siguiente manera:

A NIVEL FAMILIAR

El cambio en el suelo agrícola redujo las fuentes de trabajo, provocó que en el municipio aumentara las personas que se dedican al comercio informal, contribuyó a crear trabajo urbano captado principalmente por el sector de la construcción. La necesidad de adquirir una vivienda propia y la dificultad por las pocas oportunidades de trabajo en el municipio, además del alto costo de la tierra fomentaron la migración interna de los habitantes locales hacia departamentos como: El Peten, Izabal, Alta Verapaz entre otros, también la migración externa principalmente a Estados Unidos. Esto repercutió en la desintegración familiar en algunos casos y la conformación de familias transnacionales en otros. Lo anterior también provocó en los primeros años del dos mil, una diferenciación social entre quienes recibían remesas y quienes no, contribuyendo al incremento del precio de los terrenos.

Debido a que la mayoría de habitantes de los condominios del Cantón la Libertad no son indígenas y son asalariados, han manifestado inconformidades con sus vecinos próximos, por la crianza de animales domésticos a la que se han dedicado, pues les molesta el olor de abono orgánico, y han orillado a la reducción de estas actividades pues se acostumbraba a depositar el abono en los terrenos contiguos las nuevas urbanizaciones.

Para los agricultores locales, la expansión urbana los está presionando a tal punto que empiezan a considerar cambiar de actividad así lo expresan, “Para un productor como yo, es imposible comprar el terreno que actualmente alquilamos, porque es muy caro, no es considerable [...] cada cuerda (400 m²) tiene un precio de Q 250 mil son 330 cuerdas. No creo que un productor tenga 82 millones y en el cultivo de hortaliza no se gana tanto” (EHLB04, 2015). Otro habitante de la comunidad manifestó que es cuestión tiempo para que los terrenos los compren para urbanizaciones o algún proyecto comercial.

A NIVEL COMUNITARIO

La llegada de habitantes provenientes de otros lugares ha generado inconvenientes entre vecinos, pues los nuevos propietarios al desconocer las formas tradicionales entre los límites de terrenos. Al momento de construir ocupan en su totalidad la propiedad, cerrando o haciendo difícil el paso peatonal en la comunidad. Por otra parte, el sentido de

propiedad de estos habitantes les ha proporcionado cierto grado de impotencia al momento de acercarse a los comités de agua para solicitar ese servicio. Incluso en algún momento exigen que se les proporcione el servicio. Debido a ello las medidas que se implementaron en los comités de La Libertad son: presentar una carta de recomendación de la comunidad de donde proviene, y una cuota diferenciada de instalación por el servicio para compensar el trabajo inicial realizado por la comunidad.

En cambio en la Aldea Barrios, las medidas que se tomaron fueron encaminadas a la protección del agua por una parte. Pero también al rechazo del ingreso de personas ajenas a la comunidad. En asamblea se acordó no otorgar el servicio de agua a personas que no sean de la comunidad, por esta razón los vecinos no suelen vender sus propiedades a personas de otros lugares, tampoco permiten el paso de antenas eléctricas o de teléfono. Si eso sucediera, la medida más drástica es quitarle el servicio a quien lo vendió. Esto ha contribuido a que en esa comunidad aún no se haya expandido drásticamente las construcciones privadas como en otros municipios conurbados.

A pesar de ello, en el centro de esta comunidad se han construido dos condominios (La Pinada y Don Víctor) autorizados por la municipalidad en el 2006 y el 2012 respectivamente, situación que refleja que las autoridades municipales no han respetado los acuerdos y reglamentos de las comunidades, aspectos que muestran clientelismo pues uno de los requisitos que solicita la municipalidad para autorizar las licencias de construcción, es el visto bueno del consejo comunitario, esto al final no se toma en cuenta y de todas maneras lo han autorizado. Al respecto un representante comunitario expresó “La municipalidad ha violado el derecho del poder local y el de la comunidad hasta la fecha, porque no nos han consultado, hace poco pusieron una torre de telefonía y no consultaron, eso mismo ha sucedido con todos los condominios” (EHLL02, 2015)

Por tanto, la organización comunitaria que gestiona el agua, no se limita únicamente en eso, sino trasciende a la toma de decisiones para el resguardo de los bienes comunitarios y del medio ambiente. Por lo que el agua en este caso, es más que un servicio básico, es un medio para la autorregulación y la gobernanza local. A pesar de ello, de acuerdo con Cremers et al. 2005 citado en Boelens (2011), las formas actuales de manejar y usar el agua en muchas comunidades locales tienden a ser vistas como obstáculos para el control eficiente y moderno del agua.

Los propietarios de los terrenos donde se han construido espacios comerciales, educativos o de urbanizaciones privadas han acudido con los líderes comunitarios para que a través de ellos se gestionen mejoras en infraestructura en el sector, principalmente mejoras de calle y drenajes, los cuales después utilizan sus clientes. Esto se debe

a que tienen mayor número de vehículos, así como los que residen en esas nuevas áreas residenciales y comerciales. Este tipo de obras se han construido para priorizar a los autos y no a los peatones, puesto que los últimos tramos viales realizados no cuentan con áreas peatonales. También hay que sumar que los conductores no tienen prudencia al manejar. En el área donde se ubica el condominio Paseo la Arboleda y un centro educativo elitista circulan al menos 1900 vehículos diarios (EALL04, 2016).

Otro aspecto que preocupa a los comunitarios es la delincuencia, la cual ha incrementado y se le atribuye en parte a que en las nuevas áreas residenciales no se tiene ningún control de qué tipo de personas compran, y mucho menos de quiénes son los arrendatarios. En ***más de uno de los condominios se han dado robos***, y ambiente en esos lugares dista del comunitario, pues los inquilinos o dueños por lo general no se conocen entre sí. Al respecto, un habitante local indicó “De las personas que habitan los condominios no se conoce nada, ¿quiénes son? ¿Qué hacen?, ¿A que se dedican? En cambio nosotros si conocemos a nuestros vecinos, de seguir así, eso también se va a perder porque cualquier persona va a poder comprar aquí, perfora su pozo y ya” (EHLB04, 2015)

A NIVEL MUNICIPAL

Con respecto a la dotación de agua en condominios, de acuerdo con uno de los desarrolladores inmobiliarios (EACB,04, 2015), generalmente junto con la autorización de la urbanización también se autoriza la perforación de pozos subterráneos para dotar del líquido a los nuevos proyectos urbanos.

Boelens, et al (2011) menciona que el agua para uso doméstico tiene con frecuencia prioridad sobre otros usos. Las ciudades pueden fácilmente formalizar sus derechos a uso de grandes cantidades de agua subterránea, sin compensación para los otros usuarios. El gasto por consumo de energía eléctrica es lo que determina el precio por el servicio en el municipio; A los usuarios que les suministra el servicio de agua la municipalidad cuentan con un subsidio mensual del 50% del costo del servicio. ***¿Pero qué sucede con el servicio de agua*** reciben los habitantes de las colonias y condominio del municipio?

Pues bien, los propietarios pagan cada mes una cuota de administración que incluye el pago de agua que oscila entre Q 50 a Q 85. En condominios donde todas las propiedades ya no son de la inmobiliaria, se esperaría que fueran con los propietarios quienes sean los encargados de la gestión del agua; sin embargo, generalmente el desarrollador inmobiliario es quien administra el agua. La empresa la LADE inmobiliaria por ejemplo suministra este servicio a más de 300 viviendas. Regularmente, la estrategia empresarial para ello es constituir otra

empresa, tal como Los Llanos, S.A, que es la encargada del agua de condominio Valle de Don Andrés y Aguas del Valle S.A que cobra el agua del condominio Marta Eliza.

Los habitantes de estos condominios además de pagar la cuota mensual, deben costear los costos de reparación si se daña la bomba de agua. Las inmobiliarias que gestionan este recurso argumentan que su trabajo es más eficiente que el de la municipalidad. Con el fin de mostrar la importancia que el vital líquido tiene, no únicamente para la vida sino para la acumulación económica, se estimó que los ingresos que perciben anualmente las inmobiliarias en Olinstepeque es de dos millones 307 mil quetzales, como producto de una cuota promedio de Q 62.50 por 3077 casas construidas. En las comunidades estudiadas se tienen cuatro comités de agua que cobran una cuota al mes de Q 27.00 promedio; y tienen 2 mil360 usuarios. El ingreso anual que perciben asciende a Q 751 mil 800 quetzales. La municipalidad brinda el servicio por una cuota de Q 20.00 al mes a 450 usuarios, teniendo un ingreso anual de 108 mil quetzales.

El bosque municipal es el principal generador de agua en el municipio, y para su conservación, la municipalidad destina recursos y cuenta con personal permanente que vigila que no talen árboles. A los usuarios del servicio se les cobra una cuota anual de Q 100 para conservación del bosque como por servicios ambientales. Los comités comunitarios, en cambio, son auto sostenible; además contribuyen a reforestar el bosque municipal al menos dos veces por año. Por otra parte, las empresas privadas y las inmobiliarias son quienes -a pesar de tener menor costo en el suministro, pues muchos de ellos cuentan con energía eléctrica de la empresa municipal que tiene tarifas más bajas que la empresa eléctrica DEOCSA y la distancia de distribución del servicio es menor que la de los comités y la municipalidad- lucran significativamente con este recurso y son los únicos que no contribuyen para conservar el bosque.

Por ello se confirma lo que Veraza (2007) menciona, el capital privado hídrico obtiene ganancias por partida doble: por un lado de los consumidores que pagan las tarifas incrementadas y, por el otro, del Estado que ha subsidiado a los habitantes que no pueden pagar esas tarifas. Además, tanto los pobladores locales como el estado son quienes contribuyen para la conservación y la obtención del recurso. Lo cual conlleva, que en torno a la necesidad de agua se generen dos mercados cautivos: uno por tener usuarios sedientos y otro por la responsabilidad social que tiene el Estado de velar porque los usuarios no estén sedientos. Estos dos mercados cautivos le permite al capital privado imponer un precio de monopolio al agua, lo cual convierte violentamente en mercancía para obtener ganancias.

Entonces los recursos municipales se invierten en población que no contribuye a la conservación de los recursos, y no en población local que sí lo hace. Al autorizar urbanizaciones en las comunidades donde la población ha dispuesto lo contrario no se respeta la voluntad comunitaria, y se promueve la segregación socio espacial. De esta manera las acciones del Estado y de las inmobiliarias generan un nuevo proceso de expropiación. Asimismo surge la interrogante ¿por qué las autoridades no han respetado este tipo de acuerdos comunitarios al otorgar las licencias de construcción, a pesar que los alcaldes que han autorizado más condominios han salido de los comités de agua y han tenido mayor aceptación en su momento por pertenecer a comunidades indígenas.

Respecto a lo anterior un habitante local expresó “Aquí no se tiene ninguna regulación [...] los condominios no contribuyen en nada, lo único que hacen *es quitarnos el agua*, como los pozos están en terreno privados. Pero ellos deberían de pagar ciertamente, qué sé yo, un derecho mensual” (EHLL04, 2015 énfasis propio) Esto expresa la valoración que tienen los comunitarios respecto a lo que provocan las nuevas áreas residenciales, Además se enmarca en lo que Harvey denomina acumulación por desposesión, noción que además de hacer referencia a la mercantilización bienes naturales, incluye también los bienes comunes sociales, como el acceso a la vivienda y el acceso al agua potable (Albuquerque, 2016).

Por otra parte, se han destinado recursos públicos a mejorar infraestructura o bien a reparar las áreas de reciente urbanización. El gasto por mejoras en aldea Barrios, específicamente en área el donde se encuentran las colonias, fue en 2014 a un poco más de un millón 75 mil quetzales y el ingreso que la municipalidad percibió por autorización de licencias de construcción fue de 304 mil 383 quetzales, lo cual representa el 2% del ingreso total. Esto confirmando la percepción comunitaria que las urbanizaciones representan una carga adicional de gasto público al municipio.

Además, la población local percibe que ha sido ignorada por el gobierno local, debido a la falta de oportunidades económicas ha tenido que desarrollar mecanismos de sobrevivencia y formas alternas de ocupación laboral (albañilería, comercia y agricultura). La organización comunitaria se ha conservado a pesar de los cambios ocurridos a su alrededor (aumento del individualismo y cooptación de líderes). También se han visto obligados a idear formas para no abandonar sus territorios, desarrollando reglamentos comunitarios para no permitir que más urbanizaciones se construyan ni sean invadidos por personas que se caracterizan por aisladas y no muestran interés por relacionarse y contribuir en la comunidad.

CONCLUSIONES

La expansión urbana toma importancia en el municipio de Olintepeque como consecuencia de la orientación de la inversión de la elite comercial indígena y no indígena de Quetzaltenango, en el negocio inmobiliario orientado por cambios estructurales fomentados por el modelo neoliberal predominante.

La débil gestión y regulación del espacio urbano por parte del gobierno municipal a lo largo de los últimos veinticinco años, ha dado lugar a la creación de nuevas áreas residenciales fomentadas por desarrolladores inmobiliarios, que no resuelven la necesidad de vivienda, sino que son creados para promover la exclusión de las clases populares. Por medio del incremento constante e inducido del precio de la tierra. Por lo cual, el mercado inmobiliario determina la distribución de los hogares y produce grandes brechas de desigualdad por las diferencias socioeconómicas de sus habitantes.

La valorización de las áreas urbanas creado en primera instancia por la población local y por la inversión pública en infraestructura, ha sido aprovechada por los desarrolladores inmobiliarios para acumular capital, pues al momento de construir los proyectos residenciales no realizaron ningún tipo de mejoras que justifique el incremento en el precio de la tierra. Por otra parte, la mercantilización del agua que realizan las inmobiliarias ha significado para estas, importantes ingresos y manifiestan una forma de acumulación por desposesión, debido a que extraen de manera irresponsable este recurso natural de uso colectivo, puesto que no se realizan ninguna actividad para su regeneración. Por lo cual, las comunidades del municipio que están organizadas en torno a la gestión regulación y administración del agua han establecido acuerdos colectivos en pro de la conservación del agua, medio ambiente y de la detención de la expansión urbana.

La precariedad de servicios básicos que la municipalidad no le proporcionó a la población indígena de las comunidades rurales, fue la primera manifestación de expoliación hacia los habitantes locales. Ésta exclusión originó que la población local se organizara y gestionara por cuenta propia el suministro de los servicios. La segunda manifestación de expoliación, se dio cuando las autoridades municipales obviaron los acuerdos comunitarios de rechazo a la expansión urbana y el resguardo de los bienes naturales. La tercera, se da al destinar recursos municipales para solventar problemas de infraestructura en residencias privadas. Además de subsidiar el servicio de agua potable para habitantes de colonias, dejando con ello de proveer servicios y recursos a la población local.

El hecho de conocer la dinámica del mercado inmobiliario, muestra la debilidad institucional en torno a la gestión urbana y la

supremacía elitista empresarial que construye la ciudad, que lleva a cuestionar si ¿La organización comunitaria a través de los comités de agua pueden promover e impulsar la regulación urbana y territorial en el municipio de Olintepeque?

BIBLIOGRAFÍA

- Albuquerque, Francisco 2016 “Neoliberalismo, privatización de ‘bienes comunes’ y crisis climática.” en *Desarrollo y Territorio* . N°0 ,febrero
- Alvarado Quiroa, Héctor Obdulio y Araya Rodríguez, Freddy 2014 “Cambios de uso del suelo y crecimiento urbano. Estudio de caso en los municipios conurbados de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, Quetzaltenango, Guatemala” en *Tecnología en Marcha* Vol. °27, N°1.
- Alvarado Quiroa, Héctor Obdulio 2010 “Análisis del crecimiento urbano y los cambios de uso del suelo, durante el período 1960-2006 y propuesta de unidades territoriales, en los municipios conurbados de la mancomunidad de la Metrópoli de Los Altos, Quetzaltenango” Tesis de maestría (Quetzaltenango).
- Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, Quetzaltenango, Guatemala” en *Tecnología en Marcha* Vol. N°27 N°1.
- Baires Quezada, Rodrigo 2012 “Lave dinero pero lávelo bien, y no tema” en Plaza Pública (Guatemala) En < <http://www.plazapublica.com.gt/content/lave-dinero-pero-lavelo-bien-y-no-tema>> acceso el 25 de septiembre 2015.
- Borsdorf, Axel 2003 “Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana en *EURE*, vol. XXIX, N° 86, mayo, pp. 37-49 (Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile).
- Boelens, R. L., Cremer y Zwartvee M. 2011, “*Justicia Hídrica. Acumulación, conflicto y acción social*” (Lima: Instituto de Estudios Peruanos/ Fondo Editorial PUCP).
- Duhau, Emilio 2013, “La división social del espacio Metropolitano: Una propuesta de análisis” en Nueva Sociedad N° 243, enero-febrero <www.nuso.org>.
- Capel, Horacio 1975 “La definición de lo urbano” En *Estudios Geográficos, Geocrítica* N° 138- 139, Universidad de Barcelona.
- CICIG 2015 “Informe: El Financiamiento de la Política en Guatemala” (Guatemala).

- Ciccolella, Pablo 2002 “Revisitando la metrópolis latinoamericana más allá de la globalización” en *Revista Iberoamericana de Urbanismo* N° 8
- Castro Luis 2012 “Narcos ahora arrebatan casas” en *Siglo21* (Guatemala) en <<http://www.s21.com.gt/node/125787>> 24 de enero.
- García Pérez, Eva 2014 “Urbanismo inmobiliario, una década de carencia habitacional en Buenos Aires 2001-2011”, en *Desafíos Metropolitanos. Un diálogo entre Europa y América Latina*, Juan José Michelini (Madrid: Catarata).
- García Pérez, Eva; Fernández Ramírez, Cristina 2014 “Urbanismo inmobiliario, la especulación como forma hegemónica de hacer ciudad” en XIII Coloquio Internacional de Geocrítica: El control del espacio y los espacios de control (Universidad de Barcelona).
- Harvey, David 2001 *Espacios del capital. Hacia una Geografía crítica* (Madrid: Akal)
- Jaramillo González, Samuel 2014 “Dinámica de los precios del suelo urbano en Bogotá 1970-2012” en Documentos CEDE Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Universidad de Los Andes).
- Kowarick, Lucio 1996 “Explotación urbana, luchas sociales y ciudadanía: retazos de nuestra historia reciente1” en *Estudios Sociológicos* Vol. XIV N°42 (Colegio de México)
- 1991 “Ciudad y ciudadanía. Análisis de metrópolis del subdesarrollo industrializado” en *Nueva Sociedad* N°114 Julio-Agosto (Venezuela)
- Leal, Jesús 2002 “Segregación social y mercados de vivienda en las grandes ciudades” en *Sociología* N°2 5975
- Mancomunidad Metrópoli de los altos 2007 “Diagnóstico Territorial del Valle de Quetzaltenango”.
- Miralbes Ricci Juan Carlos 1986 “Recomendaciones Urbanas Olinztepeque, Quetzaltenango” Tesis de grado Universidad Rafael Landívar.
- O’Connor, James 2001 “Las condiciones de producción y la producción de condiciones” en *Causas Naturales. Ensayo de marxismo ecológico* (México: Siglo XXI).
- Puebla, Graciela 2009 “Caracterización del periurbano en países centrales y periféricos a través de cuatro autores breve recopilación y análisis bibliográfico” en *Breves Contribuciones del I.E.G. -N° 21* (Córdoba, Argentina).

- Pradilla Cobos, Emilio [1988] 1995 “El mito neoliberal de la informalidad urbana” en José Luis Coraggio, Emilio Pradilla, Lucía Ruiz y Mario Unda *Más allá de la informalidad* (Quito: CIUDAD).
- Plataforma urbana 2010 “Ley 4114 en proceso de aprobación en el Congreso de la República de Guatemala atenta contra el pueblo de Guatemala”, en <http://serjusiximulew.blogspot.com/2010/03/ley-4114-en-proceso-de-aprobacion-en-el.html>
- Rincón Alarcón, José Manuel 2014 “San Juan Orintepeque Las relaciones Sociales de Poder Durante el Siglo XX: ¿Dominio político ladino o conceso político ladino-indígena?”. Tesis de doctorado Hannover Alemania.
- Smolka, Martín O 2003 “Informalidad, pobreza urbana y precios de la tierra” en *Land Lines Newletter* (Cambridge) Vol. 15, N°1.
- Urzúa Bastida, Verónica 2012 “El espacio público y el derecho a excluir” en *Athenea Digital*.
- Veraza, Jorge 2007 *Economía política del agua* (México: Editorial Itaca).
- Xicará René, Arturo 2014 “Élites y Lucha de Poder en el Centro Histórico de Quetzaltenango de 1524-2011” (Quetzaltenango: Guatemala).

